

alerta 2022!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2022! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2022!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

ISBN: 978-84-18826-52-8
Depósito legal: B 10421-2003
Informe finalizado en febrero de 2022.

El presente informe ha sido elaborado por:

Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa,
Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arestizábal,
Ana Villellas Ariño y María Villellas Ariño.

Diseño: Lucas Wainer Mattosso
Imprenta: Ulzama
Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB
Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*
Barcelona: Icaria, 2022.

Esta obra forma parte de la serie *Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz* que anualmente publica la Escola de Cultura de Pau y está sujeta a una licencia internacional de Creative Commons.



Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13
Carrer de la Vila Puig
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (España)
Tel: +34 93 581 14 14
Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat
Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas _____	6
Resumen Ejecutivo _____	7
Resumen de la conflictividad global en 2021 _____	17

Capítulos

1. Conflictos armados _____	19
1.1. Conflictos armados: definición _____	19
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2021 _____	23
1.2.1. Tendencias globales y regionales _____	23
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil _____	28
1.3. Conflictos armados: evolución anual _____	32
1.3.1. África _____	32
- África Austral _____	32
- África Occidental _____	33
- Cuerno de África _____	40
- Grandes Lagos y África Central _____	44
- Magreb - Norte de África _____	55
1.3.2. América _____	57
1.3.3. Asia y Pacífico _____	58
- Asia Meridional _____	58
- Sudeste Asiático y Oceanía _____	63
1.3.4. Europa _____	68
- Europa Oriental _____	68
- Sudeste de Europa _____	70
1.3.5. Oriente Medio _____	71
- Golfo _____	71
- Mashreq _____	73
2. Tensiones _____	83
2.1. Tensiones: definición _____	83
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2021 _____	89
2.2.1. Tendencias globales _____	89
2.2.2. Tendencias regionales _____	92
2.3. Tensiones: evolución anual _____	95
2.3.1. África _____	95
- África Occidental _____	95
- Cuerno de África _____	99
- Grandes Lagos y África Central _____	101
- Magreb - Norte de África _____	105
2.3.2. América _____	109
- América del Norte, Centroamérica y Caribe _____	109
- América del Sur _____	112
2.3.3. Asia y Pacífico _____	116
- Asia Central _____	116
- Asia Meridional _____	117
- Asia Oriental _____	118
- Sudeste Asiático y Oceanía _____	121
2.3.4. Europa _____	122

- Europa oriental _____	122
- Rusia y Cáucaso _____	124
- Sudeste de Europa _____	125
2.3.5. Oriente Medio _____	126
- Golfo _____	126
- Mashreq _____	128

3. Género, paz y seguridad _____	133
3.1. Desigualdades de género _____	133
3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género _____	135
3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones _____	135
3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados _____	138
3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado _____	140
3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género _____	142
3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad _____	142
3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz _____	144
3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil _____	145
4. Oportunidades de paz para 2022 _____	147
4.1. El diálogo nacional, una frágil ventana de oportunidad para la paz en Chad _____	148
4.2. La reactivación del diálogo entre India y Pakistán en la Línea de Control _____	150
4.3. La reanudación de las negociaciones políticas entre Gobierno y oposición en Venezuela _____	152
4.4. ¿Hacia una mejora de las relaciones entre Turquía y Armenia? _____	155
4.5. Entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares _____	157
5. Escenarios de riesgo para 2022 _____	159
5.1. Retos y riesgos de la proliferación de golpes de Estado en África _____	160
5.2. La intervención de Uganda en persecución de las ADF en territorio congolés _____	162
5.3. Escalada de la violencia en Myanmar tras el golpe de Estado _____	164
5.4. El incremento de la violencia en la región indonesia de Sulawesi _____	166
5.5. El incremento de la crisis política en Bosnia y Herzegovina _____	169
5.6. Violencia, apartheid, desposesión: el precio de ignorar la ocupación de Palestina _____	171
Glosario _____	173
Escola de Cultura de Pau _____	177

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	18	Mapa 3.1.	Género, paz y seguridad _____	132
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2021 _____	20	Tabla 3.1.	Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos ____	134
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2021 _____	23	Tabla 3.2.	Actores armados y violencia sexual en conflictos _____	136
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _	26	Mapa 3.2.	Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	141
Gráfico 1.3.	Proporción de conflictos armados graves en la última década _____	26	Tabla 3.3.	Conflictos armados en 2021 en países con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	141
Gráfico 1.4.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	26	Tabla 3.4.	Planes de Acción Nacional sobre la 1325 en países en situación de conflicto armado _____	143
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada _____	27	Mapa 4.1.	Oportunidades de paz para 2022 ____	147
Mapa 1.2.	Nuevos desplazamientos por conflictos y violencia en 2020 _____	31	Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo para 2022 ____	159
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	82			
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2021 _	84			
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2021 _____	90			
Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	92			

Resumen ejecutivo

Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2021 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2022!* son las siguientes:

- Durante 2021 se registraron 32 conflictos armados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (15) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno).
- Por primera vez en una década los conflictos armados de alta intensidad representaron más de la mitad (53%) del total de casos a nivel mundial.
- Los 17 casos de conflictos armados graves en 2021 fueron: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.
- África concentró prácticamente la mitad de los conflictos armados en 2021, con un total de 15 casos (47%).
- En el segundo año de la pandemia, y en un escenario caracterizado también por la progresiva disminución de las restricciones de movilidad, quedó en evidencia la escasa acogida en la práctica al llamamiento del secretario general de la ONU de marzo de 2020 para poner en marcha un alto el fuego global con el que concentrar los esfuerzos en la respuesta al coronavirus.
- Durante el año los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificadas a causa de la pandemia de la COVID-19 y por la confluencia con otras crisis, como la emergencia climática, lo que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados.
- Durante 2021 se alertó sobre un importante número de víctimas civiles y sobre un aumento en esta cifra en muchos casos de conflictos armados y continuaron las agresiones y amenazas contra personal médico, así como los ataques contra infraestructuras hospitalarias, prácticas que se consideran atentatorias contra el derecho internacional humanitario.
- Durante el año 2021, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas.
- Según los datos de ACNUR, a finales de 2020 se contabilizaban 82,4 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial, más del doble que una década atrás.
- Durante 2021 se identificaron 98 escenarios de tensión en todo el mundo, tres más que en 2020, confirmando la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años.
- África volvió a ser la región en la que se concentró un mayor número de tensiones (40), seguida de Asia (24), América (12) y Europa y Oriente Medio (11 en cada una).
- Las tensiones de mayor intensidad en 2021 fueron Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra), Sudán, Colombia, Haití, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), Irán-EEUU, Israel; e Israel-Siria-Líbano.
- Un 72% de los casos analizados de tensiones estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 41% a demandas de autogobierno y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control de territorios y/o recursos.
- 18 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2021 se dieron en países donde

existían graves desigualdades de género, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.

- 72 millones de niños y niñas que viven en contextos de conflicto afrontaban grave riesgo de violencia sexual, según denunció Save the Children.
- En 2021 aumentó el número de denuncias sobre explotación y abusos sexuales en operaciones de paz y misiones políticas especiales de Naciones Unidas
- En 2021, 20 países que protagonizaban procesos y negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos.
- El informe *Alerta 2022!* identifica cinco oportunidades de paz en Chad, entre India y Pakistán, en Venezuela, entre Turquía y Armenia, y con relación al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares.
- El informe destaca seis escenarios de riesgo en relación a varios golpes de Estado en África, RDC-Uganda, Myanmar, Indonesia (Sulawesi), Bosnia y Herzegovina, y Palestina.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Durante el año 2021 se registraron 32 conflictos armados, la mayoría en África (15)

Conflictos armados

En el primer capítulo (Conflictos armados)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas

de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2021, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

En 2021 se registró un ligero descenso en el número de conflictos armados respecto a años precedentes. En total se contabilizaron 32 casos, frente a los 34 contextos identificados en 2020, 2019 y 2018. El principal cambio en comparación con el período anterior es que la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj dejó de ser considerada como conflicto armado. Tras la intensa guerra de seis semanas entre Armenia y Azerbaiyán en 2020 y sus severos impactos –más de 5.000 personas fallecidas y decenas de miles desplazadas forzosamente por la violencia–, en 2021 la situación pasó a ser de tensión militarizada, en un contexto de alto el fuego frágil y en el que persistían numerosos retos de carácter humanitario, así como en el ámbito negociador. Adicionalmente, en la presente edición del informe los casos de Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA) se analizan de manera conjunta por la progresiva interrelación de las dinámicas de conflicto armado en el país. Al finalizar el año, los 32 conflictos armados identificados en 2021 permanecían activos.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, se mantuvo la tendencia de períodos precedentes y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (15) y Asia (nueve), seguido de Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno). El continente africano, por tanto, concentraba prácticamente la mitad de los casos (47%) a nivel global.

En cuanto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internacionales y, en su gran mayoría, internos internacionalizados. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2021 tres de los 32 casos (9%) eran conflictos armados internos y todos ellos transcurrían en Asia. Se trata de los casos de Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). Otros dos casos, que suponen un 6% del total de contextos, fueron de carácter internacional: el conflicto en la región africana del Sahel occidental y la disputa palestino-israelí en Oriente Medio. Los 27 casos restantes, que representan un 85% de los casos, fueron internos internacionalizados. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen

1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2021*

ÁFRICA (15)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (5)
Burundi -2015-	Afganistán -2001-	Egipto (Sinaí) -2014-
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Filipinas (NPA) -1969-	Iraq -2003-
Etiopía (Tigré) -2020-	Filipinas (Mindanao) -1991-	Israel-Palestina -2000-
Libia -2011-	India (Jammu y Cachemira) -1989-	Siria -2011-
Malí -2012-	India (CPI-M) -1967-	Yemen -2004-
Mozambique (Norte) -2019-	Myanmar -1948-	
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Pakistán -2001-	EUROPA (2)
Región Sahel Occidental -2018-	Pakistán (Baluchistán) -2005-	Turquía (sudeste) -1984-
RCA -2006-	Tailandia (sur) -2004-	Ucrania -2014-
RDC (este) -1998-		
RDC (este – ADF) -2014-		AMÉRICA (1)
Somalia -1988-		Colombia -1964-
Sudán (Darfur) -2003-		
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-		
Sudán del Sur -2009-		

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado.

bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

En cuanto a las causas de los conflictos armados en 2021, siguiendo la tendencia de años anteriores la mayoría tuvo entre sus principales motivaciones las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o bien al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Una de estas causas o ambas estuvieron presentes en el 72% de los casos, es decir, en 23 de los 32 conflictos armados contabilizados en 2021. En 17 de estos contextos había actores armados que aspiraban a una transformación del sistema, entre los cuales la mayoría contaban con una agenda de línea yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Afganistán fue un caso especialmente significativo en 2021, ya que los talibanes consiguieron tomar militarmente el poder en Afganistán 20 años después de su derrota y tras dos décadas de ocupación extranjera, después de la retirada de las fuerzas militares estadounidenses a mediados de año.

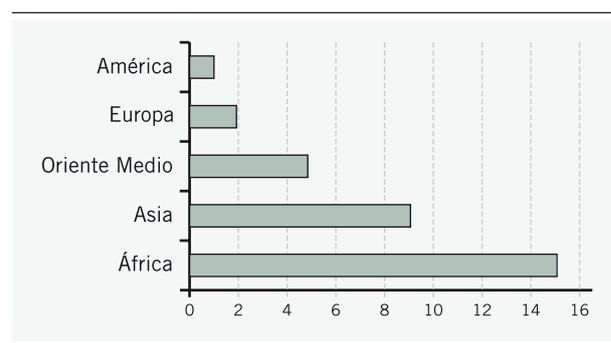
Otro elemento a resaltar entre las motivaciones principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, que estuvieron – una de ellas o ambas– en 20 de los 32 de los casos (63%). Ejemplos de conflictos con este trasfondo son el que enfrenta al Gobierno de Camerún con movimientos secesionistas político-militares en

Siguiendo la tendencia de años previos, la mayoría de los conflictos armados en 2021 fueron internos internacionalizados

las dos regiones anglófonas del oeste del país (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), el que afecta a la región etíope de Tigré, el de Mindanao en Filipinas, el de Jammu y Cachemira en India, el de Baluchistán en Pakistán, el del sur de Tailandia, la cuestión kurda en Turquía, por mencionar solo algunos. Por último, también hubo conflictos armados que tuvieron entre sus causas principales el control de territorio y/o de recursos. Estos casos ascendieron a un 34% –11 de los 32– del total de conflictos. Los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos, con numerosos enfrentamientos relacionados con la extracción de oro y coltán, entre otros minerales.

En materia de evolución, la mayor parte de los conflictos armados en 2021 –13 de los 32 casos, equivalentes

Distribución regional del número de conflictos armados en 2021



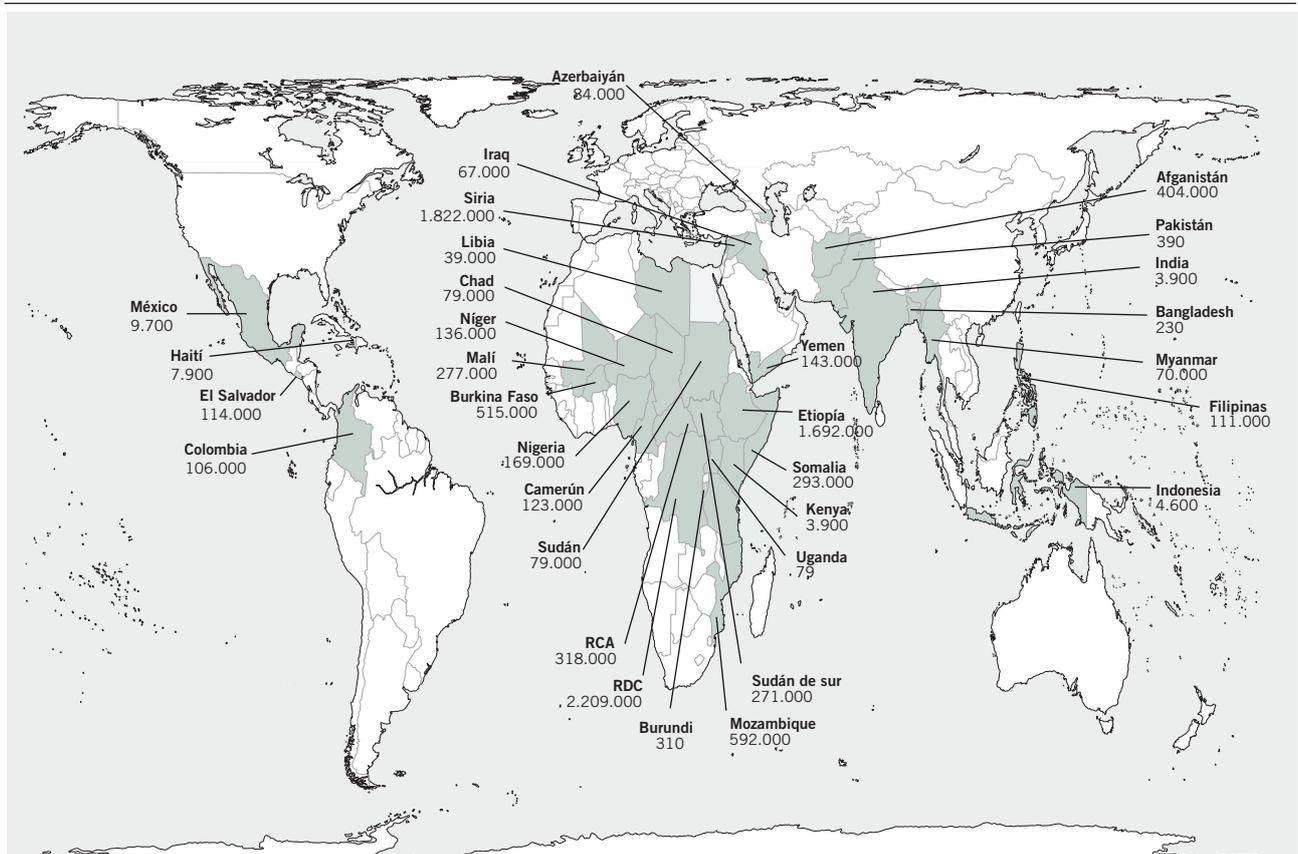
a un 41%– presentaron un aumento en los niveles de violencia en comparación con el año anterior. Entre los casos en que se observó un deterioro de la situación se cuentan conflictos armados de todas las regiones: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Tigré), Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Ucrania (este) e Israel-Palestina. En otros 12 conflictos armados –que representan un 37% del total de casos– se observaron niveles de violencia y confrontación similares a los registrados en 2020. Solo en siete contextos –22% de los conflictos armados a nivel mundial– se identificó una disminución en los niveles de violencia y sus impactos: Libia, Mozambique (norte), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M) y Egipto (Sinaí).

En cuanto a la intensidad de los conflictos armados, en 2021, la prevalencia de casos de alta intensidad llegó al 53%, superando la mitad de los casos por primera vez en la última década. El continente albergó 12 de los 17 conflictos armados de alta intensidad que se identificaron a nivel global, es decir, el 71% del total de casos. Cabe destacar que, en muchos de los conflictos armados de alta intensidad, las hostilidades y múltiples dinámicas de violencia causaron unos niveles de letalidad muy superiores al umbral de mil

víctimas mortales anuales. Solo en Afganistán, el caso en el que se identificó un mayor número de personas fallecidas en 2021, el balance fue de más de 40.000 personas muertas a causa del conflicto armado. En 2021, el segundo conflicto armado más cruento fue el de Yemen, donde se contabilizaron más de 22.000 personas fallecidas. Por otra parte, otro 28% de los conflictos armados en 2021 fueron de baja intensidad y el restante 19% de intensidad media.

Siguiendo la tónica de años previos, y tal y como vienen denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, en 2021 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. Durante el año los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificadas a causa de la pandemia de la COVID-19 y por la confluencia con otras crisis, como la emergencia climática, lo que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados. Durante 2021 se alertó sobre un importante número de víctimas civiles y sobre un aumento en esta cifra en muchos casos de conflictos armados, como en Malí, Región Sahel Occidental, RDC (este), Afganistán y Yemen. OCHA reiteró que los conflictos armados continuaban siendo

Nuevos desplazamientos por conflictos y violencia en 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2021*, GRID, mayo de 2021.

la principal causa de las necesidades humanitarias a nivel global y alertó sobre el aumento sin precedentes de la inseguridad alimentaria.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En lo que respecta a los efectos en los niños y las niñas, el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados documentó casi 26.500 violaciones graves contra menores en 21 contextos (de las cuales unas 24.000 correspondían a 2020 y otras 2.500 fueron cometidas previamente, pero solo se pudieron documentar en 2020). Especial preocupación causó el significativo incremento de los secuestros de menores –que aumentó un 90%– y de la violencia sexual –70%. Este último fenómeno afectó principalmente a niñas, que constituían el 98% de las víctimas de la violencia sexual contra menores. El reclutamiento forzado, en cambio, afectó de manera especial a los niños, 85% de los menores afectados por esta práctica.

Durante el año 2021, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas. El informe anual del secretario general de la ONU sobre violencia sexual documentó el uso de violencia sexual en 18 contextos y que involucró a 52 actores armados, en su mayoría grupos no estatales, aunque como en años anteriores también se identificó la implicación de fuerzas militares y de seguridad en diversos conflictos. En cuanto al análisis de casos en 2021, se denunciaron nuevos episodios de violencia sexual en contextos como Etiopía (Tigré), RCA, RDC (este), Libia, Siria o Yemen.

Entre las repercusiones de los conflictos armados también cabe mencionar el desplazamiento forzado. Según los datos de ACNUR, este fenómeno continuó intensificándose y batiendo cifras récord. A finales de 2020 se contabilizaban 82,4 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial –más del doble que una década atrás. Cabe destacar que las cifras de desplazamiento forzado se redujeron temporalmente a causa de la pandemia y las medidas de restricción de movilidad orientadas a contener el virus, pero a partir de finales de 2020 ya se observó una recuperación de la tendencia previa. Según ACNUR, el 82% de las personas que cruzaron fronteras para huir de situaciones de conflicto, violencia o persecución procedían de tan solo diez países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, RDC, Sudán, Somalia, RCA y Eritrea.

Tensiones

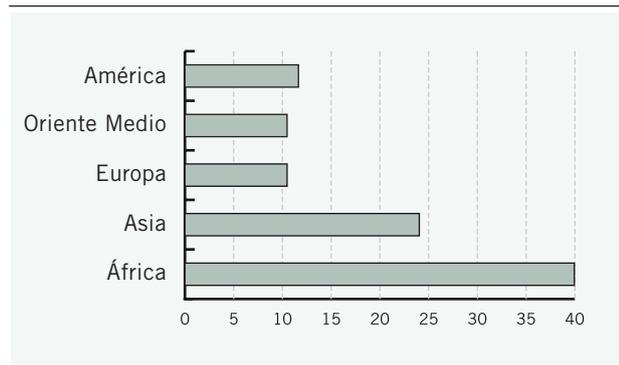
En el segundo capítulo (Tensiones)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2021 se identificaron 98 escenarios de tensión en todo el mundo, tres más que en 2020, confirmando la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años. África volvió a ser la región en la que se concentraron mayor número de tensiones (40), seguida de Asia (24), América (12) y Europa y Oriente Medio (11 en cada una). En 2021 se analizaron nueve casos nuevos y otros seis dejaron de ser calificados como tensiones. Seis de los nueve casos se concentraron en África: Burkina Faso, Djibouti, Eswatini, Etiopía-Sudán, Níger y Nigeria (Biafra). En América Latina se incluyeron los casos de Cuba y Colombia por el notable incremento de las protestas en ambos países. Finalmente, también se catalogó como tensión el contencioso entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, que en 2020 fue considerado como conflicto armado.

La mitad de las tensiones fueron de intensidad baja, el 31% de intensidad media y el 19% de alta intensidad. En 2021 se identificaron tres casos más de alta intensidad que en 2020, sumando un total de 19 contextos: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra), Sudán, Colombia, Haití, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), Irán-EEUU, Israel; e Israel-Siria-Líbano. Más de la mitad de las tensiones de mayor gravedad se concentraron en África. En relación a la evolución de los casos de tensión, el 38% de los casos se agudizaron durante el año, el 42% no registró cambios significativos respecto del 2020 y el 20% de los casos experimentó una cierta mejora de la situación. Por tanto, el número de casos en los que las condiciones empeoraron en 2021 es prácticamente el doble del número de contextos en los que la tensión registró una mejoría. Los continentes que concentraron un mayor número de tensiones que escalaron fueron África (50%) y Asia (42%).

En cuanto a los principales factores de causalidad, un 72% de los casos analizados de tensiones estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 41% a demandas de autogobierno y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Distribución regional del número de tensiones en 2021



de territorios y/o recursos. Más específicamente, la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno estuvo presente en el 64% por ciento de los 98 escenarios de tensión, aunque en algunas regiones tal factor estuvo presente en un mayor porcentaje de casos, como en América Latina (100%) o África (73%). La oposición al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto estuvo presente en el 22% de los casos. Por otra parte, la reivindicación de aspiraciones de tipo identitario estuvo presente en el 38% de los casos de tensión analizados en esta publicación. En cuanto a las demandas de autodeterminación y autogobierno, estas fueron un factor determinante en casi una cuarta parte de los escenarios de tensión a escala global. El control de los recursos era un factor relevante en el 22% de los casos, mientras que el control del territorio era una causa importante en el 14% de las tensiones, aunque en Asia dicho porcentaje era más del doble (29%). En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvieron un carácter interno (51%), una cifra parecida a la de 2020 (53%). Más de una cuarta parte de las tensiones fueron internas internacionalizadas (27%). Una quinta parte de las tensiones (22%) fueron internacionales y algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Irán-EEUU, Israel o Israel-Siria-Líbano.

Dimensión de género en la construcción de paz

En el tercer capítulo (Género, paz y seguridad) se analizan los impactos de género de conflictos y tensiones, así como las diversas iniciativas que desde el

ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.³ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, por sus siglas en inglés); en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica

18 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar en 2021 se dieron en países donde existían niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice

con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que 13 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2021 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, cinco en países con niveles medios de discriminación y nueve conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Etiopía, Mozambique, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 43 de las 98 tensiones activas durante el año 2021 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles medios, altos o muy altos según el SIGI). 30 tensiones transcurrían en países

3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados	Burkina Faso India (2) Tailandia RDC (2)	Chad Malí Myanmar Nigeria RCA	Afganistán Camerún (2) Filipinas (2) Iraq Pakistán (2) Yemen	Burundi Egipto Israel Libia Níger Palestina Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Benín Burkina Faso Chile Haití India (6) Kenya RDC (4) Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Costa de Marfil Indonesia (2) Malí Nigeria (3) RCA Tanzania Túnez Uganda (4)	Bangladesh Guinea Irán (4) Iraq Líbano (2) Marruecos Pakistán (2)	Arabia Saudita Argelia Bahrein Brunei Darussalam Burundi China (7) Corea, RPD (2) Cuba Djibouti Egipto (2) Eritrea (2) Eswatini Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Kosovo Níger Malasia Palestina Sáhara Occidental Siria Somalia Sudán (5) Sudán del Sur (2) Taiwán Uzbekistán Venezuela

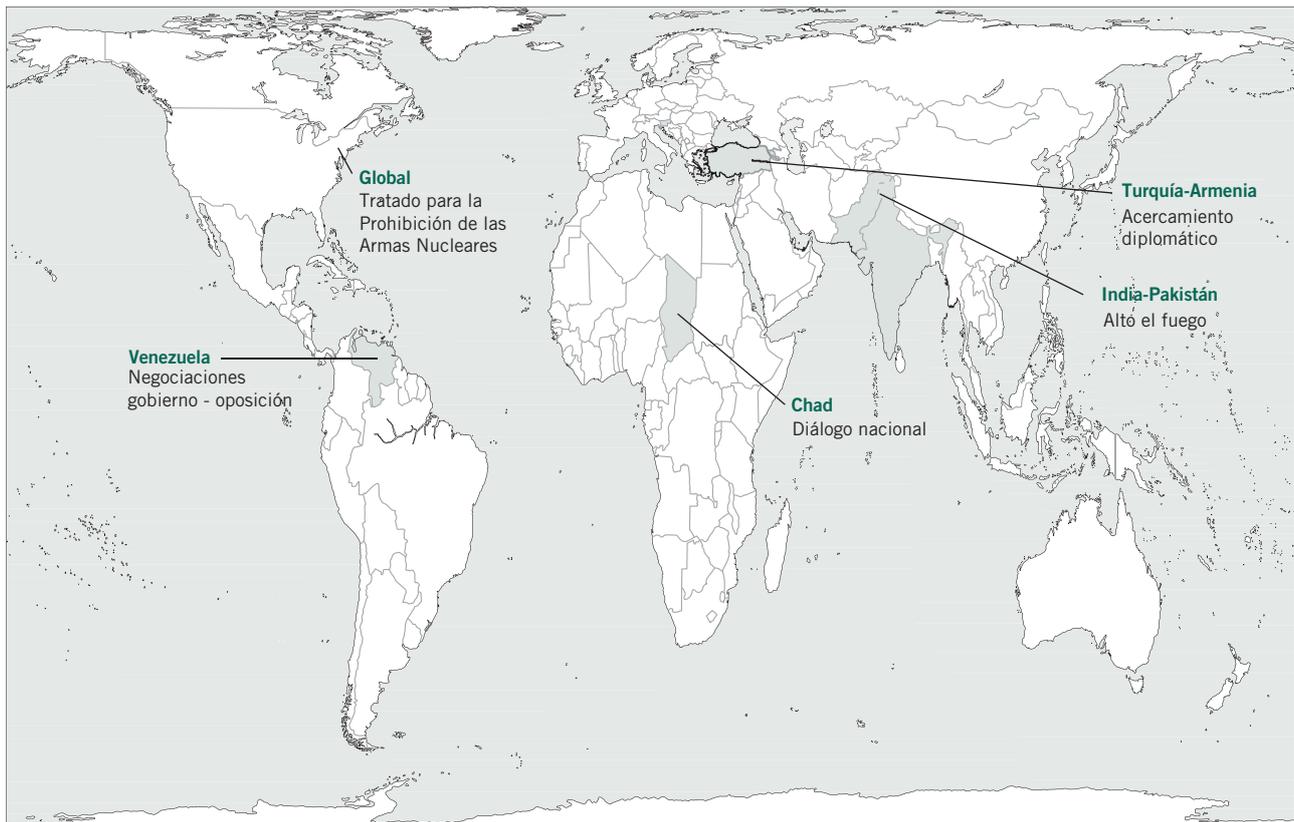
* Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.

Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2020) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

sobre los que no hay datos disponibles (Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam, Burundi, China, Corea RPD, Cuba, Djibouti, Egipto, Eritrea, Eswatini, Gambia, Palestina, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Kosovo, Níger, Sáhara Occidental, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela).

Al igual que en años anteriores, durante 2021 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales. De los 18 contextos que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, 12 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad durante 2021 –Malí, RCA, RDC (este), RDC (este – ADF), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar,

Iraq, Siria y Yemen– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas. Asimismo, se publicó un estudio de Save the Children que reveló que de los 426 millones de niños y niñas que viven en zonas de conflicto armado en el mundo, al menos 72 millones viven a menos de 50 kilómetros de zonas en las que tanto grupos armados como Fuerzas Armadas han perpetrado violencia sexual contra menores. Los países con la mayor proporción de niños y niñas viviendo en zonas de conflicto en las que se ha denunciado esta violencia por parte de actores armados son Colombia (donde el 24% de los menores del país sufre este riesgo), Iraq (49%), Somalia (56%), Sudán del Sur (19%), Siria (48%) y Yemen (83%).

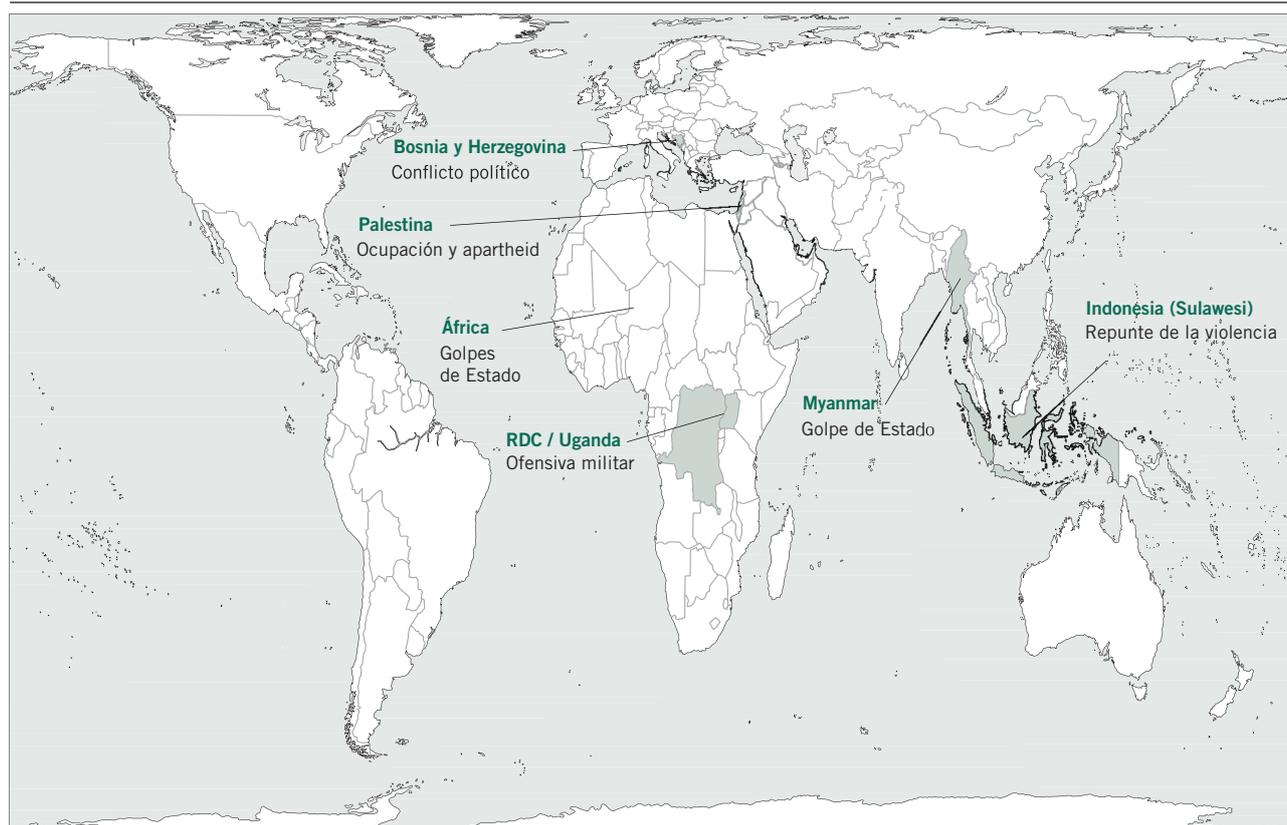


En 2021, 20 países que protagonizaban procesos y negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos. Las 21 negociaciones y procesos de paz tuvieron lugar en Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Malí, Mozambique, RCA, RDC, Sudán, Sudán del sur, Sudán-Sudán del Sur, Afganistán, Filipinas (MILF), Filipinas (NDF), Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Chipre, España (País Vasco), Georgia (Abjasia, Osetia del Sur), Moldova (Transnistria), Serbia-Kosovo, Ucrania (este), Israel-Palestina, Palestina y Yemen. Sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, la mayoría de negociaciones de paz continuaron excluyendo a las mujeres y tampoco se incorporó la perspectiva de género en las dinámicas de los procesos de paz, poniendo en entredicho la eficacia de los planes de acción como herramientas de construcción de paz inclusiva.

Oportunidades de paz y escenarios de riesgo para 2022

En el cuarto capítulo (Oportunidades de Paz para 2022), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz de cara al futuro. Las oportunidades identificadas durante 2021 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

- **Chad:** El país enfrenta un amplio, complejo e interrelacionado abanico de retos y elementos de fragilidad e inestabilidad agravados en las últimas décadas. A este clima de inestabilidad se sumó la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado militar, lo que parecía situar al país al borde del abismo. Sin embargo, las autoridades de transición se comprometieron al retorno del poder a un gobierno civil en un plazo de 18 meses y a la celebración de un diálogo nacional que puede contribuir a sentar las bases para el inicio de una nueva etapa que ponga fin a la espiral de inestabilidad y violencia de los últimos años.
- **India-Pakistán:** En febrero los Gobiernos de India y Pakistán acordaban retomar los compromisos en torno al alto el fuego en la Línea de Control acordado en 2003. El acuerdo se producía después de varios años de tendencia ascendente en las violaciones a este acuerdo por parte de las fuerzas de seguridad de ambos países. Además, la renovación del compromiso dio paso a contactos indirectos entre ambos Gobiernos que tuvieron lugar en Emiratos Árabes Unidos. Si bien estos contactos se interrumpieron, sí se consolidó el compromiso con el cese de la violencia en la frontera.
- **Venezuela:** A pesar de que en el pasado ha habido varios procesos de diálogo fallidos, la nueva



negociación que a mediados de año el Gobierno de Nicolás Maduro y la mayor parte de la oposición iniciaron en México –con la mediación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos– contó con un importante apoyo de la comunidad internacional y generó ciertas expectativas por la aparente mayor predisposición al acuerdo de ambas partes.

- **Turquía-Armenia:** Ambos países iniciaron una apertura diplomática, con diversos anuncios y medidas y encaminada a la normalización de las relaciones, marcadas por la herida histórica del genocidio y el apoyo de Turquía a Azerbaiyán en su disputa con Armenia en torno a Nagorno-Karabaj; no obstante, el acercamiento excluía dimensiones como el diálogo social.

- **Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares:** En enero entró en vigor el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares tras la ratificación por parte de 58 Estados. Esta entrada en vigor supone un gran avance en materia de desarme, aunque algunas organizaciones han advertido de que la tendencia de reducción del arsenal mundial que se había producido desde el fin de la Guerra Fría se estaría ralentizando. Cabe destacar que se han abierto algunas brechas favorables a la desnuclearización, como la disminución en las

inversiones en la industria del armamento nuclear o el que Noruega y Alemania, miembros de la OTAN vayan a participar como observadores en la primera conferencia de Estados parte. La escalada sin precedentes de la tensión entre Rusia y los países euroatlánticos hacen más necesario que nunca el avance hacia el desarme nuclear.

En el quinto capítulo (Escenarios de riesgo para 2022), el informe identifica y analiza seis escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2022.

El informe Alerta! identifica y analiza cinco contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz

- **África:** Los cuatro de golpes de Estado efectivos producidos en África en el 2021 – Chad (abril), Malí (mayo), Guinea (septiembre) y Sudán (octubre)– representan las cifras más altas registradas en el continente desde el año 1999. El efecto contagio, generado en parte debido al impacto combinado del deterioro de la situación de la seguridad, la inestabilidad política y las respuestas dispares a los cambios inconstitucionales de gobierno adoptadas por los organismos africanos y la comunidad internacional, pone en riesgo los avances logrados en materia de gobernanza democrática por las sociedades africanas, y representa una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del continente.

- **RDC/Uganda:** La intervención de Uganda en persecución del grupo armado ADF en territorio congolés como consecuencia de varios atentados cometidos por este grupo en la capital ugandesa, Kampala, supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones del grupo. Las acciones de las ADF han desencadenado una respuesta armada de Uganda en territorio congolés, lo que puede implicar una escalada en la evolución y gravedad de este conflicto de graves consecuencias y reabre uno de los peores episodios que ha vivido el continente africano en las últimas décadas, la intervención ugandesa en la conocida como Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003).
- **Myanmar:** El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Myanmar en el mes de febrero puso fin a la transición a la democracia en el país, impidiendo la toma de posesión del parlamento elegido en las urnas en noviembre de 2020 y en el que la NLD de Aung San Suu Kyi había obtenido una abrumadora victoria. La escalada en la represión por parte de las fuerzas de seguridad birmanas desembocó en un incremento en la respuesta por parte de la oposición, pasando de la resistencia no violenta de los primeros días a la creación de grupos armados de defensa.
- **Indonesia (Sulawesi):** El reciente incremento de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT genera preocupación por sus conexiones con ISIS y

El informe analiza seis escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden agravarse

con grupos de inspiración yihadista en el Sudeste Asiático y porque la región en la que el grupo opera –la provincia de Sulawesi Central– ya había sido escenario de una espiral de violencia de matriz sectaria y comunitaria entre los años 1998 y 2001, así como de numerosos atentados terroristas y episodios varios de violencia desde entonces.

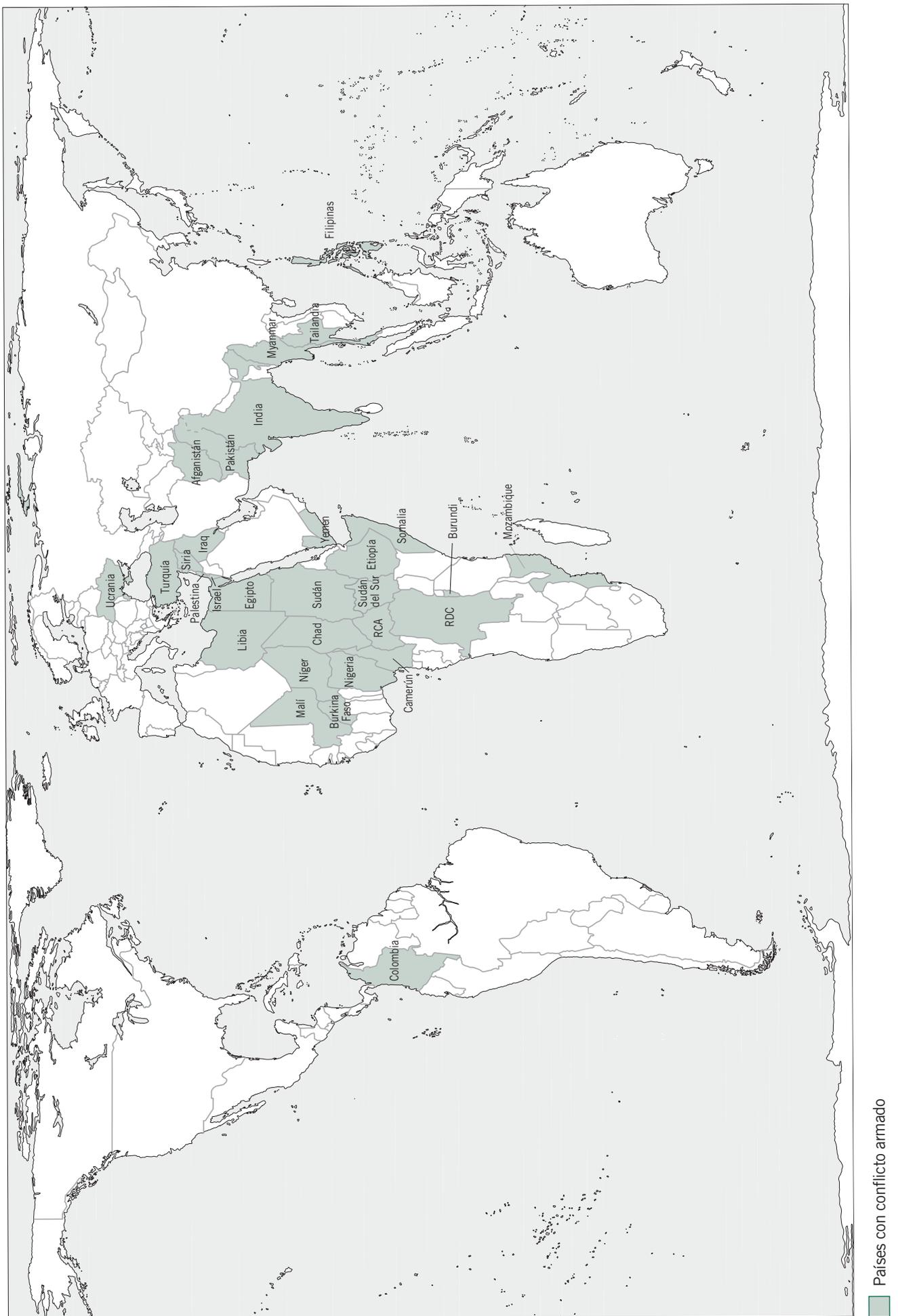
- **Bosnia y Herzegovina:** El incremento de las tensiones en 2021, de la mano del boicot serbobosnio a las autoridades del Estado y de la decisión del parlamento de la República Sprska de desvincularse de diversos ámbitos estatales, así como de los desacuerdos sobre la reforma laboral, generan riesgo de un mayor deterioro de la situación política del país.
- **Palestina:** La conmemoración de los 30 años del proceso Madrid-Oslo ofreció una oportunidad para reflexionar sobre las dinámicas puestas en marcha desde entonces y que, en la práctica, han favorecido la ocupación israelí de Palestina y la consolidación de la fragmentación y desposesión del pueblo palestino. El análisis de las consecuencias perjudiciales del proceso de paz, de las graves vulneraciones y discriminaciones que padece la población palestina y de la actual coyuntura del conflicto –que en 2021 vivió una intensificación de la violencia directa– permiten constatar el coste de continuar ignorando la cuestión palestina y la urgencia de nuevas aproximaciones.

Resumen de la conflictividad global en 2021

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Camerún (Ambazonia/ North West y South West)</i> Etiopía (Tigré) <i>Malí</i> Mozambique (norte) <i>RCA</i> <i>RDC (este)</i> RDC (este-ADF) Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental <i>Somalia</i> <i>Sudán (Darfur)</i> <i>Sudán del Sur</i>	<i>Libia</i>	Burundi <i>Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	Chad Etiopía Etiopía (Oromiya) Guinea Kenia Malí <i>Marruecos-Sáhara Occ.</i> Nigeria Nigeria (Biafra) <i>Sudán</i>	Argelia Burkina Faso Costa de Marfil Djibouti Etiopía-Egipto-Sudán Etiopía-Sudán Guinea-Bissau <i>RDC</i> Ruanda Ruanda-Burundi Ruanda-Uganda Somalia (Somalilandia-Puntlandia) Tanzania Túnez Uganda	África Central (LRA) Benín Eritrea <i>Eritrea-Etiopía</i> Eswatini Gambia Guinea Ecuatorial <i>Mozambique</i> Níger Nigeria (Delta Níger) RDC-Ruanda RDC-Uganda Senegal (Casamance) <i>Sudán-Sudán del Sur</i> Zimbabwe	
SUBTOTAL	12	1	2	10	15	15	55
América		<i>Colombia</i>		Colombia Haití México <i>Venezuela</i>	Perú	Bolivia Chile Cuba El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	
SUBTOTAL		1		4	1	7	13
Asia y Pacífico	<i>Afganistán</i> <i>Myanmar</i>	Pakistán	Filipinas (Mindanao) <i>Filipinas (NPA)</i> India (CPI-M) India (Jammu y Cachemira) Pakistán (Baluchistán) <i>Tailandia (sur)</i>	India-China India-Pakistán	<i>Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea</i> <i>Corea, RPD-Rep. de Corea</i> Indonesia (Papúa Occ.) Kirguistán Pakistán Tailandia Tayikistán	Bangladesh China (Hong Kong) China (Tíbet) China-Japón China-Taiwán China (Xinjiang) India <i>India (Assam)</i> India (Manipur) <i>India (Nagalandia)</i> Indonesia (Sulawesi) Kazajstán Lao, RPD Mar de la China Meridional Uzbekistán	
SUBTOTAL	2	1	6	2	7	15	33
Europa		Turquía (sudeste) <i>Ucrania (este)</i>		<i>Armenia-Azerbaiján (Nagorno-Karabaj)</i>	Belarús Bosnia y Herzegovina Turquía Turquía-Grecia, Chipre	España (Cataluña) <i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> <i>Moldova, Rep. de (Transnistria)</i> Rusia (norte del Cáucaso) <i>Serbia-Kosovo</i>	
SUBTOTAL		2		1	4	6	13
Oriente Medio	Iraq <i>Siria</i> <i>Yemen</i>	<i>Israel-Palestina</i>	Egipto (Sinaí)	<i>Irán-EEUU, Israel</i> Israel-Siria-Líbano	Egipto Irán Líbano	Arabia Saudita Bahrein Irán (noroeste) Irán (Sistán Baluchistán) Iraq (Kurdistán) <i>Palestina</i>	
SUBTOTAL	3	1	1	2	3	6	16
TOTAL	17	6	9	19	30	49	130

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas.

Mapa 1.1 Conflictos armados



1. Conflictos armados

- Durante 2021 se registraron 32 conflictos armados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (15) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno).
- Por primera vez en una década los conflictos armados de alta intensidad representaron más de la mitad (53%) del total de casos a nivel mundial.
- En noviembre las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) cometieron varios atentados en la capital ugandesa, Kampala, lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones del grupo y que desencadenó el despliegue militar ugandés en RDC.
- Continuó la escalada del conflicto en la región etíope de Tigré en el que todas las partes cometieron atrocidades que incluyen masacres de civiles, violencia sexual y el uso del hambre como arma de guerra.
- En el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, se desplegó la misión regional de la SADC así como tropas ruandesas para ayudar al Gobierno mozambique en la contención de violencia.
- La firma de un acuerdo militar entre Malí y Rusia amenaza con transformar las coaliciones militares internacionales en el Sahel.
- Los talibanes tomaron el poder en Afganistán tras una intensificación de su ofensiva y la retirada de las tropas estadounidenses e internacionales.
- Un golpe de Estado militar derrocó al Gobierno de Aung San Suu Kyi en Myanmar y dio lugar a una escalada de la violencia.
- Se incrementó la militarización en torno al conflicto en Ucrania, con el despliegue masivo de tropas rusas junto a la frontera y alertas sobre una posible ofensiva militar de Rusia.
- La violencia directa asociada al conflicto palestino-israelí y a la ocupación israelí de territorio palestino se incrementó y causó los peores niveles de letalidad en siete años.
- El conflicto armado en Yemen siguió siendo uno de los más graves, con más de 20.000 víctimas mortales en 2021, y fracasaron los intentos por imponer un alto el fuego en todo el país.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2021. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2021, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2021.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2021

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Tigré) -2020-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países	2
	Gobierno, Recursos, Sistema		↓
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)-, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		=

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2021 con la del 2020, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2021 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group), Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM).	3
	Sistema, Identidad		↓
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansarul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Ruanda, Rusia (Wagner Group)	3
	Gobierno, Recursos		↑
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiye, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNITAMS	3
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	2
	Sistema		↑
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (K), Frente Nacional de Resistencia (NRF)	3
	Sistema		↑
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraike, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MND AA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	2
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		=
EUROPA			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		=
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↑
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel	1
	Sistema		↓
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional ⁶	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen ⁷ -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al expresidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

6. A pesar de que "Palestina" (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina
7. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* el conflicto armado protagonizado por los al-houthistas y el de AQPA se abordaban por separado. Este año se analizan conjuntamente por la convergencia en las dinámicas de conflictividad.

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2021

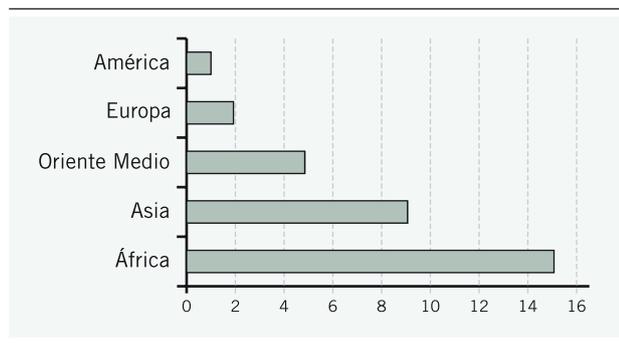
En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2021, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

En 2021 se registró un ligero descenso en el número de conflictos armados respecto a años precedentes. En total se contabilizaron 32 casos, frente a los 34 contextos identificados en 2020, 2019 y 2018. El principal cambio en comparación con el período anterior es que la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj dejó de ser considerada como conflicto armado. Tras la intensa guerra de seis semanas entre Armenia y Azerbaiyán en 2020 y sus severos impactos –más de 5.000 personas fallecidas y decenas de miles desplazadas forzosamente por la violencia–, en 2021 la situación pasó a ser de tensión militarizada, en un contexto de alto el fuego frágil y en el que persistían numerosos retos de carácter humanitario,⁸ así como en el ámbito negociador. Adicionalmente, en la presente edición del informe los casos de Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA) se analizan de manera conjunta por la progresiva interrelación de las dinámicas de conflicto armado en el país.⁹ Al finalizar el año, los 32 conflictos armados identificados en 2021 permanecían activos.

África concentró prácticamente la mitad de los conflictos armados en 2021, con un total de 15 casos (47%), seguida de Asia (nueve), Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno)

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2021



En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, se mantuvo la tendencia de períodos precedentes y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (15) y Asia (nueve), seguido de Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno). El continente africano, por tanto, concentraba prácticamente la mitad de los casos (47%) a nivel global.

En cuanto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internacionales y, en su gran mayoría, internos internacionalizados. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2021 tres de los 32 casos (9%) eran conflictos armados internos y todos ellos transcurrían en Asia. Se trata de los casos de Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). Otros dos casos, que suponen un 6% del total de contextos, fueron de carácter internacional: el conflicto en la región africana del Sahel occidental y la disputa palestino-israelí en Oriente Medio. Los 27 casos restantes, que representan un 85% de los casos, fueron internos internacionalizados. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza – como ISIS, al-Qaeda o Boko Haram, entre otros.

En línea con lo observado en años previos, durante 2021 se mantuvo una presencia destacada de misiones internacionales de Naciones Unidas, especialmente en el marco de conflictos armados en África. A lo largo del año la ONU continuó operando en contextos como RCA (MINUSCA), RDC (MONUSCO), Malí (MINUSMA), Sudán del Sur (UNMISS) o Sudán (Darfur). En este último caso, la misión híbrida de la ONU y la UA (UNAMID) se retiró de manera definitiva de la zona el 31 de diciembre de 2020 después de más de una década de actividades –operaba desde 2007–, dando paso a una misión de la ONU de asistencia a la transición en Sudán (UNITAMS). Organizaciones regionales también continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Africana (UA) –con la misión AMISOM en Somalia– o la Unión Europea (UE) –EUNAVFOR en Somalia.

8. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj) en el capítulo 2 (Tensiones).

9. En ediciones anteriores del informe *Alerta!* Los casos de Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA) se analizaban por separado.

También continuaron operativas misiones híbridas, que involucran a organizaciones regionales y Estados, como la operación militar marítima en el Cuerno de África y el Océano Índico, Ocean Shield, liderada por EEUU, pero en la que también participan la UE, la OTAN y países como Japón, India y Rusia. En esta misma línea se inscribe la coalición internacional contra el grupo armado ISIS, formada en septiembre de 2014 bajo el liderazgo de EEUU, que desde entonces ha desplegado sus acciones en Iraq y Siria. Esta coalición cuenta con 84 integrantes, entre Estados y organizaciones, entre ellas la Liga Árabe y la UE.¹⁰

Respecto a la implicación de terceros países, durante 2021 cabe destacar el repliegue de EEUU de varios conflictos armados emblemáticos. El más destacado fue, sin duda, Afganistán. Tras el anuncio del Gobierno de Joe Biden de que las tropas estadounidenses abandonarían el país de manera definitiva el 11 de septiembre –dos décadas después de los atentados contra Washington y Nueva York que alentaron la intervención y ocupación de territorio afgano–, la violencia se recrudeció en el país y los talibanes tomaron militarmente el poder. En este contexto, la misión Rolute Support de la OTAN también retiró sus fuerzas del país entre mayo y septiembre de 2021. A principios de enero de 2021, EEUU también puso fin a su presencia militar en Somalia, con la retirada de los cerca de 800 efectivos de fuerzas especiales que mantenía en el país africano. Al finalizar el año también se anunció que EEUU retiraría las tropas que mantenía en misión de combate en Iraq y los militares que permanecerían en el país limitarían sus actividades a tareas de entrenamiento y asistencia. Sin embargo, fuentes diplomáticas y de seguridad consideraron que el cambio de papel no sería significativo por la escasa participación de tropas de EEUU en actividades de combate en Iraq en los últimos años. Mientras, algunos actores iraquíes –incluyendo milicias próximas a Irán– continuaron demandando la salida total de las fuerzas estadounidenses.

Por otra parte, durante 2021 se observó una mayor actividad militar de Rusia en diferentes contextos. En algunos conflictos Moscú mantuvo su implicación de manera directa y su ascendiente sobre grupos armados locales, como por ejemplo en Siria, donde Rusia continuó siendo un actor protagónico y apoyo clave para el régimen de Bashar al-Assad. En casos como el de Ucrania, en 2021 Rusia desplegó decenas de miles de soldados y equipamiento militar cerca de la frontera, en el marco de su disputa con el Gobierno ucraniano y sus crecientes tensiones con la OTAN, EEUU y UE. A finales de año se intensificaron las alertas sobre riesgos de una posible invasión militar rusa a Ucrania. En diversos contextos también se identificó una creciente presencia rusa a

través del grupo de seguridad privada Wagner. Así, por ejemplo, el despliegue de mercenarios de esta compañía causó severas tensiones entre el Gobierno maliense y sus socios occidentales en 2021, en particular con Francia. Paralelamente, el grupo Wagner desplegó a algunas de sus fuerzas en RCA y en los últimos años se ha informado también de su presencia en Libia. En este contexto, al finalizar el año la UE aprobó una serie de medidas restrictivas contra el Grupo Wagner, al que acusó de reclutar, entrenar y enviar a fuerzas militares privadas a zonas de conflicto, favoreciendo las dinámicas de violencia, el expolio de recursos y la intimidación de civiles. En diciembre de 2021, el Consejo de la UE acusó a algunos individuos vinculados al grupo de torturas, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales y actividades desestabilizadoras, en particular en Libia, Siria, Ucrania (Donbás), RCA y en la región del Sahel.¹¹

Siguiendo la tendencia de años previos, la inmensa mayoría (84%) de los conflictos armados en 2021 fueron de carácter interno internacionalizado

Las dinámicas de internacionalización también se observaron en otros contextos, como por ejemplo en el conflicto de Turquía (sudeste), donde el Ejército turco lanzó numerosas operaciones militares contra fuerzas kurdas ubicadas en el norte de Iraq. Turquía también continuó teniendo un papel determinante en la guerra en la vecina Siria. Irán también mantuvo su implicación en el conflicto armado en Siria y continuó teniendo un papel clave en las dinámicas del conflicto armado en Iraq por su ascendencia sobre numerosas milicias shííes. Asimismo, Teherán parecía cada vez más implicado en Yemen por su proximidad con los al-houthistas y su interés en este escenario en el marco del pulso de poder con Arabia Saudita y de las negociaciones sobre su programa nuclear. Riad, en tanto, continuó teniendo un papel protagónico en la coalición internacional involucrada en el conflicto armado yemení, en el que también mantuvo un papel destacado Emiratos Árabes Unidos. Desde hace varios años países como Siria, Iraq, Yemen y también Libia han sido escenarios de “proxy wars” –“guerras por delegación”– en los que fue especialmente evidente la proyección de disputas regionales e internacionales en las dinámicas de conflicto. Otra de las contiendas que destacó por las dinámicas de internacionalización en 2021 fue la de Etiopía (Tigré), tras la implicación de Eritrea en apoyo del Gobierno etíope y la ampliación de las hostilidades a la zona fronteriza entre Etiopía y Sudán, donde se produjeron enfrentamientos entre los Ejércitos de Etiopía y Sudán con milicias sudanesas. También destacó el caso de Mozambique (norte), donde se registró la implicación de diversos actores internacionales, algunos de los cuales aportaron contingentes militares y/o policiales –la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) o Ruanda– o unidades de entrenamiento –Portugal, EEUU, UE– para apoyar la lucha contrainsurgente de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas.

10. Más información en [The Global Coalition Against Daesh](#) (website).

11. European Council, *EU imposes restrictive measures against the Wagner Group*, 13 de diciembre de 2021.

En cuanto a las causas de los conflictos armados en 2021, siguiendo la tendencia de años anteriores la mayoría de tuvo entre sus principales motivaciones las disputas en torno a **las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o bien al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado**, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Una de estas causas o ambas estuvieron presentes en el 72% de los casos, es decir, en 23 de los 32 conflictos armados contabilizados en 2021. En 17 de estos contextos había actores armados que aspiraban a una transformación del sistema, entre los cuales la mayoría contaban con una agenda de línea yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Pese al debilitamiento del grupo armado Estado Islámico en su núcleo de origen en Oriente Medio en los últimos años, las filiales de ISIS o entidades afines a la organización –que en algunos casos adoptaban denominaciones específicas– se mantuvieron activas en numerosos conflictos armados en todas las regiones del mundo, a excepción de América. Así, se identificaron filiales de ISIS en los casos de Mozambique (norte), Región Sahel occidental, Región Lago Chad, RDC (este-ADF), Libia, Somalia, Afganistán, Pakistán (Baluchistán), Filipinas (Mindanao), Turquía (sudeste), Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen. También continuaron operativas, aunque con un menor perfil y acciones más limitadas, organizaciones vinculadas a al-Qaeda como al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) –en Malí y Libia– o al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) –en Yemen. Otros grupos armados activos de línea similar, con agendas yihadistas que aspiran a un cambio de sistema, fueron Abu Sayyaf en Filipinas (Mindanao), al-Shabaab en Somalia, Boko Haram en la Región Lago Chad, y los talibanes en Pakistán y Afganistán. Este último caso fue especialmente destacado y emblemático en 2021, ya que los talibanes consiguieron tomar militarmente el poder en Afganistán 20 años después de su derrota y tras dos décadas de ocupación extranjera, después de la retirada de las fuerzas militares estadounidenses a mediados de año.

Adicionalmente, otro elemento a resaltar entre las motivaciones principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, que estuvieron –una de ellas o ambas– en 20 de los 32 de los casos (63%). Ejemplos de conflictos con este trasfondo son el que enfrenta al Gobierno de Camerún con movimientos secesionistas político-militares en las dos regiones anglófonas del oeste del país (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), el que afecta a la región etíope de Tigré, el de Mindanao en Filipinas, el de Jammu y Cachemira en India, el de Baluchistán en Pakistán, el del sur de Tailandia, la cuestión kurda en Turquía, por mencionar solo algunos.

Un 41% de los conflictos armados en 2021 evolucionaron hacia mayores niveles de violencia respecto al año anterior

En 2021 se profundizó la tendencia de aumento de conflictos armados de alta intensidad, que por primera vez en una década representaron más de la mitad de los casos

Por último, también hubo conflictos armados que tuvieron entre sus causas principales el control de territorio y/o de recursos. Estos casos ascendieron a un 34% –11 de los 32– del total de conflictos. Los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos, con numerosos enfrentamientos relacionados con la extracción de oro y coltán, entre otros minerales. Zonas de actividad minera también fueron escenario de hechos de violencia en Pakistán (Baluchistán), otro conflicto armado en el que pesa la disputa por recursos como una de sus causas. También en el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indias y el CPI-M se dieron dinámicas de violencia vinculadas al extractivismo en varios estados indios. Las cuestiones vinculadas al control del territorio, en tanto, fueron especialmente significativas en el caso de Palestina-Israel.

Cabe destacar que **18 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2021 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género**, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.¹² Las desigualdades de género se manifestaron en aspectos como los impactos específicos de género de la violencia y la utilización de la violencia sexual por las partes contendientes en diferentes conflictos armados, en un contexto internacional de pandemia por la COVID-19 que puso en evidencia las graves desigualdades de género a nivel internacional.

En materia de **evolución**, la mayor parte de los conflictos armados en 2021 –13 de los 32 casos, equivalentes a un 41%– presentaron un aumento en los niveles de violencia en comparación con el año anterior. Entre los casos en que se observó un deterioro de la situación se cuentan conflictos armados de todas las regiones: Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Tigré), Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Ucrania (este) e Israel-Palestina. Otros 12 conflictos armados –que representan un 37% del total de casos– se observaron niveles de violencia y confrontación similares a los registrados en 2020. Solo en siete contextos –22% de los conflictos armados a nivel mundial– se identificó una disminución en los niveles de violencia y sus impactos: Libia, Mozambique (Norte), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M) y Egipto (Sinaí). En algunos de estos casos la reducción de los incidentes violentos estuvo

12. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

relacionada con acuerdos de alto el fuego o declaraciones unilaterales de cese el fuego –Libia, Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)– en el marco de procesos de negociación.¹³ En otros casos, como Mozambique (Norte), si bien la violencia siguió siendo de alta intensidad, el número de eventos violentos y las muertes asociadas en 2021 reflejó un descenso en comparación al año anterior en el que se registró la tasa de muertes más alta de la última década en el país.

En cuanto a la **intensidad de los conflictos armados**, durante 2021 se acentuó la tendencia observada en los últimos diez años de incremento de casos graves. Es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas mortales anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si hace una década los conflictos armados de alta intensidad representaban en torno a un cuarto del total de casos, en los últimos años esta proporción se ha ido incrementando hasta representar prácticamente la mitad de los contextos (ver gráfico 1.4). En el marco del último lustro, los conflictos armados graves supusieron un 40% en los años 2016 y 2017, descendieron entre 2018 y 2019 –a 27% y 32%, respectivamente–, y aumentaron de manera significativa en 2020, cuando alcanzaron el 47%. **En 2021, la prevalencia de casos de alta intensidad fue incluso más elevada, llegando al 53% y superando la mitad de los casos por primera vez en la última década.** En línea con lo observado en 2020, durante 2021 el mayor porcentaje de casos graves se concentró en África. El continente albergó 12 de los 17 conflictos armados de alta intensidad que se identificaron a nivel global, es decir, el 71% del total de casos. Respecto al número de casos del continente africano, 12 de sus 15 conflictos armados (80%) eran de alta intensidad, un porcentaje muy superior al observado en años recientes –en 2019, solo un 44% de los conflictos armados africanos eran de intensidad elevada. Después de África, la segunda región en albergar el mayor número de casos de alta intensidad fue Oriente Medio, con un total de tres contextos –9% del total global de casos, pero 60% de los conflictos de la zona. En Asia se identificaron dos conflictos armados de alta intensidad, mientras que en América y Europa no se registraron casos de este tipo –si bien se incrementaron los niveles de tensión militarizada, de la mano del masivo despliegue de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana y las alertas sobre una posible invasión. Los 17 casos de conflictos armados graves en 2021 fueron: Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (Norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.

En 2021 Afganistán continuó siendo el conflicto armado que provocó más víctimas mortales a nivel global durante el año (40.000), seguido de Yemen (22.000) y Siria (entre 3.800 y 5.700 personas fallecidas)

Cabe destacar que, en muchos de los conflictos armados de alta intensidad, las hostilidades y múltiples dinámicas de violencia causaron unos niveles de letalidad muy superiores al umbral de mil víctimas mortales anuales. Solo en Afganistán, el caso en el que se identificó un mayor número de personas fallecidas en 2021, el balance fue de más de 40.000 personas muertas a causa del conflicto armado. El conflicto afgano ya había sido el más letal en 2020, aunque con una cifra inferior de 20.000 víctimas mortales, y en 2019, año

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2021

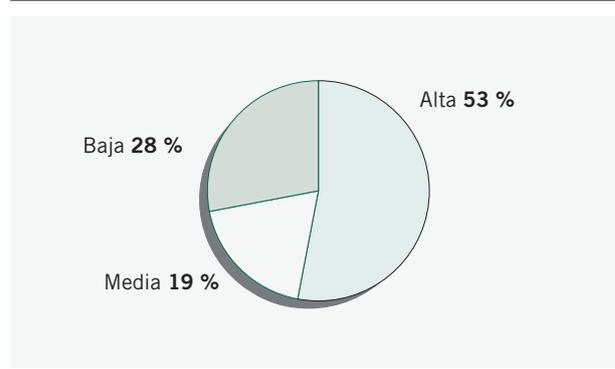
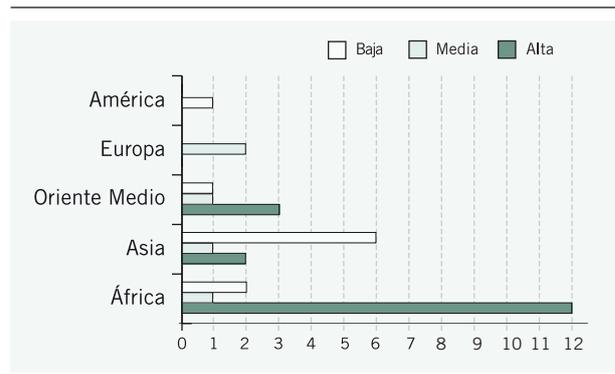


Gráfico 1.3. Proporción de conflictos armados graves en la última década



Gráfico 1.4. Intensidad de los conflictos por regiones



13. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo la tendencia registrada en períodos precedentes, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 15 casos, que representan el 47% del total. • Se mantuvo el incremento de casos de conflictos armados de alta intensidad en el continente. Si en 2016 estos casos representaban un 44% (siete de los 16 casos de entonces), en 2021 el porcentaje se elevó hasta el 80% (12 de los 15 casos en la región). Esta cifra está por encima del 73% registrado en 2020. • Prácticamente la mitad de los casos –siete de 15– evolucionaron hacia mayores niveles de violencia e inestabilidad. En tres contextos –Mozambique (Norte), Sudán (Kordofán y Nilo Azul) y Libia– registraron un descenso en las hostilidades, mientras que en el resto la evolución fue similar a la del año anterior. • Todos los conflictos armados de África fueron internos internacionalizados, a excepción del que transcurre en la Región Sahel Occidental, que se considera de carácter internacional • En el trasfondo de los conflictos armados en África se identifican diversas motivaciones, entre las cuales destacan las aspiraciones a un cambio de gobierno o de sistema –una de estas categorías o ambas estaban presentes en 12 de los 15 de los casos (80%)– y las demandas de autogobierno o identitarias, identificadas en 9 de los 15 de los casos (60%). En la mitad de los casos –ocho, equivalentes a 53%– se identificaron motivaciones relativas al control de recursos, convirtiendo a África en el continente donde esta dimensión tiene el peso más significativo.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. Este caso representó un 3% del total global de conflictos armados. • El conflicto armado colombiano evolucionó negativamente en 2021 y registró mayores niveles de violencia, incrementando su intensidad respecto al año anterior, principalmente como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, el grupo armado ELN, grupos disidentes de las FARC y organizaciones paramilitares de diverso signo. • Si bien en América solo se contabilizó un conflicto armado, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Después de África, el continente concentró el mayor número de conflictos armados, albergando nueve casos, es decir 28% del total global. • En materia de intensidad, destacó el conflicto armado en Afganistán, que fue el más letal a nivel mundial, con más de 40.000 víctimas mortales en 2021. El caso de Myanmar también fue considerado de intensidad alta, mientras que el resto de los contextos fueron de intensidad baja a excepción de Pakistán, que registró una intensidad media. • En contraste con el año anterior, en que solo un caso evolucionó hacia mayores niveles de violencia y hostilidades, en 2021 un total de cuatro conflictos armados asiáticos empeoraron: Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Myanmar. En otros tres contextos se identificó una disminución en los niveles de violencia –India (Jamu y Cachemira), India (CPI-M) y Filipinas (Mindanao) y el resto evolucionó de manera similar al período anterior. • Asia continuó siendo la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región. • En Asia prevalecieron los conflictos armados en los que se pretendía un cambio de sistema –motivación presente en cinco de los nueve conflictos (56%)– o en los que estaban en juego demandas de autogobierno o identidad –también en un 56% de contextos. En un caso –Pakistán (Baluchistán)– el tema de los recursos fue especialmente relevante.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un conflicto armado menos que el año anterior, teniendo en cuenta la guerra de seis semanas entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj en 2020, que en 2021 derivó a una situación de tensión. Los dos conflictos armados en Europa representaron un 6% del total de casos a nivel mundial. • Si en 2020 tanto Turquía (sudeste) como Ucrania (este) habían registrado menores niveles de violencia, en 2021 este último fue escenario de una significativa escalada, de la mano del despliegue masivo de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania; mientras que el primero presentó una evolución similar a la del año anterior. Ambos contextos fueron considerados de intensidad media. • Europa siguió siendo una región caracterizada por albergar conflictos con causas vinculadas a cuestiones de autogobierno e identidad, motivaciones presentes en la totalidad de casos de la región. No obstante, en el caso de Ucrania, sobresalía la disputa entre Moscú y Kiev y entre Moscú y actores euroatlánticos en torno a cuestiones de política local e internacional como la orientación política y de seguridad y la arquitectura de seguridad en el continente. • Los dos conflictos armados en Europa fueron de carácter interno internacionalizado.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la región se contabilizaron cinco conflictos armados, que representaron un 16% del total de casos a nivel mundial. Cabe destacar que el número de casos descendió respecto al año anterior porque las dinámicas del conflicto armado en Yemen pasaron a ser analizadas conjuntamente, dada la imbricación de las hostilidades protagonizadas por diversos y numerosos grupos armados en el país. En la edición anterior del informe Alerta! el conflicto protagonizado por al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y, en menor medida por la filial de ISIS en Yemen, se analizaba por separado. • Oriente Medio fue la segunda zona del mundo, después de África, en la que se produjeron más conflictos armados de alta intensidad. Más de la mitad de los casos de la región –tres de cinco, equivalentes a 60%– fueron de intensidad elevada: Iraq, Siria y Yemen. Estos dos últimos fueron los conflictos armados más letales en 2021, después de Afganistán. • La mayor parte de los casos presentaron niveles de violencia similares a los de 2020. Solo en un caso, Egipto (Sinaí) se identificó una disminución relativa de las hostilidades, aunque persistieron las dificultades para obtener información sobre los acontecimientos en este caso. Mientras, en el caso de Palestina-Israel se observó una escalada de violencia que resultó en los peores niveles de letalidad en siete años. • Los conflictos de la región fueron multicausales, con una presencia destacada de casos donde las motivaciones estaban vinculadas a la búsqueda de un cambio de gobierno o sistema o con demandas identitarias o de autogobierno –presentes en cuatro de los cinco casos (80%). En otros dos casos (40%) había motivaciones vinculadas al control de recursos y territorios.

en el que también había superado las 40.000 personas fallecidas a causa de la violencia. En 2021, el segundo conflicto armado más cruento fue el de Yemen, donde se contabilizaron más de 22.000 personas fallecidas. Desde 2020 el conflicto armado yemení viene superando en letalidad al de Siria, que durante años se había situado como el más cruento de la región. En 2021, el conflicto armado en Siria continuó superando con creces el umbral de mil víctimas mortales anuales y diversos cómputos indican que habrían muerto entre 3.800 y 5.700 personas a causa de la violencia armada. Estas cifras son, sin embargo, significativamente menores a las registradas en años precedentes, cuando las hostilidades arrojaban cifras de letalidad estimadas muy superiores (30.000 en 2018; más de 50.000 en 2016 y 2015, respectivamente; más de 70.000 en 2014). Otros conflictos armados que destacaron por sus niveles de letalidad en 2021 fueron el de la Región de Sahel occidental, donde se estimaban en torno a 5.000 víctimas mortales ese año; RDC (este), con más de 4.800 personas fallecidas por la violencia; Somalia, con más de 3.000; y la Región Lago Chad (Boko Haram), con entre 1.800 y 3.800 víctimas fatales, según diversos recuentos. En otros contextos no se ofrecieron balances anuales, pero las informaciones también apuntaban a miles de muertes en 2021, como en el caso de Etiopía (Tigré).

En 2021 el panorama general de conflictos armados no se vio tan influido por la COVID-19 como en 2020. En el segundo año de la pandemia, y en un escenario caracterizado también por la progresiva disminución de las restricciones de movilidad, quedó en evidencia la escasa acogida en la práctica al llamamiento del secretario general de la ONU de marzo de 2020 para poner en marcha un alto el fuego global con el que concentrar los esfuerzos en la respuesta al coronavirus. Ello, a pesar del apoyo formal que concitó la interpelación de António Guterres: la iniciativa fue apoyada por 180 Estados, más de 800 entidades de la sociedad civil y una veintena de organizaciones armadas y fue refrendada en dos ocasiones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –resoluciones 2532 (2020) y 2565 (2021). Diversos análisis resaltaron que, pese a su gravedad, la pandemia no pareció afectar los cálculos estratégicos de las partes implicadas en conflictos armados ni se consideró como una razón suficiente para suspender las hostilidades.¹⁴ Datos dados a conocer en 2021 también confirmaron que la COVID-19, pese a sus profundas consecuencias económicas, no derivó en una disminución en los gastos militares ni en el comercio de armas, que se mantuvieron en niveles similares a años previos.¹⁵ El análisis de la conflictividad global en 2021 permite identificar algunas repercusiones de la pandemia en las dinámicas de los conflictos

armados, por ejemplo, en los flujos de combatientes en algunos contextos –en Filipinas las restricciones de movilidad por la pandemia habrían dificultado la llegada de combatientes extranjeros a Mindanao–, y en la utilización e instrumentalización del coronavirus por parte de algunos gobiernos para intensificar medidas restrictivas y acallar voces críticas de la oposición, la sociedad civil y minorías.¹⁶ En lo que respecta a los conflictos armados, las consecuencias de la COVID-19 en 2021 apuntan mayoritariamente a una incidencia en el agravamiento de crisis humanitarias y afectaciones para la población civil en contextos de conflicto armado.

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Siguiendo la tónica de años previos, y tal y como vienen denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, en 2021 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. Durante el año los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificadas a causa de la pandemia de la COVID-19 y por la confluencia con otras crisis, como la emergencia climática, lo que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados.¹⁷ El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2021 y que analiza los hechos de 2020, subrayó que los conflictos armados han continuado caracterizándose por altísimos niveles de víctimas mortales civiles, además de numerosas personas heridas y seriamente afectadas por traumas psicológicos; torturas; desapariciones; violencia sexual; destrucción de viviendas, escuelas, mercados, hospitales y otras infraestructuras civiles esenciales como sistemas de agua potable y electricidad. Cabe recordar que los civiles han sido identificados por Naciones Unidas como las principales víctimas mortales de los conflictos armados.¹⁸

La evolución de los diversos conflictos armados en 2021 permite confirmar la persistencia de este patrón de abusos sistemáticos contra la población civil. Destacaron casos como el de Etiopía (Tigré), donde todas las partes involucradas en la disputa han sido acusadas de cometer atrocidades, incluyendo masacres de civiles y uso del hambre como arma de guerra, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. En Myanmar, las fuerzas de seguridad intensificaron la represión de la población civil tras el golpe de Estado

14. Richard Atwood, *A Year of COVID and Conflict: What the Pandemic Did and Didn't Do*, International Crisis Group (ICG), 2 de abril de 2021.

15. Stockholm International Peace Research (SIPRI), *World military spending rises to almost \$2 trillion in 2020*, 26 de abril de 2021, y SIPRI, *International arms transfers level off after years of sharp growth; Middle Eastern arms imports grow most*, says SIPRI, 15 de marzo de 2021.

16. Véase por ejemplo los casos de Egipto, Túnez y Chad en el capítulo 2 (Tensiones). Para más información, véase Iván Navarro Milián, "COVID-19 y vulneración de derechos humanos", *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, Número 15, diciembre de 2021.

17. Para más información, véase María Villellas Ariño, "Conflictos, COVID-19 y cambio climático", *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, Número 12, julio de 2021.

18. Secretario general de la ONU, *Protection of civilians in armed conflicts*, S/2021/423, 3 de mayo de 2021.

militar. Grupos armados siguieron utilizando los ataques contra civiles como instrumento para propagar el terror –como los ataques de ISIS-K contra mezquitas shíites en Afganistán o las ejecuciones de civiles por la filial de ISIS en el Sinaí, en Egipto–, mientras que actores armados estatales también fueron señalados por abusos contra la población civil. En Egipto (Sinaí), por ejemplo, las Fuerzas Armadas fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos por indicios de ejecuciones extrajudiciales a sospechosos acusados de “terrorismo”. Actores armados de seguridad privada, como instructores militares rusos del grupo Wagner o de la compañía militar sudafricana Dyck Advisory Group también fueron acusados de abusos contra la población civil y de prácticas discriminatorias. El uso de armas explosivas tuvo un especial impacto en la población civil. Estudios recientes apuntan a que las víctimas civiles a causa del uso de este tipo de armamento en áreas pobladas representaron el 89% del total de víctimas de armas explosivas en 2020.¹⁹

Durante 2021 se alertó sobre un importante número de víctimas civiles y sobre un aumento en esta cifra en muchos casos de conflictos armados. Así, por ejemplo, en Malí, solo entre abril y junio se contabilizaron más de 500 civiles asesinados, heridos, secuestrados o desaparecidos, cifra que suponía un incremento del 25% respecto al trimestre anterior. En toda la región del Sahel Occidental las muertes de civiles –1.332 en 2021– se duplicaron respecto a 2020. En RDC (este), solo en los primeros meses del año ya se habían contabilizado más de un millar de civiles fallecidos por la violencia, la mayoría en las provincias de Ituri y Kivu Norte. Uno de los casos más destacados fue Afganistán, donde solo en el primer semestre de 2021 murieron 1.659 civiles a causa de la violencia, lo que representó un aumento de 50% respecto al año anterior. En Yemen se documentaron más de 2.500 víctimas civiles a causa del conflicto en 2021, de las cuales 769 fallecidas, y diversas voces advirtieron sobre el significativo aumento de las bajas civiles en el último trimestre del año. En Siria, aunque las cifras de letalidad por el conflicto armado han bajado en los últimos años, las estimaciones apuntaban a más de 1.500 civiles fallecidos a causa de las hostilidades en 2021.

Durante 2021 continuaron las agresiones y amenazas contra personal médico, así como los ataques contra infraestructuras hospitalarias, prácticas que se consideran atentatorias contra el derecho internacional humanitario. En 2021 se registraron ejemplos en diversos contextos como Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) –donde soldados perpetraron abusos contra personal sanitario en un hospital durante una operación de búsqueda de milicianos–, Afganistán –donde un atentado contra un hospital militar en Kabul provocó decenas de muertos al

finalizar el año– o Siria –el ataque contra un hospital en la zona de Afrin provocó serios daños a la infraestructura y la muerte de al menos 18 personas. A la violencia directa contra personal sanitario y centros de salud y las presiones al sistema sanitario derivadas de las hostilidades se sumaron las consecuencias de la pandemia. En numerosos casos, se estima que los niveles de propagación de la COVID-19 eran muy superiores a lo que indicaban los datos disponibles, debido a las dificultades o imposibilidad de hacer pruebas diagnósticas. Las cifras de letalidad por coronavirus también eran más difíciles de estimar en contextos de conflicto armado. Los conflictos armados continuaron provocando y/o empeorando situaciones de crisis humanitarias, en un contexto agravado por otros condicionantes como la pandemia, la crisis económica o la emergencia climática. Según las previsiones de la principal agencia humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, en 2022 más de 274 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria, un incremento significativo respecto a los 235 millones previstos para el año anterior, que ya era la cifra más alta en décadas.²⁰ OCHA reiteró que los conflictos armados continuaban siendo la principal causa de las necesidades humanitarias a nivel global y alertó especialmente sobre el aumento sin precedentes de la inseguridad alimentaria debido a la confluencia de conflictos, impactos de la pandemia, eventos climáticos extremos y dificultades para acceder a la población necesitada, entre otros factores. Según sus estimaciones, en 2020 un total de 811 millones de personas presentaron problemas de desnutrición y en 2021 la situación continuaba deteriorándose.

Según los datos disponibles de OCHA hasta septiembre de 2021, en los primeros meses de 2021 cerca de 161 millones de personas en 42 países afrontaban inseguridad alimentaria aguda, cifra que previsiblemente se agravaría y llegaría hasta más de 280 millones debido al empeoramiento de la situación en diversos contextos al finalizar el año. Parte del incremento se atribuye a las crecientes cifras de inseguridad alimentaria en contextos como Afganistán, Myanmar y Somalia. Asimismo, se identificaron situaciones críticas, de práctica hambruna, en contextos como Etiopía, Sudán del Sur y Yemen. Según los datos de OCHA, a mediados de 2021 al menos 5,5 millones de personas afrontaban inseguridad alimentaria aguda en las regiones etíopes de Afar, Amhara y Tigré. Afganistán se convirtió en una de las peores crisis a nivel global, con más de 22,8 millones de personas –más de la mitad de la población– en situación de inseguridad alimentaria aguda y se esperaba que al finalizar el año hubiera 3,2 millones de menores de cinco años padeciendo malnutrición aguda. La población de Yemen, en tanto, siguió viéndose afectada por una profunda crisis humanitaria, con 16,2 millones de personas

19. Jennifer Dathan, *Explosive Violence Monitor 2020*, Action on Armed Violence, 2021.

20. OCHA, “Hunger is on the Rise. Unprecedented Levels of Food Insecurity Require Urgent Action to Prevent Famine”, *Global Humanitarian Overview 2022*, diciembre de 2021.

afrontando niveles de inseguridad alimentaria aguda, de las cuales cinco millones en situación de emergencia. Las consecuencias de la violencia del conflicto, la COVID-19 y la crisis humanitaria y económica también fueron patentes en contextos como Siria, donde aumentó en un 21% la población necesitada de asistencia respecto al año anterior. En este caso, el precio de la canasta básica de alimentos aumentó en un 128% en comparación con 2020. Se estima que el 90% de la población siria vivía en una situación de pobreza y que 12,4 millones de personas –casi el 60% de la población– afrontaba inseguridad alimentaria. En Myanmar, el golpe de Estado militar derivó en una enorme crisis económica a la que se sumó el agravamiento del impacto de la pandemia.

Los conflictos armados también continuaron teniendo impactos específicos en algunos grupos de población. En lo que respecta a los efectos en los niños y las niñas, el informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado a mediados de 2021 documentó casi 26.500 violaciones graves contra menores en 21 contextos (de las cuales unas 24.000 correspondían a 2020 y otras 2.500 fueron cometidas previamente, pero solo se pudieron documentar en 2020).²¹

El reclutamiento forzado de menores, los menores muertos o heridos a causa de la violencia, la denegación de acceso a ayuda humanitaria y la detención de menores por asociación o sospechas de vínculos con grupos calificados como terroristas estuvieron entre las vulneraciones más frecuentes. Especial preocupación causó el significativo incremento de los secuestros de menores –que aumentó un 90%– y de la violencia sexual –70%. Este último fenómeno afectó principalmente a niñas, que constituían el 98% de las víctimas de la violencia sexual contra menores. El reclutamiento forzado, en cambio, afectó de manera especial a los niños, 85% de los menores afectados por esta práctica. Según el informe del secretario general de la ONU, los conflictos armados en los que se identificó y verificó un mayor número de vulneraciones contra menores de edad fueron Afganistán, RDC, Somalia, Siria y Yemen. Los datos sobre los conflictos armados en 2021 apuntan a una persistencia de estos abusos, con ejemplos en diversos contextos. En Mozambique, grupos de defensa de la infancia alertaron sobre el reclutamiento de niños y el uso de menores como objetivos de guerra; en RCA se denunciaron ejecuciones de menores de edad por parte de las fuerzas gubernamentales y el grupo de seguridad Wagner; en RDC (este) la ONU reiteró las denuncias sobre el uso de menores como combatientes; en Myanmar se registró la muerte de menores en el marco de la represión gubernamental a las protestas pacíficas contra el golpe de Estado; en Yemen se insistió en los impactos de las armas explosivas y del

Durante el año 2021, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas

fuego de artillería en los niños y niñas; y en contextos como Iraq o Israel-Palestina se subrayó el importante porcentaje de menores entre las víctimas civiles. Por otro lado, la organización de derechos humanos Human Rights Watch publicó un informe, resultado de una investigación de ocho años, sobre los abusos cometidos contra población de mayor edad, a partir de 50 años, en contextos de conflicto.²² Tras analizar antecedentes de diversas vulneraciones en contextos como Camerún, RCA, Etiopía, Malí, Mozambique, Sudán del Sur, Myanmar, Ucrania, Israel-Palestina o Siria, HRW concluyó que tanto fuerzas gubernamentales como actores armados no estatales han perpetrado múltiples abusos, entre ellos ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos, violencia sexual, secuestros y destrucción de sus hogares y propiedades. El informe destaca que durante las hostilidades muchas personas de mayor edad deciden no abandonar sus hogares porque piensan que no serán objeto de violencia o con la intención de proteger los bienes de sus familias. En otros casos se niegan a abandonar sus lugares de residencia por la experiencia de desplazamientos forzados previos o simplemente son incapaces de huir, debido a limitaciones de movilidad o porque sus familias no pueden ayudarles.

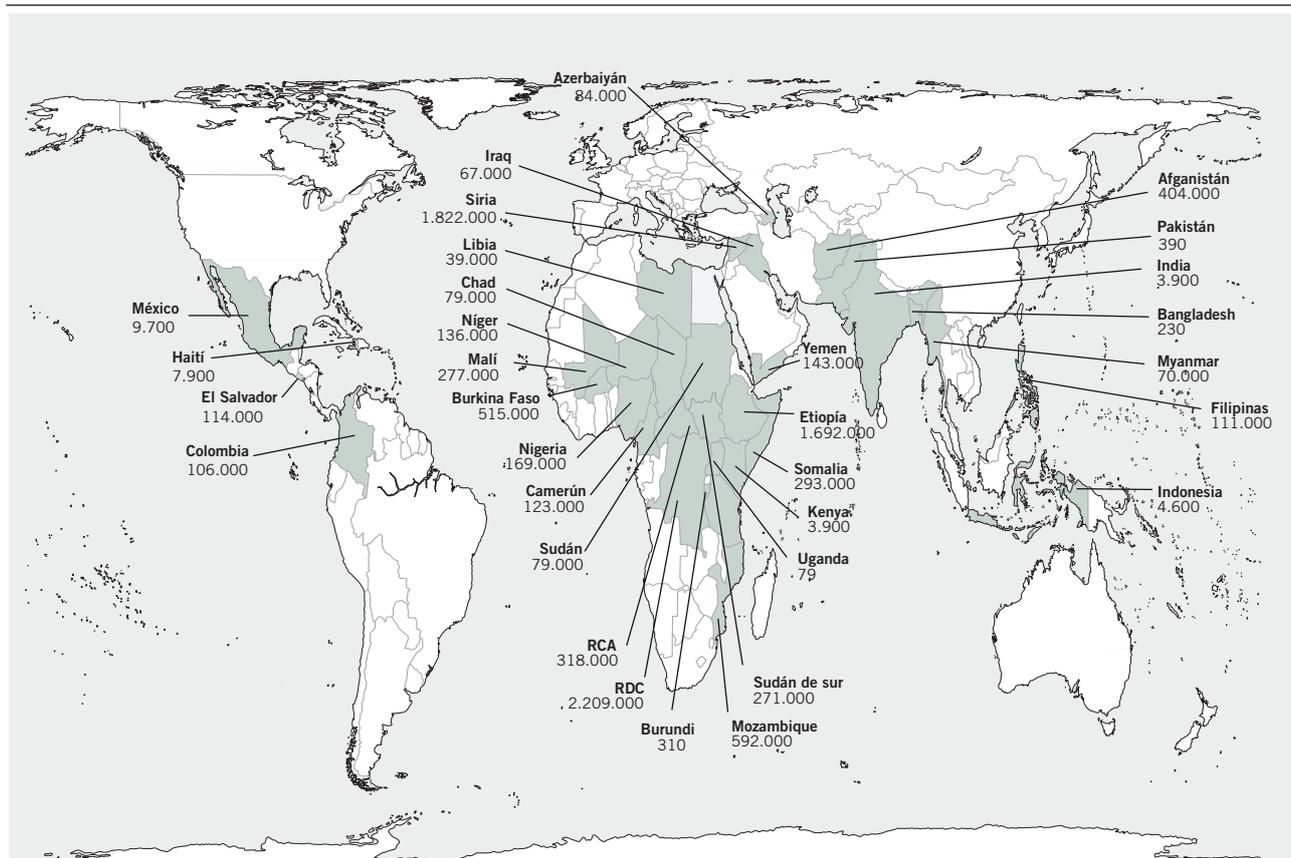
Durante el año 2021, continuó constatándose el uso de la violencia sexual y de género contra población civil por parte de actores armados estatales y no estatales y en especial contra mujeres y niñas. El informe del secretario general de la ONU que anualmente aborda esta problemática –y que analiza los hechos transcurridos en 2020– destacó los efectos de la pandemia en la amplificación de las desigualdades de género, que están en la base de la violencia sexual tanto en tiempos de guerra como de paz. De manera particular, la COVID-19 generó nuevas preocupaciones en el ámbito de la violencia sexual debido a sus repercusiones en términos de militarización, por el aumento de controles y cierres fronterizos; la restricción del espacio de trabajo para las organizaciones de mujeres; el acoso sexual a trabajadoras de la salud; o la violencia sexual contra mujeres detenidas por vulnerar los períodos de confinamiento. El secretario general de la ONU llamó la atención especialmente sobre el impacto de la pandemia en las poblaciones desplazadas por conflictos armados, dado el incremento en los riesgos de violencia sexual, explotación sexual y tráfico de personas, acentuados por la crisis económica y la reducción y/o dificultades de acceso de la ayuda humanitaria. Asimismo, se constataron los problemas añadidos para documentar la problemática de la violencia sexual debido a las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19 y la falta de acceso a servicios de asistencia.²³

21. UN secretary general, *Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict*, A/75/873-S/2021/437, 6 de mayo de 2021.

22. Human Rights Watch, *No One is Spared. Abuses Against Older People in Armed Conflict*, febrero de 2022.

23. Secretario general de la ONU, *Conflict-related sexual violence*, S/2021/312, 30 de marzo de 2021.

Mapa 1.2. Nuevos desplazamientos por conflictos y violencia en 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement 2021*, GRID, mayo de 2021.

El informe sobre violencia sexual presentó los antecedentes que la ONU logró documentar en 18 contextos y que involucraron a 52 actores armados, en su mayoría grupos no estatales, aunque como en años anteriores también se identificó la implicación de fuerzas militares y de seguridad en diversos conflictos. En línea con períodos previos, se confirmó el uso de la violencia sexual como táctica de guerra, tortura y terrorismo. Se destacan casos como Etiopía (Tigré) tras el inicio de las operaciones militares en la región en noviembre de 2020, Camerún, RCA o RDC. También se alerta sobre los mecanismos negativos para paliar la crisis económica acentuada por la pandemia, en particular sobre los matrimonios de niñas de hasta 10 años de edad de poblaciones desplazadas internamente en casos como Iraq, Siria o Yemen. Asimismo, se llama la atención sobre los vínculos entre violencia sexual, tráfico de personas de contextos en conflicto y extremismo violencia de género y sus impactos desproporcionados en mujeres y niñas. En esta línea, se alerta sobre la situación de las viudas y de los hijos e hijas de presuntos extremistas en contextos como Afganistán e Iraq, afectadas por el estigma social y, en muchos casos, por detenciones sin debido proceso. En

cuanto al análisis de casos en 2021, se denunciaron nuevos episodios de violencia sexual en contextos como Etiopía (Tigré), RCA, RDC (este), Libia, Siria o Yemen. Entre las repercusiones de los conflictos armados también cabe mencionar el desplazamiento forzado. Según los datos de ACNUR, este fenómeno continuó intensificándose y batiendo cifras récord. A finales de 2020 se contabilizaban 82,4 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial –más del doble que una década atrás– y las previsiones de ACNUR con los datos disponibles del primer semestre de 2021 apuntaban a que la cifra ya había superado los 84 millones de personas.²⁴ Cabe destacar que las cifras de desplazamiento forzado se redujeron temporalmente a causa de la pandemia y las medidas de restricción de movilidad orientadas a contener el virus, pero a partir de finales de 2020 ya se observó una recuperación de la tendencia previa.²⁵ Según los datos de ACNUR, en el primer semestre de 2021 se habían producido más de 4,3 millones de nuevos desplazamientos, un significativo incremento respecto al año anterior y una cifra más alta que en el período pre-pandemia. La escalada de violencia y hostilidades en escenarios como Afganistán, RDC, Etiopía, Mozambique, Sudán

24. UNCHR, *Mid-year trends report 2021*, 11 de noviembre de 2021.

25. Para más información, véase Pamela Urrutia Arestizábal, "Conflictos, COVID-19 y desplazamiento forzado", *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, número 13, octubre de 2021.

del Sur y países de la región del Sahel motivaron importantes desplazamientos forzados en los primeros seis meses de 2021. Solo en RDC se registró el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas en la primera mitad del año. En Afganistán el avance talibán motivó el desplazamiento de centenares de miles de personas y en el período previo a la toma de Kabul se estimaba que unas 30.000 personas estaban abandonando el país semanalmente. Según ACNUR, el 82% de las personas que cruzaron fronteras para huir de situaciones de conflicto, violencia o persecución procedían de tan solo diez países. El primero de ellos siguió siendo Siria, con más de 6,8 millones de personas refugiadas, la mayoría en países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania e Iraq, pero también en Alemania. Después de Siria se ubicó Venezuela, Afganistán –que se convirtió en el tercer país de origen de población refugiada, con más de 2,6 millones de personas–, Sudán del Sur, Myanmar, RDC, Sudán, Somalia, RCA y Eritrea.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) — anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG), Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM)
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han

acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

El año estuvo caracterizado por un ligero descenso de la violencia armada en la provincia de Cabo Delgado en relación al año anterior, así como por el despliegue de fuerzas militares de distintos actores internacionales para ayudar a las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en la lucha contra la insurgencia yihadista. En 2021, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) registró 1.067 muertes violentas en la provincia de Cabo Delgado, lo cual significa una reducción en relación a las 1.639 producidas en 2020, año en el que se registró la tasa de muertes más alta de la última década en el país.²⁶ Sin embargo, la intensidad de la violencia en 2021 siguió siendo muy superior a la registrada en la zona en los primeros años de la insurgencia, cuando se contabilizaron 119 muertes en 2017, 126 en 2018 o 689 en 2019. En total, a finales de 2021 se estimaba que unas 3.500 personas habían perdido la vida desde el estallido de la violencia a finales de 2017 y que alrededor de 800.000 personas habían tenido que desplazarse forzosamente de sus hogares.

Entre los acontecimientos más significativos registrados durante el año, en el mes de enero se produjeron intensos ataques yihadistas contra una importante planta de gas natural en Quitunda, **distrito de Palma**, operada por la compañía francesa de petróleo y gas Total, que obligó a la suspensión de las actividades del proyecto de gas natural licuado. Dichos ataques generaron que el presidente Filipe Nyusi sustituyera al jefe de las Fuerzas Armadas, Lázaro Menete, por el general Eugenio Mussa, quien falleció apenas tres semanas después de su nombramiento a causa de COVID-19, según fuentes oficiales. Su muerte hizo que Nyusi nombrara el 12 de marzo a Joaquim Rivas Mangrassa como nuevo jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. A principios de febrero las fuerzas mozambiqueñas **lanzaron una ofensiva en los distritos de Muidumbe y Mocimboa da Praia en un intento por recuperar la capital del distrito, Mocimboa da Praia, que ha estado bajo el control de los insurgentes desde agosto de 2020. En marzo se volvió a registrar una nueva ofensiva yihadista contra la ciudad de Palma, reivindicada por ISIS, que dejó decenas de**

26. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

muertos –incluidos extranjeros por primera vez desde que comenzó el conflicto– y alrededor de 70.000 personas desplazadas por la violencia. El Gobierno mozambiqueño informó que había recuperado el control de la ciudad el 4 abril, después de una intervención militar conjunta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y la compañía militar privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG). La ONG Amnistía Internacional denunció que la operación de rescate de la ciudad llevada a cabo por la empresa DAG se vio empañada por la discriminación racial, siendo evacuados los contratistas blancos antes que los negros.

De manera paralela, durante el año la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) llevó a cabo diversas cumbres sobre la situación de seguridad en Cabo Delgado. Después de varias reuniones canceladas debido a la COVID-19, el 8 de abril, en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la SADC, el organismo regional acordó enviar una misión técnica a Cabo Delgado para elaborar un plan de apoyo a la seguridad. La misión recomendó enviar una fuerza regional militar-policial compuesta por 3.000 efectivos. Posteriormente, en una nueva cumbre extraordinaria celebrada el 23 de junio, la SADC aprobó el despliegue de una Fuerza de Reserva a la región norteña, sin determinar el número de tropas. Un día después, el Gobierno de **Ruanda** anunció un acuerdo bilateral con el Gobierno de Mozambique para el despliegue de una fuerza conjunta del Ejército y Policía ruandesa compuesta por mil efectivos para ayudar a combatir la insurgencia en Cabo Delgado, que se hizo efectivo el 9 de julio desarrollando acciones militares en los distritos de Palma, Muidumbe y Mocimboa da Praia. De forma paralela, fuerzas especiales de **Sudáfrica** se desplegaron el 19 de julio en Pemba, capital de Cabo Delgado, con el objetivo de facilitar el camino para el despliegue de la Fuerza de Reserva de la SADC. El Gobierno sudafricano se comprometió a enviar 1.495 soldados como parte de la fuerza regional. El 8 de agosto, Mozambique y Ruanda anunciaron que las fuerzas conjuntas habían recuperado el control total de la ciudad estratégica de Mocimboa da Praia. Un día después del anuncio, la **Fuerza de Reserva de la SADC (SAMIM)** se desplegó oficialmente en Cabo Delgado, compuesta inicialmente por 757 soldados, muy lejos de los 3.000 recomendados por el equipo técnico de la SADC. De forma paralela, otros actores internacionales también contribuyeron durante el año a reforzar la estrategia securitaria. **Portugal y EEUU** proporcionaron entrenamiento militar a las tropas mozambiqueñas, y también la **UE** estableció formalmente el 12 de julio una misión militar de entrenamiento a las Fuerzas Armadas mozambiqueñas compuesta por mil efectivos europeos que estará dos años en el país. También a principios de año los Gobiernos de Mozambique y **Tanzania** acordaron reanudar y fortalecer la comisión conjunta de defensa y seguridad. El Departamento de Estado de EEUU había designado en marzo a los insurgentes de Cabo Delgado

Actores internacionales como la SADC o Ruanda desplegaron fuerzas militares en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado

como organización terrorista vinculada con ISIS bajo liderazgo del tanzano Abu Yasir Hassan.

El despliegue de las tropas internacionales fue seguido de varios ataques reivindicados por ISIS en diferentes distritos de la región (Mocimboa da Praia, Muidumbe y Palma), en los cuales se utilizaron **artefactos explosivos improvisados** que supuestamente contenían elementos de minas terrestres, lo cual supuso una nueva táctica por la insurgencia en la zona. A principios de septiembre las operaciones conjuntas de las tropas de Mozambique, Ruanda y SAMIM se ampliaron a la **provincia de Niassa** (frontera con Cabo Delgado), después de información de inteligencia que alertaba sobre una posible expansión de las acciones yihadistas.

Finalmente, durante el año se volvieron a registrar diferentes incidentes relacionados con la **vulneración de derechos humanos** en la región. En marzo, Amnistía Internacional acusó a las insurgencias, así como al Gobierno mozambiqueño y a la empresa DAG de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra en 2020. También la ONG Save the Children en Mozambique acusó a los grupos armados que operan en el norte de utilizar a menores como objetivos de guerra. En este mismo sentido, UNICEF y Human Rights Watch (HRW) denunciaron a principios de octubre que la insurgencia había secuestrado y reclutado a cientos de niños y niñas en la región noreste. También un informe de HRW denunció que desde 2018 la insurgencia había secuestrado a más de 600 mujeres y niñas, y solicitó a las autoridades que investiguen las denuncias de explotación sexual y abuso de mujeres desplazadas a cambio de ayuda humanitaria en Cabo Delgado.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebiallem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

Persistió la escalada de la violencia en las dos regiones anglófonas del oeste de Camerún como consecuencia de las acciones de los actores armados secesionistas, así como del excesivo uso de la fuerza, abusos y ejecuciones extrajudiciales en el marco de las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y las milicias locales. Los grupos armados también cometieron algunos ataques fuera de ambas provincias. Según el centro de investigación ACLED, en 2021 murieron 915 personas como consecuencia del conflicto que afecta la región y sus alrededores (provincias de Noroeste, Suroeste y las vecinas Litoral, Oeste y Centro). Diversos líderes insurgentes fueron ejecutados o capturados en diferentes momentos del año, como los generales Nokia y Cobra (capturados en marzo y abril, respectivamente), o Small Pikin (ejecutado en enero), Blink y Idi Amin Dada (ejecutados en abril), y Rambo (ejecutado en julio), entre otros. En abril, la coalición opositora Consejo de Gobierno de Ambazonia (Ambazonia Governing Council, AGovC) y el grupo separatista nigeriano Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) anunciaron una alianza a la que Yaoundé y Abuja respondieron en agosto anunciando la colaboración de los cuerpos de seguridad de ambos países contra las insurgencias

respectivas. Durante el año fue en aumento el uso de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) por parte de la insurgencia contra vehículos y destacamentos militares, causando decenas de víctimas mortales. En septiembre la facción Gobierno Interino de Ambazonia (IG Sisiku) declaró tres semanas de cierre total de la actividad en ambas provincias. Las acciones insurgentes se incrementaron en vísperas del cuarto aniversario de la proclamación de la independencia en la región autodenominada Ambazonia (que forman las dos regiones de mayoría anglófona, Noroeste y Suroeste) el 1 de octubre, aumentando la presencia de puestos de control de la insurgencia y los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Ese día, los movimientos separatistas forzaron el cierre (huelga general y toques de queda) y realizaron desfiles en ambas provincias. La celebración del torneo futbolístico Copa de África de Naciones en Camerún entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2022 hizo temer una escalada de la violencia en las regiones anglófonas, ya que algunos encuentros se disputaban en localidades de las regiones anglófonas.

Las organizaciones humanitarias continuaron operando en unas condiciones muy difíciles, debido a la persistencia de la violencia, el uso de artefactos explosivos, así como las demandas de pagos ilegales y extorsión en los puestos de control irregulares dentro de algunas comunidades, que continuaron exponiendo a los trabajadores humanitarios y a la población civil a altos riesgos y obstaculizaron su libre circulación. La muerte de una niña de cinco años en un puesto de control de Buea (capital de la región del Suroeste) tras ser tiroteado el coche por parte de un policía militar por negarse el conductor a pagar la extorsión, provocó la reacción de miles de personas denunciando los abusos del Ejército, disturbios y el linchamiento y ejecución del policía. Dicho incidente intensificó las tensiones intercomunitarias entre la comunidad anglófona y francófona en el país y en los medios de comunicación. OCHA destacaba en diciembre que había 2,2 millones de personas afectadas por la situación humanitaria en las provincias de Noroeste y Suroeste, con prácticamente 600.000 personas desplazadas internas en ambas provincias y casi 70.000 personas refugiadas en la vecina Nigeria. La neutralidad de infraestructuras civiles como hospitales y escuelas fue violada de forma permanente por ambas partes. Un ejemplo de ello fue la irrupción de soldados en el hospital de Kumbo, en Noroeste, en noviembre, cometiendo abusos contra el personal sanitario en busca de milicianos, que fue condenada por la Iglesia Católica y las delegaciones diplomáticas presentes en el país, acción calificada por el diputado británico David Alton como crimen de guerra; Alton cuestionó a su Gobierno por la inacción ante el conflicto, a lo que el Gobierno británico tuvo que responder afirmando que el 15 de noviembre, junto a las delegaciones de Canadá, Suiza y EEUU, había condenado los ataques a civiles y habían instado a las partes a promover el diálogo. En agosto, más de 60 organizaciones locales e internacionales de derechos humanos hicieron un

llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para intentar que el conflicto esté más presente en la agenda internacional.²⁷ La disputa es considerada como una de las crisis humanitarias más olvidadas de la actualidad, según diversos análisis, como señala Norwegian Refugee Council. Además, se produjeron numerosas iniciativas por parte de los actores de la sociedad civil y de los grupos político-militares para relanzar el proceso de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, los contactos entre el Gobierno y los grupos político-militares para promover una solución negociada al conflicto continuaron estancados.²⁸

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Belgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Rusia
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente

desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendida las dinámicas de la misma a la región central del país (Mopti).

Un año más se mantuvo la situación de inestabilidad en el país, caracterizado por tres importantes dinámicas:

el mantenimiento de la situación de inseguridad, concentrando la mayor violencia en la región central y aumentando en la región sur; la crisis de gobernanza que dio lugar a un nuevo golpe de Estado en el país; y el aumento de las tensiones al interior del complejo de seguridad internacional. Según datos del centro de investigación ACLED, durante el 2021 se registraron 995 eventos violentos, incluyendo batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados en todo el país, concentrados en las regiones norte, centro y sur, que dejaron un balance de 1.887 personas fallecidas. Si bien el número de eventos violentos registrados fue similar al año anterior, la letalidad de los mismos fue significativamente menor (2.731 muertes en 2020). Estos datos representan un descenso importante en relación al número de muertes registradas durante el 2020, año que se caracterizó por ser el que más muertes provocó en el país desde que estalló la última ola de violencia. En total, desde el inicio del conflicto armado en el año 2012, alrededor de 12.000 personas han perdido la vida en el país. Asimismo, la inestabilidad y la inseguridad siguieron forzando el **desplazamiento de miles de personas**, así como aumentando las necesidades humanitarias. En lo relativo al número de personas desplazadas internamente, estas casi se han cuadruplicado en dos años, registrándose, a finales de 2021, 400.000 personas. Este aumento se explica principalmente por el deterioro de la situación de seguridad en las regiones centrales de Ségou y Mopti, así como en la norteña Tombuctú. Del mismo modo, en octubre, más de 154.000 malienses se encontraban refugiadas en los países vecinos, sobre todo en Burkina Faso y Mauritania. Paralelamente, Malí también proporciona refugio a casi 45.000 refugiados de Burkina Faso (13.000), Níger (17.000) y Mauritania (15.000). La violencia y los efectos del cambio climático en el país también generaron una **alarmante crisis humanitaria**. A finales de 2021 se estimaba que alrededor de 1,3 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria, principalmente en las regiones de Gao (el 41,5% de la población), Mopti (40,8 %), Kidal (29,6 %), Tombuctú (26,5%) y Kulikoró (26,1%). Según datos del secretario general de la ONU sobre la

27. Global Centre for the Responsibility to Protect, *Cameroon: Multilateral action is urgently needed*, 17 de agosto de 2021.

28. Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

situación económica del país, se estima que en el año 2020 el 41,9% de la población se encontraba en la pobreza extrema, sin embargo, el gasto en materia de seguridad en el presupuesto nacional de 2022 aumentó un 21%, hasta los 357,7 millones de dólares, superando los aumentos presupuestarios en otras partidas como salud (11%) o educación (4,4%).²⁹

En relación al desarrollo de los **escenarios de conflictividad armada**, durante el año se mantuvo la tendencia de deterioro de la seguridad en Malí, caracterizada por el aumento de ataques contra civiles y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. En este sentido, la MINUSMA informó que, entre abril y junio, al menos 527 civiles fueron asesinados, heridos, secuestrados o desaparecidos –lo cual representa un aumento de más del 25% desde el primer trimestre de 2021– debido principalmente a la acción de Jamaat Nusrat al-Islam walMuslimin (JNIM) y otros grupos yihadistas como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS). Por otro lado, en términos generales, la región central (Mopti y Ségou) siguió siendo el epicentro de la violencia, aunque en el segundo semestre del año se registró un desplazamiento de la violencia hacia la región sur del país (Sikasso).

Entre los eventos más destacados del año, a principios de enero se produjo un ataque con drones francés en una boda en el pueblo de Bounti, en Mopti (centro), que dejó 19 muertos y generó una ola de protestas antifrancesas en el país. El 15 de marzo, en la región de Gao (norte), presuntos militantes del ISGS tendieron una emboscada a una patrulla del Ejército cerca de la ciudad de Tessit, distrito de Ansongo, matando al menos a 33 soldados, en el ataque más mortífero contra las fuerzas de seguridad en meses. El 13 de abril, hombres armados no identificados asesinaron a Sidi Brahim Ould Sidati, líder de la ex-rebelde Coordinación de Movimientos Azawad (CMA), firmante del acuerdo de paz de Argel de 2015, en la capital Bamako. En las regiones del centro, se logró una tregua en abril entre Katiba Macina y miembros de grupos de autodefensa donso en el distrito de Niono, Ségou, aunque esta no logró contener la violencia durante el resto del año. En agosto, la operación francesa Barkhane informó de la muerte del líder del ISGS, Adnan Abu Walid al-Sahraoui, en un ataque con drones en el norte de Malí, información que fue confirmada en octubre por el ISGS. También se informó de la muerte, a mediados de octubre, de Nasser al-Tergui, uno de los líderes de JNIM, afiliada a al-Qaeda.

A las dinámicas de inseguridad en el país, se sumó en mayo una **nueva crisis política debido a un nuevo golpe de Estado** que se tradujo en el aumento de las tensiones entre la nueva Junta militar y la comunidad

internacional, cuyos efectos se trasladaron al complejo militar de seguridad. El 24 de mayo, el coronel Assimi Goïta –hasta entonces vicepresidente de transición y líder del golpe de Estado de agosto de 2020– encabezó un nuevo golpe militar que derrocó al primer gobierno de transición presidido por Bah N’Daw, autoproclamándose nuevo presidente del país, y nombrando a Choguel Kokalla Maïga como primer ministro. El golpe generó reacciones diferentes en el interior y exterior del país. En el interior, se produjeron manifestaciones de apoyo a los militares que expresaban la frustración con el anterior gobierno. A nivel internacional, los principales socios de Malí, incluido el bloque regional CEDEAO, UA, UE, Francia o EEUU, entre otros, condenaron la acción de la Junta. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una condena por unanimidad, pero no llegó a incluir medidas coercitivas tras el bloqueo de Rusia y China. La UA y la CEDEAO suspendieron a Malí del organismo. El Banco Mundial congeló los pagos al país. Francia suspendió temporalmente, el 3 de junio, las operaciones militares conjuntas con las tropas malienses, que se reanudaron un mes después. El 16 de septiembre la CEDEAO impuso las primeras sanciones, que generaron manifestaciones en contra. Posteriormente, tras el anuncio de Goïta de que no se cumpliría el plazo para la celebración de las elecciones previstas para febrero de 2022, el 7 de noviembre la CEDEAO impuso nuevas sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos a 149 funcionarios estatales (sin incluir a Goïta, en un aparente intento de mantener abierta la línea de comunicación). La UE también anunció el 15 de noviembre la imposición de sanciones a “aquellos que obstruyen” la transición de Malí.

De forma paralela, el golpe militar y la negativa de la junta a respetar la fecha de la celebración de elecciones, así como las manifestaciones antifrancesas en el país, generaron importantes **tensiones entre los gobiernos de Malí y Francia**. El 10 de junio, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el fin de la Operación Barkhane en el Sahel en su formato actual, informando del fortalecimiento de la fuerza europea Takouba. El 9 de julio, durante la cumbre del G5 Sahel, Macron detalló la reconfiguración de la presencia militar francesa en el Sahel, informando que reduciría a la mitad el número de tropas y cerraría tres bases militares en el norte de Malí a principios de 2022. Días después, el 15 de julio, el secretario general de la ONU solicitó al Consejo de Seguridad que aumentara la fuerza autorizada de la MINUSMA en 2.069 efectivos. A este respecto, Chad anunció el 18 de diciembre el envío de 1.000 soldados adicionales para reforzar la MINUSMA. En octubre Francia comenzó la retirada de las fuerzas francesas de la Operación Barkhane de la región de Kidal, posteriormente de Tessalit, y el 14 de diciembre

El nuevo golpe de Estado producido en Malí en el mes de mayo y la llegada de fuerzas rusas al país tensionó las relaciones entre el Gobierno maliense y sus socios occidentales

29. Secretario general de la ONU, *La situación en Malí*, S/2021/1117, 4 de enero de 2022.

abandonó oficialmente Tombuctú, entregando las bases al Ejército maliense.

En medio de las tensiones con Francia y los socios europeos, el Gobierno de Malí anunció un **acuerdo con Rusia para el despliegue de fuerzas rusas en el país** –que según informes de prensa serían al menos mil militares de la empresa de seguridad privada rusa Wagner Group, aunque tanto el Gobierno de Malí como el de Rusia lo negaron. 16 países europeos y Canadá condenaron conjuntamente el 23 de diciembre el presunto despliegue de mercenarios de Wagner en Malí, y Francia declaró que su presencia sería “incompatible” con la continuidad francesa. Anteriormente, el 13 de diciembre, la UE impuso sanciones a Wagner Group por presuntamente cometer graves abusos contra los derechos humanos en varios países, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales. En el país se produjeron varias manifestaciones en apoyo del acuerdo con Rusia.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la región del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas

Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province (ISWAP), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

Persistieron las actividades de las diferentes facciones de Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria, la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad, a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos desplazamientos de población y violaciones generalizadas de los derechos humanos. La muerte del líder del grupo armado JAS, Abubakar Shekau, desencadenó la rendición de miles de combatientes y el reclutamiento de parte de ellos por el grupo rival ISWAP. El fiscal de la CPI en diciembre de 2020 había dictaminado que había bases razonables para considerar que tanto los cuerpos de seguridad nigerianos como las facciones de BH habían cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en el país. La rendición de gran parte de los miembros del JAS y la reestructuración de ISWAP repercutió en una reducción de la violencia en el noreste de Nigeria en algunos momentos del año. JAS, Ansaru y, principalmente, ISWAP, continuaron con su dinámica de ataques contra bases militares y destacamentos, incluidos ataques suicidas, secuestros y ejecución sumaria de civiles y trabajadores humanitarios.

En el caso de Nigeria, las autoridades alertaron de que las acciones de Boko Haram se extendieron más allá del noreste y se ampliaron a regiones circundantes del Middle Belt nigeriano (Cinturón Central). Coincidiendo con el Ramadán, entre mediados de abril y mediados de mayo se produjo un incremento de los ataques por parte de los grupos yihadistas. Según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST), el número de víctimas mortales en los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa se redujo respecto a años anteriores (1.810 en 2021 frente a 2.603 en 2020, 2.607 en 2019, 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017). El balance de las acciones de BH y de los enfrentamientos entre las facciones de BH y las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en 2011 solo en estos estados nigerianos es de 41.932 víctimas mortales, según la base NST. De acuerdo con el centro de investigación ACLED, en 2021 se registraron 3.792 víctimas mortales en la región (los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa; la región de Extrême Nord en Camerún; Diffa en Níger; y la provincia de Lac en Chad). En el conjunto de Nigeria, el país más afectado por las actividades de las facciones de BH, se estima que había 2,73 millones de personas desplazadas internas a diciembre de 2020 según IDMC, de los cuales cerca de dos millones se encontraban desplazados en el noreste del país, según OCHA, y unas 257.000

personas habían buscado refugio en los países vecinos. **OCHA alertó que el noreste estaba afectado por la peor crisis humanitaria de los últimos cuatro años**, y destacó que 5,1 millones de personas se encontraban en una grave situación humanitaria. La situación de seguridad se había deteriorado como consecuencia del conflicto afectando a la mayoría de las regiones del norte más allá de las regiones tradicionalmente afectadas.

Así, entre enero y junio se produjeron alrededor de 294.000 nuevos desplazamientos, un significativo incremento respecto a los 169.000 nuevos desplazamientos para todo el 2020.

El hecho más destacado del año fue la muerte el 20 de mayo del líder de la facción JAS, Abubakar Shekau, quien se suicidó para escapar de la captura por parte del grupo rival ISWAP en el estado de Borno (noreste). Esta acción vino precedida de una importante ofensiva de ISWAP en el bastión de Shekau en Sambisa Forest y la toma de territorios que anteriormente estaban bajo su control. ISWAP confirmó el 6 de junio el suicidio de Shekau, y el 26 de junio se emitió un video de combatientes rivales de ISWAP y JAS que juraban lealtad al Estado Islámico (ISIS). Su muerte provocó que en los meses siguientes miles de combatientes del grupo abandonaran las armas y se entregaran a las autoridades, a la vez que la facción ISWAP incrementara el reclutamiento en masa de combatientes de JAS e intentara ocupar el espacio que JAS estaba abandonando.

El Ejército anunció el 2 de septiembre la rendición de unos 6.000 combatientes del JAS en las semanas y meses previos, y las autoridades señalaron que el programa de DDR en marcha desde 2016, Safe Corridor, se estaba viendo desbordado por la situación. Un mes después de la muerte de Shekau, el joven de 24 años Bakura Modu fue nombrado como nuevo líder del JAS en sustitución de Shekau.³⁰

El nuevo líder, que apareció en un video, habló de la disposición del grupo a trabajar en colaboración con ISIS. La muerte de Shekau debilitó al grupo, que manifestó sus dudas sobre la capacidad del nuevo líder para dar continuidad al grupo armado. Semanas antes de su muerte, Shekau había ejecutado a diversos comandantes del JAS por supuesta traición, entre ellos Abu Fatimah, y había nombrado a Abu Muhammad como nuevo comandante militar. En julio se constató una pausa en los ataques por parte de ISWAP en el estado de Borno, ya que, según destacó el centro de investigación International Crisis Group, el grupo reorganizó su liderazgo según las instrucciones del Estado Islámico (ISIS), y el ISWAP restituyó a Abbah Gana como líder del llamado Califato Islámico de África (región que engloba la cuenca del Lago Chad, entre Nigeria, Chad, Níger y Camerún).

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Mali, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

La situación de inseguridad e inestabilidad en el Sahel occidental mantuvo la tendencia de los últimos años debido a la crisis de gobernanza en la región, la persistencia de los episodios de violencia y la crisis en

30. Maina, Maina, Bakura Modu replaces late Shekau as Boko Haram's leader, *Daily Post*, 19 de junio de 2021.

el complejo militar regional-internacional de seguridad debido a la llegada de Rusia a la región. Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos (ACSS), durante el 2021 se registraron 2.005 eventos violentos en el Sahel (específicamente Burkina Faso, Malí y el oeste de Níger) relacionados con acciones de grupos armados de corte yihadista, lo cual representa un aumento del 70% con respecto al año anterior, cuando se registraron 1.180 episodios violentos. Burkina Faso concentró el 58% de todos los eventos violentos en la región. Estos episodios de violencia generaron 4.839 muertes, lo cual representa un 17% más que el año anterior (4.250), y sitúa a la región del Sahel occidental como la más mortífera por acciones vinculadas a grupos yihadistas que cualquier otra región de África (Lago Chad, Somalia, África Central o Mozambique). De hecho, si bien en toda África las muertes reportadas vinculadas a acciones armadas de estos grupos se redujeron en un 7% en 2021 con respecto al año anterior, Sahel fue la excepción. De manera particular, los ataques contra población civil (833) y las muertes relacionadas (1.332) en el Sahel, se duplicaron desde 2020.

También se destaca que el número de batallas entre las fuerzas de seguridad y los grupos yihadistas en la región aumentaron durante el 2021, con dos características: por un lado, aumentaron en un 50% los enfrentamientos con los grupos vinculados a la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –Jama'at Nusrat al Islam walMuslimin (JNIM o GSIM)–, mientras que los enfrentamientos con el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) experimentaron una disminución del 45%. De forma específica por país, según datos facilitados por ACLED en 2021 (que registra un mayor número de eventos violentos que los señalados por ACSS (2.448), así como de muertes (5.279) en la región), en Burkina Faso se registraron 1.289 episodios de violencia que dejaron un balance de 2.290 víctimas mortales; en Malí se produjeron 995 eventos violentos concentrados en las regiones norte, centro y sur del país que costaron la vida a 1.887 personas; mientras que en Níger, en la zona suroeste del país, en las regiones de Tillabéri –principal zona afectada por la violencia– Dosso y Tahoua, se habrían registrado 164 eventos violentos, ocasionando al menos 1.102 muertes.³¹

Una de las principales consecuencias que sigue generando el incremento de la inestabilidad fue el desplazamiento forzado de personas. A finales de 2021 alrededor de 2,5 millones de personas se encontraban desplazadas de sus hogares, incluidos 190.000 personas refugiadas y 2,2 millones desplazadas

La ONU alertó sobre el deterioro de la crisis de seguridad, climática y humanitaria en la región del Sahel que ha generado que millones de personas se encuentren en situación de inseguridad alimentaria aguda

La firma de un acuerdo militar entre Malí y Rusia amenaza con transformar las coaliciones militares internacionales en el Sahel

internas, siendo Burkina Faso el país más afectado, con aproximadamente 1,6 millones de personas desplazadas, lo cual representa el 60% del total. Desde el año 2013, cuando se registraron 217.000 personas desplazadas, se ha multiplicado por diez la cifra de desplazamiento forzado. En 2021 se registraron casi medio millón de nuevos desplazamientos.

En Níger, el número de desplazados internos en las regiones de Tillabéri y Tahoua aumentó un 53%, mientras que Malí registró un aumento del 30% con respecto al año anterior. Asimismo, la situación humanitaria en toda la región siguió siendo muy preocupante debido a los impactos combinados de la inestabilidad, la violencia, los desplazamientos forzados, la malnutrición y las enfermedades, impactando en la creciente inseguridad alimentaria que está afectando a millones de personas en África Occidental y el Sahel. La ONU estima que, para el próximo año, cuando llegue la temporada de sequía en la región, unos 35,8 millones de personas padecerán inseguridad alimentaria aguda, lo cual representa un aumento alarmante del 24% en comparación al 2020, según la última encuesta de Clasificación de Fase de Seguridad Alimentaria Integrada (IPC) que las agencias humanitarias utilizan para medir los niveles de necesidad.

En lo que respecta a los episodios de violencia, a pesar de las misiones militares nacionales, regionales e internacionales, la situación de la seguridad siguió siendo compleja. Las acciones armadas siguieron ampliándose en la triple frontera de Liptako-Gourma, dirigidas principalmente contra las fuerzas de seguridad y la población civil. En Malí, la misión de la ONU (MINUSMA) siguió siendo objetivo de ataques armados por parte de organizaciones yihadistas. El 9 de julio AQMI y JNIM realizaron un llamamiento conjunto (el primero después de tres años sin ninguna comunicación importante) en el que instaban a sus combatientes a seguir luchando contra las fuerzas locales e internacionales. El 25 de julio, JNIM reivindicó la autoría de ocho atentados en el norte de Malí contra bases y convoyes de la MINUSMA.

También en las regiones centrales del país (Mopti y Ségou) la situación de la seguridad se deterioró considerablemente. En Níger, en 2 de enero se produjo la mayor masacre contra civiles perpetrada en ocho años en el país, en donde alrededor de 100 personas fueron asesinadas en dos comunidades en la región de Tillabéri. Los ataques generaron el desplazamiento de 10.000 personas, y la OCHA alertó de que 12 de los 13 departamentos en la región estaban en estado de emergencia. Posteriormente, el 21 de marzo, en otro

31. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

ataque en la región de Tahoua, 141 personas fueron asesinadas. Según los medios locales, ambos ataques tenían el sello de la rama del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISGS o ISWAP).

En **Burkina Faso**, dentro de los múltiples incidentes producidos en el año, destacaron el ataque el 4 de junio en la comunidad norteña de Solhan en donde al menos 132 personas fueron asesinadas; la emboscada el 18 de agosto en la provincia de Soum a un convoy de 80 vehículos en la carretera Arbinda-Gorgadji, que causó al menos 86 víctimas mortales, entre ellas 65 civiles; y el asalto a un campamento militar en Inata que causó la muerte a 49 militares y cuatro civiles, siendo la mayor pérdida de las fuerzas de seguridad burkinesas registrada. Durante el año también se registraron ataques a bases militares en **Costa de Marfil** (21 de abril) y en **Benín** (1 de diciembre).

En lo referente al **complejo de seguridad en la región**, el año estuvo marcado por el impacto del golpe de Estado en Malí, así como por el anuncio de la contratación de fuerzas rusas para el combate a las insurgencias, lo que generó una crisis entre Malí y sus socios regionales e internacionales.³² De forma paralela, la nueva Junta militar maliense anunció un **acuerdo militar con Rusia** para el despliegue de combatientes rusos en el país, lo cual también generó reacciones adversas en sus socios militares. Según noticias de prensa, al finalizar el año unos 400 mercenarios rusos de la compañía privada de seguridad Wagner Group –que también se encuentran en conflictos armados como Libia, Mozambique y la República Centroafricana– se desplegaron en la región central de Ségou, y otros lo hicieron en Tombuctú, en el norte.

La llegada de estos supuestos mercenarios rusos a Malí fue condenada por 16 gobiernos europeos, quienes emitieron una declaración conjunta para condenar el despliegue de este tipo de fuerzas en la región. Francia anunció cambios en la misión Barkhane en el país, informando que para finales de 2022 habrá retirado al 40% de los 5.100 efectivos de la misión, mientras que a fuerza europea Takouba Task Force –desplegada desde finales de 2020 y compuesta por fuerzas especiales de Malí y Níger y 11 países europeos– tomará el relevo de la retirada parcial de Francia en Menaka y Gao. Al finalizar el año, diversos países de la fuerza europea amenazaron con retirarse de la misión si las fuerzas rusas se mantenían en el país. Por el contrario, durante el año se produjeron manifestaciones en contra de la presencia francesa en Malí, Chad o Burkina Faso, así como muestras de apoyo a la llegada de Rusia para combatir a la insurgencia.

Cuerno de África

Etiopía (Tigré)	
Inicio:	2020
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope desembocaron en su debilitamiento. Dieron un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente llevaron al poder a Abiy Ahmed, así como fuertes resistencias de actores clave como el partido Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF, por sus siglas en inglés), otrora principal partido de la coalición que ha gobernado en Etiopía desde 1991, la Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus siglas en inglés), que estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder. El liderazgo de la comunidad tigré percibió una pérdida de poder y privilegios en los cambios promulgados por Abiy Ahmed. El TPLF se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP), lo que implicaría diluirse en un nuevo partido. Estas tensiones se intensificaron bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF redujo su estricto control, surgieron nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. Esta situación desencadenó una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré. La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación de Eritrea, así como de milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara.

Un año después del inicio de la ofensiva en la región etíope de Tigré continuó la escalada del conflicto que ha provocado miles de víctimas mortales y el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas (cerca de 1,2 millones de personas según la ONU), parte de las cuales, más de 63.000 personas, han buscado refugio en la vecina Sudán huyendo del clima de violencia. Todas las partes cometieron atrocidades que incluyen masacres de civiles, violencia sexual y el uso del hambre como arma de guerra, según organizaciones de derechos humanos. El conflicto ha adquirido dimensiones regionales por la participación de Eritrea en apoyo del Gobierno etíope así como por

32. Véase el resumen sobre Malí en este capítulo.

los ataques perpetrados por el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) en la vecina Amhara y la implicación en el conflicto de los cuerpos de seguridad y milicias de esta región de Etiopía. La inestabilidad se extendió a los estados fronterizos de Amhara y Afar. Además, se produjeron enfrentamientos en la zona fronteriza entre los Ejércitos de Etiopía y Sudán y milicias sudanesas. En noviembre Naciones Unidas señaló que más de 9,4 millones de personas dependían de la asistencia humanitaria (3,7 millones en la región de Amhara, 534.000 en Afar y 5,2 millones en Tigré), de las cuales al menos 400.000 personas de la región de Tigré se encontraban en situación de hambruna.³³ Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han documentado graves violaciones de derechos humanos que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las resoluciones y críticas a la vulneración de los derechos humanos se producen en un contexto donde las organizaciones humanitarias son objetivo de ataques por parte de los diferentes actores enfrentados.

Pese a la toma de la capital de Tigré, Mekelle, y la declaración de victoria por el Gobierno tres semanas después del inicio de la confrontación en noviembre de 2020, posteriormente en 2021 se reanudaron los combates. El empeoramiento de la situación humanitaria llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrase su primera reunión pública sobre el conflicto, días después de que el TPLF retomara el control de la capital regional, Mekelle, y de la mayoría de Tigré. De forma paralela, el Gobierno Federal declaró el 28 de junio un alto al fuego unilateral, anunciando la retirada de las tropas del Ejército de la región. La medida supuso el primer cese de hostilidades tras el inicio del conflicto armado ocho meses antes. El TPLF respondió al alto el fuego deteniendo y exhibiendo a cerca de 7.000 soldados del Ejército en las calles de Mekelle, así como exigiendo al Gobierno diferentes condiciones para sumarse al alto el fuego, incluyendo la retirada de las tropas eritreas y de la región de Amhara, una investigación independiente de la ONU y el inicio de investigaciones Tigré.³⁴ En paralelo, el 21 de junio se celebraron elecciones regionales y parlamentarias, en las que Abiy Ahmed ganó 410 de los 436 escaños. Los comicios se habían pospuesto dos veces debido a la pandemia de la COVID-19 y problemas logísticos, el conflicto en Tigré y la inseguridad en algunas partes del país, lo que provocó que no se celebraran en tres de las 10 regiones del país. La oposición y países como EEUU denunciaron irregularidades. El líder del principal partido opositor, Birhanu Nega, de Ciudadanos Etopes por la Justicia Social, fue derrotado y partidos opositores como Ezema y el Movimiento Nacional de Amhara (NAMA) obtuvieron menos de 10 escaños. Aunque el

Gobierno de Abiy Ahmed trató de comprar más armas y alistar a más reclutas, las fuerzas de Tigré rompieron el bloqueo de su región y en noviembre se apoderaron de ciudades en la región de Amhara en dirección hacia Addis Abeba, al sur. También podrían intentar tomar el corredor de Djibouti, la principal arteria comercial, según analistas, lo que les permitiría desviar la ayuda a Tigré, donde persiste una desesperada escasez de alimentos, y potencialmente afectar a la distribución de suministros a la capital. Tigré está bajo un bloqueo de facto que impide el acceso de la mayor parte de la ayuda, según la ONU. Las autoridades etíopes y el TPLF se culparon mutuamente por obstruir la asistencia humanitaria. Los funcionarios etíopes también acusaron a la comunidad internacional de ignorar los supuestos abusos del TPLF. Ante el avance de las tropas del TPLF hacia la capital, el 2 de noviembre el primer ministro Abiy Ahmed declaró el estado de emergencia nacional por seis meses y animó a la población a organizarse y promover la creación de milicias y grupos de autodefensa. La declaración del estado de emergencia, permitió, entre otras cosas, el establecimiento de controles de carreteras, la interrupción de los servicios de transporte, la imposición de toques de queda y el control militar en determinadas zonas, la detención sin una orden judicial de cualquier persona sospechosa de tener vínculos con grupos calificados de terroristas, o el llamamiento a filas de cualquier ciudadano que hubiera alcanzado la edad del servicio militar.

El 5 de noviembre, ocho grupos insurgentes antigubernamentales prometieron aliarse con el TPLF, aunque el actor más significativo, el Frente de Liberación de Oromo (OLF), ya combatía a las tropas federales junto al TPLF. La alianza, el Frente Unido de Fuerzas Federalistas y Confederalistas de Etiopía (UFEFCF) reúne a miembros de grupos étnicos anteriormente rivales. La creación de esta alianza fue presentada en Washington por Berhane Gebrechristos, representante de la insurgencia de Tigré y ex ministro de Exteriores etíope entre 2010 y 2012. A raíz de los acontecimientos, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó su preocupación por la situación en un comunicado en el que solicitó un alto el fuego y la creación de condiciones para el inicio de un diálogo nacional etíope inclusivo para resolver la crisis.

Se constataron graves vulneraciones de los derechos humanos que podrían ser consideradas crímenes de guerra y contra la humanidad por todos los actores implicados en el conflicto. Además de ejecuciones en masa de población civil en Mai-Kadra (suroeste de Tigré) responsabilidad del TPLF,³⁵ y en Axum,³⁶ en enero, Amnistía Internacional en colaboración con la CNN confirmó que el Ejército etíope habría cometido

33. VOA, *UN Food Stocks Looted in N. Ethiopia; Some Aid Distribution Halted*, 8 de diciembre de 2021.

34. The East African, "TPLF gives five conditions for ceasefire, wants transition process", The East African, 31 de julio de 2021.

35. Amnesty International, "Ethiopia: Investigation reveals evidence that scores of civilians were killed in massacre in Tigray state", AI, 12 de noviembre de 2020.

36. Amnesty International, "Ethiopia: Eritrean troops' massacre of hundreds of Axum civilians may amount to crime against humanity", AI, 26 de febrero de 2021.

ejecuciones extrajudiciales contra la población civil en Mahibere Dego, cerca de Axum. El Gobierno etíope bloqueó el acceso y silenció las comunicaciones en la región desde noviembre. Desde que se permitió el acceso a Tigré a finales de febrero, medios internacionales y organizaciones de derechos humanos han reportado y confirmado las graves atrocidades cometidas, entre ellas el uso de violencia sexual por parte de las tropas etíopes y eritreas.³⁷ Amnistía Internacional denunció en agosto la comisión de violaciones y otros actos de violencia sexual de forma generalizada por las fuerzas combatientes afines al Gobierno etíope (Ejércitos de Etiopía y de Eritrea, la Policía Especial de la región de Amhara, y Fano, una milicia amhárica).³⁸ La violación y violencia sexual se han utilizado como arma de guerra para infligir un daño físico y psicológico persistente a las mujeres y niñas en Tigré, con el objetivo de degradarlas y deshumanizarlas, según Amnistía Internacional. Cabe añadir que se han recabado testimonios de fuentes médicas sobre casos de esclavitud sexual y cautiverio, así como de violaciones múltiples.³⁹ También se incluyen actos de limpieza étnica⁴⁰ en la parte occidental de Tigré, zona que estuvo bajo control de la policía de la región de Amhara y de la milicia amhárica Fano. Además, se informó de arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones y discriminación y estigmatización de miembros de la comunidad tigré en todo el país. En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución solicitando el fin inmediato de todas las violaciones a los derechos humanos en Tigré, el cumplimiento del DIH.⁴²

A raíz de la entrada en vigor del estado de emergencia el 6 de diciembre, Australia, Canadá, Dinamarca, EEUU, Países Bajos y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta manifestando su preocupación por los informes recientes de la detención por parte del Gobierno etíope de un gran número de ciudadanos etíopes de la comunidad tigré sobre la base de su origen étnico y sin cargos, tal y como había destacado la Comisión Etíope de Derechos Humanos. No obstante, en diciembre se produjo una evolución positiva de los acontecimientos que podrían contribuir al comienzo de negociaciones de paz. A principios de mes, el Gobierno federal obtuvo importantes avances territoriales y recuperó todo Amhara. Posteriormente, detuvo su ofensiva contra las fuerzas de Tigré después de que estas últimas anunciaran su retirada. El 20 de

diciembre, las fuerzas de Tigré anunciaron la retirada completa de las regiones vecinas de Afar y Amhara, replegándose hacia su feudo en Tigré y pidieron un alto el fuego. El 24 de diciembre, el Gobierno federal dijo que los cuerpos de seguridad federales se detendrían en las posiciones actuales y se abstendrían de avanzar más hacia Tigré. El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el mismo día a las partes a aprovechar esta oportunidad para cesar las hostilidades y garantizar la provisión de la asistencia humanitaria. El Departamento de Estado de EEUU dijo a finales de diciembre que los acontecimientos recientes ofrecían una oportunidad para que las partes se sentaran a negociar. Las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusaron conjuntamente el 16 de diciembre a las fuerzas progubernamentales de detenciones masivas, asesinatos y expulsiones forzadas de personas de la etnia tigré.

Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región etíope de Tigré han documentado graves violaciones de derechos humanos que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna al Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de

37. Véase BBC, "Ethiopia's Tigray crisis: 'I lost my hand when a soldier tried to rape me'", BBC, 15 de febrero de 2021; Feleke, Bethlehem; Mackintosh, Eliza; Mezzofiore, Gianluca; Polglase, Katie; Elbagir, Nima; Arvanitidis, Barbara and Platt, Alex, 'Practically this has been a genocide', CNN, 22 de marzo de 2021; Kassa, Lucy, "'A Tigrayan womb should never give birth': Rape in Tigray", Al-Jazeera, 21 de abril de 2021.

38. Amnesty International, "Ethiopia: 'I don't know if they realized I was a person': Rape and sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia", AI, 11 de agosto de 2021.

39. Al-Jazeera, "Top Ethiopia health official alleges 'sexual slavery' in Tigray", Al-Jazeera, 15 de abril de 2021.

40. Walsh, Declan, "Ethiopia's War Leads to Ethnic Cleansing in Tigray Region, U.S. Report Says", New York Times, 26 de febrero de 2021.

41. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Resolución sobre la situación de los derechos humanos en la región de Tigré de Etiopía, A/HRC/47/L.20/Rev.1, 13 de julio de 2021.

paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia registró una intensidad similar a la del período anterior. El año se vio marcado por la persistencia de los ataques por parte del grupo armado al-Shabaab, por las operaciones de la misión africana en el país (AMISOM) y el Ejército Nacional Somalí, la retirada de las tropas estadounidenses y etíopes del país y el futuro de la AMISOM, así como la grave crisis política derivada de los retrasos en el proceso electoral. En 2021 persistieron las operaciones militares de los cuerpos de seguridad federales y de los estados federados junto a AMISOM, así como atentados por parte de al-Shabaab contra las fuerzas de seguridad somalíes y la AMISOM, incluyendo atentados mediante el uso de artefactos explosivos improvisados en el centro y sur del país, y especialmente en Mogadiscio. En el caso de la capital, el modus operandi de al-Shabaab consistió principalmente en ataques selectivos consistentes en atentados suicidas con explosivos que causaron decenas de víctimas. El centro de investigación ACLED señaló que se produjeron 3.144 víctimas mortales durante el año 2021.

Por otra parte, ante la escalada del conflicto en Tigré,⁴² Etiopía retiró 3.000 soldados en noviembre de 2020, efectivos que estaban dando apoyo al Gobierno Federal somalí en su lucha contra al-Shabaab pero no encuadrados bajo el mandato de AMISOM. En enero de 2021 EEUU puso fin a su presencia militar en el país, entre 650 y 800 fuerzas especiales, parte de las cuales estaban dedicadas al entrenamiento de las tropas somalíes. Este hecho generó un clima de preocupación en torno a un posible vacío en términos de seguridad en el país. Sin embargo, EEUU reanudó sus actividades en el país seis meses después, cuando el 20 y el 23 de julio lanzó ataques aéreos en el estado de Galmudug ejecutando un número indeterminado de militantes de al-Shabaab. A finales de 2021 había prácticamente

tres millones de personas desplazadas en todo el país según OCHA. Cerca de un millón eran nuevos desplazamientos de población generados en 2020 vinculados a la emergencia climática (inundaciones y la plaga de langostas, la peor en 25 años). La situación humanitaria en el país siguió siendo grave debido a múltiples factores, como las perturbaciones climáticas, el conflicto, las enfermedades y la plaga de langostas. Casi la mitad de la población, 5,9 millones de personas, necesitaba asistencia humanitaria. Los efectos combinados de la irregularidad de las lluvias, las inundaciones y el conflicto han provocado una inseguridad alimentaria generalizada. En este sentido, numerosas voces alertaron de los efectos del cambio climático y las condiciones climáticas extremas en el país, por sus consecuencias en torno a la construcción de paz y al desarrollo en un país donde la mayoría de la población depende de la agricultura para su subsistencia, por lo que el carácter polifacético del cambio climático estaría reconfigurando el contexto local social, político y económico, amplificando los agravios locales, los conflictos intercomunitarios entre agricultores y ganaderos y la marginalización de la población. Estas cuestiones eran instrumentalizadas por los actores político-militares y por al-Shabaab.⁴³

El Grupo de Expertos sobre Somalia publicó un informe demoledor en septiembre⁴⁴ en el que destacó que el grupo armado seguía manteniendo toda su capacidad para completar ataques complejos y asimétricos en el país. Según el grupo, al-Shabaab se había aprovechado de las profundas diferencias políticas que salieron a la luz durante el prolongado período de incertidumbre electoral y seguía preparado para mantener su ritmo de operaciones en Mogadiscio, así como en los estados miembros federados, a medio y largo plazo. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por promover el diálogo político y hacer avanzar el proceso electoral, seguían presentes los intereses subyacentes y difíciles de conciliar y el grupo armado al-Shabaab. Según el Grupo de Expertos, el grupo armado, por tanto, seguía siendo un síntoma del conflicto político en curso, no su causa fundamental, y todas las partes implicadas en Somalia deberían reajustar sus prioridades para anular las condiciones específicamente locales que permiten que al-Shabaab siga operando. Por otra parte, durante el año se produjeron diversas reuniones y pronunciamientos por parte del Gobierno en torno al proceso gradual de transformación y retirada de la AMISOM del país. En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre extendió las sanciones que pesan sobre Somalia por un año más,

El Grupo de Expertos sobre Somalia destacó que al-Shabaab no era la causa fundamental, sino un síntoma del conflicto político entre los intereses irreconciliables entre los clanes y élites políticas del país

42. Véase la síntesis de Etiopía (Tigré) en este capítulo.

43. Véase Cedric H. de Coning et al, *Climate, Peace and Security Factsheet. Somalia*, Norwegian Institute of International Affairs, Stockholm International Peace Research Institute, febrero de 2021; Escola de Cultura de Pau, "Cambio Climático, paz y seguridad en Somalia", ECP visual explainer, julio de 2021.

44. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 16 de septiembre de 2021 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia por el Grupo de Expertos sobre Somalia, Naciones Unidas*, S/2021/849 de 6 de octubre de 2021.

bloqueando el acceso a la compra de armas –en contra de la voluntad del Gobierno, que pretende asumir la reforma del sector de la seguridad y poder equipar directamente a sus cuerpos de seguridad. Somalia se opone a la extensión de la presencia de AMISOM en el país o su transformación en una misión híbrida de UA/ONU, lo que significaría que todavía permanecerían soldados y asesores extranjeros en el país. El Consejo de Seguridad de la ONU justificó su decisión debido a que el proceso de construcción del Estado somalí se ha visto manipulado por al-Shabaab, grupo que se ha infiltrado en las instituciones locales. A principios de noviembre una delegación del Consejo de Paz y Seguridad de la UA visitó Mogadiscio, a quien el Gobierno reiteró su voluntad de reducir las fuerzas extranjeras e incrementar el apoyo a sus fuerzas para que puedan ser las garantes de la seguridad en el país, en el marco del traspaso gradual de tareas de AMISOM a los cuerpos de seguridad nacionales previsto para 2023. El mandato de AMISOM culminó a finales de 2021, por lo que discutieron cuatro opciones para transformar el mandato de la misión, propuestas que estaría elaborando el Cuarteto (Consejo de Seguridad de la ONU, la UE, la UA y los cuatro países africanos que en 2021 formaban parte del Consejo de Seguridad).

En relación al proceso electoral, este sufrió numerosos momentos de crisis, reveses y retrasos durante el año. En febrero expiraba el mandato del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed alias Farmajo, lo que desencadenó una crisis constitucional, donde el bloque opositor de los 15 candidatos presidenciales, así como otros sectores de la sociedad civil exigieron la formación de un Consejo de Transición Nacional que condujera a la celebración de elecciones, mientras que el presidente y el Gobierno consideraban que el Gobierno Federal debía mantenerse en el poder hasta los comicios. Las diferentes rondas negociadoras entre el primer ministro Roble y el bloque opositor celebradas en febrero y marzo para atajar la situación fracasaron. Esta situación derivó en una escalada de la violencia en febrero y marzo y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y opositores a la continuidad de Farmajo y su Gobierno, violencia que se trasladó a los cuerpos de seguridad federales, incluso con enfrentamientos en abril entre las Fuerzas Armadas leales a Farmajo y Fuerzas Armadas leales a la oposición, causando decenas de víctimas mortales. A finales de abril el Consejo de Seguridad de la ONU instó a todas las partes a rechazar la violencia y reanudar el diálogo político. La UNSOM y otros socios internacionales alertaron que la fragmentación de los cuerpos de seguridad según divisiones clánicas podía desviarles de su principal objetivo, al-Shabaab. Finalmente, la comunidad internacional rechazó la extensión del mandato presidencial por dos años, lo que forzó a Farmajo a solicitar al Parlamento el 28 de abril la anulación de la extensión del mandato presidencial y la reapertura del diálogo con los estados miembros

federales para fijar un nuevo calendario electoral. La anulación de la extensión del mandato fue aceptada de forma unánime por el Parlamento, lo que redujo la tensión (con el acantonamiento de las tropas federales pro-opositoras) y facilitó la reanudación del diálogo en el marco del NCC el 22 de mayo.⁴⁵ El NCC alcanzó un acuerdo el 27 de mayo según el cual las elecciones parlamentarias indirectas se celebrarían en un periodo de 60 días. Finalmente, el proceso electoral se inició con retrasos, aunque las elecciones a la Cámara Alta comenzaron el 29 de julio en todos los estados miembros federados, habiéndose elegido a 52 de los 54 escaños, 14 de los cuales correspondieron a mujeres; ello supone una representación femenina del 26 %, inferior a la cuota mínima del 30% para las mujeres a la que se habían comprometido los actores en el seno del NCC. Las elecciones a la Cámara Baja se iniciaron en noviembre, pero a finales de diciembre todavía no habían culminado, por lo que también se pospuso la elección indirecta del nuevo presidente del país.⁴⁶

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder

45. El consejo consultivo nacional (NCC) sobre las elecciones es un espacio de diálogo y concertación en el que está presente el Gobierno Federal y los estados federados.

46. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Pierre Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Domitien Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

Durante el año persistieron la violencia política y los ataques esporádicos por parte de actores armados y las acciones de contrainsurgencia gubernamentales, así como actos de represión, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de miembros de la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD). El centro de investigación ACLED dio un balance de 285 víctimas mortales durante el año 2021 en el país como consecuencia de estas acciones.⁴⁷ El CNDD-FDD nombró en enero como nuevo secretario general del partido al antiguo presidente del Senado, Révérien Ndikuriyo, sustituyendo en el cargo al actual presidente del país, nombramiento que fue tachado por círculos de derechos humanos como una consolidación de las posiciones más intransigentes desde las elecciones de 2020. El grupo armado RED-Tabara, compuesto por entre 500 y 800 combatientes con base en la provincia congoleza de Kivu Sur, continuó siendo la principal amenaza insurgente, y llevó a cabo acciones y ataques esporádicos durante el año contra miembros de los cuerpos de seguridad, así como contra civiles y sectores próximos al CNDD-FDD. También se produjeron enfrentamientos esporádicos entre milicias de RED-Tabara y las Fuerzas Armadas. Además, continuaron las acciones militares congolezas contra presuntos rebeldes burundeses en Kivu Sur, así como por parte de milicias Imbonerakure, quienes en mayo se enfrentaron con milicianos Mai Mai alineados con RED-Tabara en el territorio congolés de Uvira. El 24 de mayo, el Gobierno de Ruanda afirmó haber matado a dos rebeldes del Frente de Liberación Nacional (FLN) que cruzaban la frontera desde Burundi. El Gobierno burundés negó la presencia de grupos armados hostiles a Ruanda en suelo burundés. En septiembre, fuerzas militares, policiales y miembros de la milicia Imbonerakure se desplegaron cerca de la frontera con RDC en medio de un presunto riesgo inminente de ataque por parte de rebeldes burundeses con base en RDC. En octubre las autoridades de RDC arrestaron a más de 30 presuntos rebeldes burundeses en la provincia de Kivu Sur y el 10 de octubre afirmaron haber matado a dos miembros burundeses del grupo armado RED-Tabara; aunque esta organización desmintió los hechos. Además, se constataron diferentes acciones de violencia, explosiones y ataques por grupos no identificados que el Gobierno calificó de violencia terrorista, incrementando el clima de inseguridad. Un ejemplo de ello se produjo a mediados de septiembre, cuando atacantes no identificados lanzaron al menos

Burundi intentó dar una imagen de mejora de la seguridad y de las libertades en el país en aras de romper el aislamiento económico y político

cuatro ataques con granadas en la capital, Gitega, y la capital económica, Bujumbura, matando al menos a cinco personas e hiriendo a más de un centenar. El 21 de septiembre el Gobierno culpó a “terroristas no identificados” y RED-Tabara negó su participación. Opositores políticos y activistas siguieron siendo víctimas de acoso, intimidación y asesinato en el país, en especial del partido opositor CNL, y muchos políticos y grupos de oposición operan en el exilio, incluso con el riesgo de sufrir la persecución en el extranjero. Las autoridades el 22 de septiembre emitieron una orden de arresto internacional contra el líder opositor exiliado Alexis Sinduhije bajo sospecha de liderar RED-Tabara.

A pesar de la situación de violencia e inestabilidad, Burundi se embarcó durante el año en la mejora de las relaciones con los países vecinos, en especial con Ruanda y RDC, y con los principales actores de la comunidad internacional, con la voluntad de dar una imagen de mejora de la seguridad y de las libertades en el país en aras de romper el aislamiento económico y político. En medio del acercamiento con Ruanda, el 2 de abril el Gobierno acogió con beneplácito la decisión de Kigali a finales de marzo de suspender tres estaciones de radio de Burundi, que habían estado operando desde Kigali desde la crisis política de

2015 en Burundi. Durante la visita del presidente Ndayishimiye a la vecina RDC, Gitega y Kinshasa anunciaron el 13 de julio la cooperación bilateral contra los grupos armados en el este de RDC; acuerdo que podría dar lugar a operaciones conjuntas contra los grupos armados de Burundi en la provincia de Kivu Sur. A nivel internacional, en su discurso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi que tuvo lugar el 11 de marzo reconoció algunas medidas tomadas por las autoridades para mejorar el historial de derechos humanos, pero concluyó que la situación actual era demasiado compleja e incierta para ser considerada una mejora genuina. El 16 de junio el Gobierno levantó las sanciones contra medios como Ikirihó y la BBC, aunque otros permanecieron suspendidos. El 8 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor del nombramiento de un relator especial sobre derechos humanos en Burundi, tras el trabajo de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi (2016-2021). Su informe final se publicó en septiembre, en el que se destacó que a pesar de algunos gestos simbólicos aislados en el ámbito de los derechos humanos, no se había emprendido ninguna reforma estructural para mejorar la situación, destacando que funcionarios del Estado y los Imbonerakure habían seguido cometiendo graves violaciones de derechos humanos con la aquiescencia de las autoridades o incluso a instancias de estas. El estado de derecho continuaba erosionándose progresivamente y los factores de riesgo

47. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

de deterioro de la situación de los derechos humanos, seguían presentes.⁴⁸

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA se reunió el 27 de abril para discutir el posible cierre de la Misión de Observadores de Derechos Humanos y Expertos Militares en Burundi; decisión anunciada en mayo, citando “avances significativos” en la situación política y de seguridad, eliminando al país de la agenda. La Oficina del enviado especial del secretario general de la ONU también cerró el 31 de mayo. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los EEUU, de finales de marzo, registró al menos 205 ejecuciones extrajudiciales en Burundi en 2020 y destacó la impunidad generalizada cometida por parte del Gobierno y afines. En noviembre, EEUU eliminó las sanciones contra ocho altos funcionarios militares y de seguridad, incluido el primer ministro Alain-Guillaume Bunyoni, citando la reducción de la violencia y el regreso a la normalidad política desde las elecciones de 2020. El Gobierno y la UE celebraron en diciembre de 2020 la primera reunión de alto nivel desde la suspensión de la cooperación financiera en 2016, encuentro al que siguieron diversas reuniones con el objetivo de normalizar las relaciones, incluido el levantamiento de las sanciones de la UE y la reanudación del apoyo financiero directo; la UE invitó al ministro de Exteriores de Burundi, Albert Shingiro, a una gira europea a finales de abril. Tras la reunión en junio del jefe de la delegación de la UE con el presidente Ndayishimiye en Bujumbura, se anunció la intención de la UE de iniciar el proceso de reanudación de la ayuda después de que el gobierno presentara una hoja de ruta de reformas aceptada por la UE. No obstante, la UE decidió renovar el 18 de octubre por un año más hasta el 31 de octubre de 2022 las sanciones contra tres funcionarios del Gobierno de Burundi y un exgeneral, impuestas inicialmente en octubre de 2015 por su papel en el clima de violencia política desencadenado en 2015.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Ruanda, Rusia (Wagner Group)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras

militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los 10 años anteriores había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“antibalaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada, forzando un gobierno de transición que condujo a las elecciones de 2015-2016. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos (que apenas controlaban Bangui) ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación, por lo que se promovieron nuevos contactos de la mano de la UA y de la CEEAC, que contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019.

El año 2021 se vio condicionado por los acontecimientos ocurridos a partir de diciembre de 2020, con la ruptura del proceso de paz y el reinicio de las hostilidades por una parte de los firmantes del acuerdo de 2019. Según el centro de investigación ACLED, desde diciembre de 2020 hasta finales de 2021 se produjeron al menos 1.698 víctimas mortales como consecuencia de la violencia. En el marco de un contexto político dominado por las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de diciembre de 2020, las tensiones aumentaron después de que el 3 de diciembre el Tribunal Constitucional decidiera invalidar cinco de las 22 candidaturas presidenciales, entre ellas la del expresidente de RCA, François Bozizé. El 15 de diciembre, los representantes de seis grupos armados, entre los cuales los principales firmantes del acuerdo de paz de 2019, incluyendo las facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, una facción del FPRC, el MPC y la UPC, firmaron una declaración conjunta en la que denunciaban el Acuerdo Político y criticaban las deficiencias del Gobierno a la hora de hacer avanzar el proceso de paz. El 17 de diciembre anunciaron la formación de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). Algunos de estos grupos apoyaban la candidatura de Bozizé,

48. Naciones Unidas, *Report of the Commission of Inquiry on Burundi*, (A/HRC/48/68), 12 de agosto de 2021.

quien fue acusado de orquestar un intento de golpe de Estado. Entre el 18 y el 23 de diciembre, la CPC lanzó ataques simultáneos y coordinados hacia Bangui y en todo el país, cometiendo graves violaciones contra la población civil, lo que provocó el abandono de los puestos de seguridad por parte de los cuerpos estatales en muchas localidades. Ante esta situación, la MINUSCA recibió refuerzos de la misión de la ONU en Sudán del Sur y se desplegó apoyo adicional de seguridad bilateral, principalmente de Ruanda y Rusia, a través del contratista privado ruso Wagner Group.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se celebró en un contexto de intensificación de la violencia. Se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas ataques de elementos de la CPC contra 14 escuelas usadas como centros de votación. Se declaró reelegido al presidente Archange Touadéra quien, el 18 de enero de 2021, se dirigió a la nación y expresó su voluntad de dialogar y colaborar con todas las partes en el proceso de paz, a excepción de los grupos armados vinculados a la CPC. El Tribunal Constitucional el 1 de febrero proclamó los resultados de las elecciones legislativas afirmando que 22 de los 140 diputados fueron elegidos en primera ronda, mientras que 61 escaños requerían una segunda ronda y se debían celebrar elecciones para los restantes 57 escaños en distritos donde las elecciones no habían tenido lugar debido a las condiciones de seguridad. La principal coalición opositora rechazó los resultados y anunció su retirada del proceso electoral, destacando las numerosas irregularidades y el clima de violencia reinante. El 14 de marzo se celebraron las elecciones legislativas en las circunscripciones pendientes. El 30 de marzo, el presidente Touadéra tomó posesión de su cargo y reiteró su adhesión al Acuerdo Político de 2019. Se confirmó la muerte de al menos 144 civiles a manos de las partes en el conflicto desde el 15 de diciembre de 2020 hasta finales de junio de 2021, y el desplazamiento de 213.000 civiles hasta finales de mayo de 2021 como consecuencia de la crisis electoral y postelectoral. Por otra parte, cabe destacar la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, cometidos por todas las partes en el conflicto, según destacó Naciones Unidas.

A raíz de la formación de la CPC, el presidente Touadéra expulsó del Gobierno a líderes de grupos insurgentes integrantes de la CPC, como Maxime Mokom (antibalaka); a Bi Sidi Souleymane (alias Sidiki), de 3R; Mahamat Hamat Alhisene (alias Al-Khatim), del MPC; y Ali Darassa, de la UPC, entre otros altos cargos. En enero, la CPC lanzó ataques coordinados contra Bangui y la MINUSCA, y las Fuerzas Armadas y los cuerpos paramilitares que le dan apoyo llevaron a cabo contraofensivas que consiguieron expulsar a la CPC y recuperar el control de rutas y localidades estratégicas

cercanas a la capital. Se constató que se habían restringido las libertades civiles y que la situación había dado lugar a denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias, incluidos menores, por parte de las fuerzas gubernamentales y del personal de seguridad de Wagner Group. Esa situación creó un clima de temor entre la población. Pese a que 3R, la UPC y el MPC cortaron relaciones con la CPC entre abril y junio, se mantuvieron activos y siguieron cometiendo violaciones y ataques contra civiles y los cuerpos de seguridad, a la vez que las Fuerzas Armadas centroafricanas apoyadas por contratistas privados rusos cometieron graves violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno intentó promover un proceso de diálogo político, aunque este sufrió numerosos retrasos durante todo el año. La Comunidad de Sant Egidio llevó a cabo sus buenos oficios para facilitar la celebración de un encuentro que sentara las bases de un acuerdo para poner fin a las hostilidades e iniciar el proceso de diálogo e invitó a representantes del Gobierno, de la sociedad civil, de la oposición política y líderes religiosos del país entre los días 27 y 29 de septiembre en Roma.⁴⁹ Tras el encuentro, que contó con la presencia del secretario general de la Comunidad de Sant Egidio, Paolo Impagliazzo, los participantes firmaron una declaración conjunta titulada “Hacia el Diálogo Republicano – por la paz y el futuro de la RCA”, en la que hicieron un llamamiento a todas las fuerzas vivas de la nación a preparar el camino del diálogo en un espíritu de apertura, humildad y pragmatismo. Los representantes del Gobierno reafirmaron su rechazo a incluir a la CPC en las consultas celebradas en el foro de Roma. A su vez, la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIGLR) adoptó el 16 de septiembre una hoja de ruta para la paz en el país haciendo un llamamiento al Gobierno a aceptar un alto el fuego con la CPC y revitalizar el acuerdo de paz de 2019. En cumplimiento con las recomendaciones de la comunidad internacional y con la voluntad de promover el proceso de diálogo, el 15 de octubre el presidente Touadéra declaró un alto el fuego unilateral que afectaba a las acciones contra los grupos armados; en respuesta, la CPC acordó respetar el alto el fuego si el Gobierno se comprometía a ello. Sin embargo, en las dos semanas siguientes las fuerzas de seguridad gubernamentales, los cuerpos paramilitares internacionales y los grupos armados violaron reiteradamente el cese de hostilidades.

La situación de emergencia humanitaria en el país alcanzó niveles no vistos desde 2015 debido a las nuevas dinámicas de conflicto observadas desde diciembre de 2020. Las escuelas se usaron sistemáticamente con fines militares, según diversos análisis. Las organizaciones humanitarias se vieron gravemente afectadas por la inseguridad, los

49. Jude Atenmanke, [Rome-based Lay Catholic Association Facilitating “ceasefire, dialogue” in CAR](#), *ACIAFRICA*, 3 de octubre de 2021.

enfrentamientos y las actividades violentas de todas las partes en el conflicto, que atacaron directamente al personal humanitario y sus bienes y dificultaron el acceso a las personas que necesitaban asistencia. Algunas oficinas fueron saqueadas, lo que llevó a varias organizaciones a suspender temporalmente sus actividades. Según OCHA, a 15 de diciembre de 2021 había 3,1 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria, más de 664.000 personas desplazadas internas en el país y 735.000 personas refugiadas en los países vecinos.

La alianza militar que RCA ha ido forjando con Rusia en los últimos años fue motivo de creciente preocupación, tal y como destacaron diversos analistas.⁵⁰ Aunque el uso de mercenarios rusos por parte del Gobierno contribuyó a poner fin al bloqueo que mantenían los grupos rebeldes en la vía de suministro camerunesa al Gobierno y la recuperación del control de numerosas localidades –lo que impulsó el apoyo popular a Touadéra–, esta contraofensiva gubernamental comportó graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil y ejecuciones sumarias por parte de los mercenarios rusos. En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios dio la alarma por primera vez sobre las actividades de Wagner y dijo que había recibido informes de graves abusos contra los derechos humanos,⁵¹ incluidas ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones forzadas.

En junio, un panel de expertos de la ONU acusó a instructores rusos y soldados de la RCA de saqueos a gran escala, uso de fuerza excesiva y asesinatos indiscriminados. También declaró que mercenarios sirios y libios estaban combatiendo junto con instructores rusos. Rusia negó airadamente las acusaciones. Dos meses después, la MINUSCA y la oficina de derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por los crecientes abusos cometidos por todos los beligerantes, y responsabilizaron al Ejército y a los contratistas privados rusos de flexibilizar el embargo de armas al país, y Rusia continuó bloqueando las iniciativas para volver a dotar de personal al comité de monitoreo de sanciones.

El comité de seguimiento de sanciones anterior había emitido un informe en junio⁵² acusando a los instructores militares rusos de Wagner de cometer abusos contra la población civil. Las tensiones entre la MINUSCA y el Gobierno aumentaron después de un incidente el 1 de noviembre cuando 10 efectivos de mantenimiento de la paz egipcios desarmados resultaron heridos cuando su autobús fue atacado por la guardia presidencial.

50. Entre otros, véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021; Bax, Pauline, *Russia's Influence in the Central African Republic*, ICG Commentary/Africa, ICG, 3 December 2021.

51. OHCHR, CAR: Experts alarmed by government's use of "Russian trainers", close contacts with UN peacekeepers, 31 de marzo de 2021.

52. Naciones Unidas, *Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Centroafricana*, cuyo mandato se prorrogó en virtud de la resolución 2536 (2020) del Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2021/569, 25 de junio de 2021.

53. Naciones Unidas, *Carta de fecha 10 de junio de 2021 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2021/560, 10 de junio de 2021.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Ruanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Ruanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Ruanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

Los ataques de los grupos armados y la violencia intercomunitaria continuaron presentes en las provincias orientales de la RDC durante 2021.

A pesar de las ofensivas militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, con la asistencia de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUSCO), la violencia siguió aumentando. Más de 120 milicias y grupos armados seguían activos en el este del país, en especial en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika. Según el informe del Grupo de expertos de RDC de junio,⁵³ la población civil continuó sufriendo las consecuencias del ciclo perpetuo de violencia en el este y la población civil transmitió su desesperación, en parte, protagonizando disturbios y manifestándose contra la MONUSCO. Los grupos armados continuaron actuando con casi total impunidad en la zona, según el Grupo de Expertos.

Según el centro de investigación ACLED,⁵⁴ se produjeron 4.865 víctimas mortales como consecuencia del clima de violencia armada en el país, de las cuales 4.723 se circunscribían a estas cinco provincias congoleesas, en más de 2.300 incidentes violentos. Según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) en RDC, durante 2020, unos 2.487 civiles habían sido asesinados por grupos armados en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur, Tanganica e Ituri. La ONU registró la muerte de otros 1.043 civiles, incluidas 233 mujeres y 52 menores, en los primeros nueve meses de 2021. La mayoría de las víctimas se encontraban en Ituri y Kivu Norte, donde la violencia intercomunitaria, así como los enfrentamientos entre las FARDC y varias milicias, se intensificaron durante el año. Según ACNUR había 5,6 millones de personas desplazadas internas, incluidos unos 3 millones de menores, a las que se añadían más de 942.000 personas refugiadas en países vecinos, lo que la ha convertido en la mayor crisis de desplazamiento en África de los últimos años. La FAO y el PMA estimaron en noviembre que 27 millones de personas, una cuarta parte de la población del país, padecía una situación de emergencia alimentaria grave, debido a malas cosechas, desplazamientos provocados por la violencia, enfermedades y colapsos de infraestructuras.⁵⁵

El 30 de abril, el presidente Félix Tshisekedi decretó el establecimiento de un estado de sitio que entró en vigor el 6 de mayo para las provincias de Kivu Norte e Ituri, para aumentar la presencia de las FARDC y mejorar la seguridad. Dos generales, Constant Ndima y Jon Luboya (antiguo grupo RCD-Goma) se hicieron cargo de ambas provincias, decisión muy criticada por su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la década de los noventa. Desde entonces, las ADF, CODECO y otros grupos armados continuaron perpetrando ataques violentos y algunas fuerzas de seguridad del Estado se vieron implicadas en graves violaciones de los derechos humanos. El estado de sitio se fue prorrogando durante el año sin que se constataran mejoras de la situación de seguridad.⁵⁶ Por el contrario, los diputados provinciales –suspendidos por el estado de sitio al haberse supeditado el control de la situación a los mandos militares– así como organizaciones de derechos humanos denunciaron la reducción del espacio político y el aumento de las violaciones de derechos humanos bajo el estado de sitio. En junio, el presidente Félix Tshisekedi realizó una gira por las provincias del este

El Gobierno decretó el estado de sitio en el este de RDC, lo que provocó una escalada de la violencia contra la población civil y una reducción del espacio político

ACNUR alertó de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento de África de los últimos años en RDC, con 5,6 millones de personas desplazadas, casi un millón de refugiadas y 27 millones en una situación de emergencia alimentaria grave, según FAO y PMA

sometidas al estado de sitio y pidió perdón a la población civil por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad y los grupos armados, prometió perseguir a los responsables de abusos, y añadió que se había desarrollado una mafia dentro del ejército y la policía, apuntalada por una “ley del silencio”.⁵⁷

Más allá de las actividades de las ADF en Kivu Norte e Ituri,⁵⁸ en el resto de **Kivu Norte**, en los territorios de Masisi, Rutshuru, Walikale y el sur de Lubero continuaron los enfrentamientos violentos entre grupos armados, en los que participaron principalmente facciones de Nduma Defensa del Congo-Renovado (NDC-R) y combatientes del Colectivo de Movimientos por el Cambio (CMC) y que dieron lugar a nuevas alianzas entre grupos y graves abusos contra la población civil. Continuaron las actividades ilícitas relacionadas con el estaño, el tántalo y el wolframio, según el Grupo de Expertos de la ONU. El Grupo de Expertos documentó enfrentamientos armados en las minas de los alrededores de Rubaya durante 2020, así como casos de fraude en las minas de coltán de la zona, lo que pone en duda la eficacia de los esfuerzos del Gobierno y el sector privado para hacer frente a esta cuestión.

En **Ituri**, la falta de avances en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las facciones de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) contribuyó al deterioro progresivo de la situación humanitaria y de la seguridad en el territorio de Djugu. Los ataques contra las bases de las Fuerzas Armadas, el desvío del armamento de las Fuerzas Armadas y el tráfico transfronterizo dispararon el uso de armas ligeras entre las facciones de la CODECO. Los combatientes de Bon Temple, dirigidos por Tuwo, cometieron actos de violación en grupo, matrimonio forzado y esclavitud sexual en Banyali-Kilo, donde abunda el oro. También se documentó la matanza de civiles por parte de combatientes de la CODECO, cuyas facciones atacaron y ocuparon distintas minas de oro y saquearon los centros de comercio de este metal en el territorio de Djugu, en especial en Mongbwalu, un núcleo aurífero. En el territorio de Irumu, la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC) llevó a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad y sobre todo contra civiles no pertenecientes a la comunidad bira, y utilizó a menores como combatientes, según la ONU. El grupo de autodefensa Zaire siguió operando en los territorios

54. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

55. FAO/WFP, *Food security crisis in the Democratic Republic of the Congo could worsen in the coming months*, FAO/WFP Joint Statement, 10 de noviembre de 2021.

56. HRW, *DR Congo: Massacres Persist Despite Martial Law*, 15 de septiembre de 2021.

57. Reuters, *Dozens of Congo's rebels lay down weapons in the east*, 23 de junio de 2021.

58. Véase el resumen del conflicto armado de RDC (este-ADF) en este capítulo.

de Irumu y Djugu, y participó en enfrentamientos armados con las facciones de la CODECO y la FPIC, y en ataques contra la población civil de las comunidades bira y lendu. También extrajo oro y defendió distintos yacimientos auríferos en ambos territorios.

Paralelamente, algunos miembros de las fuerzas de seguridad presentes en los territorios de Djugu e Irumu cometieron abusos, que incluyeron actos de violencia sexual relacionada con el conflicto, en especial contra las poblaciones lendu y bira, consideradas partidarias de la CODECO y la FPIC, respectivamente. Se documentó la presencia ilegal de miembros de las Fuerzas Armadas en zonas mineras en los territorios de Djugu, Irumu y Mambasa, donde las cooperativas locales trabajaban en la extracción de oro con empresas propiedad de inversores particulares chinos.

En **Kivu Sur**, los enfrentamientos violentos y los ataques se intensificaron en los territorios de Hauts-Plateaux de Fizi, Uvira y Mwenga, en especial entre Twirwaneho, que se convirtió en un grupo armado organizado, y una nueva coalición de milicias Mai-Mai, de la que formaba parte la milicia Mai-Mai Yakutumba. Los grupos Mai-Mai y Twirwaneho obtuvieron armas y municiones por distintos medios, por ejemplo, atacando a las Fuerzas Armadas o desviando sus existencias. La connivencia entre algunos de estos grupos y miembros de las Fuerzas Armadas alimentó el conflicto. Los ataques contra la población civil y los enfrentamientos armados desencadenaron desplazamientos forzados masivos y dieron lugar a una segregación étnica del espacio geográfico. Los combatientes de Twirwaneho y de la coalición Mai-Mai cometieron actos de violencia sexual relacionada con el conflicto y secuestros. Algunos discursos incitaron a la discriminación, la hostilidad y la violencia según la ONU. Mai-Mai Apa Na Pale, bajo la dirección de Mundus Munanga Babuyu, siguió formando parte de la Coalición Nacional del Pueblo para la Soberanía del Congo (CNPSC) y siendo un aliado muy cercano de Yakutumba. Mai-Mai Yakutumba siguió beneficiándose de la tala, los impuestos y el comercio ilegal del palisandro, utilizando también para ello distintas redes delictivas. El Grupo de Expertos de la ONU rastreó madera procedente de las reservas forestales de Kivu Sur, bajo el control de Mai-Mai Yakutumba, y de las redes delictivas del territorio de Irumu del Sur y la provincia de Kongo Central (antes llamada Bas Congo) hasta sus destinos finales (Bélgica y China). Mai-Mai Yakutumba también sacó provecho de la minería y los impuestos gravados a algunas explotaciones auríferas en las zonas de Misisi y Nyange, desde las que se exportó oro a Dubái y Hong Kong. Los grupos armados burundeses RED-Tabara y FNL siguieron ocupando bases de retaguardia en los Hauts-Plateaux de Uvira. RED-Tabara a menudo cambiaba de posición para esquivar las operaciones de las FARDC.

Por último, grupos armados y milicias rivales, que compiten por el control de las zonas mineras o toman

represalias contra las recientes ofensivas del Gobierno, perpetraron actos de violencia en **Tanganica**. Más de 300.000 personas se encuentran actualmente desplazadas por la inseguridad en esta zona.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congolese en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

Durante el año se produjo una nueva escalada de la violencia por parte del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el este de RDC y se consolidó su expansión en Ituri. En Kivu Norte, los ataques de las ADF, activas en la región del Grand Nord (norte de la provincia de Kivu Norte) durante más de seis años, se intensificaron después de que las Fuerzas Armadas lanzaran una ofensiva en octubre de 2019. La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) informó que los ataques de las ADF habían sido “sistemáticos y brutales” y podían equivaler a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Del 11 al 12 de noviembre, presuntos combatientes de las ADF perpetraron uno de los ataques más mortíferos en Kivu Norte durante 2021, matando al menos a 38 civiles y destruyendo el único centro de salud en la aldea de Kisunga en Beni.

En la zona del Grand Nord, la situación de seguridad siguió siendo inestable como consecuencia de las acciones de las ADF. Las operaciones ofensivas contra las ADF lanzadas conjuntamente por las FARDC y la MONUSCO contribuyeron a agravar el clima de violencia y represalias por parte de las ADF. Aunque a resultas de las operaciones se infligieron importantes pérdidas a las ADF y se desmantelaron varios de sus bastiones, el grupo mantuvo su capacidad de causar daños a la población civil. Las ADF se dividieron en pequeños grupos mientras conservaban su capacidad de mando y control, ampliaban su zona de operaciones y recurrían con mayor frecuencia a los artefactos explosivos improvisados. Desde noviembre de 2016 y hasta el 15 de noviembre de 2020, no se registró ningún caso de civiles heridos por este método en el este del país, mientras que a partir de esa fecha se produjo una escalada del uso de estos artefactos, con graves consecuencias para la población civil. El grupo consiguió reconstituirse e intensificó sus ataques, sobre todo en el sector de Rwenzori. Con la participación de combatientes procedentes de fuera del país, las ADF perfeccionaron las técnicas de construcción de artefactos explosivos improvisados. Según el informe del Grupo de expertos de RDC publicado en junio,⁵⁹ pese a los intentos de las ADF de proyectar su alineación con el grupo armado Estado Islámico (ISIS), no se pudo establecer si este les daba apoyo directo o ejercía funciones de mando y control sobre ellas. No obstante, cabe destacar que ISIS reivindicó tres ataques en la localidad de Komanda en los que ejecutó a diversas personas entre septiembre y octubre. En todo el territorio de Beni, las ADF llevaron a cabo ataques, ejecuciones y secuestros de agricultores, muchos de los cuales trabajaban los cacaotales, y forzaron a agricultores locales a colaborar.

Sin embargo, en lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones de las ADF, el 16 de noviembre se registraron tres explosiones en la capital ugandesa, Kampala, que fueron reivindicados por las ADF. Las explosiones, producidas por tres atacantes suicidas, se registraron cerca del Parlamento nacional y de la sede central de la Policía ugandesa, dejando un balance de siete personas muertas y 40 heridas. Dos días después, las autoridades ugandesas atribuyeron los ataques al ADF, reaccionando primero mediante arrestos masivos de posibles sospechosos en el interior del país, y posteriormente, anunciando nuevos planes para volver a desplegar al Ejército ugandés en la vecina RDC. El 30 de noviembre las Fuerzas Armadas ugandesas informaron de los primeros ataques aéreos contra posiciones de las ADF en suelo congolés, en una operación supuestamente acordada con las fuerzas congoleñas. A principios de diciembre las tropas ugandesas entraron en territorio de la RDC tras un acuerdo con el Gobierno

En lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones de las ADF, en noviembre efectuaron tres explosiones en la capital ugandesa, Kampala, que provocaron el despliegue de las Fuerzas Armadas ugandesas en RDC

congolés para combatir a la insurgencia. El Gobierno congolés, que había declarado en abril el estado de sitio en las regiones del este del país, defendió que la presencia de las tropas ugandesas sería estrictamente limitada en el tiempo. Durante todo el mes de diciembre los ejércitos de Uganda y RDC atacaron posiciones del ADF en las regiones de Kivu Norte e Ituri, informando del desmantelamiento de diferentes campamentos de la insurgencia. En respuesta, las ADF intensificaron sus operaciones militares, entre las cuales sobresalió un ataque suicida producido el 25 de diciembre en un restaurante en Beni, que dejó un balance de al menos nueve personas muertas en lo que se convirtió en el primer ataque suicida registrado en el país.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados y milicias comunitarias, UNITAMS
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario, concluyendo su despliegue a finales de 2020.

59. Naciones Unidas, Carta de fecha 10 de junio de 2021 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo, Consejo de Seguridad de la ONU, S/2021/560, 10 de junio de 2021.

Un año más la región de Darfur continuó siendo el epicentro de la violencia armada en el país, registrándose un deterioro de la situación de seguridad tras la finalización del mandato de la Misión Híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID). Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año se registraron 1.027 muertes asociadas al conflicto armado en la región de Darfur. Estos datos muestran un empeoramiento en comparación con años anteriores. En 2020 se registraron 555 muertes provocadas por enfrentamientos armados, ataques contra civiles y ataques con explosivos improvisados (IED), 268 en 2019, 859 durante el 2018 y 996 en 2017, aunque la cifra de 2021 seguía estando muy por debajo de las 2.286 muertes registradas en 2016.⁶⁰ Las razones principales del mantenimiento de las dinámicas de violencia armada en la región seguían estando en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sudanesas y la facción del Movimiento de Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al Nur (SLM/A-AW) –que se negó a la firma del acuerdo de paz alcanzado en octubre de 2020– así como, sobre todo, al mantenimiento de enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de distintas comunidades árabes y no árabes, principalmente debido a disputas por la propiedad de las tierras o el acceso a los recursos. Según los datos de ACNUR de mediados de 2021, más de 800.000 personas **habían huido de sus hogares en Sudán y se habían refugiado fuera de las fronteras nacionales, principalmente debido al conflicto armado de Darfur. El número de personas desplazadas internas a mediados de 2021 se situó en las 2.552.174.**⁶¹ Estas cifras colocan al país en el séptimo puesto a nivel global, y el tercero en África en relación al número de personas refugiadas por la violencia, por detrás de Sudán del Sur y RDC; y en el noveno a nivel global en cuanto a mayor número de personas desplazadas internas. De forma paralela, **Sudán acogía a más de un millón de personas procedentes de RCA, RDC o Etiopía**– manteniendo al país en el sexto puesto a nivel global de países de acogida, siendo el segundo en África por detrás de Uganda.⁶²

El año se inició con la **retirada definitiva de la UNAMID de Darfur**, que culminó sus actividades el 31 de diciembre de 2020 según lo estipulado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (2363 (2017) y 2429 (2018)).⁶³ La retirada de la misión coincidió con nuevos enfrentamientos entre miembros de diferentes comunidades en enero de 2021 que dejaron un balance de alrededor de **250 personas muertas y más de 100.000 desplazados en los estados de Darfur**

La retirada definitiva de la UNAMID de Darfur (Sudán) dejó un vacío de seguridad que provocó un aumento de la violencia en relación a años previos

Occidental y Meridional. También en Darfur del Norte se registraron a mediados de enero enfrentamientos entre el SLM/A-AW y tropas gubernamentales con un saldo de 17 personas muertas. Si bien las labores de protección de los civiles en Darfur, que hasta la fecha realizaba la UNAMID, debían de ser asumidas por el Gobierno de Sudán y por la nueva misión de asistencia de la ONU en Sudán, la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), el incremento de la violencia en enero puso de manifiesto la vulnerabilidad que para las poblaciones locales supuso la retirada de la misión híbrida, hecho sobre el que ya habían alertado organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional denunció en enero el vacío de seguridad creado en Darfur, así como el fracaso de las fuerzas de seguridad sudanesas a la hora de proteger a la población civil, instando al Consejo de Seguridad de la ONU a detener la retirada de la UNAMID

para proteger a los civiles hasta que las condiciones de seguridad lo requirieran. Si bien la UA también propuso realizar una retirada gradual para evitar dejar un vacío, el Gobierno de Sudán ya había manifestado su negativa a mantener la misión híbrida, y desplegó en la región el 22 de enero a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) –fuerzas paramilitares sudanesas– para ayudar a restablecer la seguridad. Durante los meses de febrero y marzo los brotes de violencia se siguieron produciendo en la región y, en abril, un nuevo enfrentamiento entre miembros de comunidades árabes y massalit en la capital del estado de Darfur Occidental, el-Geneina, y sus alrededores, volvió a provocar al menos 132 muertos y decenas de miles de desplazados, obligando al Gobierno de Sudán a declarar el estado de emergencia en la región. El jefe del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdul Fatah Al Burhan, y una delegación de oficiales militares y de inteligencia, visitaron El Geneina el 12 de abril en un intento de mediar entre las dos partes, si bien los representantes de la comunidad massalit rechazaron la mediación el 15 de abril, acusando a los paramilitares de las RSF de apoyar los ataques recurrentes contra sus comunidades.

En el mes de junio, con el objetivo de tratar de mantener la seguridad y proteger a los civiles en Darfur tras los repetidos enfrentamientos intercomunitarios registrados en el primer semestre del año, el Gobierno anunció **la formación de una fuerza conjunta para Darfur** compuesta por unos 20.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, el Servicio General de Inteligencia, las RSF, las fuerzas policiales, así como miembros de los grupos armados signatarios del acuerdo de paz de octubre de 2020, e inició su despliegue el 14 de septiembre.

60. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

61. UNHCR, *Refugee Data Finder*, 2021.

62. UNCHR, *Mid-year trends report 2021*, 11 de noviembre de 2021.

63. Según lo estipulado en la resolución 2559 (2020) del Consejo de Seguridad de la ONU, la UNAMID completó su ejercicio de retirada el 30 de junio de 2021. La retirada de la UNAMID coincidió con el establecimiento de la Misión de Asistencia Integrada para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), de conformidad con la Resolución 2524 (2020).

La violencia, sin embargo, se mantuvo en la región hasta finalizar el año, con repetidos enfrentamientos intercomunitarios en diferentes puntos de Darfur. El 19 de octubre, un brote de violencia en las localidades de Tawila y Dar es-Salam, en Darfur Septentrional hizo que las autoridades declarasen el estado de emergencia; y en noviembre, nuevos enfrentamientos entre comunidades pastoralistas en Jebel Moon, fronteriza con Chad, provocaron 43 muertos, más de mil viviendas quemadas en 46 comunidades y alrededor de 4.300 personas desplazadas. Estos últimos brotes de violencia se produjeron en un periodo de **crisis nacional** marcada por el intento de golpe de Estado en septiembre, y otro golpe que logró derrocar a la parte civil del Gobierno de Transición el 25 de octubre, abriendo un proceso de movilizaciones populares en todo el país.⁶⁴ De forma paralela a las dinámicas de violencia en la región de Darfur, durante el año el Gobierno sudanés y el SLM/A-AW siguieron manteniendo **negociaciones de paz, sin lograr avances relevantes**.⁶⁵ Asimismo, al finalizar el año, el Comité Internacional de la Cruz la Cruz Roja (CICR) en Sudán anunció la firma de un Memorando de Entendimiento con las RSF para formar y capacitar a las fuerzas paramilitares sobre derecho humanitario y la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Durante el año se extendieron los ceses al fuego unilaterales realizados por rebeldes y Gobierno en las regiones meridionales de Kordofán Sur y Nilo Azul, hecho que ayudó a mantener un bajo nivel de violencia, registrando 193 muertes asociadas al conflicto armado, la mayoría de ellas en la región de Kordofán Sur (182).

A principios de año el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés del Norte dirigido por Abdelaziz al-Hilu (SPLM-N al-Hilu) –uno de los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de octubre de 2020– prorrogó durante cinco meses, a partir del 6 de febrero, el cese unilateral de hostilidades que había iniciado en 2020. Este gesto permitió mantener abiertas las **negociaciones de paz** con el Gobierno de Transición⁶⁶, las cuales se hallaban estancadas debido a discrepancias en relación a la demanda de creación de un Estado aconfesional. El 28 de marzo se logró un importante avance en las negociaciones, cuando las partes firmaron la Declaración de Principios entre el Gobierno de Transición de Sudán y el SPLM-N al-Hilu en el que se acordó el establecimiento de un Estado federal, civil y democrático en Sudán, con la libertad de religión, libertad de creencias y prácticas religiosas y de culto garantizadas para todo el pueblo sudanés. El acuerdo separa las identidades de cultura, región, etnia y religión del Estado, principios que estarán consagrados en la Constitución. Tras la firma de la Declaración, el 26 de mayo se reanudaron las conversaciones entre las partes en la capital de Sudán del Sur, Juba, con miras a integrar al grupo rebelde en el Gobierno de Transición. Sin embargo, las conversaciones se suspendieron a mediados de junio debido a desacuerdos relativos a la delegación de poderes entre el gobierno central y las regiones y a la integración de los grupos armados en el ejército sudanés.⁶⁷

Paralelamente al transcurso de las conversaciones de paz, en la región de Kordofán Sur se siguieron registrando algunos eventos violentos. En junio el Gobierno de Sudán declaró el estado de emergencia y un toque de queda nocturno en Kordofán Sur tras enfrentamientos en el área de Qadir entre miembros de las comunidades de Dar Ali y Kenana. A partir de octubre también se registró un aumento de la violencia en Kordofán Sur, así como en otras regiones del país como Darfur o Kordofán del Oeste, coincidiendo con la **crisis nacional** marcada por golpe de Estado del 25 de octubre, el cual generó un proceso de movilizaciones populares en todo el país.⁶⁸ Entre finales de noviembre y principios de diciembre, nuevos enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de comunidades kenana y hawazma en la localidad de Abu Jubayhah, dejaron al menos seis personas muertas, 14 heridas y unas 15.000 desplazadas, obligando a las autoridades locales a imponer un toque de queda en la localidad y al despliegue de las RSF.

64. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Tensiones).

65. Véase resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

66. Ibid.

67. Ibid.

68. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Tensiones).

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año el país presentó unas dinámicas de violencia similares al año anterior, debido a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares, la continuidad de episodios de violencia intercomunitaria o las nuevas tensiones generadas

dentro del SPLA-IO que afectaron principalmente a las regiones de Ecuatoria Central y Occidental, Jonglei, la Zona Administrativa de Pibor y Alto Nilo. Según datos de ACLED, durante el 2021 se registraron un total de 699 episodios de violencia armada en el país que costaron la vida a 1.936 personas, cifras muy similares a las reportados en 2020 cuando se registraron 2.252 muertes asociadas a batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados (IED).⁶⁹ Este escenario mantuvo un año más la situación de emergencia humanitaria en el país. Según Naciones Unidas, los altos niveles de violencia, junto con las inundaciones registradas y los efectos de la pandemia de la COVID-19, generaron que alrededor de 7,2 millones de personas (el 60 % de la población) padecieran altos niveles de inseguridad alimentaria. El resurgimiento del conflicto armado en partes de Ecuatoria Central y Occidental, Jonglei y la Zona Administrativa de Pibor siguió dificultando el acceso humanitario y el personal humanitario siguió siendo objeto de ataques.⁷⁰ Por otro lado, según los datos de ACNUR de mediados de 2021, **en Sudán del Sur 2,3 millones de personas se encontraban refugiadas fuera de las fronteras nacionales y otras 1,7 millones estaban en situación de desplazamiento interno.**⁷¹ En el primer semestre del año se registraron 61.7000 nuevas personas refugiadas y 170.400 nuevos desplazamientos internos. Estos datos siguen colocando al país como el escenario de la **mayor crisis de personas refugiadas en África y la cuarta más grande del mundo**, y en el décimo lugar a nivel global en cuanto a mayor número de personas desplazadas internas.⁷²

Paralelamente, durante el año se avanzó lentamente en la aplicación de las cláusulas del acuerdo de paz de 2018 y se mantuvieron las conversaciones de paz iniciadas en 2020 en Roma entre el Gobierno y los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz de 2018, organizados a través de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC.⁶⁶ **No obstante, la violencia se mantuvo entre diferentes actores a lo largo del año**, principalmente en enfrentamientos entre el Ejército de Sudán del Sur (SSPDF) y las fuerzas del Frente de Salvación Nacional (NAS) liderado por el general Thomas Cirillo –actor no signatario del acuerdo de paz–, así como choques entre distintas facciones del SPLA-IO después del estallido de luchas internas a principios de agosto. Por otro lado, también se mantuvieron los episodios de violencia intercomunitaria, principalmente concentrados en los estados de Alto Nilo, Warrap, Lagos, Ecuatoria Central y Ecuatoria Occidental, motivados por tensiones entre comunidades aliadas a diferentes facciones del Gobierno, así como a disputas por el acceso a recursos y por robo de ganado. El 19 de febrero, coincidiendo con el primer

69. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), enero de 2022.

70. Naciones Unidas, *Informe del Secretario General del Consejo de Seguridad de la ONU sobre La situación en Sudán del Sur*, S/2021/784, 9 de septiembre de 2021.

71. UNHCR, *Refugee Data Finger*, 2021.

72. UNCHR, *Mid-year trends report 2021*, 11 de noviembre de 2021.

aniversario de la creación del Gobierno de Transición de Unidad Nacional, la ONU advirtió que los niveles de violencia en el país eran los más altos registrados desde el comienzo de la guerra, particularmente en los estados de Ecuatoria Central, Warrap, Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor, y solicitó al ejecutivo avances en la implementación del acuerdo de paz. El 15 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió por unanimidad el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (UNMISS) hasta el 15 de marzo de 2022 y exigió a todas las partes en conflicto el cese inmediato de los enfrentamientos y el inicio de un diálogo político. Asimismo, amenazó con imponer nuevas sanciones y exigió que todos los Estados miembros cumplan con sus obligaciones de prevenir el suministro, venta o transferencia de armas al país, debido al embargo de armas. Posteriormente, durante el mes de mayo se produjo una nueva escalada de violencia en el país –la peor registrada en el año– que dejó más de 400 personas muertas en diferentes eventos violentos. En el área administrativa del Gran Pibor, en la zona de Gumuruk, entre el 10 y el 17 de mayo se registraron enfrentamientos entre miembros de comunidades lou nuer y dinka, por un lado, y murle, por otro, en los cuales más de 150 personas perdieron la vida. Por otro lado, en la región de Ecuatoria Central también se registró un aumento de los ataques a lo largo de rutas comerciales claves contra civiles y vehículos comerciales atribuidos al NAS. Estos hechos provocaron que a finales de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución por la que prorrogó el embargo de armas y las sanciones contra Sudán del Sur por un año, medida que fue cuestionada por el Gobierno sursudanés argumentando que ponía en peligro los progresos del acuerdo de paz y el equipamiento de sus Fuerzas Armadas para la defensa nacional.

En Sudán del Sur se mantuvieron las dinámicas de violencia e inestabilidad que afectaron principalmente a las regiones de Ecuatoria Central y Occidental, Jonglei, la Zona Administrativa de Pibor y Alto Nilo

En medio del deterioro de la situación de seguridad, entre el 15 y el 18 de julio se celebró en Roma una nueva ronda de conversaciones de paz entre el Gobierno de Transición y las facciones de la SSOMA dirigidas por Paul Malong y Pagan Amum.. Sin embargo, los intentos de reiniciar las conversaciones de paz entre el Gobierno y la facción SSOMA liderada por Cirillo permanecieron estancados, lo que contribuyó al mantenimiento de la violencia. Asimismo, a las tensiones por la lentitud en la implementación del acuerdo de paz y a las negociaciones a dos bandas entre las diferentes facciones del SSOMA, en agosto se añadió una **división dentro del movimiento del SPLA-IO dirigido por Riek Machar que sumó una nueva crisis en el país**. Miembros del SPLA-IO anunciaron, mediante la Declaración de Kitgwan, la destitución de Machar como líder del movimiento y nombraron en su lugar a Simon Gatwech Dual como líder interino, lo cual abrió

un periodo de luchas y enfrentamientos armados en el estado de Alto Nilo entre las fuerzas leales a Machar y la disidencia comanda por Dual, autodenominada facción “Kitgwan”, con un balance de decenas de muertes. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) pidió al SPLM-IO el cese de las hostilidades dentro de su grupo, pero las hostilidades se mantuvieron en septiembre. El presidente Kiir inició en octubre conversaciones con la facción “Kitgwan”, lo cual aumentó las tensiones dentro del Gobierno de Transición, debido al desacuerdo de Riek Machar. Hasta el cierre de año se siguieron registrando enfrentamientos intercomunitarios en el país, agravando la crisis humanitaria, incrementada por los efectos de las inundaciones que se registraron en el país en octubre y noviembre, las más devastadoras de los últimos 60 años. A finalizar el año, Amnistía Internacional denunció que la violencia en el país, dirigida principalmente contra los civiles, podría equivaler a crímenes de guerra.

Por último, resulta significativo resaltar que en **materia de violencia sexual**, la UNMISS denunció un número preocupante de actos de esta naturaleza perpetrados por todas las partes en el conflicto. Frente a ello, el Ejecutivo sursudanés presentó el 19 de junio el plan de acción para las Fuerzas Armadas sobre la lucha contra la violencia sexual relacionada con el conflicto. El mismo unifica los planes de acción del Ejército y del SPLA sobre la prevención y la eliminación de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)- , milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

El conflicto armado en Libia registró un significativo descenso en los niveles de violencia y letalidad durante 2021 en comparación con años anteriores, en el marco de la implementación del acuerdo de cese el fuego suscrito entre las principales partes contendientes en Ginebra el 23 de octubre de 2020. Según los datos del centro de estudios ACLED, en 2021 murieron un total de 115 personas a causa de diversos episodios de violencia, una cifra significativamente menor a la registrada el año anterior, en el que perdieron la vida casi 1.500 personas, y a la de 2019, cuando se contabilizaron más de 2.000 personas fallecidas a causa de las hostilidades. Pese a la innegable reducción en los enfrentamientos, a lo largo del año se mantuvieron las incertezas sobre el devenir de Libia por el incumplimiento de otros aspectos del cese el fuego, las continuas denuncias sobre abusos y múltiples formas de violencia por parte de diversos actores armados y por las crecientes tensiones y vaivenes del proceso político. Al finalizar 2021 se imponía un clima de incertidumbre sobre el futuro del país ante la suspensión de las elecciones que debían celebrarse el 24 de diciembre.⁷³

A nivel general, el principal cambio en las dinámicas del conflicto armado en 2021 respecto al año anterior fue la suspensión de las hostilidades entre las fuerzas del GNA, el Gobierno basado en Trípoli –apoyado por Turquía–, y las fuerzas afiliadas al exgeneral Khalifa

Haftar, conocidas indistintamente como LNA o ALAF y con especial fuerza en el este del país –respaldadas principalmente por Egipto, EAU y Rusia–, que habían protagonizado numerosos enfrentamientos en 2019 y 2020. **El cese de hostilidades transcurrió en paralelo a las negociaciones intra-libias sobre temas políticos, económicos y de seguridad auspiciadas por la ONU y diversos actores internacionales que, entre otras cosas, desembocaron en la conformación de un Gobierno de unidad a principios de año.**⁷⁴ El cese el fuego se mantuvo pese a las muestras de desconfianza iniciales, acusaciones cruzadas de incumplimientos y a que ambos sectores continuaron exhibiendo su poderío a través de desfiles armados. Los principales hechos de violencia registrados durante el año fueron choques y disputas entre algunos de los numerosos grupos armados y milicias activos en el país –los incidentes se produjeron principalmente en Trípoli y en la zona fronteriza con Chad–, asesinatos –entre los que destaca el de Mahmoud al-Werfalli, comandante de una milicia afiliada al LNA e investigado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional–, la detonación de restos de explosivos, y acciones armadas de ISIS. La filial de Estado Islámico en Libia reivindicó en junio su primer ataque después de varios meses en Sebha (sur), en el que resultaron muertos seis combatientes de una milicia próxima a ALAF. Tanto ISIS como Al-Qaeda en el Magreb Islámico continuaron operando en todas las regiones del país y lanzaron amenazas a civiles y personal de la ONU. Cabe destacar también que en 2021 se hallaron nuevas fosas comunes en áreas que estuvieron controladas por milicias próximas a ALAF. Amnistía Internacional también denunció que tribunales militares en el este del país sentenciaron a cientos de civiles críticos con ALAF entre 2018 y 2021, incluyendo 22 sentencias de muerte.

Pese al descenso de la violencia por el cese el fuego y la conformación de un gobierno de unidad, el futuro político de Libia parecía incierto al finalizar el año tras las suspensión de las elecciones

Paralelamente, y como en años previos, durante 2021 la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, continuó documentando desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, arrestos arbitrarios, violencia sexual asociada al conflicto, torturas, ataques contra personas defensoras de los derechos humanos por parte de diversos grupos armados y gravísimos abusos contra población migrante y refugiada. **En un contexto de auge de la ruta central del Mediterráneo como vía para alcanzar**

Europa, se incrementó de manera exponencial el número de personas migrantes y refugiadas detenidas en Libia –según datos de UNSMIL, en agosto había más de 5.800 personas migrantes y refugiadas retenidas arbitrariamente solo en centros oficiales, frente a un millar en enero. Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras documentaron y denunciaron los abusos contra este colectivo en centros de detención y MSF incluso suspendió sus actividades en dos de

73. Véase el resumen sobre Libia en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

74. Ibid.

estos recintos ante las vulneraciones identificadas. La Corte Penal Internacional también alertó que había recabado evidencias de graves crímenes en los centros de detención, incluyendo torturas y violencia sexual. En la misma línea se pronunció en octubre la comisión de investigación independiente sobre Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideró que los abusos contra las personas migrantes y refugiadas en el país podían considerarse crímenes contra la humanidad. Tras un año de trabajo en el que se analizaron hechos ocurridos en el país norteafricano desde 2016, la comisión también concluyó que existían evidencias de crímenes de guerra y que todas las partes involucradas en el conflicto –incluyendo terceros Estados, combatientes extranjeros y mercenarios– habían vulnerado principios del derecho internacional humanitario, en particular los relativos a la proporcionalidad y distinción entre civiles y combatientes. La comisión subrayó el grave impacto de la violencia en la población civil, especialmente entre 2019 y 2020, destacando las consecuencias de los ataques aéreos, los remanentes de minas y otros artefactos explosivos y la destrucción de escuelas y hospitales.⁷⁵

Entre las dificultades para garantizar un cambio de largo plazo en las dinámicas del conflicto en Libia cabe destacar el incumplimiento del embargo de armas al país impuesto en 2011 –en marzo un panel de expertos de la ONU consideró que la medida seguía siendo “totalmente inefectiva”– y la elevada presencia de fuerzas extranjeras y mercenarios en Libia. Pese a que el acuerdo de cese el fuego adoptado en octubre de 2020 preveía una retirada total del territorio libio –tierra, mar y aire– en un plazo de tres meses,⁷⁶ diversas fuerzas foráneas continuaron presentes en el país. Entre ellas, fuerzas turcas y mercenarios procedentes de Rusia, Siria, Chad y Sudán. A lo largo del año, Naciones Unidas insistió en la necesidad de poner fin a la intervención extranjera. En el marco de la segunda Conferencia sobre Libia celebrada en Berlín en junio, el secretario general de la ONU apeló a todos los actores implicados en el conflicto –internos y externos– a que acordaran un plan con un cronograma claro de repliegue. No fue hasta octubre que la Comisión Militar Conjunta 5+5 anunció un plan de acción para la retirada “en fases, balanceada y sincronizada” de mercenarios y fuerzas extranjeras. Sin embargo, no trascendieron los plazos para su implementación y la propuesta estaba pendiente de consideración y apoyo por parte de los actores internacionales involucrados en Libia.⁷⁷ También en octubre llegaron a Libia los primeros observadores de la ONU – de un equipo de 60 personas– que se encargarán de supervisar el cese el fuego tras la aprobación de este mecanismo de supervisión en abril (resolución 2570 del Consejo de Seguridad). Naciones Unidas continuó insistiendo también en la importancia

de activar procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de combatientes, de reforma al sector de seguridad (RSS) y de unificación de las fuerzas militares en Libia. Al finalizar el año, la tensión se incrementó ante la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones previstas. Las autoridades electorales no consiguieron publicar la lista definitiva de candidatos en medio de intensas disputas sobre la ley electoral y la elegibilidad de algunos postulantes, entre ellos figuras controvertidas como el general Haftar; Saif al-Islam Gaddafi, uno de los hijos de Muammar Gaddafi; y el primer ministro Dbeibbah, que había anunciado que no se presentaría a los comicios. La suspensión de la votación motivó un despliegue de vehículos y hombres armados en las afueras de Trípoli. Al acabar 2021, no había acuerdo sobre la nueva fecha de las elecciones, ni sobre la continuidad del mandato del gobierno de unidad, que expiraba con los comicios.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Síntesis:	En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

Persistió el conflicto armado en Colombia, con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, el grupo armado ELN, grupos paramilitares de diferente signo y grupos disidentes de la guerrilla de las FARC, desmovilizada tras el acuerdo de paz de 2016. Durante todo el año se registraron enfrentamientos

75. HCHR, *Libya: Evidence crimes against humanity and war crimes committed since 2016, UN report finds*, 4 de octubre de 2021; OHCHR, *Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya*, 1 de octubre de 2021. La comisión continuará su trabajo y se espera que presente un nuevo informe a mediados de 2022.

76. UNSMIL, *Agreement for a Complete and Permanent Ceasefire in Libya*, 23 de octubre de 2020.

77. UNSMIL, *United Nations welcomes the JMC's signing of Action Plan for the withdrawal of mercenaries, foreign fighters and foreign forces*, 8 de octubre de 2021.

entre todos estos grupos en diferentes zonas del país, especialmente en Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Norte de Santander, Santander y sobre todo en el Cauca, donde los enfrentamientos fueron constantes y se registraron una parte importante de las muertes como consecuencia de la violencia. Las disidencias de las FARC, el ELN y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo se enfrentaron durante el año por el control territorial de diversas zonas del país y se intensificaron los enfrentamientos en la costa pacífica. Se produjeron enfrentamientos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad y también atentados con explosivos, así como ataques contra infraestructuras. La Fundación Conflict Responses señaló que las disidencias de las FARC se habrían organizado en torno a 30 estructuras surgidas desde el año 2016, sin que pudiera hablarse de un proyecto de alcance nacional que las agrupe y coordine a todas, aunque algunos de estos grupos sí tendrían aspiraciones de establecer una coordinación de todos los grupos disidentes procedentes de la guerrilla desmovilizada, como Segunda Marquetalia o la facción liderada por Gentil Duarte.⁷⁸ Según el centro de análisis CERAC, entre junio y noviembre se produjo un aumento de los combates en los que participó el grupo armado ELN, con un total de 25 enfrentamientos en los que se constató la participación de este grupo. La misión de verificación de la ONU en el país constató una intensificación de la violencia en las zonas afectadas por el conflicto y que han sido priorizadas para la implementación del acuerdo de paz. La violencia provocó el desplazamiento forzado de población de forma constante y miles de personas tuvieron que huir de sus hogares como consecuencia del conflicto armado. Según la organización CODHES, **entre enero y noviembre de 2021 se desplazaron 82.846 personas, lo que supuso un aumento del 169% con respecto a las cifras de desplazamiento forzado en 2020 y la mayor cifra en los últimos cinco años.** Esta organización señaló que se trató en su mayoría de población afrodescendiente e indígena, siendo los departamentos de Nariño, Antioquia, Chocó y Cauca los más afectados. Además, el ELN persistió en la práctica del secuestro, tanto de civiles como de militares.

El conflicto armado también se vio agravado por la situación de tensión social y política vivida en el país tras el inicio de las protestas sociales conocidas como Paro Nacional. La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió un aumento de los enfrentamientos armados en varios municipios con presencia de actores armados que pudieron aprovechar el hecho de que las fuerzas de seguridad estuvieran concentradas en otros lugares en la contención de las protestas sociales. INDEPAZ identificó que durante 2021 se produjeron 88 masacres en las que murieron 313 personas, lo que supuso una reducción en el número de víctimas mortales con respecto al año anterior. Entre los enfrentamientos destacados del año cabe destacar en marzo, una operación de las fuerzas

de seguridad en el Guaviare contra el frente disidente de las FARC Gentil Duarte, durante la que murieron 12 personas. En junio se produjo un atentado contra instalaciones del Ejército en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. El Gobierno señaló que detrás del atentado se hallaría el ELN o disidentes de las FARC, aunque los primeros negaron la autoría de los hechos. Como consecuencia de la explosión de un coche bomba resultaron heridas 36 personas, 29 de ellas militares. Se trató del atentado más grave en el país desde el que tuvo lugar en Bogotá en enero de 2019 y que fue llevado a cabo por el ELN. Además, se registraron enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, el ELN y las fuerzas de seguridad venezolanas en la zona fronteriza entre los dos países en el departamento de Arauca en Colombia y el estado de Apure en Venezuela, que se intensificaron durante el año. Las Fuerzas Armadas venezolanas habrían intensificado sus operaciones militares contra la insurgencia colombiana. También se repitió la violencia contra excombatientes desmovilizados de las FARC y entre enero y septiembre se habían producido 44 asesinatos de personas desmovilizadas según la misión de la ONU en el país, un número ligeramente inferior al del mismo periodo en el año anterior. Desde la firma del acuerdo de paz se produjeron 292 asesinatos de excombatientes (283 hombres y 9 mujeres).⁷⁹ Además, según INDEPAZ, 168 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados durante 2021, de los que 26 eran mujeres. Esta organización destacó que el departamento de Cauca fue en el que se cometió un mayor número de asesinatos, en consonancia con la situación de creciente violencia que se vivió en este departamento durante el año.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (K), Frente Nacional de Resistencia (NRF)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en

78. Eduardo Álvarez Venegas. *Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución*, Fundación CORE, 2021.

79. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, *Informe del Secretario General*, S/2021/824, 24 de septiembre de 2021.

1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El año 2021 estuvo marcado en Afganistán por el ascenso al poder de los talibanes 20 años después de su derrota y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses, así como de otros países, tras dos décadas de ocupación. El 15 de agosto los talibanes tomaron el control de Kabul, capital del país, después de que el Gobierno encabezado por el presidente Ashraf Ghani abandonara el país y los intentos de llegar a un acuerdo negociado entre talibanes y Gobierno fracasaran.⁸⁰ Aunque durante todo el año la violencia fue en aumento, la ofensiva militar talibán se intensificó tras el anuncio por parte de EEUU de que la retirada militar completa del país concluiría el 11 de septiembre, cuatro meses después de lo inicialmente previsto en el calendario acordado por la administración Trump y los talibanes en su acuerdo de febrero de 2020. De acuerdo con las cifras de mortalidad relacionadas con el conflicto recopiladas por UNAMA, durante los seis primeros meses del año 1.659 civiles murieron como consecuencia de la violencia, lo que representó un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior y un cambio en la tendencia de reducción de mortalidad de los años anteriores. Según los datos del centro de investigación ACLED, durante 2021 murieron 41.731 personas como consecuencia de la violencia, pero 41.000 de estas muertes se produjeron entre los meses de enero y agosto, con una reducción drástica de la mortalidad como consecuencia de la violencia armada tras la toma del poder por parte de los talibanes. El año se iniciaba

El anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses dio lugar a una escalada en la ofensiva talibán en todo el país que culminó con la caída del Gobierno de Ashraf Ghani

con intensos enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas de seguridad afganas y con ataques por parte de talibanes infiltrados en las fuerzas de seguridad. Además, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo bombardeos aéreos que además de causar muertes entre las filas talibanes también provocaron numerosas muertes civiles, como el que causó la muerte de 18 civiles –la mayoría menores–, en la provincia de Nimroz. Los talibanes fueron expandiendo su control territorial y en febrero lograron controlar varios distritos en la provincia de Zabul e importantes victorias militares en la provincia de Kunduz. Durante los meses siguientes continuaron los enfrentamientos y ataques.

En abril, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que la retirada de las tropas estadounidenses se completaría antes del 11 de septiembre, dando lugar a una intensificación de la violencia que diferentes analistas interpretaron como la preparación de una ofensiva a gran escala en todo el país. A partir del 1 de mayo, fecha inicialmente acordada para la finalización de la retirada militar estadounidense, la ofensiva aumentó y múltiples bases y destacamentos de las Fuerzas Armadas fueron abandonados ante el avance talibán, que progresivamente fueron ganando el control de las zonas rurales del país. Miles de soldados se rindieron en los meses siguientes ante la falta de capacidad militar y el decreciente apoyo militar internacional, especialmente aéreo, en el que habían basado su capacidad de control del territorio. Gran parte del control territorial por parte de los talibanes se logró mediante acuerdos de alto el fuego locales tras los cuales los talibanes pasaban a controlar la zona y los militares a abandonar las instalaciones militares rindiéndose y marchándose. El avance talibán provocó el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas en todo el país y en las semanas previas a la toma de Kabul se estimaba que alrededor de 30.000 personas estaban abandonando el país semanalmente. En julio los talibanes iniciaron ataques contra la ciudad de Kandahar y consolidaron sus posiciones en varias zonas fronterizas del país. A pesar de que se retomaron ataques aéreos de las fuerzas afganas con apoyo internacional no se logró contrarrestar los avances terrestres.

La retirada de las tropas estadounidenses se había completado prácticamente en su totalidad lo que dejó en evidencia la debilidad de las Fuerzas Armadas afganas. A pesar de que oficialmente se señalaba que estaban integradas por 30.000 soldados, algunos medios de comunicación señalaron que la cifra real podría ser un tercio de la oficial. El 6 de agosto se produjo la toma de la primera capital de provincia por parte de los talibanes, que capturaron Zaranj, capital de Nimroz, dando paso en los dos días siguientes a la caída de otras cuatro capitales. Finalmente, tras la

80. Véase el resumen sobre Afganistán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

captura de Kandahar, Herat, Ghazni y otras importantes zonas, el 15 de agosto los talibanes consolidaban su control de la ciudad de Kabul al tiempo que el Gobierno caía, con la huida del país del presidente Ashraf Ghani y otros cargos de alto nivel. Pocos días antes, el Gobierno de EEUU había ordenado el cierre de su embajada y había trasladado su misión diplomática al aeropuerto.

En los días siguientes miles de personas, especialmente colaboradores de las tropas y gobiernos internacionales, trabajadores de organizaciones internacionales, así como activistas, defensores de derechos humanos y derechos de las mujeres y periodistas, trataban de huir concentrándose en el aeropuerto, desde donde algunos gobiernos llevaron a cabo evacuaciones aéreas y donde se produjeron enormes aglomeraciones y diferentes momentos de tensión. EEUU desplegó a 3.000 soldados en el aeropuerto. El 26 de agosto dos bombas explotaron en el aeropuerto en un atentado reivindicado por ISIS-K, causando la muerte de 200 afganos y 13 soldados estadounidenses. El 30 de agosto se produjo el último vuelo militar estadounidense desde Kabul, dando por concluida la presencia militar de EEUU en el país. A principios de septiembre los talibanes tomaron el control de la provincia de Panjshir, único foco activo de resistencia, aunque en los meses siguientes se produjeron enfrentamientos entre el Frente Nacional de Resistencia (NRF) y los talibanes en las provincias de Parwan, Panjshir y Baghlan. Los talibanes nombraron un Gobierno interino, encabezado por Mohammad Hassan Akhund, uno de los fundadores del movimiento talibán, como primer ministro y Abdul Ghani Baradar, negociador del acuerdo de 2020 con EEUU, como viceprimer ministro. Tras la marcha de EEUU y del resto de tropas internacionales del país, tanto el Gobierno estadounidense como el Banco Mundial y el FMI congelaron los fondos del país en el extranjero y suspendieron los pagos, dando inicio a una grave crisis humanitaria en el país, debido a la enorme dependencia de la economía afgana de la circulación de dinero efectivo y a la suspensión de la ayuda humanitaria internacional. Además, se produjeron diferentes manifestaciones y protestas sociales en contra del nuevo régimen, algunas de ellas protagonizadas por mujeres que denunciaban su exclusión del ámbito público tras la toma del poder por los talibanes, así como la prohibición del derecho a la educación para las niñas mayores de 12 años. La violencia armada se redujo drásticamente, pero se produjeron diferentes ataques contra las fuerzas talibanes reivindicados por ISIS-K, que se incrementaron notablemente a partir del mes de octubre, cuando un atentado contra una mezquita chif en la provincia de Kunduz causó la muerte de 40 civiles y otro atentado de las mismas características en la ciudad de Kandahar ocasionó la muerte de 50 civiles. En noviembre, un atentado contra el hospital militar Sardar Daud Khan en Kabul causó decenas de muertos. Naciones Unidas señaló que había presencia de ISIS-K en todas las provincias del país.

India (Jammu y Cachemira)

Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en Jammu y Cachemira continuó activo todo el año, aunque se redujo el impacto en términos de mortalidad como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados. De acuerdo con las cifras recopiladas por el centro de investigación South Asia Terrorism Portal, 274 personas murieron como consecuencia de la violencia. El centro de investigación ACLED recogió cifras similares, registrando un total de 290 fallecimientos. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos armados y operaciones de las fuerzas de seguridad que provocaron fallecimientos y decenas de personas heridas. Además, la situación política y social continuó condicionada por la retirada de la condición de estado y las continuas restricciones impuestas por el Gobierno para contrarrestar la actividad política y armada de la oposición cachemir. En abril se produjo una escalada de la violencia, después de que en un atentado contra un dirigente del partido en el poder BJP muriera un policía, lo que desencadenó que las fuerzas de seguridad mataran a tres insurgentes, incluyendo a dos de los supuestos responsables de la muerte del policía.

Estos acontecimientos derivaron en protestas y manifestaciones. En los días posteriores se produjeron numerosos arrestos de personas acusadas de pertenecer a organizaciones insurgentes y se repitieron los enfrentamientos armados que causaron la muerte de al

menos 10 personas. Además, medios de comunicación denunciaron que la policía les había advertido para que no realizaran coberturas en directo de operaciones de seguridad, en lo que consideraban un ataque a la libertad de prensa y de expresión.

En septiembre, tras la muerte de líder independentista cachemir Syed Ali Shah Geelani, de 92 años, que permanecía bajo arresto domiciliario desde 2010, el Gobierno decretó un bloqueo de las comunicaciones y el toque de queda ante el temor de que se produjeran protestas sociales, ya que la familia declaró que había sido enterrado por las fuerzas de seguridad, pocas horas después de su muerte, sin que se hubieran respetado sus deseos. En octubre escaló de nuevo la violencia, después de que se produjeran varios ataques contra población migrante no musulmana, fundamentalmente hindú y sij, por parte del grupo armado The Resistance Front (TRF), que habría sido creado tras la retirada del estatus de estado y que el Gobierno indio señala como vinculado a los grupos Lashkar-e-Taiba y Hizb-ul- Mujahideen. Tras los ataques el Gobierno indio detuvo a 700 personas para ser interrogadas y 13 personas murieron en operaciones de seguridad. Además, los ataques acrecentaron el temor entre la comunidad local hindú, que en la década de 1990 se desplazó masivamente como consecuencia de la violencia insurgente dirigida contra esta comunidad. Tras los ataques de octubre se produjeron nuevos desplazamientos de población. En noviembre, las fuerzas de seguridad arrestaron al activista y defensor de derechos humanos Khurram Parvez, cofundador de la organización Coalición de la Sociedad Civil de Jammu-Kashmir y presidente de la Federación del Sur Asia contra las Desapariciones Involuntarias.

La detención se produjo tras las denuncias por parte de su organización con respecto al asesinato de varias personas a manos de las fuerzas de seguridad, señalando que se trataba de civiles y no insurgentes, lo que desencadenó también manifestaciones de protesta. En este mes se registraron numerosos incidentes, incluyendo el asesinato de dos civiles por las fuerzas de seguridad en el marco de una operación contra la insurgencia en Srinagar. Las acusaciones de que se trataba de insurgentes derivaron en intensas protestas sociales. Posteriormente se produjeron varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados. En uno de ellos murió un comandante de Hizbul Mujahideen según señalaron fuentes militares. Por otra parte, el Gobierno indio anunció su intención de convocar elecciones a la asamblea legislativa una vez la comisión de delimitación hubiera concluido su tarea. Esta comisión inició su trabajo para redefinir las circunscripciones electorales tras la pérdida de la categoría de estado de Jammu y Cachemira. Diversos partidos políticos se mostraron contrarios a la convocatoria electoral, exigiendo el retorno al estatus de estado antes de la celebración de comicios.

India (CPI-M)

Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con el grupo armado naxalita CPI-M continuó activo durante todo el año 2021, aunque se consolidó la tendencia de reducción de la violencia y de la mortalidad asociada al conflicto iniciada en 2019 y se registró la cifra más baja de fallecidos como consecuencia del conflicto armado de las dos últimas décadas. De acuerdo con las cifras de mortalidad registradas por el centro de investigación South Asia Terrorism Portal, durante 2021 murieron 237 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad y atentados de la insurgencia naxalita. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos que afectaron a distritos de al menos nueve estados indios, aunque los más afectados fueron nuevamente los estados Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha y Telangana. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones contra el CPI-M y se produjeron arrestos durante todo el año. Además, se repitieron de forma esporádica los enfrentamientos, aunque de menor intensidad que en años anteriores y la insurgencia maoísta también llevó a cabo asesinatos selectivos de civiles acusados de colaborar con el Gobierno indio o los gobiernos estatales y las fuerzas de seguridad. En marzo murieron cuatro comandantes del grupo armado en un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad en el distrito de Gaya, estado de Bihar. Días después, el grupo armado señaló que estaba dispuesto a llevar a cabo conversaciones de paz con el Gobierno de Chhattisgarh siempre que se dieran las condiciones para ello, incluyendo el desmantelamiento previo de los campamentos militares en las zonas afectadas por el conflicto; la suspensión de la ilegalización del CPI-M y la puesta en libertad de los dirigentes encarcelados.

En noviembre se llevó a cabo una de las mayores operaciones contra la insurgencia naxalita en el estado de Maharashtra, en la que resultaron muertos 26 integrantes del grupo armado, entre ellos el dirigente Milind Teltumbde, miembro del comité central del CPI-M.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán (entre ellas, Tehrik-e Taliban Pakistan -TTP), insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado continuó activo en Pakistán y se registró un aumento de la violencia y de las víctimas mortales, debido fundamentalmente al incremento de acciones del grupo armado TTP, como consecuencia de la victoria talibán en Afganistán, que tuvo repercusiones en las dinámicas del conflicto en el país vecino. Así, la violencia armada fue aumentando progresivamente a lo largo del año, especialmente durante el tercer trimestre, coincidiendo con la toma de control talibán sobre el conjunto de Afganistán.⁸¹ En los últimos años se había reducido la actividad armada de la insurgencia como consecuencia de la intensificación de las operaciones de las fuerzas de seguridad desde 2014, tendencia que podría haber cambiado en la segunda mitad de 2021.

Según las cifras recogidas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, 853 personas murieron en el conjunto del país como consecuencia de la violencia armada, 605 si se excluyen las muertes en la provincia de Baluchistán. De la misma manera que en años anteriores, Khyber Pakhtunkhwa fue la provincia más afectada por la violencia, y especialmente los distritos de las antiguas Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), que son las áreas que concentran la actividad armada de la insurgencia talibán pakistaní. De acuerdo con las cifras recogidas por el centro de investigación ACLED, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, incluyendo los territorios FATA, se registraron 457 muertes durante 2021. Durante todo el año se produjeron operaciones de seguridad, asesinatos selectivos, atentados con explosivos y ataques armados por parte de la insurgencia. Además, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán sobre todo en los distritos de Waziristán Norte y Sur. Aunque se redujo el número de atentados suicidas en el país, que en años anteriores habían ocasionado un elevado número de víctimas mortales, se registraron algunos de consideración como el que llevaron a cabo insurgentes talibanes en abril en Quetta, capital de Baluchistán y que presumiblemente estaba dirigido contra el embajador chino en el país, que se hallaba en la ciudad. Cinco personas resultaron muertas como consecuencia de esta acción, que hirió también a muchas más. De hecho, los atentados contra trabajadores chinos en diferentes infraestructuras del país se repitieron en varios momentos del año. En julio, la explosión de una bomba en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa causó la muerte de nueve ingenieros chinos, en un atentado en el que también murieron dos civiles y dos soldados pakistaníes. La salida de las tropas de EEUU en Afganistán podría conllevar un aumento de los ataques contra trabajadores e infraestructuras chinas en Pakistán, que en los últimos años han sido constantes, tanto por parte de la insurgencia talibán, como por los grupos armados nacionalistas baluchis.

En octubre, el primer ministro Ismail Khan desveló que estaba llevando a cabo negociaciones con facciones talibanes activas en el país, que tuvieron como resultado un acuerdo de alto el fuego de un mes. Sin embargo, el acuerdo no impidió que continuaran los atentados por parte de la insurgencia que provocaron la muerte a varios miembros de las fuerzas de seguridad durante el mes de noviembre, en zonas cercanas a la frontera con Afganistán. Durante las negociaciones, el TTP habría presentado tres exigencias al Gobierno pakistaní: autorización para abrir una oficina política en un tercer país; revocar la fusión de las FATA con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa; y la imposición de la interpretación talibán del islam en Pakistán. El acuerdo había sido facilitado por el Gobierno talibán de Afganistán y se esperaba que durante el periodo de vigencia se llevaran a cabo negociaciones y que el acuerdo de alto el fuego pudiera ser prolongado si las negociaciones

81. Véase el resumen sobre Afganistán en este capítulo.

prosperaban. De hecho, se anunció la formación de una comisión negociadora con representantes de ambas partes. Según los talibanes pakistanés, el Gobierno también se había comprometido a poner en libertad a más de 100 prisioneros del grupo armado. No obstante, en diciembre se rompió el acuerdo con la ruptura unilateral del alto el fuego por parte del TTP, que acusó al Gobierno de haber violado el alto el fuego.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	
Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.	

Se mantuvo activo el conflicto armado en la provincia de Baluchistán y se registró un ligero repunte en el número de muertes como consecuencia de la violencia.

De acuerdo con las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal se registró la muerte de 313 personas. Por su parte, el Center for Research and Security Studies de Pakistán (CRSSP) señaló que 248 personas habían muerto por la violencia en esta provincia. Durante todo el año las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones contra los diferentes grupos insurgentes activos en la provincia, tanto de carácter nacionalista baluchi como los talibanes. Además, los grupos armados llevaron a cabo ataques y se registraron enfrentamientos armados. Según el CRSSP, el grupo armado Balochistan Liberation Army (BLA) fue la insurgencia más activa durante el año, aunque otros grupos como el Balochistan Republican Army (BRA) o el Baluch Liberation Front (BLF) también protagonizaron actos de violencia. Entre las acciones armadas más

destacadas del BLA se encuentran un ataque en febrero en el distrito Kohlu que causó la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad e hirió a otros seis y un atentado en septiembre en el distrito de Harnai causó la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad al estallar su vehículo. En mayo se anunció que uno de los comandantes más destacados del grupo armado, Mir Abdul Nabi Baduzai Bangulzai, había muerto en Kandahar, Afganistán, tras ser atacado por un grupo de hombres armados sin identificar. En mayo, la explosión de una bomba durante la convocatoria de una manifestación pro Palestina convocada por el partido Jamiat Ulema-e-Islam causó la muerte de siete personas sin que trascendiera la autoría. En octubre, una explosión en las inmediaciones de la Universidad de Baluchistán en Quetta al paso de un vehículo de las fuerzas de seguridad causó la muerte de un policía e hirió a otros 17. El atentado no fue reivindicado. También se constató la acción de ISIS en la provincia. En enero el grupo armado reivindicó el asesinato de 11 mineros de etnia hazara en la ciudad de Mach. La población hazara ha sido objeto de persecución por parte de ISIS por ser mayoritariamente de confesión chií. Los mineros fueron secuestrados previamente a su asesinato. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las violaciones de derechos humanos seguían repitiéndose en la provincia. El Consejo de Derechos Humanos de Baluchistán señaló que durante 2020 se habían producido 480 desapariciones forzadas, aunque las cifras podrían ser más elevadas, ya que se trataba de estimaciones conservadoras. Por otra parte, en julio el primer ministro afirmó que se estaban preparando conversaciones con la insurgencia baluchi y anunció el nombramiento de Shahzain Bugti, miembro de la Asamblea Nacional y nieto de Nawab Akbar Bugti, dirigente de la insurgencia baluchi fallecido, como su asistente especial para la reconciliación y la armonía en Baluchistán, aunque se desconocían las funciones que debía desempeñar. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de dirigentes políticos baluchis.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	
El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados	

del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Los niveles de violencia derivados del conflicto armado entre el Estado filipino y el grupo armado de oposición NPA fueron parecidos a los del año anterior.

A finales de 2020, las Fuerzas Armadas declararon que a lo largo del año 201 miembros del NPA habían muerto en combate, otros 264 habían sido arrestados y otros 7.615 se habían rendido o entregado a las autoridades. Según cálculos a partir de fuentes periodísticas, a finales de 2021 habían muerto alrededor de 200 personas y muchas más habían resultado heridas. Aunque se desconoce cuántos combatientes del NPA decidieron acogerse a los programas de desmovilización y reintegración del Gobierno en 2021, Manila sostiene que el ritmo siguió siendo muy alto. A modo de ejemplo, solamente en el mes de noviembre, más de 200 combatientes se rindieron en las provincias de Davao y Leyte. En cualquier caso, en varias ocasiones las Fuerzas Armadas declararon que seguía vigente su objetivo de erradicar militarmente al NPA antes de la finalización del mandato de Rodrigo Duterte en junio de 2022. En cuanto a los principales episodios de confrontación armada entre las Fuerzas Armadas y el NPA, cabe destacar la muerte de 25 combatientes a mediados de agosto en la provincia de Samar Oriental durante una operación en la que el Ejército utilizó drones para identificar los campamentos del NPA y aviones militares para bombardear las posiciones del grupo. Según el Gobierno, las tres provincias que conforman la isla de Samar (Samar Occidental, Central y Oriental) son una de las principales zonas de influencia del NPA. En Samar Oriental, por ejemplo, hay 29 municipios en los que el grupo mantiene una fuerte presencia, mientras que en otros 45 el Gobierno la ha eliminado o reducido a la mínima expresión. En los meses de septiembre y octubre también se registraron numerosos enfrentamientos entre las partes, con 22 y 19 víctimas mortales respectivamente. Entre los fallecidos en el mes de octubre cabe destacar la muerte de Jorge Madlos, también conocido como Ka Oris, portavoz del grupo y uno de los máximos dirigentes del NPA en las últimas décadas. Según el Gobierno, la muerte de Madlos es un duro revés para el NPA. En el mes de diciembre las Fuerzas Armadas también utilizaron apoyo aéreo en una operación contra unos 70 combatientes que se habrían reunido cerca de la ciudad de Iloilo para celebrar el 53º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Filipinas, y en la que hasta una veintena de combatientes pudieron

haber muerto, según el Ejército. El Gobierno siguió acusando al NPA de violar el derecho internacional humanitario (especialmente por la utilización de minas antipersonas y por sus ataques a población civil), mientras que tanto el movimiento comunista como numerosas organizaciones de derechos humanos siguieron acusando al Gobierno de ejercer la represión contra determinadas personas acusadas de pertenecer al NPA o a su entorno. En este sentido, en marzo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su alarma por la ejecución de nueve activistas a manos de fuerzas de seguridad del Estado. Según organizaciones de derechos humanos, cientos de personas han sido asesinadas acusadas de pertenecer a la insurgencia comunista desde la llegada al poder de Duterte en 2016.

Según un estudio⁸² sobre los patrones y dinámicas de la violencia ejercida por el NPA entre los años 2018 y principios de 2021, el grupo armado ha llevado a cabo una actividad armada regular y sostenida en 15 de las 17 regiones administrativas de Filipinas (en todas excepto en Metro Manila y en la Región Autónoma Bangsamoro del Mindanao Musulmán), siendo Bicol (Luzon), Caraga (Mindanao) y Visayas –este, centro y oeste– las regiones más afectadas. Estos datos son coherentes con las declaraciones del NPA durante el año, que dijo estar militarmente activo en 73 de las 81 provincias del país. En cuanto a su modus operandi, el 73% de sus acciones se llevan a cabo con armas pequeñas, y el 15% con artefactos explosivos improvisados o bien con minas antipersonas. La mayor parte de sus ataques se dirigen contra pequeños puestos policiales y militares o consisten en emboscadas contra convoyes de fuerzas de seguridad del Estado, aunque también llevan a cabo ataques contra población civil (normalmente funcionarios del Estado, líderes comunitarios acusados de colaborar con el Estado, que cometen “crímenes” contra la población o bien que rechazan colaborar con el NPA). El informe señala que el NPA también lleva a cabo numerosos ataques contra empresas, especialmente mineras, forestales, agrícolas, eléctricas y de telecomunicaciones. Un informe de las Fuerzas Armadas en 2017 estimaba que el NPA ingresaba alrededor de 50 millones de dólares al año por la extorsión a empresas agrícolas y mineras. Finalmente, cabe destacar que la agencia gubernamental antinarcóticos declaró que entre julio de 2016 y septiembre de 2021 habían muerto unas 6.200 personas en el marco de la llamada guerra contra las drogas que inició Rodrigo Duterte tras llegar al Gobierno, unas cifras inferiores a las que han ofrecido la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (8.663 entre julio de 2016 y junio de 2020); el Tribunal Penal Internacional (entre 12.000 y 13.000, entre julio de 2016 y marzo de 2019); o el centro de investigación ACLED (7.742 entre enero de 2016 y noviembre de 2021).

82. Anton Alifaldi, *Terrorism in the Philippines: Examining the data and what to expect in the coming years*, IHS Markit, 9 de marzo de 2021.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansar Khilafa, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

No trascendieron cifras de mortalidad sobre el conflicto que enfrenta al Estado filipino con varias insurgencias de signo islamista en Mindanao, pero varios análisis sugieren que la intensidad y letalidad de los enfrentamientos se redujo en comparación con el año anterior. En el mes de mayo, las Fuerzas Armadas declararon que desde principios de año habían muerto 41 combatientes del BIFF y otros cuatro de Abu Sayyaf. Los principales episodios de violencia se registraron en los meses de marzo, mayo y septiembre. En marzo, después de que el BIFF atacara varios destacamentos militares en Maguindanao, las Fuerzas Armadas lanzaron una ofensiva de gran envergadura en 10 municipios que provocaron la muerte de 24 combatientes y el desplazamiento de más de 66.000 personas en la región de Datu Saudi Ampatuan. En mayo, cinco miembros del BIFF murieron durante la contraofensiva del Ejército para recuperar el mercado público de la localidad de Datu Paglas (provincia de Maguindanao), que el grupo ocupó durante varias horas poco después de que el presidente Rodrigo Duterte hubiera visitado un campamento militar cercano. Después de los enfrentamientos, que provocaron la evacuación temporal

de parte de la población de Datu Paglas, el presidente instó a la Autoridad Transicional de Bangsamoro (el gobierno provisional de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada por el MILF) a controlar y combatir a los grupos armados que operan en la región para evitar la declaración de una ofensiva de alta intensidad por parte de las Fuerzas Armadas. En fechas parecidas, tres combatientes de Abu Sayyaf fueron abatidos por el Ejército en la localidad de Sumisip, en la isla de Basilan. En el mes de septiembre, 16 combatientes del BIFF (además de un soldado) murieron en varios enfrentamientos en la localidad de Shariff Saydona Mustapha, en la provincia de Maguindanao. Los combatientes formaban parte de la facción del BIFF liderada por Ustadz Karialan, una de las tres principales del grupo. Las otras dos facciones del grupo, lideradas respectivamente por Ismail Abubakar y Abu Turaife, sí declararon su lealtad a Estado Islámico, pero Karialan hasta el momento no lo ha hecho. El Ejército declaró que no estaba claro si el comandante Karialan se hallaba entre las personas que murieron. En este sentido, cabe señalar que durante el año murieron dos de los principales líderes del grupo Daula Islamiyah (también conocido como Grupo Maute), Usop Nasif – en abril, cerca de la ciudad de Marawi– y Salahuddin Hassan –en octubre, en la provincia de Maguindanao.

A pesar de todo lo mencionado, **tanto el Gobierno como algunos analistas señalaron en varias ocasiones que los distintos grupos armados de signo islamista que operan en Mindanao cada vez están más debilitados.** Según el Gobierno, tras los graves enfrentamientos entre el Estado y varios grupos armados que tomaron durante varios meses la ciudad de Marawi en 2017, el Estado ha incrementado de manera drástica y sostenida su presión militar contra dichos grupos, lo que habría comportado, entre otras cosas, el debilitamiento de sus fuentes de apoyo y financiación internacional, la reducción de las áreas de control o influencia de estos grupos, o el incremento en el número de desertiones, rendiciones o capturas de combatientes, lo que a su vez habría proporcionado valiosos datos de inteligencia sobre la actividad de los grupos. A finales de septiembre, el Gobierno declaró que unos 300 combatientes del BIFF se habían rendido desde principios de año. Además, en 2021 las Fuerzas Armadas tomaron algunos de los principales campamentos del BIFF o Abu Sayyaf. Según algunos medios de comunicación, en 2021 el BIFF atacó un mercado para abastecerse de alimentos, mientras que Abu Sayyaf habría atacado a población civil también para conseguir comida, un modus operandi que no era habitual tiempo atrás. Según estas mismas fuentes, el incremento de los ataques suicidas que se registró en la región desde el año 2019 podría guardar relación con este creciente debilitamiento de dichos grupos, al ser considerada una estrategia militar mucho más barata y efectiva que tratar de confrontar militarmente a las Fuerzas Armadas en pie de igualdad. En este sentido, en diciembre de 2021 el Gobierno detuvo a nueve mujeres presuntamente vinculadas a Abu Sayyaf (entre ellas tres hijas de Hatib Hajan Sawadjaan, líder

de Abu Sayyaf que murió en julio de 2020) acusadas de querer perpetrar atentados suicidas. Además, otras fuentes sugieren que las medidas de restricción de la pandemia de la COVID-19 estarían dificultando la llegada de combatientes extranjeros a Mindanao, un flujo que se habría incrementado tras el debilitamiento de ISIS en Siria e Iraq. En este sentido, el Gobierno de Filipinas, así como otros gobiernos del Sudeste Asiático, incrementó las medidas de seguridad en Mindanao tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán.

Finalmente, **algunos análisis señalan que el establecimiento de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, liderada de manera transitoria hasta 2025 por el líder del MILF, Ebrahim Murad, habría erosionado también la legitimidad y membresía de los grupos armados que se oponen al acuerdo de paz de 2014.** De hecho, en febrero el propio Ebrahim Murad declaró públicamente estar en conversaciones con dos de las tres principales facciones del BIFF para que unos 900 combatientes se unan nuevamente al MILF y apoyen los esfuerzos del gobierno de transición. El BIFF se escindió del MILF por su oposición a las conversaciones de paz que desembocaron en el acuerdo de paz de 2014. En mayo, sin embargo, la Autoridad de Transición de Bangsamoro declaró que el Gobierno no entablará negociaciones con las facciones del BIFF, Abu Sayyaf o Daula Islamiyah que ya han rechazado cualquier posibilidad de diálogo o cooperación con el Gobierno de Bangsamoro.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado

especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

La situación en Myanmar se deterioró notablemente durante el año como consecuencia del golpe de Estado que la cúpula militar del país perpetró el 1 de febrero.

El golpe de Estado se produjo horas antes de que el Parlamento resultante de las elecciones de 2020 se conformara. Los militares adujeron que durante las elecciones de noviembre se había producido fraude electoral. El Gobierno se había negado a posponer la conformación del Parlamento después de que la comisión electoral hubiera rechazado las acusaciones de fraude. Aung San Suu Kyi, consejera de Estado y líder de la NLD, partido que resultó vencedor por una amplia mayoría en las elecciones, fue detenida junto a otros dirigentes políticos como el presidente U Win Myint. Los militares tomaron el control de los poderes legislativo y judicial y bloquearon el acceso a internet en el país. Si bien inicialmente tras el golpe se anunció que se celebrarían nuevas elecciones en el plazo de uno o dos años, en agosto el general Min Aung Hlaing anunció que las elecciones y transferencia de poder se llevarían a cabo en agosto de 2023, sobrepasando el límite de dos años establecido por la Constitución. El general anunció la formación de un Gobierno interino encabezado por él mismo como primer ministro y al mismo tiempo jefe del Consejo de Administración del Estado, es decir, ocupando simultáneamente los puestos de jefe de Estado y de Gobierno. En septiembre el Gobierno se renombró como “gobierno de la unión”. En respuesta al golpe de Estado, el 16 de abril la oposición proclamó un Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), nombrado por los parlamentarios elegidos en los comicios. A principios de mayo anunció la formación de su brazo militar, la Fuerza de Defensa Popular (PDF por sus siglas en inglés), en un intento de agrupar y coordinar a las diferentes milicias y grupos surgidos como consecuencia del golpe de Estado.

Tras el golpe se iniciaron amplias protestas sociales que fueron violentamente reprimidas. Decenas de miles de personas participaron en manifestaciones masivas y en diferentes acciones de resistencia no violenta y se produjeron también huelgas de empleados públicos. El 27 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad mataron a 158 personas, incluyendo 14 menores, que participaban en protestas pacíficas contra el golpe. **Desde que se produjo el golpe militar 1.964 personas murieron como consecuencia de la acción represiva de las fuerzas de seguridad del Estado según la organización Assistance Association for Political Prisoners, quien también denunció que 8.100 personas habían sido detenidas con cargos en relación a su actividad política en contra del golpe de Estado.** El Mecanismo de Investigación

Independiente para Myanmar, establecido por Naciones Unidas, señaló que los primeros indicios apuntaban a que el régimen militar había cometido crímenes contra la humanidad en su represión de las protestas sociales. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas nocturnas, detenciones masivas, detenciones de familiares de opositores para su utilización como rehenes, tortura y uso de armamento pesado en ciudades, entre otras estrategias de represión. A lo largo del año se repitieron las manifestaciones y los actos de desobediencia civil, que tuvieron lugar en las principales ciudades, pero también en zonas rurales. Sin embargo, se produjo un progresivo incremento de las acciones armadas contra el Gobierno. El 7 de septiembre, el NUG declaró una “guerra defensiva popular” contra el Gobierno militar y un mes después anunció la formación de una estructura de comando para coordinar la PDF con los grupos armados étnicos. Además, decenas de civiles formaron milicias que llevaron a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad. Desde el golpe de Estado se habrían formado unos 250 grupos, de tamaño y capacidad de acción muy diversas. Según el análisis del centro de investigación International Crisis Group, los diferentes grupos armados y de la resistencia llevaron a cabo acciones contra el Gobierno que han incluido asesinatos –hasta el mes de septiembre se habrían producido 800 asesinatos de personas vinculadas al Gobierno o las fuerzas de seguridad o acusadas de ser informantes–; cientos de explosiones de dispositivos explosivos improvisados contra edificios gubernamentales, negocios de personas consideradas cercanas al régimen militar y puestos policiales o militares; tiroteos desde vehículos contra las fuerzas de seguridad; y sabotajes de infraestructuras, como torres de telefonía o electricidad o líneas ferroviarias. Además, también se formaron grupos paramilitares para proteger a personas vinculadas al Gobierno y las fuerzas de seguridad. Los grupos armados étnicos también continuaron sus acciones y siguieron las operaciones de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad contra ellos. En septiembre, enfrentamientos entre la milicia Chin Defence Force y las Fuerzas Armadas en el estado Chin, que causaron la muerte a 30 soldados, provocaron el desplazamiento de más de 10.000 personas, de las que gran parte se refugió en la India. Entre octubre y noviembre se intensificó la violencia en diferentes zonas del país provocando el desplazamiento forzado de decenas miles de personas. En el estado Kayah miles de personas tuvieron que desplazarse después como consecuencia de la intensificación de los bombardeos militares contra varias poblaciones y de los enfrentamientos con los grupos armados KNDF y KA. A finales de diciembre 35 civiles, incluyendo dos trabajadores humanitarios de Save the Children, murieron en una masacre de las fuerzas de seguridad en la localidad de Moso. También se produjeron importantes enfrentamientos en el estado Shan con el grupo armado MNDAA. Además, se reanudaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado Arakan Army en el estado de Rakhine por primera vez desde noviembre de 2020, cuando se inició de forma no oficial un alto el fuego

después de dos años de intensos enfrentamientos. En diciembre 15.000 personas se desplazaron en el estado Karen (5.000 refugiándose en Tailandia) como consecuencia de la ofensiva militar contra el KNLA y la PDF. **El autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional señaló que entre junio y agosto la acción de la oposición armada había causado la muerte a 1.710 soldados**, que 1.300 soldados habían muerto en octubre y más de 400 habían resultado heridos en enfrentamientos con los diferentes grupos de resistencia y que esta cifra representaría aproximadamente el doble de los soldados muertos en septiembre. Por otra parte, el golpe de Estado dio paso a una crisis económica y humanitaria de enorme gravedad, con un alarmante incremento de los niveles de pobreza y de falta de acceso a alimentos y servicios sociales básicos, en un contexto de creciente impacto de la pandemia por la COVID-19.

En lo que respecta a la situación de Aung San Suu Kyi, tras su detención y la de U Win Myint fueron acusados con varios cargos que incluyeron la sedición, la violación de las restricciones por la pandemia, así como corrupción y quebramiento de la ley de secretos oficiales entre otros. El Gobierno militar impuso numerosos obstáculos al contacto con sus abogados, que señalaron que se trataba de cargos inventados sin fundamento. Además, durante el juicio se impidió a los abogados de Aung San Suu Kyi hacer declaraciones a los medios, después de que estos revelaran que el presidente U Win Myint había declarado en el tribunal que los militares le habían amenazado con forzarle a dimitir durante el golpe, lo que demostraría la ilegalidad del acceso al poder por parte de la cúpula militar. En octubre se produjo la primera condena a un alto dirigente de la NLD, con la sentencia a 20 años de cárcel por alta traición a U Win Htein. El Gobierno también anunció que planeaba la disolución de la NLD alegando haber hallado evidencias de que el partido manipuló las elecciones de noviembre de 2020, sin embargo, trascendió que China habría manifestado que una de sus condiciones para seguir apoyando al régimen era la no disolución del partido de Aung San Suu Kyi. En diciembre Aung San Suu Kyi y U Win Myint fueron sentenciados a cuatro años de prisión, que posteriormente fueron recortados a dos en un indulto parcial por parte del primer ministro, el general Min Aung Hlaing. La sentencia señalaba que cumplirían su condena en su “actual ubicación de detención”, por lo que se desconocía si serían enviados a prisión o permanecerían bajo arresto domiciliario.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En un marco de parálisis de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado de oposición BRN, los niveles de violencia fueron ligeramente superiores a los del año anterior. Según el centro de investigación Deep South Watch, al finalizar el año habían muerto 113 personas y otras 190 habían resultado heridas. Respecto del año anterior, el número de personas fallecidas prácticamente fue el mismo (116 en 2020 y 113 en 2021), pero se incrementaron el total de víctimas (277 en 2020 y 303 en 2021) y se registró un incremento notable en el número de episodios de violencia, que pasaron de 335 a 481 (un aumento del 44%). **Es la primera vez desde el 2012, año en el que se registraron 1.850 episodios de violencia, en el que el número de incidentes se incrementa respecto del año anterior.** Cabe señalar, sin embargo, que en 2020 el impacto social de la pandemia de la COVID-19 fue superior al de 2021, especialmente por los confinamientos y otras medidas de restricción de la movilidad, y también que en abril de 2020 el BRN declaró un cese de hostilidades. **Con un total de 21.328 incidentes de violencia, desde el año 2004 hasta finales de 2021 el número de personas fallecidas a causa del conflicto armado era de 7.314, y el de personas heridas de 13.584.** Aunque durante el año un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que el 95% de los episodios de violencia en el sur del país estaban relacionados con el comercio ilegal y la delincuencia, en el mes de septiembre el Gobierno volvió a prolongar el decreto de emergencia que rige solamente en el sur del país y que, desde su imposición en 2005, ha sido renovado en 65 ocasiones. Este decreto, que otorga poderes especiales a las Fuerzas Armadas (como la detención de personas sin presentar cargos durante 30 días), fue criticado por grupos locales y organizaciones de derechos humanos. Además, según informes aparecidos en prensa, entre el 2004 y 2016 el coste de la actividad del Ejército en las tres provincias meridionales de mayoría musulmana, con unos 70.000 efectivos desplegados, fue de 8.600 millones de dólares. Según estos mismos informes, tras la llegada de la junta militar en 2014, el gasto militar en el sur del país se habría duplicado. En cuanto a

los episodios de violencia acontecidos durante el año, los meses con mayor mortalidad asociada al conflicto fueron enero y septiembre, con 14 víctimas mortales en cada uno de estos meses. En el mes de noviembre, el BRN, que según algunos medios cuenta con entre 8.000 y 9.000 miembros, habría llevado a cabo algunas acciones con el objetivo de influenciar el funcionamiento de las elecciones locales que se llevaron a cabo el 28 de noviembre. En buena parte de los ataques insurgentes que provocaron mayor atención mediática se utilizaron artefactos explosivos improvisados. En marzo, por ejemplo, ocho voluntarios fueron heridos tras estallar un artefacto explosivo, pocos días antes de que dos policías resultaran heridos en una explosión en una carretera. En julio, cinco policías fueron heridos en una explosión similar en el distrito de Sai Buri, en la provincia de Pattani. En septiembre, dos policías murieron y otros cuatro resultaron heridos tras ser detonado a distancia un artefacto explosivo. En varios momentos del año, también se produjeron ataques contra trenes. A mediados de diciembre, por ejemplo, tres personas resultaron heridas tras el estallido de una bomba en un tren con unos 300 pasajeros en la localidad de Khok Poh.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

El conflicto se mantuvo en niveles reducidos de combate directo y mortalidad, si bien aumentó la crisis militar entre Ucrania y sus aliados occidentales y Rusia, con un despliegue masivo de tropas rusas junto a su frontera con Ucrania y alertas de Ucrania y EEUU sobre una posible ofensiva rusa. En 2021 murieron 149 personas, según la base de datos del centro de investigación ACLED, en línea con el centenar registrado en 2020 (frente a los 400 de 2019). Frente a cierta reducción de la violencia en la segunda mitad de 2020 por el acuerdo en julio de ese año de medidas de fortalecimiento del alto el fuego, en 2021 se incrementaron las violaciones del alto del alto el fuego, con un mayor impacto en la población de la zona de conflicto y en la infraestructura civil. Asimismo, de las tres áreas designadas en años anteriores como zonas de retirada de fuerzas (Stanytsia Luhanska, Zolote y Petrivske), se registraron violaciones del alto el fuego a lo largo del año en Petrivske y en menor medida en Zolote. A finales de diciembre, Ucrania y las fuerzas de Lugansk y Donetsk acordaron adherirse de nuevo al alto el fuego de 2020.

La tensión militar internacional en torno al conflicto escaló en varios momentos, incluyendo en abril por el despliegue de varias decenas de miles de tropas rusas y equipamiento militar cerca de la frontera con Ucrania. Según datos de la agencia de información de inteligencia James publicados en el periódico británico *The Guardian*, Rusia desplegó 40.000 tropas en la región de Voronezh, otras tantas en Crimea y equipamiento militar en ambas zonas y en la región de Rostov. Entre el material desplegado se incluían tanques, artillería de largo alcance y sistema de misiles balísticos de corto alcance, y se fortaleció la flota del Mar Negro, según las mismas fuentes. Rusia enmarcó el despliegue en la realización de ejercicios militares así como en una respuesta a supuestas provocaciones y a una escalada militar de Ucrania, acusaciones desmentidas por los informes de observación de la OSCE. El despliegue generó alerta en Ucrania así como en la UE y EEUU, entre otros, sobre el riesgo de ofensiva. El Gobierno ucraniano redobló sus demandas de ingreso en la OTAN. En paralelo, Rusia advirtió que el ingreso de Ucrania en la OTAN tendría consecuencias irreversibles para la condición de Estado de Ucrania. Rusia retiró sus tropas a finales de abril, reduciéndose la tensión militar. En junio en la cumbre anual de la OTAN, esta continuó instando a Ucrania a reformas internas previas a la integración, sin invitarle aún a un plan de acción para la adhesión.

La crisis militar internacionalizada se intensificó de nuevo a finales de año, con alertas a partir de noviembre de representantes ucranianos y estadounidenses sobre el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania –entre 85.000 y 100.000 efectivos con armamento pesado, según fuentes de inteligencia de ambos países– y riesgos de una posible invasión a principios de 2022 – que según las mismas fuentes podría llegar a involucrar

a 175.000 tropas. Rusia lo calificó de desinformación y, a su vez, denunció la militarización de Ucrania con apoyo occidental, le acusó de movilizar armamento pesado hacia la línea del frente así como de enviar un buque militar hacia el estrecho de Kerch –que Ucrania alegó era un barco de salvamento. La marina ucraniana denunció que Rusia había bloqueado cerca del 70% del Mar Azov. Los presidentes ruso y estadounidense abordaron la crisis en una reunión por videoconferencia a principios de diciembre y de nuevo a finales de mes. Rusia reclamó garantías jurídicas de no ampliación de la OTAN hacia el Este de Europa –incluyendo Ucrania– y prohibición de establecimiento de tropas y armamento fuera de las fronteras de la OTAN de 1997, entre otras demandas. Además, señaló a Ucrania como responsable de la no implementación de los acuerdos de Minsk. Joe Biden advirtió con una respuesta económica y de otro tipo en caso de escalada militar sobre Ucrania. Ambos presidentes acordaron que sus equipos seguirían reuniéndose con el fin de desescalar la crisis y estaban previstas negociaciones entre EEUU y Rusia, la OTAN y Rusia y la OSCE y Rusia a comienzos de enero. La crisis militarizada tenía como foco la soberanía estatal e integridad territorial de Ucrania y, además, ponía de manifiesto un pulso entre Rusia y los países euroatlánticos en torno a la arquitectura de seguridad del continente, bajo amenaza militar rusa.⁸³

En relación a la dimensión humanitaria del conflicto, durante el año tan solo dos puntos de cruce siguieron abiertos (Stanytsia Luhanska y Novotroitske/Olenivka), por las restricciones impuestas por las fuerzas rebeldes. Como alertó OCHA, el cierre mayoritario de la línea de contacto dificultó a cientos de miles de personas el desplazamiento para el acceso a servicios esenciales, lo que llevó a una reducción drástica de los desplazamientos por esa vía, mientras se incrementó el tránsito a través de Rusia, más costoso para población en situación de vulnerabilidad. **OCHA alertó de las necesidades de alojamiento y de ingresos para la población desplazada por el conflicto.** 1,5 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno. Factores como el impacto económico de la pandemia, las restricciones de movimiento y el incremento del precio de la electricidad y de otros servicios, entre otros, agravaron su situación. Además, 3,4 millones de civiles continuaban afectadas por el conflicto, según ACNUDH. La población cerca de la línea de contacto afrontaba problemas como dificultades económicas y de acceso a transporte, agua potable y salud. Las fuerzas rebeldes de Donetsk y Lugansk impusieron nuevos decretos de reclutamiento militar forzado de hombres. Además, ACNUDH se hizo eco de denuncias de amenazas en las áreas bajo control rebelde contra quienes no solicitasen la ciudadanía rusa. Por otra parte, durante el año Ucrania incrementó la presión contra el principal partido opositor, Plataforma de Oposición-Por la Vida, aliado del Kremlin en Ucrania –y considerado como una vía para Rusia de influir en la dinámica política de

83. Véase el resumen sobre Ucrania en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Ucrania- contra su co-líder Víktor Medvedchúk, cercano al presidente ruso. Entre las medidas, el cierre en febrero de tres canales televisivos por decreto presidencial acusados de desinformación pro-rusa y embargo de activos de la familia de Medvedchúk ese mes, sanciones contra Medvedchúk en abril, y su arresto domiciliario en mayo, acusado de alta traición y saqueo de recursos en Crimea. El presidente ruso criticó su detención como una purga que amenazaba con convertir Ucrania en la antítesis de Rusia y advirtió que Rusia daría respuesta.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto armado entre Turquía y el PKK continuó activo en el sudeste de Turquía y en el norte de Iraq, donde el Ejército turco lanzó nuevas operaciones militares contra el grupo armado kurdo, mientras se intensificó la persecución política, judicial y policial contra actores políticos y sociales kurdos. Entre enero y mediados de diciembre fallecieron 391 personas por el conflicto (el 79% miembros del PKK), según ICG, que contabiliza la mortalidad asociada al conflicto con el PKK en Turquía e Iraq (376 en 2020). ACLED

contabilizó 296 muertes dentro de Turquía (545 en 2020). El Ejército llevó a cabo operaciones militares durante el año en el sudeste de Turquía, incluyendo zonas de las provincias de Mardin, Diyarbakir, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Hakkari, Tunceli y Sirnak. En septiembre, el Ministro de Interior turco, Suleyman Soylu, señaló que por vez primera el número de miembros del PKK dentro de Turquía era inferior a 200 –sin contraste independiente–. En su informe anual sobre Turquía, la Comisión Europea señaló que la situación de seguridad en las áreas fronterizas de Turquía continuó siendo frágil, con “actos terroristas recurrentes” del PKK.

Como en 2020 y en los últimos años, uno de los principales escenarios del conflicto entre Turquía y el PKK fue el norte de Iraq. ICG contabilizó allí 254 muertes asociadas al conflicto (65% del total). En febrero Turquía lanzó la operación militar aérea y terrestre Garra de Águila 2 contra la montaña de Gare (provincia de Duhok, norte de Iraq).⁸⁴ Incluía entre sus objetivos liberar 13 rehenes (identificados como militares y policías mayoritariamente) en manos del PKK desde 2015-2016 tras la ruptura del proceso de paz. La operación se saldó con la muerte de todos ellos. Turquía acusó al PKK de ejecutar a las 13 personas secuestradas antes de poder ser liberadas y el PKK responsabilizó de su muerte a los bombardeos de Turquía contra la base del PKK. Además de los rehenes, 48 miembros del PKK y tres soldados turcos murieron, según Turquía. El partido pro-kurdo de Turquía HDP reclamó a todas las partes una investigación y acceso al área a una delegación independiente. En abril y mayo se intensificaron de nuevo las operaciones militares terrestres y aéreas de Turquía en el norte de Iraq (Operaciones Garra-Ray y Garra-Relámpago). El PKK admitió 18 víctimas mortales propias en ambas operaciones y Turquía nueve. En meses posteriores continuaron los bombardeos de Turquía contra el PKK en áreas kurdas de Iraq, incluyendo contra la zona montañosa de Asos (provincia Suleimaniya y frontera con Irán). Algunos análisis señalaron en agosto que esos ataques suponían una expansión más allá de las áreas fronterizas, de hasta 200 kilómetros en territorio de Iraq. Por otra parte, también en el plano regional, Turquía continuó asociando a las fuerzas kurdas de Siria YPG con el PKK, entendiéndolas como un mismo actor. En ese contexto, Turquía y las YPG llevaron a cabo ataques y acusaciones mutuas, en un año en que entre septiembre y octubre se incrementaron las alertas sobre una posible operación a gran escala de Turquía contra áreas kurdas de Siria que finalmente no se materializó.⁸⁵

En el ámbito político y social se mantuvo e incluso agravó la persecución contra actores políticos y sociales kurdos de Turquía, con centenares de detenciones durante el año. Según el informe anual de la Comisión Europea sobre Turquía, en torno a 4.000 miembros y cargos del partido HDP estaban en prisión, incluyendo

84. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

85. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

parlamentarios/as electos. **Se agravó la situación ante el inicio de un proceso judicial contra el HDP, iniciado con la presentación de acusación por la Fiscalía contra la tercera fuerza política del país**, atribuyéndole el objetivo de atentar contra la unidad del Estado y la nación –y solicitando su cierre–, acusación aceptada a trámite por el Tribunal Constitucional. **ONG de derechos humanos continuaron denunciando graves vulneraciones. Turquía continuó rechazando implementar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativas a casos como el del líder opositor kurdo Selahattin Demirtaş. El TEDH dictaminó la liberación inmediata de Demirtaş** al considerar su prolongada detención preventiva como motivada políticamente. En su conjunto, el conflicto transcurrió en un contexto de agravamiento de la situación política y económica en Turquía, de demanda de elecciones anticipadas por la oposición, y de continuas detenciones de personas por supuestos vínculos con ISIS.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen ⁸⁶	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra

el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda

Yemen continuó siendo escenario de uno de los conflictos armados más graves a nivel mundial y las hostilidades siguieron afectando todo el país, sin que se lograra avanzar en un acuerdo de cese el fuego de alcance nacional. El conflicto armado provocó más de 22.000 víctimas mortales en 2021 (22.154 según las cifras del centro de investigación ACLED). Esta cifra es similar a la registrada en los dos años previos: 20.000 en 2020 y 23.000 en 2019. Civilian Impact Monitoring Project –iniciativa que investiga los impactos de la violencia en la población civil yemení para Naciones Unidas– documentó 2.508 víctimas civiles en 2021, principalmente a causa de ataques aéreos, fuego de artillería y armas ligeras. De este total, al menos 769 personas perdieron la vida, incluyendo 131 menores y 56 mujeres.⁸⁷ Los datos revelaron un significativo aumento de las víctimas civiles en el último trimestre del año. La violencia continuó motivando masivos desplazamientos de población, sobre todo de carácter interno y en muchos casos reiterados. Solo en Maarib, una de las zonas más afectadas por los enfrentamientos en 2021, entre enero y noviembre más de 65.000 personas –unas 10.000 familias– se habían visto obligadas a abandonar sus hogares.⁸⁸ El conflicto armado amenazaba con desembocar en un total colapso económico y siguió agravando la dramática situación humanitaria en el país. Según los datos de OCHA, al finalizar 2021 más de 20 millones de yemeníes requerían ayuda humanitaria, la mitad con carácter urgente. Durante el año Naciones Unidas reiteró sus denuncias sobre la situación de los menores. En un informe publicado en agosto sobre hechos ocurridos en 2019 y 2020, la ONU identificó 8.526 vulneraciones graves contra niños y niñas perpetradas

86. En ediciones anteriores del informe el conflicto armado protagonizado por los al-houhtistas y el de AQPA se abordaban por separado. Este año se analizan conjuntamente por la convergencia en las dinámicas de conflictividad.

87. Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), *Civilian impact incidents and civilian casualties per hub per month y CIMP Quarterly reports - 2021*, 1 de febrero de 2022.

88. OCHA Yemen, “Aid agencies ramp up aid efforts in Ma’rib as tensions persist”, *Humanitarian Update no.11*, noviembre de 2021.

por diversos actores armados del conflicto, la mayoría de ellas relacionadas con la denegación de acceso de ayuda humanitaria, reclutamiento forzado, o hechos de violencia que resultaron en la muerte o heridas a menores. El total de menores fallecidos entre 2019 y 2020 –principalmente a causa de ataques de mortero y artillería, batallas con armas ligeras y remanentes de explosivos– asciende a 2.612, de los cuales 1.889 niños y 723 niñas.⁸⁹

Respecto a la **evolución de las hostilidades**, los enfrentamientos de los al-houthistas con las tropas gubernamentales –apoyadas por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita– y otras fuerzas del frente anti al-houthistas –incluyendo los separatistas del sur y fuerzas tribales– se produjeron en múltiples frentes. Uno de los más activos del año fue Maarib, en especial a partir de febrero, cuando los al-houthistas intensificaron su ofensiva para intentar controlar esta zona, el último bastión del Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi en el norte del país y donde se ubican importantes pozos petroleros. Las hostilidades en torno a Maarib oscilaron en intensidad y se recrudecieron en octubre, después de que los al-houthistas consolidaran su control en la adyacente región de al-Bayda. Otros focos de la disputa fueron al-Dhala, Taiz, Hajja, Shebwa, Lahj, al-Bayda y también Hodeidah. En esta última localidad, el sorpresivo repliegue de fuerzas aliadas a Arabia Saudita y al Gobierno de Hadi –las Joint Resistance Forces– llevaron a un rápido despliegue de los al-houthistas en las posiciones abandonadas. La misión de la ONU que supervisa el cumplimiento del acuerdo sobre Hodeidah (UNMHA) –uno de los componentes del Acuerdo de Estocolmo de 2018– aseguró que no había sido informada del repliegue, que modificó la correlación de fuerzas en terreno.

En las semanas siguientes se produjeron nuevos enfrentamientos, los peores en la costa del Mar Rojo desde 2018, incluyendo ataques aéreos saudíes en apoyo a sus fuerzas aliadas en Hodeidah y también en otras zonas como Sanaa, Saada y Maarib. Durante todo el año, los al-houthistas lanzaron ataques transfronterizos hacia territorio saudí. **Los intentos por propiciar un cese el fuego en todo Yemen continuaron bloqueados en 2021**, pese a las gestiones desplegadas por la ONU y por Omán, y a la mayor iniciativa diplomática exhibida por EEUU.⁹⁰ Después de que la administración de Donald Trump declarara a los al-houthistas como grupo terrorista a

El nuevo enviado especial de la ONU para Yemen alertó sobre la deriva del conflicto, ante la persistente violencia y el riesgo de que la confrontación evolucione a una disputa aún más fragmentada

principios de 2021, el nuevo Gobierno de Joe Biden revirtió esta decisión, suspendió temporalmente la cooperación militar con Riad –en concreto en lo que respecta a las “operaciones ofensivas” de la coalición liderada por los saudíes– y nombró a un enviado especial para Yemen. Sin embargo, al finalizar el año y tras numerosas reuniones con actores locales y regionales con intereses en el conflicto, se mantenían las distancias entre el Gobierno de Hadi respaldado por Arabia Saudita y los al-houthistas. Estos últimos reiteraron su exigencia de apertura del puerto de Hodeidah y el aeropuerto de Sanaa, junto a la retirada de fuerzas foráneas del país, como precondition para el diálogo.

En paralelo, **durante 2021 se mantuvo activo un segundo eje de confrontación en el país, entre el Gobierno de Hadi y las fuerzas del Southern Transitional Council (STC)** –separatistas de la zona meridional–, pese al Acuerdo de Riad suscrito entre las partes en 2019 y la conformación de un gobierno de unidad a finales de 2020. A lo largo de todo el año se evidenciaron las tensiones entre estos sectores, con acusaciones cruzadas de designaciones unilaterales en puestos de gobierno o de seguridad, duras críticas del STC a Hadi y su entorno, una creciente concentración de tropas y vehículos pesados por parte de ambos bandos en la región de Abyan y periódicas manifestaciones en el sur de Yemen por el incremento de precios, los cortes de electricidad y problemas en la distribución de agua, ayudas y servicios médicos. Pese a los intentos de mediación de Riad, las protestas se intensificaron a partir de septiembre, derivando en choques con las fuerzas de seguridad con varias víctimas mortales.

También hubo otros hechos de violencia, incluyendo ataques con coche bomba. Adicionalmente, **durante 2021 continuó activo el grupo armado al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)**, aunque sus actividades quedaron eclipsadas por el resto de dinámicas de violencia y conflicto en el país. Según trascendió, durante el año fuerzas de AQPA se enfrentaron con las Security Belt Forces y otros grupos próximos a EAU y a Arabia Saudita en las regiones de Shebawah y Abyan y con los al-houthistas en al-Bayda.⁹¹ Algunos análisis subrayaron el declive del grupo –la frecuencia de sus operaciones sería menos del 10% respecto al punto más alto de actividades en 2017–, aunque no su desaparición.⁹² AQPA mantendría su implantación en la zona centro y este del país y, según estimaciones de la ONU, contaría con unos 7.000 combatientes. Mientras, la filial de ISIS se habría debilitado significativamente

89. UN Report of the Secretary General, *Children and armed conflict in Yemen*, S/2021/761, 27 de agosto de 2021.

90. Véase el resumen sobre Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

91. UN Security Council, *Twenty-eighth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities*, S/2021/655, 21 de julio de 2021.

92. Elizabeth Kendall, *Where is AQAP Now?*, Sanaa Center, 21 de octubre de 2021.

en los últimos años a causa de sus enfrentamientos con los al-houthistas y AQPA y contaría solo con unos cientos de milicianos.⁹³

En este contexto, al finalizar el año **el nuevo enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, alertaba sobre la deriva alarmante en el país, fruto de la escalada militar y la continua violencia y el riesgo de que la confrontación deviniera en un conflicto armado aún más fragmentado** y sangriento. Una de las principales inquietudes era Maarib, por el aumento de las hostilidades y la posibilidad de que los combates en la ciudad derivaran en una guerra urbana con consecuencias aún más graves para la población civil.

Asimismo se alertó sobre el creciente número de prisioneros retenidos por las partes en conflicto, por las severas consecuencias económicas de la crisis y por la drástica regresión en los derechos de las mujeres a causa del conflicto.⁹⁴ Finalmente, y en esta misma línea, cabe destacar que la comisión de investigación de expertos independientes sobre Yemen del **Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en septiembre su cuarto informe, subrayando el amplio abanico de abusos perpetrados por los diversos actores implicados en la contienda**: ataques que vulneran los principios más básicos del derecho internacional humanitario, obstáculos para el acceso de comida y productos sanitarios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, torturas, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, entre otras prácticas.

La comisión también deploró que, pese a las denuncias y llamamientos realizados en los últimos años, terceros países –entre los que menciona a Canadá, Francia, Irán y Reino Unido– continuaran con el suministro de armas y el apoyo militar a las partes del conflicto, contribuyendo así al ciclo de violencia y al sufrimiento de la población yemení. Ante las evidencias, la comisión llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a derivar el caso yemení a la Corte Penal Internacional para asegurar que no habrá impunidad para los abusos más graves.⁹⁵ Sin embargo, el mandato de la misión –que inició su trabajo de investigación en 2017– no fue renovado en octubre, en una decisión que fue considerada como un severo retroceso para las víctimas del conflicto armado y para las perspectivas de rendición de cuentas, y como un reflejo de la falta de voluntad política para abordar la situación en Yemen.⁹⁶ Según trascendió, Arabia Saudita –señalada expresamente en los últimos años por su responsabilidad en las víctimas civiles del conflicto yemení– desplegó una combinación de amenazas e incentivos para bloquear el trabajo de la comisión.⁹⁷

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnaf Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado que se desarrolla principalmente en el Sinaí entre las fuerzas de seguridad egipcias y el grupo armado Estado Islámico (ISIS) presentó unos niveles de violencia similares o relativamente inferiores a los del año anterior, con periódicos incidentes de baja intensidad. El análisis del conflicto continuó viéndose afectado por la falta de acceso de periodistas e investigadores independientes y por informaciones imprecisas sobre el impacto de algunos hechos de violencia. Pese a ello, recuentos informales a partir de los datos disponibles apuntan a un balance de más de 150 personas fallecidas en diversos incidentes a lo largo del año. El centro de estudios ACLED, en tanto, contabilizó más de 220 muertes en Egipto en 2021

93. Kali Robinson, *Yemen's Tragedy: War, Stalemate, and Suffering*, Council on Foreign Relations, 2 de septiembre de 2021.

94. OSESGY, *Briefing to United Nations Security Council by the Special Envoy for Yemen*, 14 de diciembre de 2021.

95. OHCHR, *UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen presents its fourth report to the Human Rights Council: A nation abandoned. A call to humanity to end Yemen's suffering*, 14 de septiembre de 2021.

96. OHCHR, *Statement by Group of Experts on Yemen on HRC rejection of resolution to renew their mandate*, 8 de octubre de 2021.

97. Stephanie Kirchgaessner, "Saudis used 'incentives and threats' to shut down UN investigation in Yemen", *The Guardian*, 1 de diciembre de 2021.

como consecuencia de enfrentamientos y detonaciones de explosivos. Estas cifras son coincidentes con las observadas el año anterior a partir de recuentos informales –entre 150 y 200 personas fallecidas–, pero menores si se tienen como referencia los datos de ACLED, que en 2020 identificó más de 600 muertes. Pese a las dificultades de precisar el balance, los datos apuntan a unos niveles de violencia más bajos que en años previos, en los que se constataron unas cifras de letalidad mucho más elevadas.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, la violencia se manifestó en forma de acciones armadas de ISIS contra las fuerzas de seguridad o equipamiento militar, operaciones de las fuerzas de seguridad contra el grupo armado, atentados explosivos detonados a distancia, emboscadas, acciones de francotiradores, ofensivas contra gaseoductos y ataques contra población civil, incluyendo asesinatos y secuestros. Durante 2021 destacaron las informaciones sobre incidentes violentos protagonizados por ISIS y milicias tribales progubernamentales. ISIS continuó difundiendo imágenes y videos de ejecuciones de milicianos tribales y de civiles como vía de propaganda y terror. Los hechos de violencia continuaron concentrándose en localidades como Al Arish, Rafah (fronteriza con Gaza), Sheikh Zuweid y Maghara (centro Sinaí). Las autoridades egipcias anunciaron la construcción de un muro para proteger la zona de Sharm el Sheikh (sur del Sinaí) de la violencia del conflicto armado, que tiene lugar sobre todo en el norte de la provincia. Asimismo, trascendió un acuerdo entre Israel y Egipto para fortalecer la presencia militar egipcia en el cruce fronterizo con la Franja de Gaza, Rafah, un movimiento que requería de acuerdo entre las partes por las disposiciones del tratado de paz de 1979. Durante 2021 el Gobierno también informó de la muerte de varios altos cargos de ISIS en acciones armadas y, en agosto, afirmó haber dado muerte a 89 presuntos miembros del grupo armado en una operación militar. **La difusión de un video por las propias Fuerzas Armadas en el que se registra la muerte de dos hombres desarmados motivó denuncias de organizaciones de derechos humanos, que alertaron sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad bajo acusaciones de “terrorismo”.** Human Rights Watch denunció en un informe que muchos supuestos militantes fueron ejecutados sin suponer una amenaza para las fuerzas de seguridad o cuando ya estaban en custodia y también alertó que en 2021 el Ejército egipcio continuó demoliendo centenares de viviendas en el marco de su lucha contra ISIS, una práctica que podría constituir un crimen de guerra.⁹⁸

Durante 2021 el Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi

fue objeto de numerosas críticas por la situación de derechos humanos en el país.⁹⁹ En este contexto, pese a los anuncios de que no habría más “cheques en blanco” para al-Sisi, **el nuevo Gobierno de EEUU decidió suspender solo parcialmente la ayuda militar a Egipto, transfiriendo más de la mitad de los fondos comprometidos –170 millones de dólares– para actividades de contraterrorismo, control de fronteras y no proliferación.** EEUU condicionó la entrega de los otros 130 millones a la respuesta sobre requerimientos en materia de derechos humanos, pero la medida generó decepción y críticas entre activistas de derechos humanos, que la consideraron más simbólica que sustantiva. Legisladores estadounidenses exigieron que se aclare si algunas de las armas proporcionadas por Washington han sido utilizadas en los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad egipcias. Análisis subrayaron que el Gobierno egipcio utiliza la amenaza yihadista para asegurar los flujos de ayuda militar, estigmatizar a la oposición política y dar cobertura a sus prácticas represivas y destacaron que los indicios de abusos no han frenado la cooperación por parte de países occidentales, como en el caso de EEUU.¹⁰⁰ En este contexto, **el Gobierno egipcio anunció el 25 de octubre el levantamiento del estado de emergencia vigente en el país desde abril de 2017,** cuando un ataque explosivo de ISIS contra dos iglesias coptas causó la muerte de 47 personas. El estado de emergencia, renovado trimestralmente desde entonces bajo el argumento de que era una medida necesaria para “combatir el terrorismo”, permitía a las autoridades imponer restricciones a derechos como la libertad de expresión y asamblea, llevar a cabo arrestos y registros sin órdenes judiciales y censurar medios de comunicación, entre otras prácticas. El presidente egipcio aseguró que la medida ya no era necesaria porque el país se había convertido en un “oasis” de estabilidad y seguridad en la región gracias a su población y sus “hombres leales”. Voces críticas recibieron el levantamiento del estado de emergencia con escepticismo y destacaron que por sí sola la medida no alteraba el sistema represivo vigente en el país.¹⁰¹ En las semanas siguientes, grupos de derechos humanos renovaron sus denuncias contra el Gobierno egipcio después de que éste aprobara una serie de medidas que, en la práctica, perpetúan las restricciones impuestas en el estado de emergencia y las medidas que han permitido intensificar la represión a la disidencia. A principios de octubre, el Gobierno también aprobó un decreto que transfiere poderes al Ministerio de Defensa para administrar la provincia de Sinaí, permitiéndole imponer toques de queda y restricciones de movimiento y comunicaciones. Al finalizar el año ISIS se mantenía activo y persistían los hechos de violencia en el Sinaí.

98. Human Rights Watch, *Egypt: ‘Shootouts’ Disguise Apparent Extrajudicial Executions*, 7 de septiembre de 2021; y “Egypt: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, enero de 2022.

99. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

100. Michael Wahid Hanna, *How the Counter-terrorism Imperative Has Warped U.S.-Egyptian Ties*, International Crisis Group, 13 de septiembre de 2021.

101. Vivian Yee, “Egypt’s Leader Ends State of Emergency, Says It’s No Longer Needed”, *The New York Times*, 25 de octubre de 2021.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

El conflicto armado en Iraq presentó unos niveles de violencia y letalidad de alta intensidad similares a los observados el año anterior y siguió caracterizándose por múltiples dinámicas de violencia protagonizadas por actores armados, locales y foráneos. Según los datos del centro especializado Iraq Body Count (IBC) en 2021 se registraron 1.610 personas fallecidas por el conflicto, de las cuales 941 eran combatientes y 669 civiles. En su balance IBC subrayó el gravísimo impacto de las hostilidades en los menores de edad, destacando que en 2021 perdieron la vida 70 menores, 10,4% de todas las víctimas civiles, un porcentaje mucho más alto que el registrado en 2020 y 2019 (3,5 y 3,8%, respectivamente). Los datos del centro de estudios ACLED arrojaron una cifra de letalidad más elevada, al identificar un total de 2.511 víctimas mortales en 2021 a causa de enfrentamientos, ataques explosivos

y otros hechos de violencia. Esta cifra coincide con el balance de letalidad del año anterior –2.500 personas– y es inferior al de años previos. Según los datos de OCHA, al finalizar el año 1,2 millones de personas permanecían en situación de desplazamiento interno y 4,1 millones requerían asistencia humanitaria.

La violencia en el país continuó estando protagonizada por múltiples actores. **El grupo armado Estado Islámico (ISIS) siguió activo durante todo el año y perpetró ofensivas principalmente en las provincias de Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa y Salah al-Din.** ISIS se enfrentó a las fuerzas de seguridad iraquíes y también a las fuerzas kurdas (peshmergas) y lanzó ataques contra líderes comunitarios y civiles acusados por el grupo de colaborar con las autoridades. ISIS lanzó uno de sus ataques más cruentos en Bagdad, en enero, cuando un doble ataque suicida causó 32 víctimas mortales y más de un centenar de heridas, en la ofensiva más grave en la capital iraquí en años. Un ataque similar de ISIS en julio, en vísperas de la festividad de Eid al Adha, provocó la muerte de otras 35 personas en Bagdad. Paralelamente, continuaron los ataques contra objetivos estadounidenses y de la coalición internacional contra ISIS liderada por EEUU, con periódicos lanzamientos de cohetes sobre el aeropuerto de Bagdad y Erbil y otras bases áreas militares (como la de Ayn al-Asad, en la provincia de Anbar). Muchas de estas ofensivas no fueron reivindicadas, pero otras sí fueron reclamadas o atribuidas a milicias pro-iraníes. En este sentido, **Iraq continuó siendo un escenario de confrontación indirecta entre Irán y Occidente, en particular con EEUU, como ha quedado especialmente en evidencia desde el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en una operación estadounidense en Bagdad en enero de 2020.** Durante 2021 también se informó de ataques contra milicias respaldadas por Irán en acciones atribuidas a EEUU.

Además, a lo largo del año se informó frecuentemente de hostilidades protagonizadas por Turquía y fuerzas del PKK desplegadas en el norte de Iraq con diversas víctimas mortales de ambos bandos,¹⁰² junto a enfrentamientos más esporádicos entre actores kurdos, principalmente PKK y KRG. Paralelamente, cabe destacar que a lo largo de todo el año prosiguieron las protestas, sobre todo en el sur del país, y se informó de asesinatos y otras agresiones contra activistas, periodistas y luego contra aspirantes a las elecciones de octubre. Estos comicios estaban previstos para 2022, pero se adelantaron en respuesta a la ola de protestas que sacudió al país en 2019, en el marco del conocido como “movimiento Tishreen”. Human Rights Watch alertó sobre el clima de impunidad y el fracaso de las autoridades iraquíes a la hora de perseguir a los responsables de los abusos contra manifestantes y voces críticas de las élites políticas y los grupos paramilitares; abusos que han incluido detenciones

102. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

arbitrarias, desapariciones y asesinatos extrajudiciales. HRW resaltó que entre finales de 2019 y 2020 murieron 487 manifestantes en Bagdad y ciudades del sur del país y que al finalizar 2021 el comité creado (en mayo de 2020) por el Gobierno iraquí para investigar estas muertes aún no había presentado sus resultados.¹⁰³

Más allá del clima de violencia persistente en el país, **la situación en Iraq experimentó una creciente tensión en el último trimestre con motivo del proceso electoral.** Los comicios, validados por los observadores de la ONU y la UE, contaron con una participación del 36%, la más baja desde que se instaló el nuevo sistema político tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003 y considerada como un reflejo de la desafección y apatía de los votantes iraquíes. A lo largo del año, sectores vinculados al movimiento Tishreen habían llamado a boicotear los comicios por diversas razones, entre ellas porque consideraban que carecían de legitimidad, no ofrecían igualdad de oportunidades y por los ataques contra activistas.

El primer ministro iraquí sobrevivió a un ataque con drones, en un contexto de creciente tensión por los resultados electorales

La votación –que se realizó con un nuevo sistema electoral– arrojó un resultado inesperado, otorgando la victoria al movimiento del clérigo shíí Muqtada al Sadr, que en agosto se retractó de su decisión de boicotear las elecciones y que pasó de 58 a 73 escaños. La principal fuerza perdedora de las elecciones fue Alianza Fatah, alineada con Irán –pasó de 48 a 18 escaños– que representa los intereses de grupos paramilitares creados en 2014 para apoyar la lucha contra ISIS. Pese a los resultados, análisis destacaron que Fatah mantenía capital coercitivo y capacidad de influencia en la formación del nuevo gobierno.¹⁰⁴ Tras las elecciones, un grupo de fuerzas shííes vinculados a las facciones armadas que sufrieron reveses electorales –incluyendo Alianza Fatah– cuestionaron los resultados de las elecciones, denunciaron fraude y durante semanas protagonizaron protestas en la Zona Verde de Bagdad que derivaron en hechos de violencia. Ante la muerte de dos manifestantes en choques con las fuerzas de seguridad a principios de noviembre, el líder de una de estas facciones, el grupo Asaib Ahl al-Haq, lanzó amenazas contra el primer ministro, Mustafa al-Khadimi.

Días más tarde, **al-Khadimi sobrevivía a un intento de asesinato –su domicilio fue objeto de un ataque con drones– que no fue reivindicado, pero que fue ampliamente atribuido a milicias shííes** y leído como un mensaje para que no repostulara al cargo. El incidente alentó muestras de apoyo internacional al premier y motivó que el jefe de las Brigadas al-Quds

de Irán, Email Ga’ani (sucesor de Soleimani) viajara a Bagdad para dejar patente su condena y explicitar que esta acción traspasaba las “líneas rojas” de Teherán.¹⁰⁵

Los resultados electorales fueron interpretados como una señal del deseo de la población iraquí de refrenar y dominar a los numerosos grupos armados que han proliferado en Iraq en los últimos años y que han caído en prácticas de extorsión, intimidación y asesinatos de civiles.¹⁰⁶ El clérigo al-Sadr, considerado como un líder nacionalista que recela tanto de la influencia de EEUU como de Irán en el país, se había mostrado partidario de poner el uso de las armas bajo control y crítico con las milicias que considera “indisciplinadas”, incluyendo algunas formalmente afiliadas al Estado iraquí (Unidades de Movilización Popular, UMP).

En noviembre instó a las milicias a desmantelarse y someterse al control del primer ministro y las instituciones.

Como señal de buena voluntad anunció la disolución de la Promise Day Brigade, un grupo armado leal al clérigo. Otra organización armada vinculada a al-Sadr, Saraya al-Salam –antes conocida como Ejército al-Mahdi– ya formaba parte de las fuerzas de Hashd al-Shaabi, organización formalmente bajo control del primer ministro creada hace años para institucionalizar el control de las fuerzas paramilitares. Al finalizar el año, tras rechazar las alegaciones de fraude, las autoridades electorales iraquíes ratificaron los resultados de los comicios, aunque persistía la incertidumbre sobre la formación de gobierno. El ex primer ministro Nouri al-Maliki, con el apoyo de otras fuerzas políticas, aparecía como uno de los candidatos con opciones para desafiar el dominio de al-Sadr. Finalmente, cabe destacar que en 2021 los Gobiernos de Iraq y EEUU continuaron el “diálogo estratégico” establecido el año anterior y acordaron que las tropas estadounidenses pondrían fin a su misión de combate en el país. Así, **a principios de diciembre se anunció que todas las fuerzas de EEUU en Iraq –unos 2.500 efectivos– se limitarían a partir de entonces a tareas de entrenamiento y asesoría.** Fuentes diplomáticas y de seguridad aclararon, sin embargo, que el anuncio no supone un cambio significativo en las actividades de las fuerzas estadounidenses en el país, que en los últimos dos años habían tenido un papel muy limitado en las operaciones de combate. Grupos paramilitares proiraníes criticaron la continuidad de las tropas estadounidenses en Iraq. En este contexto, continuaron los ataques contra objetivos de EEUU, incluyendo la embajada en Bagdad.

103. Human Rights Watch, *Iraq: Impunity for Serious Abuses*, HRW, 13 de enero de 2022.

104. Renad Mansour y Victoria Stewart Jolley, *Explaining Iraq’s election results*, Chatham House, 22 de octubre de 2021.

105. Nussaibah Younis, *Iraq election: How a failed assassination attempt could break the political deadlock*, European Council on Foreign Relations, 10 de noviembre de 2021.

106. Nussaibah Younis, *Iraq vote to restrain armed groups*, European Council on Foreign Relations, 15 de octubre de 2021.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ¹⁰⁷
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Durante 2021 la violencia directa asociada al conflicto palestino-israelí y a la ocupación israelí de territorio palestino se incrementó y provocó los peores niveles de letalidad de los últimos siete años. Según los datos de OCHA, las muertes ascendieron a 350 en 2021, de las cuales 339 eran palestinas y 11 israelíes.¹⁰⁸ Esta cifra representa un incremento significativo en comparación a lo registrado en los dos años anteriores –35 en 2020, 147 en 2019–, es similar a la contabilizada en 2018 –313– y la más elevada desde 2014.¹⁰⁹ La gran mayoría de las víctimas de 2021 se registró en mayo, después de que una serie de incidentes en Jerusalén Oriental derivaran en una intensa escalada de hostilidades en Gaza, mientras en paralelo se producían manifestaciones, enfrentamientos y hechos de violencia en Cisjordania y ciudades con alta presencia de población palestina con ciudadanía israelí. La movilización en distintos puntos de la Palestina histórica, pese al escenario de fragmentación

En tan solo 11 días los ataques israelíes en Gaza provocaron la muerte a 260 palestinos y palestinas, además de otras 2.200 heridas y más de 100.000 desplazadas

impuesto por la ocupación israelí, fue considerado como un hecho inédito, una señal de erosión del status quo y del hartazgo ante las múltiples formas de represión, desposesión y discriminación que padece la población palestina. Esta evolución se dio en un contexto de continuidad en las políticas israelíes pese al cambio de gobierno –en junio Benjamin Netanyahu fue reemplazado por un nuevo gobierno multipartidista liderado por el ultranacionalista Neftalí Bennet–, persistente división política de la dirigencia palestina y ausencia de perspectivas sobre un proceso de paz que ha devenido en irrelevante.¹¹⁰

Durante los primeros meses del año los focos de tensión más significativos se centraron en Jerusalén Oriental y estuvieron relacionados con los intentos de expulsión de familias palestinas del emblemático barrio de Sheikh Jarrah, amenazas de demoliciones de más de un millar de viviendas palestinas en la zona de Silwan, manifestaciones de judío-israelíes ultranacionalistas reivindicando Jerusalén como su capital y cánticos de “muerte a los árabes” en el centro histórico de la ciudad y la represión de palestinos y palestinas por parte de las fuerzas israelíes durante el Ramadán, incluyendo uso de la violencia en la Mezquita de al-Aqsa. Ante estos hechos, que resultaron en más de un millar de personas heridas –la inmensa mayoría palestinas– Hamas lanzó un ultimátum a Israel el 10 de mayo, exigiendo la retirada de sus fuerzas de la Explanada de las Mezquitas, de Sheikh Jarrah y la excarcelación de los palestinos detenidos en el marco de las manifestaciones. Horas más tarde, el grupo palestino lanzó varios cohetes desde la Franja a Jerusalén, hecho que dio paso a una intensa ofensiva por parte de Israel. **En tan solo 11 días, los ataques israelíes en Gaza –en el marco de la denominada Operación Guardián de los Muros– provocaron la muerte de 260 palestinos y palestinas**, de los cuales la mitad (129) eran civiles, entre ellos 66 menores de edad.¹¹¹

Otras 2.200 personas resultaron heridas en la Franja, incluyendo 685 menores y 480 mujeres, y unas 113.000 se vieron obligadas a desplazarse internamente a causa de la violencia. En numerosas ocasiones Israel no emitió alertas de evacuación para civiles y sus ofensivas también destruyeron numerosas infraestructuras –centros de salud, edificios residenciales, comercios, escuelas, sedes de medios de comunicación y la precaria red eléctrica– y afectaron a personal médico, incluyendo un alto responsable de la respuesta a la COVID-19 en Gaza que murió junto a otros 12 miembros de su familia.¹¹² En el mismo período, Hamas lanzó más de 4.000 cohetes hacia Israel que

107. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

108. OCHA OPT, *Data on casualties*, 01 enero de 2022.

109. En 2014, principalmente como consecuencia de una cruenta ofensiva israelí sobre Gaza, murieron un total de 2.329 palestinos y palestinas, mientras que otros 88 israelíes perdieron la vida en hechos de violencia en el mismo período.

110. Véase el análisis sobre Palestina e Israel-Palestina en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

111. OHCHR, *Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, A/76/433, 22 de octubre de 2021.

112. International Crisis Group y USMEP, *Beyond Business as Usual in Israel-Palestine*, Middle East Report no.225, 10 de agosto de 2021.

resultaron en la muerte de 12 personas, entre ellas dos menores.

Paralelamente, las protestas en Cisjordania por la ofensiva israelí en Gaza fueron reprimidas con fuego real por las fuerzas israelíes y derivaron en algunos enfrentamientos que solo en mayo resultaron en 34 víctimas mortales palestinas, la cifra más alta en un mes en toda una década,¹¹³ y en más de 1.700 heridas. Los hechos en Jerusalén, al-Aqsa y Gaza también motivaron numerosas manifestaciones de la población palestina con ciudadanía israelí en ciudades como Lod/al-Lid, Tel Aviv/Jaffa y Haifa, entre otras, y hechos de violencia inéditos en su extensión, que resultaron en la muerte de dos judío-israelíes y dos palestinos, además de decenas de personas heridas. Los incidentes incluyeron represión violenta de las protestas palestinas; ataques de ultranacionalistas judío-israelíes a población palestina, mezquitas y cementerios musulmanes ante la inacción de la policía israelí; y agresiones de palestinos a judío-israelíes y ataques incendiarios a sinagogas o coches policiales. Observadores destacaron que la violencia perpetrada por judío-israelíes fue significativamente menos perseguida: un 92% de las 2.142 personas detenidas por estos incidentes eran palestinos, y un 90% de las 170 personas contra las cuales se presentaron cargos eran palestinas.¹¹⁴ En este contexto, el 18 de mayo tuvo lugar una huelga sin precedentes en toda la Palestina histórica, que fue interpretada como una señal de unidad contra las políticas coloniales israelíes. En los meses siguientes se mantuvo el frágil cese el fuego en Gaza, pero continuaron produciéndose diversos hechos de tensión y violencia, tanto en la Franja, como en Cisjordania y Jerusalén Oriental.

A lo largo del año numerosos incidentes estuvieron asociados a la política de expansión de asentamientos ilegales y anexión de facto de territorios ocupados palestinos promovida por las autoridades israelíes, que a lo largo de 2021 anunciaron nuevos planes de ampliación que incluyen miles de viviendas. Expertos de Naciones Unidas y ONG de derechos humanos también **alertaron sobre el aumento de la violencia de colonos israelíes en 2021, en el nivel más alto de los últimos años, y denunciaron la complicidad de las autoridades israelíes** por su política de apoyo a los asentamientos y su inacción ante los numerosos abusos, que en algunos casos cuentan con la connivencia y apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes. Solo en los primeros diez meses del año se contabilizaron 410 ataques de colonos contra población palestina –agresiones, intimidaciones, tiroteos, vandalismo contra propiedades, destrucción de

árboles y cultivos, entre otras prácticas, especialmente en zonas rurales próximas a los asentamientos–, frente a 358 agresiones en 2020 y 335 en 2019. Una cuarta parte de los ataques en 2021 afectaron a personas y derivaron en la muerte de cuatro palestinos. La inmensa mayoría de los ataques de colonos quedan impunes –según la organización de derechos humanos israelí Yesh Din el 91% de las investigaciones entre 2005 y 2019 fueron cerradas por las autoridades israelíes sin cargos contra los colonos– y ante la falta de perspectivas de obtener justicia numerosos palestinos deciden no denunciar.¹¹⁵

Adicionalmente, a lo largo de 2021 Israel mantuvo su política de restricción de movimientos, intensificada con motivo de la pandemia de la COVID-19, con numerosas repercusiones para la población palestina. Las consecuencias incluyeron crecientes obstáculos para el acceso a la salud, en especial para las personas enfermas de Gaza pendientes de permisos de salida para someterse a tratamientos fuera de la Franja. Cabe destacar que durante el año **las autoridades israelíes también fueron acusadas de discriminación institucionalizada en sus políticas de respuesta al coronavirus**, en especial en lo que respecta a la vacunación de la población palestina de los territorios ocupados.¹¹⁶ **Israel también intensificó la persecución y criminalización de organizaciones de la sociedad civil palestina.**

En octubre, a través de una orden militar, el Gobierno israelí designó como terroristas a seis ONG palestinas destacadas en su trabajo en materia de derechos humanos –Adameer, al-Haq, Defense for Children in Palestine, Union Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development y Union of Palestinian Women Committees–, medida que supone la ilegalización de estas entidades, autoriza a la clausura de sus oficinas y detención de sus trabajadores y prohíbe el financiamiento y apoyo público a sus actividades. Esta decisión fue ampliamente denunciada a nivel internacional por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que consideraron que la medida se había visto favorecida por el fracaso de la comunidad internacional para confrontar los múltiples abusos a los derechos humanos cometidos por Israel.¹¹⁷ Cabe destacar que durante 2021, después de años de deliberaciones, la **Corte Penal Internacional ratificó su jurisdicción para investigar crímenes de guerra cometidos en los territorios ocupados palestinos y en marzo la fiscalía anunció el inicio de una investigación de hechos ocurridos a partir de junio de 2014.**

113. Al-Jazeera, “Israeli forces open fire on Palestinians; hundreds wounded”, *Al-Jazeera*, 9 de julio de 2021.

114. CG y USMEP, op.cit.

115. OHCHR, *UN experts alarmed by rise in settler violence in occupied Palestinian territory*, 10 de noviembre de 2021.

116. Amnesty International, *Denying COVID-19 vaccines to Palestinians exposes Israel's institutionalized discrimination*, 6 de enero de 2021; Human Rights Watch, *Israel's Discriminatory Vaccine Push Underscores Need for Action*, 19 de marzo de 2021. Para más información, véase también el observatorio *Conflictos, paz y COVID-19* de la Escola de Cultura de Pau.

117. Amnesty International y Human Rights Watch, *Israel/Palestine: Designation of Palestinian Rights Groups as Terrorists. Attack on the Human Rights Movement*, 22 de octubre de 2021.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

A una década de su inicio, el conflicto armado en Siria continuó caracterizándose por dinámicas de violencia que implicaron a numerosos actores armados locales, regionales e internacionales; enfrentamientos y ataques que afectaron a distintas zonas del país; elevados niveles de mortalidad y otras graves consecuencias en la población civil. Como en años previos, persistieron las dificultades para realizar un balance detallado del impacto de las hostilidades en el país. Pese a los umbrales divergentes ofrecidos por diferentes fuentes, en términos generales los datos recopilados confirmaron los altos niveles de letalidad del conflicto armado, aunque con cifras significativamente inferiores a las registradas en años previos. Según el seguimiento realizado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), en 2021 murieron al menos

3.882 personas a causa de las hostilidades, de las cuales 1.558 serían civiles, incluyendo 383 menores y 193 mujeres.¹¹⁸ Los informes periódicos del secretario general de la ONU constataron la muerte de 764 civiles en incidentes ocurridos en todo el territorio sirio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, entre ellas 205 menores y 86 mujeres, además de miles de personas heridas.¹¹⁹ Siguiendo la tónica de años previos, el balance de ACLED fue superior y apuntó a un total de 5.737 víctimas mortales a causa del conflicto sirio en 2021. La tendencia apunta a una reducción de la letalidad si se tienen en cuenta los gravísimos recuentos en el último lustro: entre 7.000 y 8.000 personas en 2020, 15.000 en 2019, 30.000 en 2018, 10.000 en 2017 y 17.000 en 2016. SOHR destacó que el balance de letalidad de 2021 era el más bajo desde el estallido de la revuelta contra al-Assad en 2011.

A lo largo del año, la ONU continuó documentando ataques deliberados o indiscriminados contra objetivos civiles y denunció que las partes del conflicto siguieron perpetrando –de manera sistemática– abusos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, secuestros, vulneraciones a la libertad de movimiento, manifestación y expresión, entre otros. Mujeres y niñas continuaron enfrentando múltiples formas de violencia de género, incluyendo matrimonios forzados. Asimismo, se documentaron gravísimas vulneraciones contra menores en el marco del conflicto armado, incluyendo muertes y heridas –mayoritariamente (72%) en la zona noroeste–, un extendido y sistemático reclutamiento y utilización de niños y, en menor medida, de niñas por decenas de actores armados, secuestros, violencia sexual y ataques a escuelas y hospitales.¹²⁰ El secretario general de la ONU subrayó que los crímenes en Siria no pueden continuar en la impunidad e insistió en su llamado a derivar el caso a la Corte Penal Internacional. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos informó que había completado un registro de 350.209 individuos muertos en el conflicto de Siria entre marzo de 2011 y marzo de 2021, que se considera como el número mínimo verificable y por debajo de la cifra real de fallecidos.

Respecto a la evolución de las hostilidades, en 2021 continuaron activos diversos frentes de batalla con enfrentamientos de intensidad variable y protagonizados por variados actores armados. En el **frente noreste**, las hostilidades enfrentaron principalmente a las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), lideradas por las milicias kurdas YPG/YPJ, con Turquía y grupos próximos a Ankara, y también con fuerzas del régimen de Bashar al-

118. Syrian Observatory for Human Rights, *Lowest yearly death toll ever. 3,882 people killed across Syria in 2021*, SOHR, 31 de diciembre de 2021.

119. Naciones Unidas, *Report of the Secretary General on implementation of council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020) and 2585 (2021)*, informes bimensuales de enero a diciembre de 2021.

120. Naciones Unidas, *Report of the Secretary General on children and armed conflict in the Syrian Arab Republic*, 23 de abril de 2021, S/2021/398, 23 de abril de 2021. El informe analiza el período de 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020.

Assad. Los hechos de violencia en esta zona afectaron a localidades como Qamishli, Hassakeh, Ras al-Ayn o Ain Issa e incluyeron ataques aéreos turcos. En Manjib también se registraron tensiones y hechos de violencia –con más de una decena de personas fallecidas– entre fuerzas de seguridad kurdas y población árabe debido a una medida de conscripción obligatoria que, finalmente, fue revertida por las autoridades kurdas. En el **noroeste**, formalmente se mantuvo la tregua acordada en marzo de 2020 por Rusia y Turquía en torno a Idlib, pero en un contexto marcado por periódicos incidentes. Entre ellos, enfrentamientos, intercambios de fuego de artillería y continuos ataques aéreos rusos en la zona sur de Idlib, y en las provincias de Hama y Latakia. En agosto, representantes de la ONU advirtieron sobre una escalada en los bombardeos, la más significativa desde el acuerdo de alto el fuego. En esta área continuaron activos grupos armados como Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que prosiguió su campaña contra grupos rivales como Hurras al-Din –vinculado a al-Qaeda–, Jundallah, Jabal al-Turkman y Junud al-Sham y se informó de ataques aéreos de EEUU contra posiciones de grupos vinculados a al-Qaeda. También se registraron hechos de violencia que involucraron a fuerzas turcas y kurdas en Afrin, Azaz y Tel Rifaat (norte de Aleppo). Destacó un ataque contra un hospital en Afrin, en junio, que causó serios daños y la muerte de 18 personas. Las tensiones en esta área se intensificaron en el último trimestre, alentando especulaciones sobre una nueva ofensiva de gran escala de Ankara contra las YPG/YPJ y una posible confrontación militar significativa entre fuerzas de Turquía, por un lado, y de Siria y Rusia, por otro.¹²¹ La **zona centro** de Siria, además del área este, fue donde el grupo armado Estado Islámico concentró sus actividades –especialmente en Deir-er Zor, Hassakah y la zona rural de Homs– con ofensivas y choques con tropas y grupos progubernamentales, milicias respaldadas por Irán y combatientes de las SDF. A lo largo de todo el año, se constataron ataques aéreos rusos contra presuntas posiciones de ISIS. Las informaciones sobre los periódicos incidentes en esta región apuntaron a decenas y decenas de fallecidos.

En el **suroeste**, en tanto, se produjeron numerosos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y excombatientes opositores, en especial en localidades en la provincia de Deraa, además de asesinatos de ex milicianos disidentes involucrados en acuerdos de “reconciliación” con el régimen. La violencia en el suroeste se intensificó tras las elecciones presidenciales de mayo que ratificaron a Bashar al-Assad por un cuarto mandato con un 95% de la votación, en unos comicios denunciados como fraudulentos por diversos actores de la comunidad internacional. A mediados de año, las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques de artillería

y una ofensiva terrestre contra barrios asediados, y se multiplicaron los choques armados en toda la provincia, provocando numerosas víctimas civiles y desplazamientos forzados de miles de personas. La violencia no se redujo hasta septiembre, tras un acuerdo facilitado por Rusia que exigía la rendición de los insurgentes, aunque hasta finalizar el año continuaban registrándose asesinatos, ataques del régimen y detonaciones de explosivos. Moscú ya había mediado en esta zona a principios de año y también intervino en acuerdos de cese de hostilidades entre otros actores armados en Siria a lo largo de 2021, por ejemplo, entre el Gobierno y las SDF en el noreste. Adicionalmente, cabe señalar que en octubre **Damasco** fue escenario del ataque más letal desde 2017 –un autobús que transportaba personal militar fue objeto de una explosión que causó la muerte a una quincena de soldados– y que a lo largo de 2021 continuaron los ataques israelíes contra objetivos e infraestructuras iraníes y de Hezbollah en Siria –con cifras indeterminadas de víctimas mortales, incluyendo civiles–, además de

algunas ofensivas de EEUU. El campo de al-Hawl que alberga a personas refugiadas y a familias de presuntos combatientes de Estado Islámico –casi 60.000 personas, 94% mujeres y menores– continuó siendo objeto de atención en 2021. La situación continuó deteriorándose y se informó de numerosos hechos de violencia, incluyendo 86 asesinatos entre enero y noviembre

Tras una década de conflicto y en un contexto de grave crisis económica y humanitaria, se estima que 90% de la población siria vivía en situación de pobreza y 60% afrontaba inseguridad alimentaria

La población siria afrontó un panorama crítico debido a las consecuencias directas e indirectas del conflicto armado, la severa crisis económica, el impacto de la COVID-19 y otros factores que afectaron la situación humanitaria. El conflicto continuó teniendo graves repercusiones en términos de desplazamiento forzado, que en tras una década de conflicto ha afectado a más del 60% de la población siria. Al finalizar 2021 un total de 6,7 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento interno, mientras que otras 6.6 se habían visto obligadas a abandonar el país –la inmensa mayoría, 5,6 millones, permanecía refugiada en países próximos a Siria. El Gobierno sirio y algunos grupos armados continuaron imponiendo obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria y la asistencia internacional siguió afrontando dificultades logísticas y operativas por la reducción a un solo acceso fronterizo desde 2020. Al finalizar el año el total de población necesitada de asistencia se elevaba a 13,4 millones de personas, un 21% más que el año anterior. Los indicadores de inseguridad alimentaria se agravaron en 2021 ante el acusado incremento de precios de productos básicos –el valor de los alimentos era en octubre un 128% más alto que el año anterior– y también se disparó el precio de los combustibles. Se estima que un 90% de la población siria vivía en situación de pobreza y que 12,4 millones

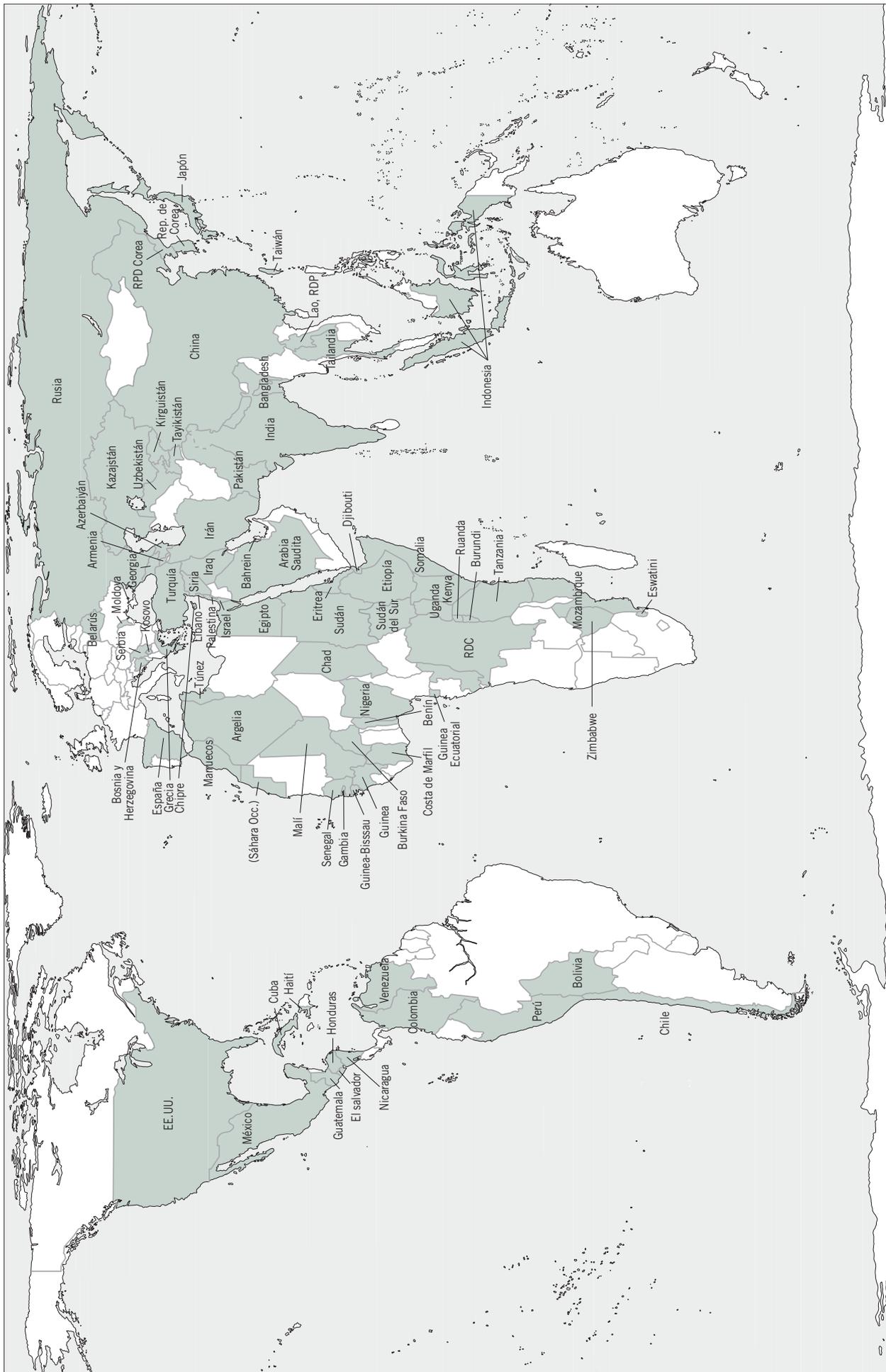
121. Security Council Report, *Syria: November 2021 Monthly Forecast*, 29 de octubre de 2021.

de personas afrontaban inseguridad alimentaria (casi 60% de la población) tras una década de conflicto armado y grave deterioro de la economía. Millones de personas, en especial en el norte y noreste de Siria, se vieron afectadas también por la falta de acceso a agua potable de manera regular y a un incremento de las enfermedades asociadas a esta carencia. La ONU alertó además sobre las tasas de infección por la pandemia de COVID-19, mucho más elevadas que las reconocidas en los informes oficiales, y a partir del segundo semestre de 2021 identificó un importante aumento en el número de contagios y en las tasas de mortalidad. Al

finalizar el año, menos de un 3% de la población en Siria había recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Cabe mencionar que, en el décimo aniversario de la revolución, sectores de la oposición siria reivindicaron sus demandas y se manifestaron contra el régimen, con protestas en ciudades como Idlib y Deraa. Las negociaciones auspiciadas por la ONU, en tanto, transcurrieron de manera accidentada y no mostraron avances en 2021.¹²² Mientras, continuaron los intentos por rehabilitar al régimen sirio en la escena internacional. Así, por ejemplo, EAU llamó en marzo a readmitir a Damasco en la Liga Árabe.

122. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Mapa 2.1. Tensiones



Países con situaciones de tensión en 2021

2. Tensiones

- Durante 2021 se registraron 98 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (40) y Asia (24), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América Oriente Medio (11) y Europa (11).
- En 2021 se registraron cuatro golpes de Estado en África subsahariana que derrocaron a Gobiernos en Malí, Guinea, Sudán y Chad, siendo el año con el mayor número de golpes exitosos en la región desde 1999.
- La situación en Chad se deterioró como consecuencia de la muerte del presidente Idriss Déby y el golpe de Estado por parte de una junta militar suplantando al Gobierno vigente.
- Malí padeció su segundo golpe de Estado en menos de nueve meses que fue acogido de manera dispar en el interior y exterior del país.
- Las operaciones militares contra los grupos criminales en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, provocaron la expansión de sus actividades a los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Sokoto por la presión de los cuerpos de seguridad.
- La tensión en torno al Sáhara Occidental se intensificó, provocando una treintena de fallecidos, y se agravó el histórico pulso entre Marruecos y Argelia.
- En Colombia, decenas de personas murieron en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron en abril.
- En Haití se incrementó la tensión por el asesinato del presidente y por el aumento de la actividad delincriminal de las bandas armadas que operan en el país.
- En Tailandia se registraron importantes movilizaciones a favor de una mayor democratización del país y de la reforma de la monarquía.
- Aunque se mantuvo la tensión, se produjeron acercamientos indirectos entre India y Pakistán, que se comprometieron a un cumplimiento más estricto del acuerdo de alto el fuego.
- La situación en torno a Nagorno-Karabaj continuó frágil, con frecuentes violaciones del alto el fuego de 2020 que puso fin a la guerra de seis semanas.
- La tensión en torno al programa nuclear iraní estuvo marcada por los obstáculos y el bloqueo en las negociaciones, diversos incidentes de seguridad y crecientes incumplimientos de Teherán respecto a lo establecido en el pacto de 2015.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2021. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2021. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2021.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2021

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
ÁFRICA			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerzas Armadas de Sudán, Sudán del Sur, RDC, RCA y Uganda, milicias comunitarias y grupos armados de los países de la región	1
	Recursos		=
Argelia ⁵	Interno	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados AQMI (ex GSPC), Jund al-Khilafa (filial ISIS)	2
	Gobierno, Sistema		=
Benín	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, sectores del Ejército	2
	Gobierno		↑
Chad	Interna	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (entre otros, FACT, CCMSR, UFR), grupo armado nigeriano Boko Haram, milicias comunitarias	3
	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad		↑
Costa de Marfil	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, oposición política, grupo armado FRUD-armé	2
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		↓
Eswatini	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Etiopía	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↑
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno de Etiopía, gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF/OLA, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Etiopía – Egipto – Sudán	Internacional	Etiopía, Egipto, Sudán	2
	Recursos		↑
Etiopía – Sudán	Internacional	Etiopía, Sudán	2
	Recursos		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2021 con la del año 2020 apareciendo el símbolo (↑) si la situación general durante 2021 es más grave que la del año anterior, (↓) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.
5. A partir de la edición 2022 del informe *Alerta!* la tensión denominada "Argelia" incluye también las actividades de grupos yihadistas (en particular de AQMI) que en el pasado se analizaban por separado.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	3
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	2
	Gobierno		↓
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenia	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Malí	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁶	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Mozambique	Interna	Gobierno, RENAMO	1
	Gobierno, sistema		↓
Niger	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
Nigeria (Biafra)	Interna internacionalizada	Gobierno, IPOB, MASSOB, grupo armado ESN	3
	Identidad, Autogobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por Cap pour le Changement (coalición liderada por Félix Tshisekedi), en coalición con el Front Commun pour le Congo (coalición liderada por Joseph Kabila, sucesora de la Alianza por la Mayoría Presidencial), oposición política y social, grupos armados del este del país	2
	Gobierno		↑
RDC – Ruanda	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Ruanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Ruanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	2
	Gobierno, Identidad		=
Ruanda - Burundi	Internacional	Gobierno de Ruanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	2
	Gobierno		↓
Ruanda - Uganda	Internacional	Gobierno de Ruanda, Gobierno de Uganda	2
	Gobierno		↓
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	1
	Autogobierno		↑
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	2
	Territorio		=

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		=
Tanzania	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	2
	Interna		↓
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↑
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
AMÉRICA			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Chile	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Colombia	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Cuba	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		↓
Haití	Interna	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas	3
	Gobierno		↑
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	1
	Gobierno		↓
México	Interna	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición	3
	Gobierno, Recursos		=
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	2
	Gobierno, Recursos		=
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↓
ASIA			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	1
	Gobierno		↑

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China (Hong Kong)	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		=
China – Taiwán	Internacional	China, Taiwán	1
	Territorio, Recursos, Sistema		=
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea⁷	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		=
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	2
	Sistema		=
India	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Sistema, Gobierno		↓
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), ADF, RNLF, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↑
India – China	Internacional	India, China	3
	Territorio		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↓
Indonesia (Sulawesi)	Interna	Gobierno, grupo armado MIT	1
	Identidad, Sistema		=
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	2
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Mar de la China Meridional	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei Darussalam	1
	Territorio, Recursos		=

7. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	2
	Gobierno, Sistema		=
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		↑
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↑
EUROPA			
Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, EEUU, Rusia	2
	Gobierno		=
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía - Grecia, Chipre	internacional	Turquía, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Egipto, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia	2
	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad		↓
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Rusia (norte del Cáucaso)	Interna	Gobierno federal ruso, gobiernos de las república de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↓
Serbia – Kosovo	Internacional ⁸	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		↑
ORIENTE MEDIO			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	1
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=

8. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ORIENTE MEDIO			
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	1
	Autogobierno, Identidad		=
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	1
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel⁹	Internacional	Irán, EEUU, Israel	3
	Sistema, Gobierno		=
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán, EEUU	3
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		↑
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 ↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2021

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2021, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

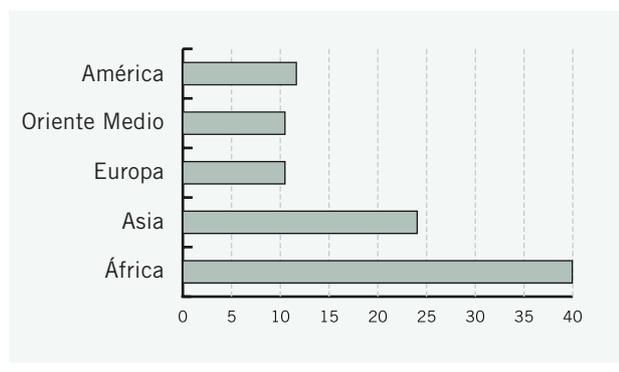
Durante 2021 se identificaron 98 escenarios de tensión en todo el mundo, tres más que en 2020, confirmando la tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años. En comparación con el año 2018, en 2021 se analizaron 15 casos más. África volvió a ser la región en la que se concentraron mayor número de tensiones (40), seguida de Asia (24), América (12) y Europa y Oriente Medio (11 en cada una). Como en 2020, aunque el incremento de casos fue pequeño (uno en 2020 y tres en 2021), sí hubo una variación importante en cuanto a los casos considerados como tensión. Si en 2020 se identificaron siete nuevos (y dejaron de ser considerados como tales seis casos), en 2021 se analizaron nueve casos nuevos y otros seis dejaron de ser calificados como

Durante 2021 se identificaron 98 escenarios de tensión, 40 en África, 24 en Asia, 12 en América Latina y 11 en Oriente Medio y en Europa

tensiones. Seis de estos nueve casos se concentraron en África: Burkina Faso, Djibouti, Eswatini, Etiopía-Sudán, Níger y Nigeria (Biafra). Cabe destacar especialmente este último caso, donde el importante incremento de la tensión y la violencia entre el Estado nigeriano y la ESN, el nuevo brazo armado del movimiento independentista ilegalizado IPOB provocaron la muerte de decenas de personas y graves violaciones de los derechos humanos. En América Latina se incluyeron los casos de Cuba y Colombia por el notable incremento de las protestas en ambos países, con decenas de víctimas mortales en el caso de Colombia. Finalmente, también se catalogó como tensión el contencioso entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, que en 2020 fue considerado como conflicto armado pero cuya intensidad durante 2021 se redujo ostensiblemente respecto de la escalada de la violencia que se vivió el año anterior. Por otra parte, hubo seis casos que dejaron de ser considerados escenarios de tensión por la reducción significativa de los niveles de violencia o movilizaciones –Madagascar, Malawi, Togo Sri Lanka o

9. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2021



bien por consideraciones metodológicas –Iraq, y Argelia (AQMI)–.¹⁰

La mitad de las tensiones fueron de **intensidad baja**, el 31% de **intensidad media** y el 19% de **alta intensidad**. En comparación con el año anterior, el número de casos de baja intensidad se redujo ligeramente (pasando del 57% al 50%), mientras los casos de intensidad media se incrementaron del 26% al 31%. **En 2021 se identificaron tres casos más de alta intensidad que en 2020, sumando un total de 19 contextos:** Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra), Sudán, Colombia, Haití, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), Irán-EEUU, Israel; e Israel-Siria-Líbano. Más de la mitad de las tensiones de mayor gravedad se concentraron en África. En **Chad**, además de la persistencia de enfrentamientos intercomunitarios en diversas partes del país, de las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad, y de la ofensiva rebelde del Frente para el Cambio y la Concordia en Chad en el centro y norte del país, tras la muerte del histórico presidente Idriss Déby (en el cargo desde 1990) se produjo un golpe de Estado militar y su hijo tomó el poder. En **Guinea**, el golpe de Estado que perpetró el coronel Mammy Doumbouya contra el Gobierno presidido por Alpha Condé provocó una condena unánime por parte de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y también desató una importante represión política en el país. En **Malí**, el deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición, y la dimisión del primer ministro a mediados de mayo dio lugar a un nuevo golpe de Estado –en agosto de 2020 se había producido otro– por parte del coronel Assimi Goïta, lo cual motivó la imposición de sanciones y el incremento de la tensión con países como Francia, que suspendió temporalmente sus operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Armadas malienses. En **Nigeria**, además de la violencia que se vive en regiones como Biafra o el Delta del Níger, de la violencia intercomunitaria en el centro del país, o de las acciones armadas de Boko Haram en el norte del país y el Lago Chad, se incremen-

taron sustancialmente las operaciones militares contra grupos criminales en el noroeste del país, provocando dichos enfrentamientos la muerte de miles de personas. En el estado nigeriano de **Biafra** también se desencadenaron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y la recién creada Red de Seguridad del Este (ESN) ala militar de uno de los principales movimientos independentistas de Biafra, el IPOB, que persistieron de forma esporádica durante el año. Además, se incrementaron las violaciones de derechos humanos y la represión de las protestas y movilizaciones sociales, que aumentaron especialmente tras la detención en el extranjero y extradición a Nigeria del líder del IPOB.

Etiopía experimentó un grave deterioro de la situación por los recurrentes brotes de violencia intercomunitaria en diferentes partes del país, por la actividad armada del Ejército de Liberación Oromo (OLA) en la región de Oromiya y por las consecuencias en el conjunto del país de la guerra entre actores armados de la región de Tigré y el Gobierno federal, como por ejemplo el incremento de la violencia por parte de grupos de autodefensa y milicias contra población civil de la comunidad tigré y también de la comunidad amhara. En este sentido, la región de **Oromiya** también fue escenario de una escalada de la movilización social y protestas a favor y en contra del Gobierno, en las que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad que causaron decenas de víctimas mortales. En paralelo, la violencia intercomunitaria y las acciones insurgentes por parte del OLA contra los cuerpos federales y contra la población civil de otros grupos étnicos del país presentes en la región, así como las acciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad, podrían haber causado centenares de víctimas mortales. En **Kenia**, en un contexto de creciente polarización política entre los partidarios del presidente, Uhuru Kenyatta, y del líder opositor Raila Odinga, los ataques al Shabaab en el este y noreste del país y la violencia intercomunitaria en el centro de Kenia provocaron la muerte de cientos de personas. En Sudán, el golpe de Estado del mes octubre –precedido por otra tentativa fallida un mes antes–, provocó críticas y sanciones por parte de la comunidad internacional y dio lugar a movilizaciones sociales en todo el país que fueron reprimidas con dureza por parte de las nuevas autoridades. La disputa entre **Marruecos y el Sáhara Occidental** se agudizó por la persistencia de los enfrentamientos armados entre el Frente POLISARIO y las Fuerzas Armadas marroquíes, especialmente a lo largo de la barrera que separa el territorio saharauí controlado por Marruecos del que está bajo administración de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), así como por la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Argelia, que acusó a su país vecino de apoyar a grupos que reivindican la autodeterminación de la Kabylia y de llevar a cabo ataques aéreos y con drones en la zona fronteriza.

10. A partir de la presente edición del informe *Alerta!* las actividades de grupos yihadistas (en particular de AQMI) se incluyen en la tensión denominada “Argelia”. En cuanto a Iraq, algunas de las dinámicas que hasta esta edición se analizaban en el capítulo de Tensiones pasan a incluirse en el caso de Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

En **Haití**, la crisis política, institucional y social que vive el país desde hace años se vio agudizada tanto por el asesinato a mediados de año del presidente, Jovenel Moïse, como por el incremento sin precedentes en cuanto a la actividad de las bandas delincuenciales. En **Colombia**, varias decenas de personas murieron y miles de personas fueron heridas, desaparecidas o detenidas en el marco de las protestas antigubernamentales que se produjeron durante buena parte del año y que motivaron las críticas de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se produjo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía en la contención de las protestas. En **México**, que siguió siendo uno de los países del mundo con un mayor número de homicidios intencionales (más de 34.000), en 2021 varios cárteles de la droga consolidaron su posición y se incrementaron la violencia de corte político y los asesinatos contra determinados colectivos, como periodistas o personas defensoras de los derechos humanos. En **Venezuela**, además de los altos niveles de violencia (el país registró la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina) y las numerosas denuncias nacionales e internacionales sobre vulneraciones de derechos humanos, persistieron tanto la polarización política entre el oficialismo y la oposición como la precaria situación económica y humanitaria (según ACNUR, Venezuela es el segundo país del mundo en el que más población se ha visto forzada a abandonar su hogar).

El contencioso entre **India y China** registró varios enfrentamientos armados directos en la región del Sikkim, ejercicios militares o despliegue de tropas adicionales en la frontera común o acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para desescalar la tensión y reducir la militarización en la región fronteriza de las zonas en disputa. En cuanto a la tensión histórica entre **India y Pakistán**, el número de incidentes en la Línea de Control se redujo sustancialmente después de que ambos países reafirmaran a principios de año su compromiso con el acuerdo de alto el fuego que habían suscrito en 2003, pero siguieron produciéndose acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de Pakistán en los episodios de violencia que siguen registrándose en el estado indio de Jammu y Cachemira, así como sobre las detenciones de activistas cachemires por parte del Gobierno indio. En cuanto al conflicto entre **Armenia y Azerbaiyán** en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que en 2020 vivió una importante escalada militar, en 2021 se produjeron numerosas violaciones del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2020 –con incidentes armados tanto en torno a la frontera entre Armenia y Azerbaiyán como en la línea de separación de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán– y la situación humanitaria era muy frágil, con decenas de miles de personas todavía desplazadas y en condiciones de retorno muy precarias. En la tensión

entre **Irán y EEUU e Israel**, a pesar de la reanudación de los cauces diplomáticos, se registraron numerosos incidentes de seguridad entre los mencionados países –como por ejemplo ataques navales, acciones de sabotaje, hechos de violencia en países como Iraq y Siria– y se incrementó la preocupación por el programa nuclear iraní después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica denunciara los incumplimientos de Teherán en materia atómica. En cuanto a la tensión entre **Israel y Siria y Líbano**, en 2021 se siguieron produciendo ofensivas israelíes en territorio sirio contra objetivos vinculados a Irán y a Hezbollah y se mantuvo la tensión en la zona supervisada por Naciones Unidas (UNIFIL) en la frontera entre Líbano e Israel, con intercambio de proyectiles durante el año.

En relación a la **evolución** de los casos de tensión, el **38% de los casos se agudizaron durante el año, el 42% no registró cambios significativos respecto del 2020 y el 20% de**

los casos experimentó una cierta mejora de la situación. Por tanto, el número de casos en los que las condiciones empeoraron en 2021 es prácticamente el doble del número de contextos en los que la tensión registró una mejoría. Los continentes que concentraron un mayor número de tensiones que escalaron fueron África (50%) y Asia (42%). **Los casos cuyas dinámicas de conflictividad escalaron en 2021** fueron Burkina Faso, Djibouti, Eswatini, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra), Sudán, Colombia, Haití, México, Venezuela, India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Irán-EEUU, Israel; e Israel-Siria-Líbano

Los casos cuyas dinámicas de conflictividad escalaron en 2021 fueron Burkina Faso, Djibouti, Eswatini, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Níger, Nigeria, Nigeria (Biafra), RDC, Senegal (Casamance), Sudán, Túnez, Uganda, Colombia, Cuba, Haití, Bangladesh, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), Indonesia (Papúa Occidental), Kazajistán, Kirguistán, Tailandia, Tayikistán, Uzbekistán, Bosnia y Herzegovina, Serbia-Kosovo, Turquía, y Líbano. Los casos que se agudizaron en 2021 hasta ser considerados tensiones de intensidad alta fueron Guinea, Nigeria, Nigeria (Biafra), Haití y Colombia.

En cuanto a los principales factores de causalidad, un 72% de los casos analizados de tensiones estaban vinculados a la oposición a las políticas internas o internacionales de determinados gobiernos o bien al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto; un 41% a demandas de autogobierno y/o identitarias; y un 31% a disputas por el control de territorios y/o recursos. Más específicamente, la oposición a las políticas internas o internacionales del **gobierno** estuvo presente en el 64% por ciento de los 98 escenarios de tensión, aunque en algunas regiones tal factor estuvo presente en un mayor porcentaje de casos, como en América Latina (100%) o África (73%). En cambio, en Asia la importancia de la oposición al gobierno (38%) fue muy inferior al de la media mundial. La oposición al **sistema** político, social o ideológico del Estado en su conjunto estuvo presente en el 22% de los casos. En Asia, sin embargo, dicho factor era importante

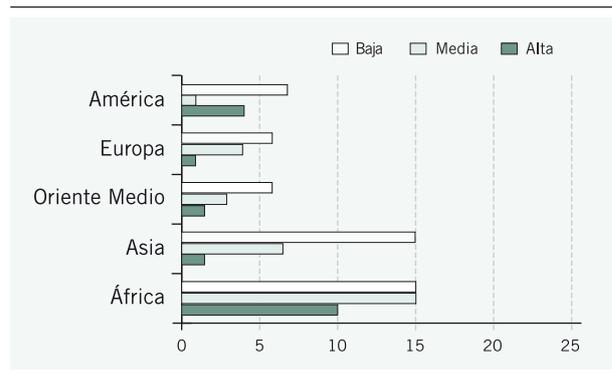
en la mitad de los casos identificados, mientras que en África dicho porcentaje se reducía al 10%. Por otra parte, la reivindicación de **aspiraciones de tipo identitario** estuvo presente en el 38% de los casos de tensión analizados en esta publicación, siendo especialmente relevante en Europa (82%) y, en menor medida, en Asia y Oriente Medio (un 46% en cada región). En cuanto a las **demandas de autodeterminación y autogobierno**, estas fueron un factor determinante en casi una cuarta parte de los escenarios de tensión a escala global. En Europa, sin embargo, tal factor estaba presente en el 73% de los casos, mientras que en América Latina no era una causa fundamental de la tensión en ninguno de los casos. El **control de los recursos** era un factor relevante en el 22% de los casos, mientras que el **control del territorio** era una causa importante en el 14% de las tensiones, aunque en Asia dicho porcentaje era más del doble (29%) y en América Latina no jugaba un rol preponderante en ninguno de los casos.

En consonancia con la tendencia observada en los últimos años, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvieron un **carácter interno (51%)**, una cifra parecida a la de 2020 (53%). Sin embargo, dicho porcentaje fue muy superior en regiones como América Latina (100%) o África (58%) y muy inferior en el caso de Europa (18%). Solamente una quinta parte de las tensiones (22%) fueron **internacionales**, pero algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo India-China, India-Pakistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Irán-EEUU, Israel o Israel-Siria-Líbano. Finalmente, más de una cuarta parte de las tensiones fueron **internas internacionalizadas (27%)**, pero con importantes variaciones entre regiones (en Asia el 55% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina no se registró ninguno).

2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, **África** fue la región que concentró un mayor número de tensiones (40), lo que supone un porcentaje (41%) ligeramente superior al del 2020. En 2021 se consideraron seis nuevos casos –Djibouti, Eswatini, Etiopía-Sudán, Burkina Faso, Níger y Nigeria (Biafra)– y dejaron de ser analizados como tensiones otros cuatro casos –Argelia (AQMI), Madagascar, Malawi, Togo– de modo que el número total de tensiones en el continente en 2021 se incrementó en dos casos respecto del año anterior. Además, más de la mitad de las tensiones de alta intensidad en todo el mundo se concentró en África (10 sobre 19 casos), una cifra parecida a la del año anterior pero claramente superior a la del 35% que suponía en 2019. Los casos de mayor intensidad en África fueron: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra) y Sudán. En 2020 todos estos casos ya

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



eran considerados tensiones de alta intensidad excepto Guinea, Sudán y Nigeria (Biafra). Por otra parte, el 50% de las tensiones en África escalaron durante el 2021 –lo que supone el 54% del total de casos que lo hicieron

el año pasado–, mientras que la situación solamente experimentó una cierta mejora en seis casos: Eritrea-Etiopía, Guinea-Bissau, Mozambique, Ruanda-Burundi, Ruanda-Uganda y Tanzania. Los casos que escalaron en 2021 fueron Burkina Faso, Chad, Djibouti, Eswatini, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Níger, Nigeria, Nigeria (Biafra), RDC, Senegal (Casamance), Sudán, Túnez, Uganda. Aunque la tensión

entre Eritrea y Etiopía se redujo en 2021, hubo otros cuatro escenarios de tensión en los que Etiopía estaba involucrada –Etiopía, Etiopía (Oromiya), Etiopía-Egipto-Sudán y Etiopía-Sudán. Cabe destacar que 2021 fue un año de retrocesos en materia de gobernanza democrática para el continente africano, padeciendo cuatro golpes de Estado efectivos por parte de aparatos militares en Chad (abril), Malí (mayo), Guinea (septiembre) y Sudán (octubre), además de otro intento que fracasó en marzo en Níger. Desde 1999 no se registraba un año con estas cifras en el continente. Las razones que ayudan a explicar la eclosión del fenómeno son complejas y multicausales, pero existen dos elementos que se han observado en los últimos acontecimientos para justificar los mismos por los aparatos militares: el deterioro de la situación de la seguridad y la inestabilidad política.

Casi un 60% de las tensiones en África fueron de carácter interno, una cifra que se ha mantenido en niveles parecidos en los últimos años. Exceptuando la región de América Latina, donde todos los casos fueron de carácter interno, África fue la región con mayor proporción de este tipo de tensiones. Una cuarta parte de las tensiones en África fueron de tipo internacional –Eritrea-Etiopía, Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Sudán, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Ruanda, RDC-Uganda, Ruanda-Burundi, Ruanda-Uganda y Sudán-Sudán del Sur–, pero estas supusieron casi la mitad del total de tensiones internacionales en todo el mundo. La inmensa mayoría de las tensiones

internacionales se situaron en las regiones de los Grandes Lagos y África Central, con un protagonismo destacado por parte de países como Ruanda, Burundi, Uganda o Sudán. El restante 17% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el porcentaje más bajo del mundo si exceptuamos América Latina (región en la que no se registró ninguna tensión de este tipo). En cuanto a los factores de causalidad, la oposición al gobierno estaba presente en casi tres cuartas partes de los casos, siendo la segunda región del mundo con mayor prevalencia de este tipo de tensiones. Además, en otros cuatro casos la oposición al sistema también era una de las causas de fondo de la tensión – Mozambique, Kenia, Túnez y Argelia. Las cuestiones relacionadas con la identidad fueron un factor decisivo en un 30% de los casos en África, el segundo más frecuente en el continente después de la oposición al gobierno. En incidencia parecida a la identidad, el control o acceso a los recursos estuvo presente de manera importante en un 28% de los casos. Las demandas de autogobierno o autodeterminación fueron importantes en seis casos, mientras que el control del territorio lo fue en otros tres casos. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que estaban involucrados en varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos), Sudán y Ruanda (cuatro casos), o RDC, Nigeria y Uganda (tres casos).

África concentró más de la mitad de las tensiones de máxima intensidad en todo el mundo –Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara Occidental, Nigeria, Nigeria (Biafra) y Sudán– y más de la mitad de los casos que escalaron en 2021

En **América** se registraron 12 escenarios de tensión, un 12% del total. En comparación con 2020, el incremento significativo de las protestas en Colombia y Cuba propició la inclusión de estos dos nuevos casos. Una tercera parte de los casos fueron de alta intensidad (Colombia, Haití, México y Venezuela), el porcentaje más alto en todo el mundo. Sin embargo, la gran mayoría de las tensiones (un 58%) fueron de intensidad baja y solamente hubo un caso de intensidad media. En cuanto a la evolución, la tensión se redujo en el 50% de los casos. Cabe destacar especialmente la reducción significativa de los homicidios en Centroamérica, de las protestas en Chile o de la conflictividad política y social en Bolivia o Venezuela. Por otra parte, una cuarta parte de los casos analizados en América Latina no registró cambios significativos respecto del año anterior y otra cuarta parte experimentó un incremento de la tensión (Colombia, Cuba, Haití). Cabe destacar que todas las tensiones en la región fueron internas, lo que contrasta con el porcentaje medio a nivel global (53%). En cuanto a los factores de causalidad, todas las tensiones en la región estuvieron vinculadas a la oposición a las políticas del gobierno, en dos casos al acceso o control de los recursos (México y Perú) y en un caso a la oposición al sistema (Cuba). Otros factores como las demandas vinculadas al autogobierno,

En América Latina todas las tensiones fueron internas y estuvieron vinculadas a la oposición a las políticas del gobierno

las cuestiones identitarias o el control del territorio tuvieron mucha menor relevancia que en otras regiones del mundo.

En **Asia** se contabilizaron 24 tensiones, la cuarta parte del total y una menos que el año pasado. Sri Lanka dejó de ser considerado escenario de tensión por la reducción sostenida de los niveles de conflictividad en los últimos años. Ocho de las tensiones estaban en Asia meridional –Bangladesh, India, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), India-China, India-Pakistán y Pakistán–, otras ocho en Asia oriental –China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), China-Japón, China-Taiwán, Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. De Corea; Mar de la China Meridional), cuatro en el Sudeste asiático –Indonesia (Sulawesi), Indonesia (Papúa Occidental)– y otras cuatro en Asia central –Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán–. Como en años anteriores, hubo algunos países que estuvieron involucrados en varios escenarios de tensión, como China (siete tensiones), India (seis tensiones), Indonesia (tres tensiones) o Japón, Corea del Norte y Corea del Sur (dos tensiones cada país).

La gran mayoría de las tensiones (un 63%) fueron de baja intensidad, un 29% fueron de intensidad media y el restante 8% fue de alta intensidad (India-China e India-Pakistán). A pesar de contar con la proporción más alta del mundo de tensiones de baja intensidad, en 2021 hubo una parte importante de las tensiones en Asia (un 42%) que escalaron respecto del año anterior: Bangladesh, India (Assam), India (Manipur), India (Nagalandia), Indonesia (Papúa Occidental), Kazajistán, Kirguistán, Tailandia, Tayiskistán y Uzbekistán. Cabe destacar especialmente el incremento de la tensión en varios casos de India y en los cuatro países del Asia central analizados en este capítulo. El 42% de las tensiones no sufrió cambios significativos respecto del año anterior y el 16% experimentó una cierta mejora. Por otra parte, un tercio de las tensiones fueron internas internacionalizadas, un 38% fueron internas y un 29% fueron internacionales, siendo así Asia la región con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; o la tensión entre China-Taiwán, y la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam. Las otras dos tensiones internacionales, como ya se ha mencionado, corresponden a las disputas entre India y China e India y Pakistán.

En cuanto a las causas de fondo, la oposición al gobierno estuvo presente en el 38% de los casos, siendo a mucha distancia la región del mundo con una menor incidencia de este factor. En cambio, la oposición al sistema o al estado fue una causa importante en el 50% de los casos, siendo claramente el continente con un mayor número de disputas (12) vinculadas a esta cuestión: China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), Corea, RPD-Rep. de Corea, India, Indonesia (Sulawesi), Kazajistán, Kirguistán, Lao, RPD, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Cabe destacar la importancia de este factor en China y Asia central. Asia también fue la región del mundo en la que las tensiones vinculadas a la identidad (11) tuvieron un mayor protagonismo en todo el mundo: en China, las regiones de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong; en India los estados de Assam, Manipur y Nagalandia, así como el propio contencioso histórico entre India y Pakistán; en Indonesia, las regiones de Sulawesi y Papúa Occidental; y también los casos de Kirguistán y Lao RPD. Las demandas de autodeterminación o autogobierno fueron una causa en el 29% de las tensiones en Asia. Finalmente, el control de los recursos estuvo presente en el 25% de los casos y el control del territorio en el 29% de los mismos.

En **Europa** se registraron 11 casos, uno más que el año pasado por la inclusión de Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), caso que en 2020 fue considerado como un conflicto armado por el reinicio de la guerra en el mes de septiembre de 2020 y una escalada previa de las hostilidades en julio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán que provocaron la muerte de unas 5.000 personas y el desplazamiento forzado de otras decenas de miles (mayoritariamente armenias). Precisamente la disputa entre Armenia y Azerbaiyán fue el único caso de alta intensidad en la región (en 2020 no se contabilizó ningún caso de este tipo), mientras seis contextos fueron de intensidad baja y otros cuatro de intensidad media. En cuanto a la evolución de las tensiones, en cuatro casos hubo una cierta mejoría de la situación, en otras cuatro no se produjeron cambios relevantes respecto del 2020 y en tres casos se observó un deterioro de la situación; en Bosnia y Herzegovina, Serbia-Kosovo y Turquía. Por otra parte, Europa fue la región del mundo que albergó un mayor porcentaje de tensiones internas internacionalizadas (55%). Un 18% de los casos fueron tensiones internas y un 27% fueron internacionales –Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Turquía-Grecia, Chipre y Serbia Kosovo. En cuanto a los factores de causalidad, destaca especialmente el hecho de que las cuestiones identitarias estuvieran presentes en el 82% de los casos, un porcentaje que es más del doble que la media mundial. Los nueve casos en los que este factor fue importante son Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj),

Asia fue la región del mundo con un mayor porcentaje de tensiones vinculadas a la oposición al sistema político, social, económico e ideológico del Estado

Más del 80% de las tensiones en Europa estuvieron vinculadas a cuestiones identitarias y las demandas de autogobierno o de autodeterminación fueron relevantes en casi tres de cada cuatro casos

Bosnia y Herzegovina, Turquía-Grecia, Chipre, España (Cataluña), Georgia (Abjasia), Georgia (Osetia del Sur), Moldova, Rep. de (Transdniestria), Rusia (norte del Cáucaso) y Serbia-Kosovo. El segundo factor con mayor incidencia en las tensiones de la región fueron las demandas vinculadas al autogobierno y la autodeterminación, presentes en el 73% de los casos. Dicho porcentaje también fue el más alto del mundo, casi tres veces superior a la media global. Por otra parte, la oposición al gobierno estaba presente en un 55% de los casos, mientras que la oposición al sistema político, económico, social o ideológico del Estado lo estaba en el 18% de los casos, cifras parecidas a las del año anterior. Finalmente, el control de los recursos fue un factor importante en un caso –Turquía-Grecia, Chipre–, mientras que el control del territorio lo fue en dos: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Turquía - Grecia y Chipre.

Finalmente, en **Oriente Medio** se identificaron 11 escenarios de tensión, uno menos que el año pasado. Si bien en 2020 la región fue la que tuvo un mayor porcentaje de casos de intensidad alta (una tercera parte del total), en 2021 supusieron el 18% (Irán-EEUU, Israel e Israel-Siria-Líbano). La mayor parte de los casos (un 55%) fueron de baja intensidad, mientras que el 27% de los casos fue de intensidad media. En cuanto a la evolución de los casos, la práctica totalidad de los mismos se mantuvo sin cambios importantes respecto de 2020, pero en Líbano se deterioró la situación por las tensiones y desacuerdos entre el primer ministro Saad Hariri y el presidente Michel Aoun sobre la formación de gobierno, por los enfrentamientos armados que se produjeron en el marco de protestas de Amal y Hezbollah en Beirut en los que varias personas murieron y decenas resultaron heridas o bien por las protestas (y enfrentamientos entre manifestantes y policías) que se registraron durante el año en varias ciudades del país a causa del grave deterioro en la situación económica y de la falta de suministros. De los 11 casos que se registraron en Oriente Medio, cuatro fueron tensiones internas, cinco fueron internas internacionalizadas y dos fueron internacionales. Cabe destacar que precisamente las dos tensiones internacionales (Irán-EEUU, Israel y Israel-Siria-Líbano) fueron las de mayor intensidad en la región. En cuanto a las causas de las tensiones en la región, el factor con mayor incidencia fue la oposición al gobierno (64%), seguido de las cuestiones identitarias (46%), las demandas de autodeterminación y autogobierno y la oposición al sistema del Estado (27% en ambos casos) y el control de los recursos y del territorio (un 18% en ambos casos). Irán estuvo directa o indirectamente vinculado a seis escenarios de tensión de la región, mientras que EEUU lo estuvo en dos casos.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Occidental

Guinea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos

Síntesis:

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantienen al país en una situación de inestabilidad.

La tensión política en el país se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales que dieron al presidente Alpha Condé su tercer mandato

—señalado por la oposición como inconstitucional—, derivando en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno. El año comenzó con importantes tensiones políticas en el país generadas tras la victoria electoral del presidente Alpha Condé en las elecciones de octubre de 2020, que estuvieron caracterizadas por la represión y la violencia. Su reelección, en lo que supuso su tercer mandato, abrió un periodo de crisis nacional, siendo denunciado por la oposición como una vulneración del límite constitucional de dos mandatos presidenciales, que Condé esquivó mediante un cuestionado ajuste constitucional aprobado en un referéndum de marzo de 2020. Desde ese momento la respuesta gubernamental se tradujo en un aumento de la represión de la disidencia en todo el país, cerrando la sede del principal partido de la oposición —Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG)—, así como encarcelando a líderes opositores del UFDG, el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) o miembros de la sociedad civil. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron en febrero de 2021 que al menos 400 miembros de la oposición y de la sociedad civil en todo el país se encontraban encarcelados —arrestados en torno al referéndum de marzo de 2020 y las elecciones presidenciales de octubre de 2020—, y que al menos cuatro de ellos murieron en prisión, lo que generó la condena de actores internacionales, exigiendo la

Guinea sufrió su tercer golpe de Estado desde la consecución de la independencia

apertura de una investigación y el fin de la represión y persecución a la oposición. En Nigeria.

Tras meses de crisis política en el país, el 5 de septiembre miembros del Ejército, encabezados por el coronel Mamay Doumbouya, dieron un golpe de Estado que derrocó al Gobierno presidido por Condé. El golpe —el tercero que se produce en el país desde su independencia en 1958— dejó un balance de al menos 10 personas muertas. Doumbouya se autonombró presidente de la transición, disolvió el Gobierno, detuvo al presidente Condé, suspendió la Constitución y puso al frente del país a la junta militar denominada Comité Nacional de Reagrupamiento y Desarrollo (CNRD) que nombró gobernadores militares, prohibió a los funcionarios del Gobierno salir del país, arrestó a varios políticos y liberó a 80 presos políticos. También se anunció una hoja de ruta de transición, aunque sin determinar fecha para la celebración de elecciones, estipulando que los miembros del Consejo Nacional de Transición no podrán presentarse a las mismas cuando se celebren. El golpe generó reacciones dispares al interior y exterior del país. A nivel interno se produjeron manifestaciones de apoyo a los golpistas en varios puntos del país, y el líder de la UFDG, Cellou Dalein Diallo, lo calificó de “acto patriótico”. Por contra, provocó una condena internacional generalizada (UA, CEDEAO, EEUU, UE, Francia, China, Turquía, entre otros) que exigió el retorno al orden constitucional y la liberación de Condé. La UA y la CEDEAO suspendieron a Guinea de sus organismos, y la CEDEAO envió una

misión diplomática al país encabezada por el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, y el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara. Posteriormente la CEDEAO impuso sanciones a los miembros del CNRD, incluida la prohibición de viajar y la congelación de activos, y exigió la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de seis meses, ante la negativa de la Junta.

Las tensiones entre la junta militar —que nombró el 6 de octubre al civil Mohamed Béavogui como primer ministro— y la CEDEAO y los socios internacionales se mantuvieron hasta finalizar el año, incrementándose debido a los rumores de que Doumbouya contemplaba una transición de tres años. La CEDEAO, en una nueva medida de presión para la convocatoria de elecciones y la liberación de Condé —que fue finalmente autorizado el 31 de diciembre a salir del país por un mes debido a razones médicas—, confirmó el 7 de noviembre el mantenimiento de las sanciones a los miembros de la junta, y nombró al exjefe de la Oficina de la ONU para África Occidental y el Sahel, Mohamed Ibn Chambas, como enviado especial a Guinea.

Por otro lado, Guinea padeció durante el año un nuevo brote de ébola, el primero desde la epidemia de 2013-2016 que provocó más de 2.500 muertes en el país —11.300 en toda la región de África

occidental. El brote, identificado el 13 de febrero, se contuvo finalmente el 19 de junio, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), cobrándose 12 vidas —una cifra muy inferior a la de la anterior epidemia, en gran medida gracias a la experiencia acumulada por las autoridades sanitarias.

Malí	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, Malí ha hecho frente a diversos periodos de inestabilidad, incluyendo el golpe militar de 1968; una rebelión popular y militar en 1991; y revueltas e insurgencia tuareg en demanda de mayor participación política y desarrollo del norte del país. Malí celebró sus primeras elecciones pluripartidistas en 1992, si bien desde entonces los diversos comicios han transcurrido en medio de críticas opositoras en relación a la falta de garantías democráticas. El peso del Ejército se evidenció con un nuevo intento de golpe militar en el año 2000, que fue desbaratado. La inestabilidad se incrementó una vez más en 2012, con la toma de control del norte por parte de grupos tuareg e islamistas y un golpe de Estado militar que forzó la caída del Gobierno. A partir de ese momento los sucesivos Gobiernos que ha tendido el país se han enfrentado a múltiples desafíos políticos, económicos y de seguridad, persistiendo la violencia en la zona septentrional del país, y extendiéndose hacia la región central. Durante 2019 se produjo un incremento significativo de las protestas y movilizaciones populares, que fueron seguidas en 2020 de un golpe de Estado y la conformación de un nuevo gobierno transicional en el país.

Un año más las tensiones políticas se incrementaron en el país debido al deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición y el aumento del descontento popular, dando lugar a un nuevo golpe de Estado. Después de diversas huelgas convocadas por el sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM) que generaron una crisis en el Ejecutivo, el coronel Assimi Goïta —vicepresidente interino del Gobierno y responsable del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Ibrahim Boubacar Keita en agosto de 2020— volvió a encabezar un nuevo golpe castrense el 25 de mayo, deteniendo al presidente de transición, Bah N'Daw, y al primer ministro, Moctar Ouane, a los que acusaba de haber violado la Carta de la Transición al renovar el Gobierno sin contar con la aprobación de la vicepresidencia. La crisis política se había iniciado el 14 de mayo, cuando el entonces primer ministro Ouane presentó su dimisión, siendo rechazada por el presidente N'Daw, quien le encargó la conformación de un gobierno más inclusivo en el que la clase política tuviera más peso —en detrimento de la militar. El nuevo ejecutivo propuesto excluyó a los hasta entonces

Malí padeció un segundo golpe de Estado en menos de nueve meses

ministros de Defensa y Seguridad, los generales Sadio Camara y Modibo Koné, cuyas carteras dependían del ala militar del Gobierno de Transición, lo que motivó el golpe militar. N'Daw y Ouane, fueron retenidos por el Ejército en la base militar de Kati, siendo liberados posteriormente una vez anunciaron la renuncia forzada a sus cargos. Posteriormente, el exvicepresidente Assimi Goïta fue declarado presidente del país con la validación del Tribunal Constitucional maliense bajo el mandato de conducir la transición pactada en agosto de 2020 de 18 meses hacia las elecciones calendarizadas para finales de febrero de 2022. Goïta nombró a Choguel Kokalla Maïga nuevo primer ministro.

El golpe generó una nueva crisis política en Malí, con reacciones diferentes en el interior y exterior del país.

A nivel interior, el golpe fue acogido con un elevado apoyo popular, registrándose manifestaciones de apoyo a los militares que expresaban la frustración con el anterior gobierno debido su incapacidad para revertir la situación de inseguridad y pobreza. En el exterior llevó a un aumento de las tensiones entre la nueva Junta militar y la comunidad internacional, cuyos efectos se trasladaron al complejo militar de seguridad. Los principales socios internacionales de Malí, incluido el bloque regional de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), la UA, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Malí (MINUSMA), la UE, Francia, EEUU, Reino Unido y Alemania firmaron una declaración conjunta en la que condenaron el cambio inconstitucional de gobierno y exigieron la liberación de los altos cargos y sus colaboradores detenidos. La UA y la CEDEAO —que envió una misión diplomática al país para mediar— suspendieron a Malí de sus respectivos organismos y amenazaron con sanciones si no se restablecía un gobierno liderado por civiles. Por su parte, Francia amenazó con la imposición de sanciones por parte de la UE, así como con la retirada de las tropas francesas en el país que componen la operación Barkhane, y suspendió temporalmente, el 3 de junio, todas sus operaciones militares conjuntas con las tropas maliense, que se reanudaron un mes después. Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una condena por unanimidad, pero no llegó a incluir medidas coercitivas tras el bloqueo de Rusia y China, mientras que el Banco Mundial congeló los pagos al país.

En un intento por presionar a la Junta militar para acelerar la transición hacia un gobierno civil, el 16 de septiembre la CEDEAO impuso las primeras sanciones, que generaron manifestaciones en contra en el país. Posteriormente, tras el anuncio de Goïta de que no se cumpliría el plazo para la celebración de las elecciones, el 7 de noviembre la CEDEAO impuso nuevas sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos a 149 funcionarios estatales (excluyendo a Goïta en un aparente intento de mantener abierta la línea de comunicación). La UE también anunció el 15 de noviembre la imposición de sanciones a “aquellos que obstruyen” la transición de Malí.

En medio de las crecientes tensiones con Francia y los socios europeos, el Gobierno de Malí anunció un **acuerdo con Rusia para el despliegue de fuerzas rusas en el país** –que según informes de prensa serían de la empresa de seguridad privada Wagner Group, aunque tanto el Gobierno de Malí como el de Rusia lo negaron. El anuncio generó una condena conjunta a finales de diciembre de 16 países europeos y Canadá, quienes afirmaron que el despliegue de mercenarios de Wagner sería “incompatible” con su presencia. Anteriormente, el 13 de diciembre, la UE había impuesto sanciones a Wagner Group por presuntamente cometer graves abusos contra los derechos humanos en varios países, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales. En el país se produjeron varias manifestaciones en apoyo del acuerdo con Rusia.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el noroeste del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

En Nigeria se produjo un incremento de la violencia y la inestabilidad en diferentes escenarios del país durante el 2021, más allá del grave conflicto armado vinculado a las acciones de Boko Haram que afecta a los tres estados del noreste del país y la cuenca del Lago Chad.¹¹ En el noroeste del país, se produjo un aumento de la violencia iniciada en 2018, centrada en

las actividades de grupos criminales, a lo que se sumó el clima permanente de violencia intercomunitaria del cinturón central del país, así como el incremento de enfrentamientos y acciones insurgentes en el estado de Biafra.¹² Cabe añadir también la reactivación de acciones en el Delta del Níger contra instalaciones petrolíferas.

El clima de violencia criminal, actos de saqueo, ataques, secuestros de centenares de personas en el noroeste del país fue en aumento durante el año, siguiendo la tónica de años precedentes. Las operaciones militares, principalmente en el estado de Zamfara –ataques terrestres y aéreos– contra las bases de estos grupos criminales, situadas en bosques alejados, provocaron la expansión de sus actividades a los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Sokoto por la presión de los cuerpos de seguridad –estados donde los cuerpos de seguridad también llevaron a cabo acciones militares de envergadura–, el apagón de las telecomunicaciones por parte del Gobierno y las restricciones en el acceso a combustible y el suministro de alimentos, así como las limitaciones a los movimientos de ganado y la reducción de los horarios de los mercados, como medidas para presionar a los grupos criminales. En estos cinco estados del noroeste del país (Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) los actos de violencia provocaron 4.162 víctimas mortales según ACLED, cifra que se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles. Esta violencia tiene sus raíces en la competencia por los recursos entre las comunidades ganaderas fulani y las comunidades agrícolas hausa, ha escalado por la implicación de bandas criminales dedicadas al robo de ganado, secuestros para obtener rescates y saqueos e incendios de diversas localidades, situación que también han aprovechado actores con agendas yihadistas. Según el Nigerian Security Tracker, en 2021 se produjeron 3.948 víctimas mortales en estos cinco estados del noroeste de Nigeria. Para poner de manifiesto el incremento de la violencia, en los estados de Kaduna, Katsina y Zamfara se produjeron 2.634 víctimas mortales, cifra superior a las 2.481 víctimas mortales de 2020, y a las 1.988 víctimas mortales de 2019. Ante la gravedad de la situación, en noviembre el Tribunal Supremo Federal calificó de terroristas los grupos de ladrones y milicias criminales. El 14 de diciembre, grupos de jóvenes se movilizaron en la capital federal, Abuja, así como en la mayoría de los estados del noroeste para protestar por el grave clima de inseguridad. La violencia intercomunitaria entre comunidades ganaderas y agrícolas también afectó a otros estados del cinturón central del país causando centenares de víctimas mortales durante el año.

11. Véase el resumen de Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

12. Véase resumen de Nigeria (Biafra) en este capítulo.

Cabe destacar la conclusión de la investigación por parte del Panel de Investigación Judicial del estado de Lagos sobre la brutalidad policial y los abusos de los derechos humanos cometidos durante las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en octubre de 2020 como consecuencia de las medidas excepcionales impuestas por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19 y las movilizaciones sociales en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y, en especial, de la unidad especial antirrobo Special Anti-Robbery Squad (SARS).¹³ El 18 de octubre culminó la investigación que estableció compensaciones a 70 víctimas de la violencia policial y miles de personas se manifestaron el 20 de octubre en todo el país para conmemorar a las víctimas de la brutal represión contra el movimiento #ENDSARS.

Las operaciones militares contra los grupos criminales en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, provocaron la expansión de sus actividades a los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Sokoto por la presión de los cuerpos de seguridad

La histórica tensión entre el Estado nigeriano y los movimientos separatistas de la sureña región de Biafra

fue en aumento en la segunda mitad de 2020 y sobre todo en 2021, cuando se constató un incremento de la violencia armada. El aumento de la persecución de la movilización independentista y la creciente inseguridad contribuyeron al establecimiento de un grupo paramilitar de Biafra, la Red de Seguridad del Este (ESN), brazo armado del IPOB, en diciembre de 2020. Inicialmente, la ESN se presentó como una fuerza regional para expulsar a criminales y pastores ilegales (comúnmente relacionados con las comunidades norteñas fulani) que tradicionalmente compiten por los recursos con las comunidades agrícolas

de Biafra. Poco después el Ejército nigeriano se desplegó para ubicar los campamentos de ESN, y el 22 de enero de 2021 llevaron a cabo acciones militares en la localidad de Orlu, lo que desencadenó las acciones insurgentes de la ESN. Esta situación llevó al líder del IPOB, Nnamdi Kanu, a hacer un llamamiento a que el ESN cesara el fuego y se retirara de la localidad, lo que redujo la tensión. Sin embargo, las acciones del ESN y de los cuerpos de seguridad en persecución del grupo continuaron durante el año causando decenas de víctimas mortales.

En abril, la coalición opositora de Camerún Consejo de Gobierno de Ambazonia (Ambazonia Governing Council, AGovC) y el IPOB anunciaron una alianza a la que Camerún y Nigeria respondieron en agosto anunciando la colaboración de los cuerpos de seguridad de ambos países contra las insurgencias respectivas.¹⁴ En junio de 2021 se produjo la detención en el extranjero por la Interpol y su extradición a Nigeria del líder del IPOB, acusado de sedición, incitación al odio étnico y traición. Desde entonces, se produjo una intensificación de las protestas y movilizaciones sociales, sumada a múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad de Nigeria (NSF). Amnistía Internacional informó en agosto de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y torturas cometidos por los cuerpos de seguridad en su respuesta a la violencia en el sureste del país entre enero y junio. El juicio del líder del IPOB se pospuso en octubre y diciembre de 2021, de modo que continuaron las movilizaciones en el sureste exigiendo su liberación.

Nigeria (Biafra)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)

Síntesis:

Tras la independencia en 1960, el estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad, alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en Biafra a través de organizaciones no violentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB.

13. Véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021.

14. Véase el resumen de Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Cuerno de África

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas dirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal y el TPLF, que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré, conflicto de dimensiones regionales por la implicación de Eritrea.

El país se sumió en un grave deterioro de la situación como consecuencia de los impactos en el conjunto del país de la guerra entre actores armados de la región de Tigré y el Gobierno federal,¹⁵ así como por los recurrentes brotes de violencia intercomunitaria en diferentes partes del país y por las acciones del Ejército de Liberación Oromo (OLA) en distintos momentos del año. Se produjeron actos de violencia por parte de grupos civiles de autodefensa y milicias contra población civil

de la comunidad tigré como consecuencia del conflicto y también contra población civil de la comunidad amhara – la más numerosa del país y con presencia en las diferentes regiones del país–, provocando el desplazamiento de decenas de miles de personas en diferentes regiones. En la región de Oromiya, el OLA y los cuerpos de seguridad se enfrentaron causando centenares de víctimas mortales. Por otra parte, cabe destacar el incremento de la tensión y los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad etíopes y sudaneses y milicias en la frontera común, que causaron decenas de víctimas mortales durante el año, así como la ocupación por parte de Sudán de territorios en disputa. Sudán y Etiopía mantienen una disputa en torno a la región fronteriza de al-Fashaga (un área de Sudán al este del río Atbara y al sur del río Tekeze). Desde 2008, Etiopía ha abandonado todas las reclamaciones sobre al-Fashaga siempre que Sudán permitiera que los agricultores y activistas etíopes armados y no armados permanecieran en el área. Con el estallido de la guerra de Tigré, las fuerzas sudanesas pudieron penetrar a la región debido a un acuerdo con Etiopía. Cuando los activistas armados amhara abandonaron la zona en disputa para ayudar al Gobierno federal etíope en la guerra de Tigré, las fuerzas sudanesas comenzaron a expulsar a los agricultores etíopes, incluidos los amharas, rompiendo efectivamente el compromiso de 2008. Etiopía también acusó a Sudán de ejecutar a civiles en la zona. Los enfrentamientos comenzaron por primera vez en el área de Abu Tyour a lo largo de la frontera entre Etiopía y Sudán el 15 de diciembre de 2020 cuando activistas armados amhara supuestamente respaldados por el Gobierno etíope tendieron una emboscada a varios oficiales militares sudaneses, matando a 4 de ellos. Desde entonces, Sudán ha recuperado la mayor parte de la frontera en disputa. A pesar de que sigue siendo territorio legalmente sudanés, la región de Amhara calificó el despliegue sudanés como una invasión y afirmó que al-Fashaga pertenecía a la región de Amhara en Etiopía. Abiy Ahmed respaldó esa afirmación. Debido a que Sudán expulsó a los militantes amhara, los agricultores sudaneses comenzaron a cultivar sus tierras por primera vez en 25 años. Los militantes amharas también estuvieron hostigando a agricultores sudaneses, causando algunos brotes de violencia y víctimas mortales.

Kenia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenia, ISIS

15. Véase el resumen sobre Etiopía (Tigré) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Síntesis:

La política y la economía de Kenia han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder al autocrático Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras este proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibaki y Raila Odinga. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007, aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenia en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenia, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenia, y tensiones entre Kenia y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

El clima de violencia política y polarización entre los partidarios del actual presidente, Uhuru Kenyatta, y del líder opositor Raila Odinga, y los partidarios de su vicepresidente William Ruto y aspirante a la presidencia, fue en aumento, así como por la persistencia de los ataques del grupo armado al-Shabaab en el este y el noreste y el incremento de la violencia intercomunitaria en diversas partes del país. Cabe destacar el levantamiento del toque de queda vinculado a la pandemia de la COVID-19 en octubre, vigente desde marzo de 2020. El año 2021 se vio marcado por las maniobras políticas del presidente Uhuru Kenyatta y su aliado de facto, el líder opositor Raila Odinga, contra el vicepresidente William Ruto, de cara a las elecciones generales de agosto de 2022. En marzo, Kenyatta creó la coalición One Kenya Alliance (OKA) con cuatro partidos opositores, que no habían escogido su candidato presidencial a finales de diciembre de 2021. En mayo el Tribunal Supremo de Kenia dirimió que el intento de reforma de la Constitución por parte del presidente Kenyatta y su aliado Raila Odinga era ilegal. Esta decisión fue vista como un apoyo a la posición del vicepresidente, William Ruto, opuesto a la reforma constitucional. Kenyatta, líder del Jubilee Party, fue perdiendo apoyos durante el año en favor de los sectores dentro del partido favorables a Ruto. El líder del Orange Democratic Movement (ODM) y candidato preferido del presidente Kenyatta, Raila Odinga, lanzó oficialmente el 10 de diciembre su quinta candidatura a la presidencia antes de las elecciones de agosto de 2022. El vicepresidente Ruto, el 22 de diciembre, calificó a Odinga como un

“proyecto estatal”, y también acusó al Gobierno en las últimas semanas de utilizar los mecanismos del Estado para apoyar la candidatura de Odinga. El 29 de diciembre, los legisladores se enfrentaron en el Parlamento por los cambios propuestos a la ley que rige la conducta de los partidos políticos y las formaciones de coaliciones, aspecto clave de cara a las elecciones de 2022.

Por otra parte, el grupo armado somalí al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil, con explosión de artefactos improvisados durante todo el año, principalmente en los condados del noreste y este (Mandera, Wahir, Garissa y Lamu) causando decenas de víctimas mortales. Al-Shabaab intensificó los ataques antes de la temporada navideña cristiana. No obstante, también se produjeron ataques esporádicos reivindicados por al-Shabaab en otras partes del país alejadas de la frontera somalí, como la detonación de un artefacto explosivo en diciembre en la localidad de Kamloma (condado de Kisumu, oeste) que causó tres víctimas mortales, incluyendo al militante del grupo armado. Por otra parte, los condados del norte registraron una persistente violencia entre comunidades, alimentada en parte por la grave sequía que afecta al país y que ha obligado a las comunidades de pastores a trasladarse en busca de agua y pastos, así como por la proximidad de las elecciones generales de 2022, que los partidos políticos tradicionalmente instrumentalizan en beneficio propio. Los robos de ganado, ataques de milicias comunitarias y represalias fueron constantes durante todo el año, entre las comunidades gabra, degodia y borana, principalmente en el condado de Marsabit, y en menor medida en Wajir (noreste), Turkana (noroeste) y Samburu (centro-norte, fronterizo con Marsabit). El condado de Laikipia (centro) también fue escenario de violencia intercomunitaria y robos de ganado a partir de septiembre, causando decenas de víctimas mortales. ACLED estableció en 383 el número de víctimas mortales en el conjunto del país, incluyendo por las acciones de los cuerpos de seguridad, al-Shabaab y la violencia intercomunitaria, así como otros hechos de violencia como las movilizaciones sociales y la represión policial. Según desveló Deadly Force, se produjo una reducción del número de muertes a manos de la Policía en comparación con las cifras de años anteriores.¹⁶ En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016, 256 en 2017, 250 en 2018, 122 en 2019, 128 en 2020, mientras que en 2021 murieron 97 personas. La escalada de la violencia policial en 2017 coincidió con el ciclo electoral que vivió el país, por lo que se prevé una nueva escalada de la violencia durante el próximo año como consecuencia del clima preelectoral que vive el país de cara a las elecciones de agosto 2022.

16. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto del rotativo keniano Daily Nation, Nation Newsplex, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenia, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Finalmente, cabe destacar la mejora de las relaciones entre Kenia y Somalia tras la mediación de Qatar. El 6 de mayo ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas. Esta decisión había venido precedida por un grave deterioro de la situación entre ambos países derivado de la ruptura de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2020 por parte de Somalia, además de las acusaciones por parte de Somalia de apoyo militar por parte de Kenia a milicias somalíes del estado somalí de Jubalandia, con quien el Gobierno Federal somalí tiene diferentes contenciosos. No obstante, el veredicto en octubre de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya relativo a la disputa territorial entre ambos países fue favorable a Somalia (Nairobi reclamaba para sí una zona rica en hidrocarburos en las aguas territoriales en disputa), lo que provocó el rechazo de la sentencia y de la jurisdicción del CIJ por parte de Kenia.

Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna
Actores:	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Transformateurs), grupos armados chadianos (entre otros, FACT, CCMSR, UFR), grupo armado nigeriano Boko Haram, milicias comunitarias, milicias privadas

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de

inestabilidad social, que se agravó de cara a las elecciones de 2021 con la represión de la movilización social y la persecución de la oposición política. Por último, cabe destacar las intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia y contra la minería ilegal, y contra Boko Haram en la región del Lago Chad, así como periódicos enfrentamientos intercomunitarios por la propiedad y usos de la tierra.

La situación en Chad se deterioró considerablemente como consecuencia de la muerte del presidente Idriss Déby y la toma del control de las instituciones del Estado por parte de una junta militar liderada por su hijo, suplantando al Gobierno vigente, lo que supuso un golpe de Estado militar. Esta situación tuvo lugar en medio de un clima de grave inestabilidad vinculada a la ofensiva rebelde del grupo armado Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT) en el centro y norte del país, perpetrada el mismo día en que se celebraban las elecciones presidenciales el 11 de abril. A su vez, dichas elecciones estuvieron enmarcadas en un clima de represión y persecución política de la oposición.¹⁷ Esta situación de inestabilidad se había agravado durante el año 2020 por la instrumentalización política de la situación de excepcionalidad derivada de las restricciones para limitar la expansión de la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de reprimir a la oposición política. Cabe también destacar la persistencia de enfrentamientos intercomunitarios en diversas partes del país y las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.¹⁸

El 19 de abril murió el presidente de Chad supuestamente por heridas en los combates contra los rebeldes del FACT en la localidad de Mao, en el norte del país, según anunció el Ejército el día siguiente. Una junta militar suspendió la Constitución, instauró el toque de queda, creó el Consejo Militar de Transición (CMT) compuesto por 14 generales y nombró al general Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido, como nuevo presidente del CMT para los próximos 18 meses.¹⁹ Mahamat “Kaka” había ocupado el poderoso cargo de comandante en jefe de la guardia presidencial (la dirección general de los servicios de seguridad o DGSSIE, el cuerpo de élite las Fuerzas Armadas chadianas). El 21 de abril el CMT publicó una Carta Transicional que establecía que el Gobierno y el Parlamento seguirían funcionando hasta que se formaran un consejo de transición nacional y un gobierno de transición. El 26 de abril el CMT nombró al candidato presidencial a las elecciones del 11 de abril, Albert Pahimi Padacké, como nuevo primer ministro interino, y el 2 de mayo el CMT nombró a un gobierno de transición formado por 40 miembros y presidido por Pahimi Padacké. La mayoría de los actores de la comunidad internacional hicieron un llamamiento al retorno al orden constitucional pero no condenaron el golpe de Estado. Entre ellos, la UA el 22 de abril instó a la junta militar a devolver el

17. Véase Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021.

18. Véase el resumen de Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

19. Véase Josep Maria Royo, *Golpe de Estado en Chad, Africay*, 22 de abril de 2021.

poder político a las autoridades civiles; y el mismo 22 de abril el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian –cuyo país ha sido un tradicional aliado del Chad de Idriss Déby– reconoció al CMT, argumentando motivos de seguridad excepcionales. Una pléyade de estados, liderados por Francia, así como la UA y la ONU lamentaron la muerte de Déby y le atribuyeron ser uno los pilares en la construcción de la arquitectura de la paz y la seguridad en el continente y, en especial, en el Sahel y un aliado clave en sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. El propio Déby había llegado al poder en 1990 al frente de una rebelión armada que derrocó al anterior presidente, Hissène Habré.

La muerte de Déby coincidió con la publicación de los resultados provisionales de los comicios en los que Idriss Déby había sido reelegido en su cargo para un sexto mandato, tras ganar con un 79,32% de los votos las elecciones celebradas el 11 de abril. Estas elecciones habían transcurrido en medio de un clima de represión y persecución política de la oposición, de activistas y de defensores de los derechos humanos y habían sido boicoteadas por parte de varios opositores, entre ellos el histórico líder Saleh Kebzabo, por el clima de inseguridad contra sus actos de campaña y manifestaciones que reclamaban una transición pacífica y democrática. El mismo Succès Masra, el líder del emergente partido opositor Les Transformateurs, cuya candidatura había sido rechazada por el Tribunal Supremo, había pedido el aplazamiento electoral para facilitar el necesario diálogo político. En este sentido, numerosos actores de la sociedad civil, entre ellos diversos partidos opositores, sindicatos y grupos de jóvenes habían lanzado la campaña “Wakit Tama” (Ahora es el momento) contra el sexto mandato de Déby. El domicilio del candidato opositor Yaya Dillo Djerou, antiguo líder rebelde y sobrino de Idriss Déby, había sido atacado en febrero por los cuerpos de seguridad. De la misma etnia que el presidente –la comunidad zaghawa, un 4% de la población, tiene el control de un Ejército poco cohesionado y afectado por tensiones comunitarias (equilibrios étnicos en el seno del Ejército), así como por problemas de indisciplina y falta de profesionalidad, tal y como señalaba en enero el International Crisis Group²⁰– se había permitido criticar y acusar de corrupción y malversación a la esposa del presidente, Hinda Déby Itno, y su entorno.

En las semanas siguientes, numerosas voces de la comunidad internacional hicieron llamamientos al diálogo, como el Consejo de Paz y Seguridad de la UA el 14 de mayo, que pidió una transición liderada por civiles y que esta no se prolongara más allá de los 18 meses, además de la celebración de un diálogo nacional

inclusivo. El 4 de junio la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) adoptó la Declaración de Brazzaville, instando a los actores chadianos a promover el diálogo y la reconciliación y al CMT a organizar las elecciones en un plazo de 18 meses. Aunque en un primer momento se produjo una oleada de represión y persecución de la oposición política y social, así como de las movilizaciones y actos en contra del golpe de Estado y del CMT, con numerosos arrestos y heridos en las movilizaciones, posteriormente las autoridades de transición llevaron a cabo una limitada apertura del espacio político. Así mismo, diferentes voces del mundo político y social del país hicieron llamamientos a promover un diálogo inclusivo, y las autoridades de transición manifestaron su disposición a llevarlo a cabo. En los siguientes meses las autoridades de transición llevaron a cabo pasos para celebrar un diálogo nacional, y se estableció en julio el Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo (CODNI). No obstante, los desacuerdos en torno a los integrantes del CODNI, a la inclusividad del diálogo nacional, a la injerencia del CMT, a la participación de las diferentes insurgencias o a la agenda de temas del mismo diálogo, entre otras cuestiones, retrasaron su celebración, ya prevista para 2022. En agosto el presidente del CMT, Mahamat Déby, hizo un llamamiento a los diferentes grupos armados (FACT, UFR, CCMSR) a unirse al proceso de diálogo. En noviembre anunció una amnistía general a la oposición armada y política de cara a facilitar su participación en el diálogo nacional, lo que propició que en diciembre diversas figuras opositoras civiles y armadas anunciaran su voluntad de participar en el diálogo nacional. Varios actores clave acordaron participar en el proceso, y se produjeron reuniones entre representantes de la insurgencia chadiana y el Gobierno chadiano en Egipto y Francia. El presidente de transición, Mahamat Déby, el 30 de diciembre promulgó leyes de amnistía que abarcaban a más de 300 opositores y rebeldes.

La situación en Chad se deterioró como consecuencia de la muerte del presidente Idriss Déby y la toma del poder por parte de una junta militar suplantando al gobierno vigente, lo que supuso un golpe de Estado

RDC	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social

20. International Crisis Group, *Les défis de l'Armée Tchadienne*, ICG, 22 de enero de 2021.

Síntesis:

RDC vive inmersa en un ciclo de inestabilidad y violencia que tiene sus orígenes en la época colonial bajo la tutela primero del rey belga Leopoldo II y posteriormente de Bélgica. El país no escapó de las dinámicas internacionales de la Guerra Fría por lo que la crisis persistió tras su independencia en 1965, a partir del golpe de Estado y posterior dictadura de Mobutu Sese Seko (1965-1997). Se vio afectado también por las dinámicas regionales de conflicto en los países vecinos durante los años ochenta y noventa, en especial el genocidio de Ruanda de 1994 y su injerencia en RDC. La rebelión con apoyo ruandés de 1996 contra el régimen de Mobutu condujo a la caída del régimen en 1997, seguida por la “primera guerra mundial africana” (1998-2003) en la que participaron una decena de países de la región.²¹ La transición entre 2003 y 2006 contribuyó a afianzar en el poder a Joseph Kabila, que mediante el control del aparato del Estado, fraude e irregularidades en las elecciones de 2006 y 2011, consiguió prolongar su mandato de 2016 (cuando debía celebrarse un nuevo proceso electoral) a 2018. En la profunda y persistente crisis que afecta al país confluyen las promesas frustradas de democratización, un elevado clima de corrupción y clientelismo, la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno se ejerce a través del a menudo recurrente uso excesivo de la fuerza y de graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. En 2018 se celebraron nuevas elecciones que significaron la primera transición pacífica en el país y comportaron la controvertida subida al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor Étienne Tshisekedi, mediante una frágil coalición en la que los partidarios de Joseph Kabila (la coalición FCC) siguieron ejerciendo su determinante influencia. Este clima de inestabilidad política convive con la persistencia del conflicto en el este de RDC, atravesado por dinámicas locales, regionales e internacionales. La coalición colapsó a finales de 2020 abriendo una nueva etapa de cambio a la vez que persistió la inestabilidad política y la violencia en el este del país.

La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad política derivada de las tensiones en el seno de la nueva coalición gubernamental y por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.

A esto se sumó la persistente inestabilidad y violencia como consecuencia de las acciones de los numerosos grupos armados en el este del país así como de las operaciones contrainsurgentes por parte de los cuerpos de seguridad, situación agravada a partir del establecimiento del estado de sitio en las provincias del este.²² El Gobierno de coalición surgido de las controvertidas elecciones de 2018 y liderado por Félix Tshisekedi se había visto afectado por numerosas tensiones y obstáculos que le condujeron a la ruptura a finales de 2020. Esto le llevó a la formación de una nueva coalición gubernamental a la que sumó a antiguos aliados de Kabila entre finales de 2020 y principios de 2021, ya que el Tribunal Constitucional permitió a los parlamentarios abandonar sus antiguos grupos políticos y unirse a nuevas alianzas sin el riesgo de ser expulsados por sus partidos originales y, en consecuencia, perder sus escaños. De esta manera, Tshisekedi convenció a numerosos diputados de la coalición de Kabila, el FCC, para que se unieran a la

nueva mayoría, la Unión Sagrada (Union Sacrée), junto con los pesos pesados de la oposición Moïse Katumbi y Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi se aseguró a principios de 2021 una serie de victorias políticas adicionales sobre Kabila, cambiando el equilibrio de poder a su favor.

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, los diputados de la nueva mayoría de gobierno sustituyeron por mociones sucesivas a los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, así como al primer ministro Ilunga y su gobierno. El 15 de febrero, tras las negociaciones entre diferentes facciones de la Unión, Tshisekedi nombró a Jean-Michel Sama Lukonde nuevo primer ministro. Originario de Grand Katanga y ex director ejecutivo de la empresa minera más grande del país, Gécamines, Lukonde pertenecía a un pequeño partido político sin un solo escaño en la Asamblea Nacional, llamado Avenir du Congo. Lukonde no tenía ninguna influencia política real ni ambiciones para las elecciones de 2023, lo que le convertía en un aliado durante los dos últimos años de la presidencia de Tshisekedi, según analistas. Después de dos meses de disputas en torno a los puestos ministeriales dentro de la nueva mayoría, el gobierno de 57 miembros apenas se redujo con respecto al de su predecesor. Sin embargo, un 80% de sus ministros eran nuevos, a diferencia del gobierno anterior, donde algunos ministros ya habían servido bajo los gobiernos de Laurent y Joseph Kabila, e incluso durante la dictadura de Mobutu Sese Seko. Tshisekedi trató de controlar las diversas fuerzas dentro de su nueva coalición. Las difíciles negociaciones para formar el Gobierno de la Unión Sagrada pusieron de manifiesto la precariedad de una mayoría que se unió para desplazar a Kabila pero que carecía de una agenda política compartida, según analistas. Las fisuras empezaron a aparecer en la coalición casi tan pronto como se proclamó el gobierno el 12 de abril. Casi 200 de los diputados que habían desertado del FCC de Kabila formaron una “coalición de diputados revolucionarios” para protestar por el desequilibrio en el nuevo gobierno. Algunas provincias tenían varios ministerios; otras no tenían ninguno. Esta coalición acusó a Lukonde de no haber recompensado su “cambio de lealtad” con un cargo en el gobierno, y amenazó con bloquear la investidura del gobierno de Lukonde. El 26 de abril, después de que el primer ministro y Tshisekedi se reunieran con los diputados, la Asamblea Nacional expresó su confianza en el nuevo gobierno y aprobó su programa. A pesar de los cambios y limitados avances en el ámbito político en lo concerniente a la mejora de la gobernabilidad y el respeto por los derechos humanos, persistió la violencia y la inseguridad en el este, que en algunos momentos se vio agravada por las movilizaciones sociales en el este que exigían una mejora de la situación de seguridad, así como el fin del estado de emergencia. Estas fueron reprimidas con dureza por los cuerpos de seguridad, causando diversas víctimas mortales durante el año.

21. Véase la síntesis de RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

22. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Además, la fragilidad de la coalición Unión Sagrada y las acusaciones hacia Tshisekedi de intentar perpetuarse en el poder se evidenciaron con los preparativos de las elecciones de 2023, a través de la ley aprobada el 3 de julio que establece la organización y funcionamiento de la comisión electoral independiente (CENI), con dos tercios de sus miembros procedentes de los partidos políticos, al igual que su predecesora. La oposición y líderes religiosos habían llamado a despolitizar la CENI conformándola con miembros de la sociedad civil y expertos electorales. El nombramiento en agosto del aliado de Tshisekedi, el experto electoral Denis Kadima, al frente de la CENI provocó el rechazo de la oposición liderada por Lamuka y de varios partidos de la coalición en el poder, así como de las organizaciones religiosas, en especial la Iglesia Católica, y otros sectores de la sociedad civil. A pesar de ello, en octubre fue constituida la CENI con Kadima al frente. La decisión fue boicoteada por la oposición que se negó a enviar a sus delegados, y en noviembre se organizaron diversas movilizaciones de la oposición y líderes religiosos de rechazo a su nombramiento y demandando la neutralidad de la CENI, en las que se produjeron detenciones de activistas. Por otra parte, la introducción de la controvertida ley de nacionalidad en julio, que prohibía el derecho a votar a cualquier ciudadano con un progenitor no congolés, provocó el rechazo a nivel local e internacional. Entre otros, el arzobispo de Kinshasa la denunció como un instrumento de exclusión y división, el jefe de la misión de la ONU en el país alertó ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las potenciales peligrosas consecuencias de un debate divisivo en torno a la nacionalidad. El líder del partido Juntos por la República, Moïse Katumbi, miembro de la coalición en el poder, cuyo padre es de origen griego, denunció un intento de excluirle como candidato. En paralelo, el Tribunal de Casación ordenó la salida de prisión de Vital Kamerhe por motivos médicos, quien había sido sentenciado por corrupción y malversación de fondos dentro del Gobierno de Tshisekedi. Su partido, la UNC, había calificado su encarcelamiento como motivado políticamente para apartarle del poder, y su liberación podría estar también motivada políticamente con el objetivo de preparar alianzas de cara a las elecciones nacionales de 2023, según analistas.

Sudán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régi

men autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que, a principios de 2019 conllevaron la caída del régimen de al-Bashir y la apertura de un proceso de transición.

El año estuvo marcado por una nueva crisis política nacional debido al incremento de las tensiones sociales, así como a las tensiones entre la parte civil y la parte militar del Gobierno de Transición, lo que derivó en un nuevo golpe de Estado, abriendo un proceso de movilizaciones populares en todo el país que fueron duramente reprimidas. Durante el año, el país siguió afrontando una importante crisis económica que se vio acrecentada por el aumento de precios de productos básicos debido a la aplicación de políticas de ajuste estructural recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, todo lo cual derivó en importantes manifestaciones de protesta en varios puntos del país. El 10 de mayo el FMI anunció un plan de financiación al país para liquidar su deuda con el organismo, que incluía, como contrapartida, la adopción de diferentes medidas, entre ellas el fin de los subsidios a los combustibles, lo que provocó un fuerte aumento de los precios. Este hecho generó movilizaciones y protestas ciudadanas contra el Gobierno en Jartum en el mes de junio, exigiendo la dimisión del ejecutivo. De forma paralela a la crisis social, en junio también se produjo un aumento de la tensión política entre los componentes civiles y militares del Gobierno de Transición, debido a la negativa de la parte militar del Gobierno y de las Fuerzas de Apoyo Rápido –RSF, por sus siglas en inglés– de integrar estas últimas al Ejército nacional, tal y como lo estipula la reforma del sector de seguridad prevista en el acuerdo de paz de octubre de 2020. La crisis en el Gobierno derivó en **un intento de golpe de Estado fallido el 21 de septiembre, que sirvió como preámbulo de un nuevo golpe militar el 25 de octubre, que derrocó a la parte civil del Gobierno.** El golpe frustrado de septiembre había generado que la parte civil del ejecutivo insistiese en la necesidad de reformar el aparato militar y de seguridad, mientras que la parte militar, encabezada por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al-Burhan, y su adjunto, el general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” –comandante de las fuerzas paramilitares de las RSF– acusó a la parte civil de intentar generar las condiciones para desestabilizar el país, tensión que fue seguida del nuevo golpe de Estado en octubre. El 25 de octubre al-Burhan declaró el estado de emergencia, disolvió el Consejo Soberano

y el Gobierno de Transición, así como detuvo al Primer Ministro, varios ministros, funcionarios y dirigentes políticos civiles. También supuso la disolución del Consejo Legislativo de Transición –que aún no se había formado–, la destitución de los gobernadores de los estados, y la restauración de un Consejo Militar de Transición, entre otros. El golpe generó la condena de la comunidad internacional, que presionó para la vuelta al orden constitucional. El 27 de octubre la UA suspendió a Sudán del organismo, mientras que el Banco Mundial suspendió sus ayudas al país. A nivel interno, el golpe generó múltiples manifestaciones y protestas de condena en varios puntos del país que fueron durante reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La parte militar del Gobierno de Transición de Sudán llevó a cabo un nuevo golpe de Estado

Durante las semanas posteriores se puso en marcha un diálogo entre la Junta Militar, la parte civil derrocada del Gobierno, y otros actores políticos para buscar una solución pacífica y negociada a la crisis. El 11 de noviembre, Al-Burhan anunció la formación de un Consejo Soberano reconstituido en el que él ocuparía la Presidencia y Hamdan Dagalo la Vicepresidencia. Además, se mantenían los mismos representantes de los militares y de la coalición de grupos rebeldes Sudan Revolutionary Front (SRF) que había en el Consejo disuelto, aunque los miembros civiles fueron reemplazados. Como resultado del golpe se produjo una importante fragmentación del componente civil del Gobierno de Transición, la llamada coalición de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC). Las presiones internas y externas lograron que el 21 de noviembre se anunciara un acuerdo político en el país que **restableció en el Gobierno al primer ministro civil Hamdok, aunque consolidó el control militar sobre el Gobierno**. Si bien la comunidad internacional dio la bienvenida a la medida, a nivel interno generó resistencias. Varios partidos políticos sudaneses, organizaciones armadas y la sociedad civil, incluido el FFC, condenaron el intento de legitimar el golpe y exigieron la salida de los golpistas del Gobierno, así como 12 ministros del FFC dimitieron del Ejecutivo. El acuerdo también dio lugar a una importante movilización popular contra el mismo en varios puntos del país, así como a la puesta en marcha de una campaña de desobediencia civil, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad hasta finalizar el año. En medio del creciente clima de descontento popular, el reinstalado primer ministro Hamdok reemplazó a la mayoría de los viceministros interinos y a todos los gobernadores estatales en funciones designados por militares desde el golpe, en un intento por volver a formar un gobierno propio. Sin embargo, las tensiones con la parte militar del gobierno se mantuvieron, aumentando a finales de año los rumores sobre una posible dimisión de Hamdok.

Finalmente, en otros aspectos destacados durante el año en el país, en el asunto relativo a la Gran Represa del Renacimiento Etíope, no se lograron avances significativos en las conversaciones entre Sudán, Etiopía

y Egipto, en parte debido al aumento de las tensiones entre Sudán y Etiopía que derivaron en choques armados entre sus ejércitos a lo largo de la frontera compartida.

Por otro lado, a principios de año el Gobierno sudanés derogó oficialmente la ley de boicot a Israel, allanando el camino para la normalización de las relaciones entre los dos Estados. Este hecho se desarrolló como parte del acuerdo que el país había alcanzado en enero con EEUU, que incluía un préstamo estadounidense para liquidar atrasos en los pagos de la deuda sudanesa con el Banco Mundial.

Norte de África - Magreb

Argelia	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados AQMI (ex GSPC), Jund al-Khilafa (filial ISIS)

Síntesis:

En la presidencia de Argelia sin contestación desde 1999, Abdelaziz Bouteflika se había mantenido en el cargo a pesar de padecer una grave enfermedad que le había supuesto estar al margen de la escena pública desde 2013. Una opaca coalición de figuras políticas y militares ha mantenido las riendas del poder en las sombras, identificada popularmente entre la población argelina como “le pouvoir”. En 2019 el anuncio de que Bouteflika (82 años) se presentaría a un quinto mandato alentó masivas movilizaciones populares de una intensidad no registrada desde la independencia del país en 1962. La presión popular forzó su dimisión y, desde entonces, el poder militar ha intentado controlar la transición y ha promovido medidas como la persecución y arresto de algunas figuras asociadas al antiguo régimen. El movimiento de protesta pacífico Hirak ha persistido en sus movilizaciones contra la corrupción, la influencia del poder militar sobre la política y contra la clase dirigente en general, insistiendo en sus demandas de cambio a un sistema genuinamente democrático capaz de impulsar reformas políticas, sociales y económicas. Paralelamente, Argelia continúa siendo escenario de incidentes esporádicos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados de línea yihadista, principalmente al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) –ex Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GPSC)– que en los últimos años ha centrado sus actividades en países del Sahel.

A lo largo de 2021 Argelia continuó siendo un escenario de tensión de múltiples dimensiones. Dos años después de las masivas protestas que derivaron en la salida de Abdelaziz Bouteflika tras décadas en el poder, persistió la contestación popular y la demanda de reformas; así como las acusaciones contra las autoridades por persecución a la disidencia. Ante el movimiento de protesta que continuó demandando un cambio de régimen y el fin del dominio militar en la políti-

ca argelina, las autoridades reaccionaron con intentos de cooptación, señalando las divisiones de las fuerzas opositoras y con medidas represivas. ONG locales e internacionales denunciaron el cierre de entidades y la detención de manifestantes, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos críticos con el régimen. Algunas de estas voces fueron condenadas a prisión por cargos como “ofensas al presidente”, “insultos a instituciones del Estado” o “circular publicaciones que afectan el orden público”. La organización argelina Comité Nacional por la Liberación de Detenidos (CNLD) documentó la detención de más de 230 personas por motivos políticos en 2021. La mayoría de las personas presas de conciencia estaban vinculadas al movimiento opositor Hirak, que reivindicó la liberación de presos políticos en sus periódicas manifestaciones. En junio el presidente, Abdelmadjid Tebboune, aprobó un decreto que amplió la definición de “actos de terrorismo”. La norma cataloga como tales las acciones que tienen por objetivo la seguridad del Estado, la unidad nacional o la estabilidad y el normal funcionamiento de las instituciones; las acciones o incitaciones que buscan cambiar el sistema de gobernanza por medios no constitucionales o socavar la integridad del territorio nacional. Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el posible uso de la norma para perseguir a activistas opositores y grupos políticos que desean un cambio de régimen.²³

Durante 2021 también se amplió la persecución a la formación opositora Rachad –en la que participan antiguos miembros del Frente Islámico de Salvación (FIS)– y al Movimiento por la Autodeterminación de la Kabilia (MAK). En mayo, ambas entidades fueron declaradas como “organizaciones terroristas” por el Alto Consejo de Seguridad, después de que el Gobierno anunciara el desmantelamiento de una célula del MAK que presuntamente preparaba un ataque durante manifestaciones de Hirak. Tanto Rachad –creado en 2017–, como MAK –formado en 2001 con la intención de buscar la autonomía y posterior independencia de Kabylia– declaran buscar sus objetivos por vías pacíficas y niegan estar involucrados en hechos de violencia. En los meses siguientes fueron detenidas decenas de personas, incluyendo varios periodistas, por sus presuntos vínculos con estas organizaciones. En agosto, tras unos devastadores incendios que provocaron la muerte a 90 personas (al menos 57 civiles y 33 soldados) en la provincia de Tizi Ouzu (Kabylia), la oficina de Tebboune responsabilizó a Rachad y a MAK, y acusó a Marruecos de dar apoyo a este último grupo. Días después el Gobierno argelino rompió relaciones diplomáticas con Rabat acusándole de “acciones hostiles”, en medio de una creciente tensión bilateral que en 2021 se vio influida por la cuestión del Sáhara

Occidental, pero también por otras variables (sospechas de espionaje a Argelia por parte de Marruecos, gestión de los hidrocarburos en el norte de África, incidentes de seguridad).²⁴ En el plano político, cabe destacar que en febrero Tebboune anunció elecciones legislativas anticipadas y remodeló parcialmente su gobierno, aunque mantuvo en sus cargos a algunas figuras destacadas en la persecución al movimiento Hirak. La represión al movimiento de contestación se intensificó en vísperas de los comicios, que se celebraron en junio en medio de llamamientos al boicot y que contaron con la menor tasa de participación desde la independencia del país. Tras las elecciones Tebboune volvió a reformar parcialmente su gobierno y concedió perdones y amnistías a más de un centenar de integrantes de Hirak encarcelados. Las elecciones locales de noviembre también tuvieron una baja participación, de 35% y arrojaron una estrecha victoria del partido oficialista. En paralelo, cabe destacar que en 2021 continuaron registrándose algunos incidentes esporádicos que involucraron a las fuerzas de seguridad y a presuntos miembros de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). El más destacado tuvo lugar en enero, en la región de Tipaza (oeste de Argel), cuando una operación militar resultó en la muerte de seis presuntos combatientes del grupo armado. Según los datos del centro de estudios ACLED, un total de 22 personas murieron en enfrentamientos y a causa de explosivos en Argelia en 2021. El balance oficial del Ministerio de Defensa argelino, en tanto, informó de nueve fallecidos, seis rendiciones, la “neutralización” de más de 200 personas vinculadas a grupos considerados terroristas, además del decomiso de armas, municiones y explosivos.²⁵

Marruecos-Sáhara Occidental	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ²⁶
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO

Síntesis:

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campa-

23. Human Rights Watch, “Algeria: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, enero de 2022.

24. Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en este capítulo.

25. People’s Democratic Republic of Algeria – Ministry of National Defence, *PNA operational report for the year 2021*, 1 de enero de 2022.

26. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

ña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

La tensión en torno a la cuestión del Sáhara Occidental continuó intensificándose a lo largo de 2021, en un contexto marcado por el fin del cese el fuego el año anterior, un persistente bloqueo del proceso negociador auspiciado por la ONU,²⁷ un agravamiento en el histórico pulso entre Marruecos y Argelia, diversos hechos que evidenciaron los ecos internacionales de la disputa y un incremento de la represión en los territorios saharauis ocupados por Rabat, entre otros factores. Tras los incidentes en Guerguerat en noviembre de 2020 y la decisión del Frente POLISARIO de abandonar el alto el fuego vigente desde 1991, durante el año se produjeron diversos hechos violentos, aunque su alcance es complejo de precisar por las versiones contradictorias entre las fuentes. Pese a ello, **algunas estimaciones apuntan a una treintena de personas fallecidas en las hostilidades**. El informe del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental constató el significativo deterioro de la situación y destacó los relatos antagónicos de las partes, ya que mientras el Frente POLISARIO considera todo el territorio en zona de guerra, Marruecos insiste en la ausencia de conflicto armado. La misión de la ONU, MINURSO, no pudo verificar en terreno la gran mayoría de los incidentes.²⁸ En 2021 el Frente POLISARIO continuó atacando posiciones militares marroquíes a lo largo de la barrera que separa el territorio saharauí controlado por Marruecos del que está bajo administración de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Rabat reconoció que entre noviembre de 2020 y agosto de 2021 se habían registrado más de un millar de ofensivas a distancia cerca de la berma, 83% en la zona de Mahbas. En febrero, y por primera vez desde la tregua vigente en la zona durante tres décadas, el Frente POLISARIO aseguró que había dado muerte a tres soldados marroquíes en la zona de Ouarkiz, aunque Rabat negó este hecho y lo calificó como propaganda de guerra. En abril informaciones de prensa apuntaron que Marruecos había utilizado por primera vez aviones no tripulados en una ofensiva en la zona del Sáhara Occidental –concretamente en Tifariti, en el área de separación– provocando la muerte de un dirigente militar del Frente POLISARIO. Los incidentes más graves se produjeron al finalizar el año, a mediados de noviembre, cuando otro ataque aéreo marroquí habría causado la muerte de 11 civiles en Miyek, área bajo control de la RASD. Días antes, el 3 de noviembre,

Argelia había responsabilizado a Marruecos por la muerte de tres camioneros argelinos en otro ataque con dron en el área del Sáhara Occidental controlada por el Frente POLISARIO. Argel calificó la acción de “terrorista” y advirtió sobre represalias.

Este último incidente agravó las tensiones entre Argel y Rabat, cuyas relaciones sufrieron un grave deterioro en 2021 y motivaron la crisis bilateral más grave desde 1994, según analistas. **A finales de agosto, Argelia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos denunciando una serie de “actos hostiles” del vecino país, entre ellos sus políticas en el Sáhara Occidental.** Las relaciones ya se habían tensionado en 2020 tras el fin del alto el fuego y por el apoyo del Gobierno de Donald Trump a las reivindicaciones marroquíes sobre el Sáhara a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel. A principios de 2021 Argelia realizó maniobras militares de gran escala en Tindouf, cerca de la frontera con Marruecos, en una acción que fue interpretada como una advertencia a que Rabat no incursionara en su territorio. La tensión bilateral también se intensificó por las declaraciones de Rabat en una reunión de la ONU sobre las reivindicaciones de pueblos de la región argelina de Kabylia –Argel acusó a Marruecos de apoyar a dos grupos que señala como “terroristas”, el Movimiento por la Autodeterminación de Kabylia (MAK) y a RACHAD–; por las informaciones del “escándalo Pegasus” –según las cuales Marruecos usó el programa de espionaje israelí para interceptar comunicaciones de miles de argelinos, incluyendo altos cargos políticos y militares– y por disputas vinculadas a los flujos de hidrocarburos desde el norte de África a Europa. En este contexto, las autoridades argelinas intensificaron la vigilancia de la frontera occidental y, en septiembre, anunciaron el cierre del espacio aéreo a todas las aeronaves marroquíes, tanto civiles como militares.

El apoyo de EEUU a la posición marroquí –que no fue revertido por el nuevo Gobierno de Joe Biden– motivó que Marruecos mantuviera una actitud internacional más desafiante e intensificara la presión para que otros países se pronunciaran sobre la cuestión saharauí.²⁹ En este contexto, Rabat protagonizó tensiones diplomáticas con Alemania por la decisión de Berlín de promover una reunión sobre la cuestión saharauí en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales de 2020 y también con España. En represalia por la entrada del líder del Frente POLISARIO Brahim Ghali para ser tratado por COVID-19 en territorio español, Marruecos permitió la entrada en mayo de más de 9.000 personas migrantes y refugiadas en Ceuta. La crisis motivó críticas a Marruecos por instrumentalizar la cuestión migratoria, pero también puso en evidencia las consecuencias de las políticas europeas de externalización y militarización de fronteras. Más tarde, **en septiembre, la Corte Europea**

27. Véase el resumen sobre Marruecos-Sáhara Occidental en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

28. UNSC, *Informe del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental*, S/2021/843, 1 de octubre de 2021.

29. International Crisis Group, *Relaunching Negotiations Over Western Sahara*, Middle East and North Africa Report no.227, 14 de octubre de 2021.

de Justicia volvió a rechazar –por quinta vez– el acuerdo agrícola y pesquero de la UE con Marruecos por incluir territorios del Sáhara Occidental. En contraste, en 2021 nuevos países –Jordania, Senegal, Malawi, Sierra Leona y Surinam– se sumaron a la lista de Estados que anunciaron o abrieron sedes diplomáticas en el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en medio de las críticas del Frente POLISARIO. La Liga Árabe dispuso el uso de mapas de Marruecos que incluyeran el Sáhara Occidental en actos oficiales de la organización, motivando el rechazo de Argelia.

En materia de derechos humanos, la oficina de la alta comisionada de la ONU –que continuó sin poder verificar la situación en terreno– y otras organizaciones expresaron su **preocupación por los reportes sobre la intensificación de las restricciones impuestas por Marruecos desde noviembre de 2020 a las libertades de expresión, manifestación y asociación en el Sáhara Occidental y sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes** en la dispersión de protestas, rastreos, detenciones arbitrarias e intimidaciones a activistas pro-independencia y defensores de derechos humanos, entre otros hechos.³⁰ Medios de prensa y entidades como Human Rights Watch destacaron el acoso y agresiones a activistas como Sultana Khaya y Hassana Duihi.³¹ Finalmente, cabe mencionar que, al finalizar el año, el nombramiento del diplomático sueco italiano Staffan de Mistura como nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental generó ciertas expectativas de reanudar el proceso negociador bajo los auspicios de la ONU.

Túnez	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba ibn Nafi o Brigadas Oqba ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el

estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

Durante 2021 Túnez vivió la mayor crisis desde el derrocamiento del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en 2011,

en un contexto marcado por una significativa concentración de poder por parte del presidente, tensiones políticas, una creciente polarización, denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos y una grave crisis económica agravada por el impacto de la pandemia de COVID-19. Durante el primer semestre del año continuaron las periódicas movilizaciones por el deterioro de las condiciones económicas y sociales en distintos puntos del país. Los enfrentamientos con la Policía y la represión de estas protestas por parte de las fuerzas de seguridad derivaron en la muerte de al menos tres manifestantes en incidentes ocurridos en las localidades de Sbeitla, Sfax y Sidi Hassine. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos alertaron sobre el excesivo uso de la violencia para sofocar las protestas y el arresto de centenares de personas y también se produjeron manifestaciones para denunciar la violencia policial. En paralelo, durante los primeros meses del año se agudizó el bloqueo político y el pulso de poder entre el presidente Kais Saïed y el primer ministro Hichem Mechichi. En enero Mechichi remodeló su gabinete y destituyó a varios ministros, incluyendo al del Interior –un cercano aliado de Saïed–, tras lo cual el presidente se negó a ratificar a los nuevos miembros del Gobierno. En los meses siguientes la disputa también incluyó una pugna sobre quién detentaba la autoridad sobre las fuerzas de seguridad. En abril, Saïed también se negó a ratificar los cambios promovidos por el Parlamento para rebajar la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar los integrantes de la Corte Constitucional, concebida como un ente independiente para velar por el respeto a la Carta Magna y que no ha podido conformarse desde la adopción de la nueva Constitución en 2014. El presidente también desestimó los llamamientos de algunos actores, incluyendo el poderoso sindicato UGTT, a un diálogo nacional.

En este contexto de bloqueo político y en medio de un creciente descontento social con el manejo de las autoridades de la crisis económica y de salud en el país –con una de las peores tasas de mortalidad por COVID-19 en África y un bajísimo nivel de vacunación (7% de la población)–, el 24 de julio el presidente extendió hasta principios de 2022 el estado de

30. UNSC, *Informe del secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental*, S/2021/843, 1 de octubre de 2021.

31. Human Rights Watch, “Morocco: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, enero de 2022.

emergencia y un día más tarde invocó el artículo 80 de la Constitución para arrogarse poderes excepcionales. **Saïed destituyó al primer ministro, suspendió el Parlamento, retiró la inmunidad a los integrantes del legislativo, removió a numerosos altos cargos y asumió la supervisión de la oficina del fiscal general.** Las medidas del presidente motivaron manifestaciones de apoyo que congregaron a decenas de miles de personas y concitaron el respaldo de algunos sectores, mientras que otros, como el partido islamista Ennahda, denunciaron su intervención como un golpe de Estado. En las semanas siguientes, nuevas medidas anunciadas por Saïed apuntaron a consolidar su dominio de la escena política tunecina. La suspensión del Parlamento fue extendida de manera indefinida, el mandatario asumió poderes para gobernar por decreto y designó un nuevo gabinete encabezado por Najla Bouden Romdhane, una geofísica sin perfil político previo que se convirtió en la primera mujer tunecina en ocupar este cargo. A nivel local, se fue ampliando la oposición de actores políticos y sociales a la deriva de Saïed y a partir de septiembre se iniciaron manifestaciones contra el mandatario. En los meses siguientes se produjeron periódicas movilizaciones a favor y en contra del presidente. A nivel internacional, las acciones de Saïed recibieron el apoyo de países como Egipto, mientras que otros actores, como los países del G7 o la UE, hicieron llamamientos a restablecer el orden constitucional. En medio de interpelaciones de actores locales e internacionales a Saïed para que definiera un cronograma y pusiera fin al estado de excepción, el presidente tunecino anunció en diciembre una hoja de ruta. Esta contempla una consulta online sobre reformas políticas y constitucionales a partir de enero de 2022, una revisión y resumen de las propuestas por un comité de expertos en marzo, un referéndum sobre las modificaciones propuestas en julio y la celebración de elecciones en diciembre de 2022. El anuncio –que supone la extensión por un año del estado de emergencia y de la suspensión del Parlamento y que otorga un mayor poder a Saïed en un momento clave de reforma política– fue ampliamente criticado por las fuerzas políticas opositoras –divididas entre sectores islamistas y no islamistas– y por actores sociales como la UGTT, que cuestionaron su legalidad y legitimidad. Analistas alertaron sobre la deriva autoritaria en el país norteafricano y sobre los riesgos de la creciente polarización en el país. Organizaciones de derechos humanos también advirtieron sobre el incremento de la represión, la persecución política y los intentos por silenciar a las voces críticas en el país desde julio de 2021. Decenas de personas fueron puestas bajo arresto domiciliario o sometidas a prohibiciones de viajar al exterior, mientras que otras estaban siendo perseguidas en tribunales civiles y militares por acusaciones de insultos al presidente o al Ejército. Tras denunciar las acciones de Saïed como un golpe

En un contexto de tensiones políticas y grave crisis económica y social, el presidente de Túnez destituyó al primer ministro y decretó la suspensión del Parlamento

de Estado, el expresidente Moncef Marzouki fue enjuiciado en ausencia y condenado a cuatro años por socavar la seguridad externa del Estado.

Paralelamente, cabe destacar que **durante el año continuaron produciéndose incidentes esporádicos entre las fuerzas de seguridad y presuntos combatientes de inspiración yihadista.** Entre los hechos más destacados, todos ocurridos en la zona fronteriza con Argelia, cabe mencionar la detonación de un artefacto explosivo que provocó la muerte de cuatro soldados en febrero; una acción de las fuerzas de seguridad en la que fallecieron tres supuestos milicianos vinculados al grupo Jund al-Khilafa en abril; y la operación antiterrorista en la que murieron otros cinco presuntos yihadistas en mayo. Según el centro de estudios ACLED, durante 2021 fallecieron 18 personas en Túnez a causa de enfrentamientos y por la detonación de explosivos. Cabe destacar también que más de un año después de la publicación del informe final de la Comisión de Verdad y Dignidad –establecido para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos en el país en las últimas cinco décadas–, sus recomendaciones continuaban sin ser implementadas.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

Haití	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, BINUH, bandas armadas

Síntesis:

La actual crisis que atraviesa el país, con movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en 2019, está vinculada con las acusaciones de corrupción, fraude electoral y negligencia en la acción de gobierno del Presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, la situación de parálisis institucional, fragilidad económica y crisis sociopolítica empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional y posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH, sustituida por MINUJUSTH en 2017 y por BINUH en 2019) y la mayor implicación y coordinación de la comunidad internacional en la normalización del país han propiciado avances en determinados ámbitos de la gobernabilidad del país, pero no han conseguido lograr una estabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar completamente el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

En paralelo a un incremento sin precedentes en cuanto a la actividad de las bandas delincuenciales y a un aumento notable en el número de secuestros y homicidios, se agudizó la crisis política, institucional y social que vive el país, especialmente después de que en el mes de julio fuera asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Ya desde principios de año se produjeron protestas masivas alentadas por la oposición, que consideraba que el mandato presidencial de cinco años de Moïse finalizaba el 7 de febrero, acusándole de haber pospuesto las elecciones legislativas para poder gobernar por decreto y de querer instaurar una dictadura en el país. Por su parte, Moïse señalaba que, en tanto en cuanto tomó posesión del cargo en 2017, su mandato finalizaba en febrero de 2022, por lo que propuso un calendario electoral para el 2021 que incluía la celebración de un referéndum constitucional a finales de junio, y de elecciones legislativas, presidenciales, locales y municipales para los meses de septiembre y noviembre. Aunque tanto Naciones Unidas como la OEA validaron el calendario electoral de Moïse, confirmando así que su mandato finalizaba en 2022, a principios de febrero la oposición estableció un gobierno paralelo (con un magistrado de la Corte Suprema como presidente interino) y durante todo el mes se produjeron protestas masivas, en las que varias personas resultaron heridas. A principios de febrero, el Gobierno declaró haber abortado un golpe de Estado y un intento de asesinato contra Moïse, arrestando a 23 personas. En los meses siguientes, Joseph Jouthe dimitió como primer ministro y Claude Joseph fue nombrado en el cargo, el sexto bajo la presidencia de Moïse. Mientras, tanto la UE como el Grupo de Contacto de Haití –conformado por la OEA, Naciones Unidas, EEUU, Francia, Alemania, Canadá, Brasil y España—mostraron su disconformidad con la intención del Gobierno de celebrar el mencionado referéndum constitucional, alegando falta de transparencia y garantías democráticas. El día 7 de julio, Moïse fue asesinado y su mujer herida tras un ataque a la residencia presidencial por parte de un grupo fuertemente armado. En las horas posteriores al ataque, tres de los asaltantes fueron abatidos y otros 20 fueron detenidos, mientras que en los días siguientes se dictaron varias órdenes de arresto contra varias personas acusadas de haber orquestado el ataque. En los días posteriores al magnicidio, en los que se declaró el estado de emergencia y se cerró el principal aeropuerto del país, hubo una cierta confusión institucional y pugna por el poder entre Claude Joseph y Ariel Henry, que había sido nombrado por Moïse como nuevo primer ministro a principios de julio, pero que en el momento del ataque todavía no había jurado ni tomado posesión del cargo. Tras varias semanas de tensión, finalmente Henry asumió como primer ministro y presidente en funciones. En septiembre trascendió que el mismo día del ataque a la residencia presidencial Henry había hablado por teléfono con uno de los principales sospechosos de asesinato de Moïse, por lo que el fiscal general pidió que

El 7 de julio el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado y su mujer herida tras un ataque a la residencia presidencial por parte de un grupo fuertemente armado

testificara en la investigación y la Oficina de Protección de la Ciudadanía (OPC), institución homologable al Defensor del Pueblo en otros países, pidió su dimisión. Ante la negativa de Henry, la OPC dijo que Henry suponía un serio obstáculo a la investigación e instó a la Comisión Especial de Investigación de Naciones Unidas que apoyara al juez que investigaba el caso. A mediados de agosto, el magistrado que había sido asignado para la investigación renunció al caso después de que su secretario judicial fuera asesinado. El fiscal general también había sido destituido después de que instara a Henry a declarar. Por su parte, la esposa de Moïse presentó una denuncia contra Henry y otros cargos gubernamentales por participación en el asesinato del expresidente. A finales de año, se habían detenido a unas 40 personas relacionadas con dicho asesinato, pero la investigación no había concluido. En septiembre, después de que el comité encargado de elaborar una nueva Constitución presentara su borrador, el Gobierno señaló que el referéndum se llevaría a cabo en febrero de 2022 y que en los meses posteriores, sin especificar una fecha concreta, se llevarían a cabo los comicios presidenciales, legislativos, regionales y locales.

Por otra parte, el Gobierno, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil señalaron que durante todo el año, pero especialmente tras el asesinato de Moïse, se había producido un incremento sin precedentes en la historia reciente del país en cuanto a la actividad delictiva de las bandas armadas que operan en algunos de los barrios más densamente poblados de Puerto Príncipe y otras ciudades del país. En este sentido, durante todo el año se produjeron movilizaciones e incluso una huelga de alcance nacional para protestar por la situación de inseguridad generalizada. Según datos de Naciones Unidas, hasta el mes de septiembre unas 19.000 personas habían tenido que abandonar sus hogares por la violencia vinculada a dichas bandas, más de 13.000 solamente en el mes de abril. Según el Centro para el Análisis y la Investigación sobre Derechos Humanos, entre enero y septiembre se habían producido más de 600 secuestros para obtener recompensa, una cifra claramente superior a los 231 que se produjeron en el mismo periodo en 2020 o a los 78 del año 2019. Según dicho centro de investigación, el 90% de dichos casos (43% en Puerto Príncipe, 22% en Croix-des Bouquets, 19% en Carrefour; y 16% en Delmas) se concentraron en la región metropolitana del país. Otras organizaciones de la sociedad civil señalaron que los secuestros se habían incrementado en aproximadamente un 150% respecto del año anterior. A modo de ejemplo, el grupo armado 400 Mawozo, que en varias ocasiones secuestró vehículos enteros con todos sus pasajeros, en octubre secuestró a 17 religiosos (16 de ellos de EEUU y uno de Canadá), liberados escalonadamente hasta el mes de diciembre. Aunque no trascendieron cifras sobre el número de homicidios vinculados a la actividad de bandas armadas, se estima

que se han incrementado sustancialmente respecto del año anterior, en el que Naciones Unidas reportó 1.380 asesinatos, un 20% más que en 2019. El Centro para el Análisis y la Investigación sobre Derechos Humanos también señaló que hasta mediados de octubre 37 policías habían sido asesinados, más que los 27 que murieron en todo el 2020. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), en 2021 había unas 90 bandas activas, algunas de las cuales controlan territorios clave para el abastecimiento de la ciudad. A modo de ejemplo, en octubre el Jimmy Chérizier, expolicía y líder de la mayor banda armada del país, G9, declaró su disposición a permitir la distribución de gasolina en Haití si el primer ministro renunciaba. El RNDDH ha documentado una docena de ataques por parte de estos grupos armados en los que han muerto o desaparecido unas 600 personas. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado insistentemente la connivencia entre estas bandas y determinados sectores del Estado, que les proporcionarían armamento e incluso recursos humanos con el objetivo de controlar políticamente y condicionar electoralmente determinados barrios de la región metropolitana. A modo de ejemplo, un informe publicado en abril por parte de la Facultad de Derecho la Universidad de Harvard y el Observatorio Haitiano sobre los Crímenes contra la Humanidad reportó la responsabilidad e implicación del Gobierno a alto nivel en la preparación, ejecución y posterior encubrimiento de tres ataques perpetrados por bandas armadas entre 2018 y 2020 en las que 240 civiles habrían muerto. Un informe publicado por el Gobierno de EEUU en diciembre de 2020 relataba la connivencia entre las bandas armadas y el Ministerio del Interior y determinados diputados del partido de Moïse. Finalmente, cabe destacar que en el mes de agosto un terremoto provocó la muerte de 2.240 personas y la destrucción de decenas de miles de casas.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, cárteles, grupos armados de oposición

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en

México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2021 se produjo una ligera disminución en cuanto a los homicidios intencionales respecto del año anterior, aunque se incrementaron otras formas de violencia, y siguieron registrándose altos niveles de enfrentamientos entre cárteles de la droga y entre estos y las fuerzas de seguridad del Estado, así como numerosos ataques contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Según datos revelados por el propio presidente en los primeros días de 2022, **en 2021 se registraron 34.410 homicidios dolosos, una cifra ligeramente inferior a la que se registró en 2020 (34.554) y 2019 (34.690)**. La tasa de homicidios (26 cada 100.000 habitantes) fue la séptima más alta del continente, por detrás de Jamaica, Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Belice y Colombia. Más del 50% de los homicidios se concentró en los estados de Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, siendo particularmente graves los casos de Guanajuato (19%) y Michoacán (13%). Andrés Manuel López Obrador reconoció la gravedad de la situación (durante su mandato se han registrado 102.654 asesinatos), pero puso en valor que desde su llegada a la presidencia del país en diciembre de 2018 se ha logrado revertir una clara tendencia al alza en el número de asesinatos en los últimos años. **En 2016 el incremento en el número de homicidios respecto del año anterior fue del 26,1%; en 2017 del 28,1%; en 2018 del 16,8%; en 2019 del 2,81; en 2020 se redujo en el 0,4% y en 2021 la disminución fue del 4,16%**. El Gobierno también destacó que se había producido una reducción del 1,3% en la incidencia de los homicidios en los 50 municipios más afectados por la violencia y considerados prioritarios por el Gobierno, y también puso en valor la reducción de la violencia en ciudades tradicionalmente asociadas al crimen, como Tijuana o Ciudad Juárez. Finalmente, el Ejecutivo señaló que en 2021 también se redujeron otras formas de crimen, como los secuestros (un 44,8%) o de los robos (un 25,3%). En cuanto a los feminicidios, estos se incrementaron ligeramente respecto de los años anteriores (1.004 en 2021 en comparación con 978 casos en 2020 y 973 en 2019).

A pesar de la ligera disminución en el número de asesinatos intencionales registrada en 2021, otras formas de violencia y crimen se incrementaron en 2021, como la extorsión (incremento del 12,3%) o las violaciones (21.189 casos, un aumento de 28% respecto de 2020). También se incrementaron los crímenes de tipo político y la violencia contra periodistas y líderes sociales. Respecto de esta última cuestión, **un informe de Reporteros Sin Fronteras presentado a mediados de diciembre declaró que México sigue siendo, por tercer año consecutivo, el país más peligroso y letal para el ejercicio del periodismo**. En 2021 fueron asesinados

cinco periodistas, y 47 en los últimos cinco años. Poco antes, en el mes de octubre, el propio Gobierno señaló que desde el inicio de la actual administración en diciembre de 2018 habían sido asesinadas 94 personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos y 47 periodistas (en este último caso, el 43% de la responsabilidad de tales asesinatos era de funcionarios públicos y el 33% de grupos del crimen organizado). Estas cifras con concordantes con las ofrecidas durante el año por Global Witness, organización según la cual México fue el segundo país del mundo con un mayor número de defensores de la tierra y el medio ambiente (30) asesinadas en 2020. En la misma línea, un informe de la Red TDT presentado en abril señaló que durante el mandato del actual presidente habían sido asesinados 45 activistas sociales, medioambientales y comunitarios. Poco después de la celebración de las elecciones legislativas, regionales y locales el 5 de junio, trascendió que **se habían registrado 102 asesinatos relacionados con los comicios, incluyendo el de 36 personas candidatas.**

En México se registraron 43.410 homicidios intencionales, una cifra que ha experimentado una leve disminución en los dos últimos años

Durante el año los niveles de violencia vinculados a los enfrentamientos entre cárteles de la droga o entre éstos y las fuerzas de seguridad del Estado fueron muy altos. La organización Semáforo Delictivo señaló durante el año que el 80% de las muertes violentas en el país estuvieron relacionadas con este tipo de enfrentamientos. En este sentido, algunos de los principales episodios de violencia y masacres que acontecieron durante el año fueron la muerte de 16 personas en enfrentamientos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos en la frontera entre Michoacán y Jalisco en enero; la muerte de 13 personas en enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) en Guanajuato a principios de enero; la muerte de 11 personas en choques entre el CJNG y la Policía en el mismo estado a mediados de enero; el asesinato de 11 personas en las afueras de Guadalajara a finales de febrero; el asesinato por parte del cártel Familia Michoacana de 13 policías y funcionarios públicos de la fiscalía en el Estado de México a mediados de marzo; los enfrentamientos entre cárteles registrados a finales de junio, que provocaron la muerte de 18 personas en la ciudad fronteriza con EEUU de Reynosa (Tamaulipas) y de otras 18 personas en Zacatecas; la muerte de más de 60 personas por enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en el estado de Zacatecas en los meses de julio y agosto; la muerte de unas 20 personas en Chihuahua en octubre durante los enfrentamientos entre grupos rivales no identificados; el asesinato de 11 civiles (7 de ellos menores) en la localidad de Tangamandapio (estado de Michoacán) a principios de diciembre; la muerte de 14 personas en Zacatecas en los días 29 y 30 de diciembre; o el uso de drones con explosivos contra civiles por parte del CJNG en su

intento de tomar la ciudad fronteriza entre Michoacán y Jalisco de Tapalcatepec en septiembre o nuevamente en el mes de diciembre en la localidad de Chinicuila (Michoacán), provocando la muerte de numerosas personas y la huida de una parte significativa de dichas localidades. Según la organización Causa en Común, entre enero y octubre de 2021 se hallaron 520 fosas clandestinas con decenas de personas asesinadas, como las que identificaron en Jalisco en el mes de enero con 17 cadáveres; en Guadalajara en el mes de febrero con 18 cuerpos o en Guanajuato en el mes de mayo con otros 26 cadáveres. Dicha organización también denunció que se produjeron 459 masacres y 4.527 atrocidades, que incluyen episodios de extrema crueldad como tortura, mutilación o descuartizamiento.

América del Sur

Colombia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las movilizaciones multitudinarias registradas en los últimos años están estrechamente vinculadas con el rechazo de una parte de la ciudadanía a la acción de gobierno del presidente Iván Duque, pero también a cuestiones más estructurales del sistema político y el modelo económico que ha regido en el país en las últimas décadas, como las críticas a la corrupción o impunidad judicial, la creciente percepción de que los altos niveles de crecimiento económico que ha experimentado el país no han supuesto una reducción de la desigualdad, la ralentización de la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC o el incremento de los asesinatos contra ex combatientes y líderes sociales. En los últimos años se han producido algunas movilizaciones significativas, como las masivas manifestaciones en contra de un proyecto de reforma de la educación superior en 2011 o bien el llamado Paro Nacional Agrario en 2013. Ya bajo mandato de Iván Duque se incrementaron los indicios de malestar social, como así lo evidenció la celebración de una consulta popular contra la corrupción en agosto de 2018; el llamado Paro Nacional Universitario entre octubre y diciembre de 2018; la denominada “Marcha de las linternas” en enero de 2019 y las posteriores protestas entre abril y mayo de 2019 –en las que cientos de personas resultaron heridas–; o bien las protestas lideradas por el Comité Nacional del Paro en 2020 y 2021, en las que decenas de personas murieron y otras miles resultaron heridas o detenidas.

Las protestas antigubernamentales que se produjeron casi ininterrumpidamente durante todo el año, especialmente intensas en los meses de abril y mayo,

provocaron la muerte de varias decenas de personas y miles de personas heridas, desaparecidas y detenidas.

Las cifras de mortalidad asociadas a las movilizaciones sociales varían sensiblemente en función de las fuentes.

El Gobierno reconoció oficialmente que menos de un mes después del inicio de las protestas 47 personas habían muerto y 2.145 habían resultado heridas.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo señaló que en las dos primeras semanas de movilizaciones se habían registrado 42 muertes, 41 de ellas de civiles, y 168 casos de desapariciones. Según el Gobierno, hasta finales de mayo se habían producido 4.973 manifestaciones, 1.897 marchas, 2.426 bloqueos, 522 movilizaciones y 1.130 disturbios. Sin embargo, el número de víctimas en el marco de las protestas fue muy superior. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió informaciones sobre 63 muertes entre el 28 de abril y el 31 de julio, de las cuales verificó 46 (de entre estas, 28 habrían sido responsabilidad de la Policía). Human Rights Watch declaró haber recibido 81 denuncias creíbles de muertes ocurridas durante las movilizaciones, mientras que las ONG Temblores e Indepaz reportaron que entre finales de abril y finales de junio el número de víctimas mortales se elevaba a 75, 44 de ellas por presunta autoría de la Fuerza Pública. Además, tales organizaciones reportaron 3.789 casos de violencia policial —incluyendo

28 casos de agresión sexual y 83 lesiones oculares— y 1.264 detenciones arbitrarias. Por su parte, **el Comité Nacional del Paro denunció 77 muertes en el seno de las movilizaciones sociales en Colombia.** Aunque inicialmente las protestas estaban centradas en la oposición a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque, también hubo otros focos de descontento, tal y como queda patente en la lista de demandas y propuestas que presentó a principios de mayo el Comité Nacional del Paro, la organización que ha impulsado y convocado las principales movilizaciones que se han producido en Colombia desde el año 2019 contra la Administración Duque (anteriormente, entre octubre y diciembre de 2018, también se registraron importantes movilizaciones sociales conocidas como el Paro Universitario). Entre dichas demandas, cabe destacar la oposición a las reformas de salud y del sistema de pensiones; el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 y el incremento de asesinatos de líderes sociales (18 solamente en el mes de julio) y ex combatientes de las FARC (casi 300 desde 2016); la mala gestión de la pandemia (acusaciones de corrupción, incompetencia y falta de recursos); situación económica (la pobreza se incrementó en más del 6% hasta alcanzar el 42% de la población); la discriminación racial y de género o las denuncias de brutalidad policial y demandas de reforma de la Policía.

El Comité Nacional del Paro denunció 77 muertes en el seno de las movilizaciones sociales que se registraron en Colombia desde el mes de abril

El inicio de las protestas el 28 de abril en numerosas ciudades del país, especialmente en Cali y otros puntos del Valle del Cauca, motivó el despliegue de la Policía y la declaración del toque de queda en numerosas ciudades. Ante las numerosas voces internacionales que instaron a poner fin a la violencia e iniciar un diálogo para resolver la crisis, a principios de mayo el Gobierno anunció la retirada de la reforma tributaria, la renuncia del ministro y el viceministro de Hacienda y el inicio de negociaciones con el Comité Nacional del Paro y reuniones con 11 sectores políticos, sociales y económicos. **El día 10 de mayo se llevó a cabo la primera reunión entre Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, aunque sin resultados públicos.** En los días siguientes se llevaron a cabo reuniones periódicas hasta el día 23 de mayo, fecha en la que renunció el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. En paralelo, a mediados de mayo el Gobierno autorizó el despliegue de efectivos militares en tareas de apoyo a la Policía.

A finales de mes, unos 7.000 soldados se desplegaron en Cali y el Valle del Cauca poco después de que personas hubieran muerto durante los disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. A finales de mayo, la situación de inestabilidad política y social hizo que la Copa América de fútbol no pudiera celebrarse en el país. A principios de junio, coincidiendo con la visita al país de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), el Comité Nacional del Paro suspendió unilateralmente el diálogo por considerar que el Ejecutivo no tenía voluntad política y estaba alargando las negociaciones. A principios de julio **la CIDH presentó un informe en el que criticó de manera contundente la gestión gubernamental de las protestas, denunciando el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, desapariciones o agresiones contra periodistas o servicios de asistencia médica, y también recomendando la separación de la Policía del Ministerio de Defensa** (y su transferencia al Ministerio de Interior). Las recomendaciones de dicho informe fueron secundadas por numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales (que también exigieron la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios), pero el presidente Duque rechazó los contenidos de tal informe e incluso cuestionó el mandato de la Comisión al respecto. A mediados de junio el Comité Nacional del Paro suspendió sus protestas periódicas para centrarse en la construcción de consenso, pero anunció nuevas movilizaciones para finales de julio, que contaron con una afluencia masiva. En la segunda mitad del año se registraron nuevas movilizaciones, pero muy inferiores en afluencia a las del período entre abril y junio. Del mismo modo, tampoco hubo constancia pública de nuevas reuniones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro desde el mes de junio.

Perú	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso, posteriormente redominado como Militarizado Partido Comunista del Perú, se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

Los principales focos de tensión en el país fueron las protestas que se registraron tras la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas y el atentado por parte del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) dos semanas antes de la celebración de la segunda vuelta de dichos comicios, en el que murieron 16 personas, entre ellas cuatro menores. Respecto de esta última cuestión, varios medios de comunicación señalaron que en el lugar de los hechos –en la localidad de San Miguel del Ene, en la región conocida como Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)– se hallaron octavillas contrarias a la candidata presidencial Keiko Fujimori y también instando a la población a boicotear las elecciones, absteniéndose, votando en blanco o nulo. Tanto Fujimori como el otro candidato, Pedro Castillo, condenaron el atentado, pero ante las insinuaciones sobre los réditos políticos de este episodio bélico que lanzaron ambas candidaturas, el Gobierno llamó a no hacer un uso partidista del atentado del MPCP. No es la primera ocasión en la que las facciones remanentes de Sendero Luminoso llevan a cabo una acción armada pocos días antes de unos comicios. En 2016, por ejemplo, 10 personas murieron en el VRAEM en una acción atribuida al MPCP pocas horas antes de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Previamente, en 2011,

cinco personas murieron en la región de Cusco en una emboscada del MPCP, el día anterior de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En el año 2020, como mínimo 16 personas (la mitad policías o militares) murieron y otras varias resultaron heridas en varios episodios de violencia en la región del VRAEM, la mayoría emboscadas del MPCP.

Por otra parte, **durante todo el mes de junio se registraron protestas y enfrentamientos entre partidarios de los dos principales candidatos presidenciales –Pedro Castillo y Keiko Fujimori–, después de que se publicaran los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas** que se celebraron en abril (primera vuelta) y junio (segunda vuelta). Aunque los sondeos a pie de urna dieron como vencedora a Fujimori, finalmente las autoridades electorales dieron vencedor a Castillo por un estrecho margen de votos (50,13% para Castillo y 49,87% para Fujimori). En los días siguientes se registraron movilizaciones y protestas por parte de simpatizantes de Fujimori, que denunció irregularidades y fraude, impugnó más de 200.000 votos e incluso pidió la revocación de las elecciones. Tras la desestimación de los recursos de Fujimori y la proclamación definitiva de la victoria de Castillo, cientos de antiguos oficiales militares enviaron una carta a la cúpula de las Fuerzas Armadas en la que pedían que no se reconociera el triunfo de Castillo y que se secundaran las acusaciones de fraude por parte de Fujimori. Finalmente, también cabe destacar que durante varios momentos del año se registraron **expresiones de malestar social por la gestión y el impacto de la pandemia de la COVID-19**. En este sentido, a finales de mayo el Gobierno peruano presentó un informe en el que actualizaba el registro de personas fallecidas por coronavirus (pasando de 69.342 a 180.764), convirtiéndose Perú en el país del mundo con una mayor mortalidad por COVID-19 en relación al tamaño de su población y uno de los países de la región con menores tasas de vacunación.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el

recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

El Gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones políticas, en esta ocasión en México, y no se registraron movilizaciones masivas ni multitudinarias, pero sí siguieron registrándose altos niveles de polarización política y social y numerosas denuncias sobre la situación de derechos humanos en el país. Respecto de esta última cuestión, en el mes de noviembre el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, anunció el **inicio de una investigación formal por crímenes contra la humanidad cometidos desde el 2017, incluyendo la represión de las protestas que se produjeron entre abril y julio de 2017, en las que murieron más de 130 personas.** El presidente, Nicolás Maduro, manifestó su oposición a tal decisión, pero a la vez mostró la disposición de su Gobierno a colaborar con la investigación, la primera de este tipo en un país latinoamericano. En la misma línea, en el mes de marzo la Misión Internacional de determinación de los hechos declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en los tres primeros meses de 2021 había reportado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales, comprometiéndose a investigar las circunstancias de los mismos. En otro informe hecho público en el mes de septiembre, la misión denunciaba que el sistema judicial del país no ofrece protección a las víctimas y es un pilar fundamental de la represión contra la oposición por parte del Estado. En la misma línea, a lo largo del año varias ONG e incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron el hostigamiento de los poderes públicos del Estado contra determinados sectores de la sociedad civil, las ONG o la prensa. En el mes de junio, **ACNUR declaró que Venezuela es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas, con más de cinco millones de personas.** En cuanto a los niveles de violencia, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, **en 2021 se registró una tasa de homicidios de 40,9 casos cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de América Latina y el Caribe** (solamente por detrás de Jamaica, con una tasa de 49,4). Sin embargo, dicha tasa fue más baja que la del año pasado y claramente inferior a la que se alcanzó en 2018 (91 homicidios cada 100.000 habitantes).

Por otra parte, siguió constatándose una importante crisis política, social e institucional en el país. En el mes de enero, tomó posesión del cargo la nueva Asamblea Nacional surgida de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, que tuvieron una participación del 30,1% (de un 16%, según la oposición) y cuya legitimidad y validez fue rechazada o cuestionada por la

oposición (que en su mayoría boicoteó los comicios) y por numerosos gobiernos y organizaciones internacionales, como la OEA, la UE o Naciones Unidas. A pesar de ello, una parte significativa de la comunidad internacional dejó de reconocer como poder legislativo legítimo del país a la Asamblea Nacional que estuvo activa entre 2016 y 2021 (controlada mayoritariamente por la oposición) y a Juan Guaidó como presidente del país. A pesar de seguir contando con el apoyo y reconocimiento de EEUU, algunos de los principales partidos de la oposición no secundaron el intento de Guaidó de que la mencionada Asamblea siguiera operando. En varios momentos del año determinados representantes de la oposición denunciaron represión y hostigamiento por parte del Gobierno. En enero, por ejemplo, la nueva Asamblea Nacional pidió a la Fiscalía de Venezuela que impidiera la salida del país de Guaidó y de otros 20 representantes políticos. En el mes de julio, tras una operación de las fuerzas de seguridad contra varias bandas de crimen organizado que controlaban algunos barrios de Caracas (y durante la que 26 personas murieron y una cuarentena resultaron heridas), se emitieron órdenes de arresto contra varios líderes del partido Voluntad Popular (liderado por Guaidó) acusados de estar involucrados con dichas bandas y se arrestó a Freddy Guevara --uno de los principales colaboradores de Guaidó—acusado de terrorismo y traición, mientras que Guaidó denunció un intento de detención en su propia casa. En enero, otra operación de las fuerzas especiales de la policía contra una banda delincuencia en un barrio de Caracas finalizó con la muerte de 23 personas. En septiembre, la Fiscalía declaró que Guaidó tenía 25 causas pendientes con la justicia, a las que añadió delitos de rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir.

La tensión entre el Gobierno y la oposición volvió a incrementarse nuevamente a raíz de la celebración de las elecciones regionales y locales el 21 de noviembre, que tuvieron una participación del 41,8% y en las que el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela ganó en 19 de los 23 estados y obtuvo 205 de las 322 alcaldías en liza. A pesar de que en el mes de mayo se había establecido un Consejo Nacional Electoral más inclusivo y de que buena parte de la oposición decidió participar en dichos comicios (por primera vez desde 2017), ésta denunció irregularidades y abusos. En el estado de Apure el candidato opositor no reconoció los resultados, mientras que en el estado de Barinas la Corte Suprema ordenó la repetición de los comicios en enero de 2022 cuando el candidato opositor encabezaba el escrutinio. El Gobierno de EEUU denunció que no habían sido elecciones libres ni creíbles, denunciando arrestos arbitrarios, acoso a organizaciones de la sociedad civil, criminalización a partidos opositores, vetos a candidaturas y manipulación del registro de votantes. La UE denunció irregularidades, y la secretaría general de Naciones Unidas instó al Gobierno a investigar episodios aislados de violencia durante la jornada electoral, como el incidente en el estado de Zulia en el que una persona falleció y otras dos resultaron heridas.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kirguistán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán

Síntesis:

Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la exrepública soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió un junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. El país asistió en 2020 a una nueva crisis política, con protestas postelectorales y una controvertida transferencia de poder. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.

Un año después de la crisis postelectoral de 2020, se celebraron nuevas elecciones, así como un referéndum constitucional que aprobó el aumento de poderes presidenciales; mientras, escaló la tensión fronteriza, con los incidentes más mortíferos en años en la zona limítrofe con Tayikistán. Sadyr Japárov ganó las elecciones presidenciales del 10 de enero, con el 79,2% de los votos. Japárov había sido nombrado primer ministro en el contexto de las protestas postelectorales del año anterior, en el marco de las cuales fue liberado de prisión y nombrado primer ministro, así como presidente tras la dimisión de Sooronbay Jeenbekov, cargos que posteriormente dejó para poder concurrir a los nuevos comicios. La participación fue del 39%. La observación electoral realizada por la OSCE consideró que, en general, se habían respetado las libertades fundamentales, pero que no había sido una votación plenamente justa en

En 2021 se produjeron los incidentes más graves en años en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, con medio centenar de víctimas mortales y varias decenas de miles de civiles evacuados

un escenario desigual y de uso indebido de recursos administrativos por el candidato Japárov, entre otros elementos. El mismo día, **se aprobó en referéndum el cambio de un sistema parlamentario a presidencialista, en el marco de las reformas promovidas por Japárov en 2020**. Con un 38,4% de participación, se aprobó con el 85,2% de los votos. Asimismo, en febrero se nombró al nuevo Gobierno y se presentó el borrador de reforma constitucional. La nueva Constitución incluía la reducción del Parlamento de 120 a 90 miembros y el paso a dos mandatos presidenciales de cinco años, frente al mandato único anterior de seis años, y poderes presidenciales para designar jueces y jefes de servicios policiales. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) expresaron preocupación por el nuevo texto, incluyendo por el papel preponderante de la Presidencia y sus competencias; el debilitado papel del Parlamento; los riesgos de injerencias en la independencia judicial; la falta de respeto a los principios de derecho y legalidad en relación al calendario y procedimientos para su adopción; así como la falta de consultas públicas y debate parlamentario inclusivos y sustantivos. La reforma fue finalmente aprobada en referéndum en abril, con el 85,2% de los votos y un 36,6% de participación.

Por otra parte, se produjeron elecciones parlamentarias el 28 de noviembre. Los cuatro partidos con mayor respaldo fueron Ata-Zhurt, con el 17,3% de votos; Ishenim, con 13,6%; Yntymak, con un 12% y Alliance, con 8,3%. Analistas señalaron que los resultados reforzaban a Japárov. Entre los grupos que entraron en el nuevo Parlamento, solo un partido era considerado opositor, Butun Kyrgyzstan. Partidos opositores protestaron contra los comicios y resultados, que consideraron fraudulentos. **Dos días antes de las elecciones, el Comité Estatal de Seguridad Nacional anunció la detención de una quincena de personas, incluyendo parlamentarios y ex altos cargos, que supuestamente planeaban un intento de golpe de Estado mediante la organización de protestas**. Por otra parte, en la primera mitad del año se produjeron diversas protestas ciudadanas, de alcance limitado, en torno a cuestiones como la corrupción (febrero) o la aprobación de una ley de protección del honor que activistas locales y organizaciones internacionales alertaron de que podría ser instrumentalizada para la censura.

Otro eje de tensión durante el año fueron las disputas fronterizas. **A finales abril se produjeron los incidentes más graves en años en la frontera con Tayikistán – más de la mitad de su extensión no está demarcada**. Incidentes intercomunitarios en torno a infraestructuras de aguas en la localidad de Kok-Tash (Kirguistán) evolucionaron a hostilidades entre las fuerzas de seguridad de Kirguistán y Tayikistán. Kirguistán acusó a Tayikistán de

usar disparos de mortero y ametralladoras. La tensión se extendió a más de una quincena de localidades en la región de Batken, fronteriza con Tayikistán. Se informó de la toma de control por Tayikistán de la carretera que conectaba con el enclave tayiko de Vorukh y Kirguistán atribuyó a Tayikistán la destrucción de diversos puestos fronterizos. **En conjunto, medio centenar de personas murieron, incluyendo civiles y fuerzas de seguridad, y en torno a 200 resultaron heridos. En torno a 24.000 de personas fueron evacuadas de la región de Batken, según autoridades kirguisas, y unas 15.000 de la región de Sughd (Tayikistán).** Hubo destrozos y quemas de casas, tiendas, vehículos y un colegio. Se acordó un alto el fuego el 29 de abril. En junio se produjo una nueva escalada de tensión militar en torno a una zona no demarcada de la frontera en el distrito de Chon-Alai (región de Osh). Ambas partes alcanzaron un acuerdo de nueve puntos en que se comprometían a retirar de la zona en disputa puestos fronterizos y a iniciar pasos para delimitar esa zona de la frontera mediante grupos de trabajo. Se produjeron nuevos incidentes de violencia en meses posteriores. En contraste con la tensión en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán dieron pasos de reducción de sus disputas fronterizas. Ambos países acordaron en marzo un protocolo de delimitación y demarcación de la frontera. Tras negociaciones entre las dos delegaciones –encabezadas en el caso de Kirguistán por el jefe del Comité Estatal de Seguridad Nacional, Kamchybek Tashiev, y de Uzbekistán por su primer ministro, Abdulla Aripov– todos los contenciosos fronterizos quedaron resueltos, según Kirguistán. Las negociaciones siguieron a una reunión entre ambos presidentes ese mismo mes en la que también abordaron la cuestión fronteriza, entre otros temas. El acuerdo incluía varios intercambios de territorio, así como permitía a Uzbekistán el uso de reservas de agua a cambio de más territorio para Kirguistán. Asimismo, contenía medidas para simplificar el tránsito entre Uzbekistán y su enclave de Sokh, rodeado de territorio de Kirguistán.

Asia Meridional

India – China	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	India, China

Síntesis:

La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuya demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio

India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido.

Se mantuvo la tensión entre los dos países, con altibajos durante el año y algunos resultados parciales en las negociaciones bilaterales. El año se había iniciado con un nuevo enfrentamiento entre ambos Ejércitos en la zona de Sikkim, que habría dejado 20 soldados chinos y cuatro indios heridos según informaron medios de comunicación indios, pero que fue calificado de “menor”. Además, las fuerzas de seguridad indias entregaron a China a un soldado detenido, que habría cruzado Línea de Control Actual (LCA), como se denomina a la frontera de facto entre ambos países. En febrero se anunció un acuerdo para la retirada militar de la zona del lago Pangong y por primera vez las autoridades chinas admitieron de forma oficial que cuatro de sus soldados habían muerto durante los enfrentamientos que tuvieron lugar durante 2020. A pesar del acuerdo inicial, en los siguientes meses hubo dificultades para concretar el proceso y se repitieron las desavenencias entre ambos países. Además, China continuó proporcionando equipamiento a sus tropas desplegadas en la frontera, incrementando su capacidad militar a lo que India respondió señalando que también mejoraría su situación militar en la frontera. El fortalecimiento militar representó un obstáculo para el acuerdo, que debía encaminarse a la retirada de las tropas y la infraestructura militar fronteriza. Además, se conoció que India había incrementado su despliegue en la frontera con 50.000 soldados adicionales y había inaugurado 12 carreteras en Arunachal Pradesh, Ladakh y Jammu y Kashmir, señalando que esta infraestructura debía servir para mejorar la seguridad fronteriza y facilitar el desplazamiento de las fuerzas de seguridad. No obstante, en agosto China e India acordaron la retirada militar en la zona de Gogra en Ladakh este. El acuerdo conllevaba la retirada de todas las estructuras temporales y de otro tipo y la restauración del relieve a la situación previa al estallido de la crisis. Ambas partes pusieron fin al despliegue de tropas y señalaron que ambos Ejércitos estaban en sus bases permanentes. El acuerdo se produjo después de la 12ª ronda de negociaciones que tuvo lugar el 31 de julio en el lado chino de la LCA. Además, se estableció una zona de separación desmilitarizada en la que no patrullará ninguno de los dos Ejércitos. También se

completaron las retiradas de las zonas del lago Pangong y el valle de Galwan, escenario de la confrontación más grave entre los dos países, que tuvo lugar en 2020. A pesar del acuerdo, India llevó a cabo ejercicios militares posteriormente en zonas cercanas a la frontera y en octubre se produjo una nueva escalada de la tensión cuando las tropas de ambos países se encontraron frente a frente en el sector de Tawang este, en el estado indio de Arunachal Pradesh, en una zona reivindicada por China. A pesar del incidente no se produjeron enfrentamientos. El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, señaló que las relaciones entre India y China se hallaban en un mal momento y acusó a Beijing de haber llevado a cabo acciones que violaban los acuerdos alcanzados.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

Se mantuvo la situación de tensión entre India y Pakistán, a pesar del anuncio de alto el fuego en febrero. **En un comunicado conjunto señalaron que ambos países se comprometían a la estricta observación de los acuerdos y del alto el fuego en la Línea de Control y otros sectores.** En el año 2003 India y Pakistán firmaron un acuerdo de alto el fuego que, a pesar de seguir vigente, había sido constantemente incumplido en los últimos años, con intercambios de fuego por parte de

ambos Ejércitos, lo que había provocado numerosas víctimas mortales en los últimos años, tanto civiles como militares. El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión regional, por la escalada militar entre India y China debido a disputas fronterizas durante 2020, el deterioro de la situación en Afganistán, así como la retirada del estatus de estado para Jammu y Cachemira en 2019 por el Gobierno indio, lo que provocó un deterioro en las relaciones con Pakistán. En abril, el periódico pakistaní Dawn reveló que India habría hecho una oferta a Pakistán en diciembre de 2020 para reducir la tensión entre los dos países e iniciar conversaciones indirectas sobre todas las cuestiones que les enfrentan, incluyendo la disputa por Cachemira, propuesta que habría tenido una respuesta favorable por parte de Pakistán. De hecho, tras el anuncio de compromiso con el acuerdo de alto el fuego de 2003 se redujo la violencia en torno a la Línea de Control, aunque prosiguieron los enfrentamientos armados en Jammu y Cachemira. Según Dawn, los acercamientos los habrían llevado a cabo los jefes de inteligencia de los dos países a propuesta de India, que no quería que las conversaciones tuvieran lugar entre interlocutores políticos. Los encuentros tuvieron lugar en Emiratos Árabes Unidos según confirmó un diplomático de este país, que habría llevado a cabo iniciativas para favorecer el acercamiento, aunque India señaló que ambas partes habrían estado de acuerdo en no incorporar a una tercera parte al diálogo. La prioridad para Pakistán sería el retorno del estatus de estado a Jammu y Cachemira. India, por su parte, habría priorizado el acercamiento a Pakistán en un intento de reducir la tensión para poder dedicar más recursos militares a la tensión con China e incrementar su despliegue militar en la frontera con este país. El diálogo no fructificó y las relaciones entre ambos países se deterioraron nuevamente a partir del mes de abril con acusaciones mutuas, aunque no se constataron violaciones al acuerdo de alto el fuego. En septiembre, las fuerzas de seguridad indias señalaron que no se había producido ningún incidente en la Línea de Control desde febrero, aunque la violencia persistió en Jammu y Cachemira, con infiltraciones de insurgentes desde Pakistán, según señaló el Gobierno indio. Pakistán, por su parte, denunció las detenciones de activistas cachemires por parte de las autoridades indias.

Asia Oriental

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ³²	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

32. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Aunque en varios momentos del año el nuevo Gobierno de EEUU ofreció a Corea del Norte la reanudación del diálogo y de los cauces diplomáticos para abordar la desnuclearización de la península coreana, persistieron varios ejes de tensión entre ambos países, como la realización de los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur, el despliegue de más de 28.000 soldados estadounidenses en territorio surcoreano, la aplicación de sanciones económicas a Corea del Norte por parte de Washington, el desarrollo de nuevo armamento, la realización de ensayos balísticos por parte de Corea del Norte o la continuación del programa armamentístico por parte de Pyongyang. Respecto de esta última cuestión, en el mes de marzo **el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) declaró mostrarse extremadamente preocupado por el hecho de que Corea del Norte haya seguido desarrollando su programa nuclear a pesar de las sanciones internacionales y de los compromisos que el propio Gobierno asumió en el marco de las cumbres presidenciales que mantuvieron Kim Jong Un y el expresidente estadounidense Donald Trump en 2018 y 2019.** En 2017 Corea del Norte llevó a cabo su último ensayo nuclear, mientras que en 2018 declaró haber inutilizado los túneles de la principal instalación de ensayos nucleares del país en Punggye-ri. Pocas semanas antes de estas advertencias de la AIEA, el panel de personas expertas de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de sanciones a Corea del Norte emitió un informe confidencial dirigido al Consejo de Seguridad –pero filtrado a algunos medios de comunicación– que durante el año 2020 Corea del Norte había seguido expandiendo su programa nuclear y balístico, principalmente a través de los recursos –unos 316 millones dólares– obtenidos en varios ciberataques en 2019 y 2020. En agosto, tanto la AIEA como el secretario general de la ONU expresaron su preocupación por la reactivación del reactor de Yongbyong –el más grande del país y en el que se habría producido el plutonio necesario para desarrollar el programa nuclear de Corea del Norte–, que se suponía inactivo desde

diciembre de 2018. Naciones Unidas y la AIEA, cuyos observadores fueron expulsados del país en 2009, instaron a Pyongyang a observar tanto las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como el Tratado de No Proliferación e hicieron un llamamiento a la reanudación de los cauces diplomáticos como única opción para lograr la desnuclearización de la península coreana.

Además de los avances del programa atómico de Corea del Norte, **otros dos aspectos que generaron preocupación en EEUU y otros gobiernos fue el alto número de ensayos balísticos por parte de Pyongyang –especialmente en marzo, septiembre y octubre– y el desarrollo de nuevo armamento a lo largo del año.** Cabe destacar los nuevos misiles balísticos lanzados desde un submarino presentado durante uno de los mayores desfiles militares de los últimos años en el mes de enero o un ferrocarril con capacidad para lanzar misiles balísticos; así como parte del armamento sofisticado que Kim Jong Un exhibió en octubre, como un misil hipersónico, misiles crucero de baja altitud de vuelo o uno de los mayores misiles balísticos intercontinentales fabricados hasta el momento.

En el plano más político, Corea del Norte rechazó en varias ocasiones el ofrecimiento de diálogo por parte de Washington, alegando que este trataba de esconder y legitimar sus políticas hostiles hacia el país. Aun si en alguna ocasión Kim Jong Un mostró una cierta disposición a retomar los contactos diplomáticos con la Administración de Joe Biden, Pyongyang declaró que EEUU sigue siendo su principal enemigo y criticó con contundencia los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur llevados a cabo en marzo y agosto, la presencia permanente y masiva de soldados estadounidenses en Corea del Sur o la imposición de sanciones económicas por parte de Washington. Por su parte, Biden declaró ante el Congreso que el programa nuclear norcoreano sigue siendo una de las principales amenazas para EEUU y llamó a Pyongyang a no caer en provocaciones ni en acciones que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. A finales de año, el comandante del contingente militar de EEUU en Corea del Sur advirtió que la declaración del fin de la Guerra de Corea, sugerida en el mes de septiembre por el presidente surcoreano, podría conllevar el fin del rol que han tenido EEUU y Naciones Unidas en la península coreana desde los años cincuenta.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Durante el año hubo avances importantes en la mejora de las relaciones bilaterales, como la reanudación de las comunicaciones entre ambos países o la disposición mutua a discutir una declaración que ponga fin a la Guerra de Corea (1950-53), pero persistieron acusaciones y amenazas cruzadas y ambos países llevaron a cabo ensayos balísticos en varios momentos del año. Respecto de esta última cuestión, cabe destacar el acuerdo entre Corea del Sur y EEUU para poner fin a las limitaciones que ambos países acordaron en 1979 sobre el alcance (180 kilómetros) y la carga (500 kilos) de los misiles de Corea del Norte. Aun si dichas restricciones habían sido modificadas y ampliadas en cuatro ocasiones (1997, 2012, 2017 y 2020), el nuevo acuerdo alcanzado por Seúl y Washington podría dar inicio, como reconoció el propio presidente surcoreano, a una nueva etapa de desarrollo de capacidades espaciales y balísticas. En este sentido, a mediados de septiembre, tras ensayar Corea del Sur el lanzamiento de misiles balísticos desde un submarino, el primer país no nuclear en hacerlo, el presidente Moon Jae In declaró que este tipo de ensayos incrementa la capacidad de disuasión de Corea del Sur. Por su parte, Corea del Norte declaró que este tipo de acciones podrían desestabilizar la península y llevar a la completa destrucción de las relaciones bilaterales. En la misma línea, en el mes de octubre Corea del Sur lanzó su primer cohete de fabricación propia al espacio, aunque finalmente no consiguió poner la carga del mismo en órbita. Según algunos analistas, Corea del Sur ya ha desarrollado y testeado misiles de crucero y balísticos de alcance intermedio con cargas de hasta 2.000 kilos, pero en el futuro podría desarrollar misiles balísticos de mayor alcance (capaces de impactar objetivos más allá de la península coreana), misiles balísticos de largo alcance lanzados desde submarinos o armas hipersónicas. Estos mismos análisis también sugieren que la disposición del Gobierno de EEUU a poner fin a las mencionadas restricciones a Corea del Sur

no solamente responde a la necesidad de contrarrestar el desarrollo de programa armamentístico de Corea del Norte en los últimos años, sino que podría estar vinculada a su estrategia de contención y disuasión de China en la región. Por su parte, **Corea del Norte llevó a cabo más de una decena de ensayos balísticos durante el año** que fueron criticados por varios países por violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe destacar especialmente el lanzamiento a mediados de septiembre de misiles balísticos desde un tren, que penetraron en la Zona Económica Exclusiva de Japón y que fueron considerados una amenaza importante por parte de varios países por cuanto denotarían la voluntad de Pyongyang de diversificar sus opciones de lanzamiento de misiles y harían más difícil la identificación y rastreo de su arsenal.

El otro aspecto que generó mayor tensión entre ambos países fueron los ejercicios militares conjuntos que cada año llevan a cabo Corea del Sur y EEUU, y que en 2021 se realizaron entre el 8 y 16 de marzo y el 16 y 23 de agosto. Aunque estos ejercicios fueron de menor envergadura que los de años precedentes (y en los de agosto no participaron en ellos tropas terrestres), Corea del Norte los criticó de manera contundente e incluso cortó las comunicaciones con Corea del Sur en el mes de agosto, pocas semanas después de haberlas reanudado. Finalmente, cabe destacar que durante el año siguieron produciéndose numerosas y graves denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. En febrero, un informe de Naciones Unidas denunciaba la posible comisión de crímenes contra la humanidad en el sistema penal norcoreano, señalando que los prisioneros políticos son sujetos a formas extremas de crueldad, detallando casos de violencia sexual, tortura, trabajo forzado, inanición forzada o denegación de la atención médica e instando al Consejo de Seguridad a elevar el caso al Tribunal Penal Internacional. En julio se publicó otro informe del All-Party Parliamentary Group de Reino Unido (APPG), en el que también se relata la comisión de crímenes contra la humanidad y se denuncia que la situación de derechos humanos en el país no ha mejorado desde que en el año 2014 la Comisión de Investigación de la ONU publicara un informe señalando que la naturaleza, gravedad y escala de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado norcoreano no tenían comparación alguna con ningún otro caso en el mundo contemporáneo. En cuanto a la situación humanitaria, varios informes detallaron varios casos de muerte por inanición y advirtieron sobre una grave escasez de alimentos en el país. En este sentido, el relator de derechos humanos de Naciones Unidas en el país advirtió sobre el impacto que las sanciones internacionales están teniendo sobre la población civil, mientras que **la FAO señaló que en 2021 Corea del Norte necesitaba urgentemente 860.000 toneladas de comida**. Además del impacto de la COVID-19, que comportó el cierre de fronteras en un país que es altamente dependiente de China en varios productos de primera necesidad, el director general de la FAO también advirtió que el clima extremo

vinculado al cambio climático, que recientemente se ha expresado en episodios de sequías e inundaciones en el país, también estaba impactando gravemente en la seguridad alimentaria del país, por lo que llamó a la cooperación internacional para paliar sus efectos en la población norcoreana.

Sudeste Asiático y Oceanía

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

Se registraron enfrentamientos muy frecuentes entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado OPM y varias voces advirtieron que la ofensiva militar del Ejército, considerada una de las mayores de las últimas décadas, habría provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. Según cómputos realizados a partir de noticias de medios de comunicación, unas treinta personas murieron a lo largo del año, aunque algunas voces señalan que pueden llegar a ser muchas más. **A finales de año, el Consejo de Iglesias de Papúa Occidental señaló que, según sus propias investigaciones, desde diciembre de 2018 más de 400 personas habían muerto en las provincias de Papúa y Papúa Occidental como consecuencia del conflicto que atraviesa la región.** Según la Asociación de las Iglesias Bautistas de Papúa Occidental, como mínimo 60.000 personas habrían abandonado sus hogares, la mayoría asentándose en regiones aledañas y muchas otras cruzando la frontera con Papúa Nueva Guinea. Además

A finales de año, el Consejo de Iglesias de Papúa Occidental señaló que desde diciembre de 2018 más de 400 personas habían muerto en las provincias de Papúa y Papúa Occidental como consecuencia del conflicto que atraviesa la región

del distrito de Puncak, el epicentro de las hostilidades bélicas en los últimos años, otros distritos en los que se han producido episodios de violencia incluyen Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat o Pegunungan Bintang. El líder del Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental (MULPO) y presidente del gobierno en el exilio establecido en el exilio en diciembre de 2020, Benni Wanda, denunció que la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas en la región es la de mayor envergadura desde los años setenta, e incluiría el despliegue adicional de numerosos efectivos militares, el uso habitual de apoyo aéreo, el corte de internet en determinadas regiones o el desplazamiento masivo de población local. Algunos de los episodios de violencia más significativos del año fueron el ataque del OPM a un puesto militar en el distrito de Maybrat, en el que cuatro militares murieron y otros dos resultaron heridos; los ataques contra trabajadores de la construcción en junio en Puncak, en los que varias personas murieron (en diciembre de 2019, 19 trabajadores de la construcción murieron en un ataque del OPM); o el asesinato de un general y máximo responsable de la inteligencia militar en la región en el mes de abril en Puncak. Tras este último episodio, el Gobierno declaró como terroristas al OPM y al resto de grupos armados que operan en la región, decisión que fue criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y que según algunos analistas podría anticipar una escalada de la violencia en la región y denotar la intención del Gobierno de tratar de gestionar el conflicto desde una lógica básicamente militar.

En el plano político, **el Parlamento aprobó en julio la prolongación durante otros 20 años de la Ley de Autonomía Especial del año 2001, provocando numerosas críticas y protestas.** Según algunas voces, la reforma de la ley (que incluye la enmienda de 18 artículos y la inclusión de otros dos) se ha hecho sin ningún tipo de consultas ni participación a escala local, incrementa el control del Gobierno central sobre la región y no prevé la formación de partidos políticos regionales. Por su parte, el Gobierno declaró que la reforma de la ley propiciará la aceleración del desarrollo de la región. Sin embargo, según Benni Wanda, la resolución del conflicto pasa por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo papú y por la repetición del referéndum de 1969, que el nacionalismo papú y parte de la comunidad internacional no reconoce como legítimo. De hecho, Wanda criticó que las actividades de multinacionales extractivas (como Rio Tinto, Freeport-McRoran o BP) han agudizado el conflicto en la región desde los años sesenta. En esta línea, en abril Greenpeace publicó un informe en que denunciaba la connivencia entre algunas multinacionales y determinados sectores del Gobierno y en el que detallaba numerosas irregularidades en el proceso de adjudicación de concesiones de explotación de recursos naturales en Papúa Occidental. En el mes

de julio más de 120 personas fueron detenidas en las manifestaciones en contra de la prolongación de la Ley de Autonomía Especial que se produjeron en Yakarta, Jayapura, Sorong y otras ciudades de la región. Finalmente, cabe destacar que el representante de MULPO en Vanuatu pidió la admisión del MULPO como miembro de pleno derecho en el Melanesian Spearhead Group –grupo regional conformado por Papúa Nueva Guinea, Fiji, Islas Salomón, Vanuatu y el Frente Canac y Socialista de Liberación Nacional en representación del pueblo canac de Nueva Caledonia–, del que actualmente es observador.

Tailandia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

Durante el año se registraron protestas de una magnitud considerable para exigir la renuncia del primer ministro Prayuth Chan-o-cha, la reforma de la Constitución para hacerla más democrática y la reforma de la Monarquía para hacerla más transparente. Aunque no trascendieron datos oficiales sobre el impacto de tales movilizaciones, se estima que cientos de personas resultaron heridas y que muchas más fueron detenidas en el marco de las protestas, durante las que se produjeron numerosos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A modo de ejemplo, solamente entre julio y septiembre más de 600 personas fueron arrestadas. **Las protestas, especialmente multitudinarias en los meses de febrero, marzo, julio y agosto, también estuvieron motivadas por la oposición a la legislación que regula los delitos de lesa majestad.** En este sentido, el mes de agosto trascendió que más de 150 personas habían sido detenidas desde noviembre de 2020

por tales cargos. En febrero, Naciones Unidas había expresado su preocupación por la creciente utilización del artículo 112 del Código Penal (que prohíbe la difamación contra la Monarquía y está penado con entre 3 y 15 años de prisión), y ya previamente en noviembre de 2020 había exigido su enmienda por considerar que no era compatible con el derecho internacional. En octubre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Thai Lawyers for Human Rights y el Internet Law Reform Dialogue habían publicado un informe sobre cómo el Gobierno había utilizado tal legislación para coartar tanto la participación en manifestaciones en favor de la democracia como la expresión de ideas políticas en internet. Poco después, en noviembre, durante la celebración del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 12 países pidieron la reforma del mencionado artículo 112. Sin embargo, también en el mes de noviembre, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia señalando que las protestas para reformar la Monarquía suponían un intento sedicioso de subvertir el sistema de gobierno en Tailandia, cuyo jefe de Estado es el rey. Esta sentencia tenía un carácter general y no solamente aplicaba a tres líderes sociales que habían sido detenidos en febrero, por lo que algunos analistas consideraron que abría la puerta a que manifestantes prodemocracia fueran juzgados por revuelta o rebelión, delitos que pueden comportar cadena perpetua. En el plano político, cabe destacar la moción de censura que se presentó en septiembre contra el Prayuth Chan-o-cha y cinco de sus ministros por corrupción y mala gestión de la pandemia, y que finalmente no prosperó.

2.3.4. Europa

Europa oriental

Belarús	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, UE, Polonia, EEUU, Rusia

Síntesis:

La exrepública soviética de Belarús alcanzó su independencia en 1991, convirtiéndose en una república presidencialista. Desde 1994 ha estado gobernada por Alexander Lukashenko, cuyos poderes presidenciales y límite de mandatos se ampliaron en referéndum en 1996 y 2004. Con una economía centralizada, heredera de la etapa soviética, y dependiente energéticamente de Rusia, Belarús ha oscilado entre relaciones de alianza estratégica con Rusia y una política de afirmación de la soberanía nacional que le ha reportado etapas de crisis con su país vecino. El régimen de autoritarismo político y de vulneración de derechos humanos ha dejado escaso margen para la oposición política y social al tiempo que ha sido motor de tensión de baja intensidad. En 2020 la reelección de Lukashenko generó

movilizaciones antigubernamentales masivas. La represión masiva del régimen a las movilizaciones desencadenó una grave crisis política y social.

Continuó la tensión sociopolítica en Belarús, con prácticas sistemáticas de represión del régimen contra la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, entre otros sectores.

La crisis –iniciada en 2020 en torno a las elecciones presidenciales, con las restricciones del régimen a candidaturas opositoras, la reelección de Lukashenko y la movilización masiva de la oposición contra unos resultados considerados fraudulentos, respondida con represión– se manifestó en 2021 en forma de grave persecución en todos los ámbitos y niveles. Se produjeron detenciones masivas, cierres de organizaciones de la sociedad civil (incluyendo entidades de larga trayectoria, como el centro de derechos humanos Vyasna y el Comité Helsinki Bielorruso), redadas constantes contra oficinas y domicilios, cierres de canales informativos (medios tradicionales, páginas de internet y redes sociales) y persecución de sus suscriptores, sentencias de prisión (considerados casos fabricados por organizaciones como Amnistía Internacional) y obstaculización del trabajo de defensa legal, entre otras. Sectores de población como estudiantes, personal sanitario y deportistas se vieron afectados también por intimidaciones y represión. Se aprobaron enmiendas legislativas en diversas leyes y en el Código Penal que ampararon la práctica represiva y violaciones de derechos humanos e incrementaron las penas. Se desplegaron tropas y vehículos militares junto a Policía en respuesta a protestas. **La Alta Comisionada de derechos humanos alertó en julio de violaciones masivas de derechos humanos sin precedentes en alcance y gravedad y cifró en 35.000 las personas detenidas desde el inicio de la crisis en 2020.**³³ A mediados de 2021 más de 200 organizaciones de la sociedad civil habían sido cerradas o afrontaban proceso de cierre, según Amnistía Internacional.³⁴ Entidades especializadas en investigación sobre tortura y atención a víctimas apuntaron a una “política coordinada de tortura sistemática”.³⁵ Se produjeron protestas durante el año, y pese al intento en marzo de reimpulsar movilizaciones de mayor escala, fueron de tamaño y duración limitadas (incluyendo *flashmobs*), ante el grado de represión y como estrategia para prevenir detenciones. Se mantuvo el carácter pacífico de las protestas, con movilizaciones en la capital, Minsk, y en decenas de localidades.

La líder opositora Svetlana Tijanóvskaia, exiliada en Lituania, así como otros sectores de la oposición reclamaron un diálogo nacional inclusivo como vía de solución e instaron a actores como la OSCE a promoverlo. El Gobierno, que enfocó la crisis como un problema de “extremismo” y “terrorismo” y de intento de desestabilización con apoyo extranjero,

descartó el diálogo. En su lugar, impulsó una reforma constitucional sin participación ciudadana encaminada a fortalecer la continuidad del régimen. El borrador de cambios, anunciado en diciembre, incluía inmunidad vitalicia para Lukashenko; institucionalizada un órgano paralelo al Parlamento, la Asamblea Popular –puesta en marcha ya en febrero como espacio de figuras leales al presidente–, con participación del presidente y expresidentes y competencias en política exterior y de seguridad, entre otros; y límite a dos mandatos la presidencia, sin carácter retroactivo. Estaba previsto un referéndum en febrero de 2022 para su aprobación.

La grave crisis interna tuvo dimensión internacional. Por una parte, generó respuesta internacional en forma de llamadas de alerta y sanciones. 35 miembros de la OSCE activaron el llamado Mecanismo de Viena para solicitar explicaciones sobre las violaciones de derechos humanos. Actores internacionales como la UE, EEUU, Canadá, entre otros, prolongaron y ampliaron sanciones en diversos momentos del año. Entre ellos, la intercepción en mayo por un jet de combate bielorruso de un avión comercial en ruta de Grecia a Lituania a su paso por el espacio aéreo de Belarús, su aterrizaje forzoso y detención de un periodista bielorruso y su pareja propició sanciones comerciales en el ámbito aéreo. En meses sucesivos se ampliaron restricciones relativas a sectores como la potasa –exportación clave para Belarús–, tabaco, petróleo, productos petroquímicos, entre otros. En paralelo, se agravaron las relaciones entre Occidente y Belarús, con expulsión de diversos diplomáticos (Francia, Lituania, Letonia, Polonia). Por otra parte, Belarús y Rusia firmaron en noviembre diversos acuerdos de integración, en el marco de su proceso de negociación de décadas. A su vez, el deterioro de la situación en torno al conflicto de Ucrania –con el despliegue masivo de tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania y alertas de inteligencia estadounidense y ucraniana a partir de noviembre sobre una posible invasión– añadió incertidumbre a las tensiones en el Este de Europa.

Belarús, por su parte, en lo que fue considerado como una respuesta a las sanciones, puso en marcha una política de presión contra países vecinos de la UE, facilitando el tránsito de personas migrantes desde su territorio a Lituania, Letonia y Polonia. Los gobiernos vecinos declararon estados de emergencia, desplegaron fuerzas armadas a la frontera y aprobaron la construcción de vallas con alambradas. Varios miles de personas quedaron en el limbo, entre la frontera entre Polonia y Belarús, en grave situación de emergencia humanitaria. Del lado polaco, se impuso una zona de restricción de acceso. ACNUDH denunció, en base a entrevistas realizadas, la falta o limitaciones de acceso a alimento, agua potable y refugio a que hacía frente

33. ACNUDH, “Belarus: Massive human rights violations unprecedented in scope and gravity, says UN expert”, *ACNUDH*, 5 de julio de 2021.

34. Amnistía Internacional, “Belarus: International human rights groups demand release of Viasna members on first anniversary of crackdown”, *AI*, 17 de septiembre de 2021.

35. IRCT, “Belarus: Support to Torture Survivors Imperative in Absence of Accountability”, IRCT, 17 de septiembre de 2021.

la población migrante, así como el uso de la fuerza y amenazas por las fuerzas de seguridad de Belarús y las expulsiones y detenciones por parte de Polonia.³⁶ La UE acusó a Belarús de convertir a las personas migrantes en un arma de presión, al tiempo que mantuvo su política migratoria de priorización de deportaciones y de promover acuerdos con países de origen para facilitar la expulsión, como fue el caso con Iraq. A mediados de noviembre, Minsk comenzó a transferir a personas migrantes a vuelos de deportación.

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Turquía

Síntesis:

El conflicto entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj —enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto— está asociado a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Este comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego. Desde el alto el fuego de 1994 ha habido diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. La guerra se reabrió en septiembre de 2020. En torno a 6.800 militares de ambos países murieron o desaparecieron, varios cientos de civiles murieron y unos 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos se desplazaron. En noviembre de ese año las partes alcanzaron un acuerdo que puso fin a la guerra y que supuso un cambio total del statu quo (control por Azerbaiyán de los distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj, así como de una parte de Nagorno-Karabaj y despliegue de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz), pero que dejaba irresuelto el estatus político de Nagorno-Karabaj.

Tras la guerra de seis semanas en 2020 entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj y sus distritos adyacentes, la situación en 2021 pasó a ser de tensión

militarizada, con un régimen de alto el fuego frágil y numerosos retos humanitarios. Se produjeron frecuentes violaciones del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2020. La base de datos de ACLED contabilizó 57 víctimas mortales durante 2021 en algo más de 300 incidentes de violencia. La guerra de 2020 había resultado en la toma militar por Azerbaiyán de una parte de Nagorno-Karabaj, así como de los distritos alrededor del enclave desplazándose las líneas del frente. En ese nuevo escenario en 2021, las fuerzas militares armenias y azerbaiyanas se mantenían a escasa distancia entre ellas y más cerca de núcleos civiles. Como señaló el centro de investigación International Crisis Group, Azerbaiyán estableció nuevos puestos militares y las fuerzas armenias de Nagorno-Karabaj posiciones defensivas en la nueva línea de separación.³⁷ Las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas desplegadas en 2020 como parte del acuerdo patrullaban dentro de Nagorno-Karabaj y en el corredor de Lachin, pero no en las líneas de frente.³⁸ En este contexto de militarización y frágiles mecanismos de implementación y supervisión del alto el fuego, **durante el año se produjeron incidentes tanto en torno a la frontera estatal entre Armenia y Azerbaiyán como en la línea de separación de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán.** Se produjeron tiroteos, denuncias de incursiones, explosiones de minas, detenciones, entre otros incidentes, en que las partes se acusaron mutuamente. Hostilidades en noviembre, con seis víctimas mortales de Armenia y siete de Azerbaiyán, así como diversos heridos, incrementaron las alertas y llevaron a una nueva tregua, con mediación de Rusia. A su vez, durante el año se produjeron diversas víctimas mortales y heridos a causa de explosiones de minas, en un contexto en que la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj continuó siendo de las regiones del mundo con mayor presencia de minas y artefactos explosivos. Durante el año, cuestiones como la ubicación de minas, la liberación de prisioneros, la delimitación y demarcación de la frontera y el establecimiento de vínculos de transporte y económicos estuvieron en la agenda del diálogo entre Armenia y Azerbaiyán, marcado por el antagonismo y las divergencias.³⁹ En septiembre ambos países presentaron denuncias cruzadas ante la Corte Penal Internacional por las actuaciones de cada parte en la guerra de 2020. Entre los avances limitados, las partes acordaron el establecimiento de un canal de comunicación directa entre los ministros de Defensa como mecanismo de prevención de incidentes.

En el plano humanitario, de las decenas de miles de personas armenias que se desplazaron por la guerra de 2020 de Nagorno-Karabaj (en torno a 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos, según un informe del Consejo de Europa),⁴⁰ una gran parte retornó en los meses

36. ACNUDH, *Press briefing notes on Poland/Belarus border*, ACNUDH, 21 de diciembre de 2021.

37. International Crisis Group, *Post-war prospects for Nagorno-Karabakh*, Europe Report núm. 264, 9 de junio 2021.

38. *Ibid.*

39. Para más información sobre el proceso negociador, véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona, 2022.

40. Gavan Paul, *Humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan*, Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, Asamblea Parlamentaria, Consejo de Europa, Doc. 15363, 13 de septiembre de 2021.

posteriores al acuerdo de noviembre de 2020. Según informó ACNUR en noviembre de 2021, continuaban en Armenia en torno a 37.000 personas de Nagorno-Karabaj, en su mayoría mujeres y menores, con cifras actualizadas de julio. Tanto la población desplazada a Armenia como la retornada a Nagorno-Karabaj afrontaban necesidades de alojamiento en condiciones dignas y de acceso a medios de vida, entre otras. Por otra parte, el Gobierno de Azerbaiyán afirmó que el 70% del en torno a medio millón de población azerbaiyana desplazada en la guerra de los años noventa quería volver a las áreas alrededor de Nagorno-Karabaj de las que huyeron y que pasaron de nuevo a control de Bakú en la guerra de 2020, si bien Bakú cifró en una década el tiempo que podría suponer el desminado de la zona. Divergencias entre Armenia y Azerbaiyán bloquearon el acceso de ACNUR a Nagorno-Karabaj –contemplado en el acuerdo de alto el fuego de 2020–, con cada parte exigiendo que el acceso a la región en disputa se produjese exclusivamente desde su territorio, para no poner en cuestión el estatus que cada parte defiende –pertenencia de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, en el caso de Bakú; y defensa de autodeterminación de la región, por parte de Ereván.

Por otra parte, la situación de conflicto se vio afectada por la tensión interna en Armenia, de la mano del descontento político y social por la derrota militar en 2020. La oposición política llevó a cabo manifestaciones antigubernamentales en los primeros meses del año, exigiendo la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinian. Entre las acciones de protesta, se bloqueó el Parlamento en marzo. Gobierno y oposición alcanzaron ese mes un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas en junio y levantar la ley marcial impuesta en el estallido de la guerra de 2020, como medidas para desescalar la crisis. Pashinian dimitió del cargo en abril y se mantuvo como primer ministro en funciones. En contraste con las protestas y los sondeos, el partido del primer ministro Nikol Pashinian, Contrato Civil, ganó las elecciones anticipadas de junio con un 53,9% de los votos y 71 escaños.

Sudeste de Europa

Bosnia y Herzegovina	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional

Síntesis:

En el marco del proceso de descomposición de la Federación de Yugoslavia, la ex república yugoslava de Bosnia y Herzegovina, habitada por bosniacos, serbios y croatas, se vio afectada entre 1992 y 1995 por una guerra en la que la élite política serbia del país, con apoyo de Serbia, así como las élites bosnias y croatas, movilizaron a sus respectivas poblaciones y fuerzas en torno a la cuestión étnica a partir de proyectos políticos de autodeterminación de difícil equilibrio entre ellos. Los acuerdos de paz de Dayton dieron paso a un Estado frágil, dividido en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina (con población bosniaca y croata y el 51% del territorio) y la república Srpska (de mayoría serbia y con el 49% del territorio), ambas con amplios poderes. Las tensiones políticas entre las élites de las tres comunidades y entre éstas y la presencia internacional que supervisa la implementación de los acuerdos, así como el legado del impacto del conflicto en la población y el país, son ejes de conflicto aún activos. Se suman otros como la corrupción y la desigualdad. En 2014 más de una treintena de localidades de la federación bosniocroata fueron escenario de movilizaciones en protesta por la gestión política y la situación socioeconómica.

Se incrementó la tensión en el país, con las advertencias y pasos dados por las autoridades de la República Srpska para retirarse de instituciones

y órganos estatales como el Ejército, el sistema fiscal y judicial y crear sus propias instituciones. La crisis generada en 2021 fue calificada por el alto representante para la implementación del acuerdo de paz de Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, como el mayor riesgo existencial que afrontaba el país desde el periodo de posguerra. Las tensiones políticas en el país se agudizaron en la segunda mitad del año. En julio, los representantes serbobosnios en las instituciones del Estado iniciaron un boicot contra éstas (presidencia tripartita, asamblea parlamentaria y consejo de ministros) en respuesta a la introducción por el anterior Alto Representante, Valentin Inzko –quien dejó el cargo en julio–, de enmiendas en el código penal que criminalizaban la negación del genocidio y crímenes de guerra perpetrados en la guerra de los años noventa y el enaltecimiento de criminales de guerra condenados. La decisión de Inzko se enmarcaba, según explicó Schmidt en su informe de noviembre, en un contexto de aumento de posiciones negacionistas por las autoridades serbobosnias. Continuaba también el rechazo de largo recorrido del régimen serbobosnio a la figura del Alto Representante y sus amplias competencias ejecutivas, considerado una injerencia. El boicot incluyó tanto la no participación en diversas votaciones como su obstaculización. En octubre el miembro serbobosnio de la presidencia compartida del país y líder del partido Unión de los Socialdemócratas Independientes (SNSD), Milorad Dodik, anunció que la República Srpska se retiraría de las Fuerzas Armadas, de la Agencia de tributación indirecta y del Consejo Superior del Poder Judicial y Fiscal, que crearía sus propias instituciones en estos

ámbitos y que rechazaría todas las decisiones del Alto Representante. Anunció también que grupos de expertos elaborarían una nueva Constitución, en la que quedarían recogidas las nuevas instituciones de defensa, tributos y sistema judicial.

La posición de Dodik generó reacciones internacionales de alerta. **El propio Alto Representante alertó en su informe de noviembre al secretario general de la ONU que si las autoridades serbobosnias llevaban adelante el anuncio supondría una salida del orden constitucional actual del país y del marco establecido por los acuerdos de paz de Dayton y, en práctica, la secesión del territorio aun si no se declaraba formalmente la independencia.**

El vicesecretario de Estado de EEUU, Gabriel Escobar, mantuvo reuniones con la presidencia tripartita de Bosnia, incluyendo Dodik, para abordar la crisis. Escobar destacó que el principal mensaje era el acuerdo de todos los interlocutores de que no habría conflicto armado y, añadió, Dodik podría paralizar los planes de retirada de las instituciones estatales. EEUU y Alemania también advirtieron con posibles sanciones si se producían retiradas unilaterales. Turquía, por su parte, se ofreció a mediar en la crisis. Frente al apoyo al boicot institucional de julio por parte de todos los partidos serbobosnios, formaciones serbobosnias cuestionaron los anuncios de Dodik para la creación de instituciones propias. El presidente del opositor serbobosnio Partido Democrático Serbio (SDS) Mirko Sarovic expresó preocupación ante los planes de Dodik, del SNSD y los partidos en coalición con éste y alertó sobre el riesgo de colapso económico. **El 10 de diciembre el Parlamento de la República Srpska aprobó con 48 votos (del total de 83 de la cámara) un acuerdo no vinculante para iniciar la retirada de la entidad serbobosnia del Ejército y sistemas tributario y judicial y la elaboración de la legislación de instituciones paralelas.** La oposición abandonó la votación y sectores opositores serbobosnios calificaron los pasos de campaña electoral –ante los comicios previstos para 2022– y advirtieron de los riesgos de que la retirada derive en un conflicto armado. La votación desencadenó reacciones de la OSCE, la UE y del G7, entre otros. Hungría advirtió que vetaría cualquier intento de la UE de sanciones contra Dodik. Rusia, por su parte, restó importancia a los pasos dados por la República Srpska y reiteró su posición favorable a la abolición de la figura del Alto Representante –manifestada durante el año con un intento fallido de resolución de Rusia y China para su eliminación, así como con la amenaza de veto a la renovación de la fuerza militar de la UE en Bosnia, EUFOR, si incluía referencias al Alto Representante. EUFOR fue renovada en noviembre, sin mención a la Oficina del Alto Representante. Por otra parte, a lo largo del año continuó la tensión asociada a

Se incrementó la tensión en Bosnia y Herzegovina, con la aprobación por el Parlamento serbobosnio de un acuerdo para la retirada de la República Srpska del Ejército y sistemas tributario y judicial estatal

otro eje de disputa, el de la reforma electoral pendiente. Ante las elecciones previstas para 2022, el retraso en un acuerdo sobre la nueva reforma incrementaba los riesgos de disputas, incluyendo por la posibilidad de boicot electoral de partidos croatas, de la mano de su demanda de un distrito electoral propio.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Irán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

Durante 2021 Irán continuó registrando diversas dinámicas de tensión interna que se sumaron a la tensión internacional relacionada con su programa nuclear.⁴¹ **Las autoridades continuaron con sus políticas de represión y persecución a las voces disidentes, aunque los niveles de contestación y movilizaciones fueron significativamente inferiores a los de 2019**, año de masivas protestas contra el régimen. Organizaciones internacionales de derechos humanos siguieron denunciando el hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos, la persistente impunidad respecto a vulneraciones previas, la restricción de libertades y derechos como el de expresión y asamblea, el encarcelamiento y condena de activistas por actividades pacíficas, el uso de confesiones forzadas obtenidas bajo tortura como evidencias en procesos judiciales y la detención de personas con doble nacional bajo cargos imprecisos de cooperación con Estados hostiles a la república

41. Véase el resumen sobre Irán-EEUU, Israel en este capítulo.

islámica. Irán también continuó siendo uno de los países con mayor aplicación de la pena de muerte. Se estima que entre enero y noviembre de 2021 el régimen había ejecutado a al menos 254 personas.⁴¹ Cabe destacar también que durante 2021 se celebraron elecciones presidenciales en Irán en las que resultó electo Ebrahim Raisi, figura ultraconservadora, con trayectoria en la judicatura y acusado de formar parte de un comité responsable de masivas ejecuciones de personas prisioneras por motivos políticos en 1988. Los comicios también fueron cuestionados por voces críticas por excluir a mujeres, minorías y voces disidentes y por desarrollarse en un contexto altamente represivo. Adicionalmente, se informó de la discriminación a minorías y sobre incidentes de seguridad en algunas regiones que concentran a estas poblaciones. Durante el año trascendieron incidentes en la provincia de Sistán Baluchistán (este) entre las fuerzas de seguridad y personas que intentaban reabrir una ruta de conexión con Pakistán que resultaron en la muerte de al menos 10 personas; protestas por la falta de acceso a agua potable en varias localidades de las provincias de Khuzestan y Lorestan –con un importante porcentaje de población de la minoría árabe– que fueron reprimidas y derivaron en la muerte de al menos nueve personas; y represión a activistas y políticos kurdos, además de algunos ataques contra bases de grupos opositores kurdos en la región autónoma kurda en el norte de Iraq, sin que trascendieran informaciones sobre posibles bajas.

Irán – EEUU, Israel ⁴³	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó

expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

Durante el año persistió la disputa en torno al programa nuclear iraní. **Pese a la reanudación del proceso diplomático en 2021, esta tensión estuvo condicionada por los obstáculos y el bloqueo de las negociaciones,⁴⁴ numerosos incidentes de seguridad con potencial de escalada de violencia y los crecientes incumplimientos de Irán de los términos acordados en el pacto de 2015.** A comienzos de año se generaron ciertas expectativas sobre el posible impacto del cambio de gobierno en EEUU en las dinámicas del conflicto, sobre todo por la voluntad expresada por la administración de Joe Biden de retornar al acuerdo nuclear del que Donald Trump se desvinculó en 2018. No obstante, tanto Washington como Teherán se exigieron mutuamente medidas para reestablecer las negociaciones. Los contactos diplomáticos se reanudaron formal y presencialmente en mayo, en Viena, entre Irán y los países del conocido como P4+1 (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania), con participación indirecta de EEUU –en la sexta ronda del proceso negociador. No obstante, el diálogo quedó suspendido hasta la celebración de elecciones presidenciales en Irán, que en junio dieron la victoria al ultraconservador Ebrahim Raisi. Las negociaciones en torno al programa nuclear iraní no se reanudaron hasta finales de año.

Mientras tanto, **durante todo el año se produjeron una serie de incidentes de seguridad que contribuyeron a tensionar el ambiente entre los actores involucrados en esta disputa.** Algunos de estos episodios no tuvieron una autoría clara. Entre los incidentes, cabe destacar los que ocurrieron en el ámbito marítimo: la explosión que dañó a un barco israelí en el Golfo de Omán en febrero, hecho del que se acusó a Irán; la deflagración que afectó a un barco iraní en el Mediterráneo en marzo; otro ataque explosivo contra una embarcación iraní atribuido a Israel en abril; varios altercados entre naves estadounidenses e iraníes en el Estrecho de Ormuz entre abril, mayo y noviembre; o el ataque a un carguero en la costa omaní del que también se responsabilizó a Teherán. Paralelamente, continuaron registrándose hechos de violencia en terceros países en el marco de una confrontación indirecta entre EEUU e Irán, principalmente en Iraq y Siria. Entre ellos, ataques estadounidenses contra milicias respaldadas por Teherán en ambos países y ofensivas contra objetivos estadounidenses en Iraq de los que se acusó

42. Human Rights Watch, “Iran: Events of 2021”, *HRW World Report 2022*, 2022.

43. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

44. Véase el resumen sobre Irán (nuclear) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

a Irán. **Durante 2021 también se observaron acciones de sabotaje contra instalaciones nucleares iraníes, en concreto contra las de Natanz (abril) y Buser (junio), en hechos que fueron atribuidos a Israel.** También contribuyó a enrarecer el ambiente la continua denuncia de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) por los incumplimientos por parte de las autoridades iraníes en lo que respecta a su programa nuclear. El organismo alertó sobre diversas actividades llevadas a cabo por Teherán, incluyendo el enriquecimiento de uranio al 20% –por sobre lo estipulado y a un nivel similar a los que tenía antes de suscribir el pacto–, la realización de actividades de producción de uranio que estaban prohibidas hasta 2031 o el acopio de uranio enriquecido a unos niveles 14 veces superiores a lo estipulado en el acuerdo de 2015. La AIEA también llamó la atención sobre las dificultades para acceder y supervisar algunas instalaciones nucleares. Al finalizar el año, ante la posibilidad de que se activara una censura de la AIEA a Irán, la agencia y las autoridades de Teherán llegaron a un acuerdo para restablecer las cámaras de vigilancia en unas instalaciones clave (Karaj).

En este contexto, **tanto los países europeos implicados en las negociaciones como EEUU manifestaron su preocupación por las actividades asociadas al programa atómico iraní y advirtieron sobre medidas de represalia si persistía el impasse negociador.** Tras cinco meses de bloqueo, las negociaciones se reemprendieron a finales de noviembre en Viena (séptima ronda), aunque sin arrojar avances. Después de que Teherán exigiera el levantamiento de algunas sanciones impuestas por el Gobierno de Joe Biden no vinculadas al programa nuclear, tanto EEUU como países occidentales advirtieron que abandonarían el diálogo. En medio de las presiones de Rusia y China, Irán accedió a retomar las negociaciones a partir de lo acordado en la ronda anterior. A finales de diciembre tuvo lugar una nueva ronda (la octava), aunque en paralelo Irán realizó pruebas con misiles, aviones no tripulados y aparatos espaciales que generaron suspicacias y críticas por parte de gobiernos occidentales.

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	
En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas,	

Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Durante 2021, el Gobierno egipcio continuó siendo señalado por la persecución a la disidencia y múltiples violaciones a los derechos humanos. Organizaciones internacionales, expertos de Naciones Unidas y terceros países alertaron sobre la situación en el país, destacando diversos abusos y vulneraciones como el arresto arbitrario de decenas de activistas, torturas y malos tratos de personas detenidas, intimidaciones a familiares de disidentes, uso abusivo de cortes militares para juzgar a opositores y severas restricciones impuestas a las ONG, entre otras prácticas. Amnistía Internacional acusó a la Agencia de Seguridad Nacional de acoso y amenazas a personas defensoras de los derechos humanos para silenciarlas y denunció las condenas a periodistas acusados de difundir noticias falsas por publicaciones críticas con la situación en las prisiones o la gestión de la pandemia, entre otros temas.⁴⁵ Expertas de Naciones Unidas también alertaron sobre torturas, detenciones y arrestos de defensores de derechos humanos en Egipto, subrayando que las prolongadas detenciones prejudiciales suponían una exposición grave e innecesaria a la COVID-19.⁴⁶ Organizaciones de derechos humanos también insistieron en las denuncias relativas a ejecuciones extrajudiciales de presuntos terroristas. Un informe de Human Rights Watch alertó sobre el asesinato de supuestos combatientes cuando permanecían en custodia o no suponían una amenaza. El Gobierno informó de la muerte de 755 personas en 143 presuntos tiroteos entre enero de 2015 y diciembre de 2020, pero solo identificó a 144. Según las autoridades, todas las personas fallecidas estaban en búsqueda por terrorismo, la mayoría tenía vínculos con los Hermanos Musulmanes –organización ilegalizada y duramente perseguida desde el golpe de 2013– y en todos los casos se informó que las fuerzas de seguridad habían respondido al fuego iniciado por los militantes. Sin embargo, HRW, que en 2020 ya había

45. Amnesty International, *Egypt: “This will only end when you die”: National Security Agency harassment of activists in Egypt*, 16 de septiembre 2021.

46. UN OHCHR, *Imprisoned human rights defenders in Egypt at grave risk of COVID-19, say UN human rights experts*, 24 de agosto 2021.

documentado ejecuciones extrajudiciales en el Sinaí,⁴⁷ en 2021 analizó varios casos ocurridos en el resto del país y en todos ellos había indicios de detenciones o desapariciones forzadas de las personas fallecidas previas a su muerte.

En este contexto, en marzo se aprobó una poco usual declaración internacional crítica con Egipto. **En el marco de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 31 Estados –incluyendo países como EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania– suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron su profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Egipto.**⁴⁸ Se denunció de manera especial las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, la limitación del espacio de acción para la sociedad civil y la aplicación de normas antiterroristas contra voces críticas –incluyendo activistas por los derechos humanos, personas LGTBI y periodistas– y se hizo un llamamiento a revertir estas prácticas. No obstante, cabe destacar que muchos de los países suscriptores de la declaración mantuvieron sus relaciones de cooperación con El Cairo. Así, en 2021, el nuevo Gobierno de EEUU decidió suspender solo parcialmente la ayuda militar a Egipto y transfirió 170 millones de dólares para actividades de contraterrorismo, control de fronteras y no proliferación. Si bien otros 130 millones quedaron bloqueados a la espera de requerimientos en materia de derechos humanos, activistas criticaron la medida que consideraron más simbólica que sustantiva. En aparente respuesta a las presiones de Washington, el Gobierno adoptó algunas medidas, como la excarcelación de algunos periodistas (abril). En paralelo, no obstante, cortes egipcias ratificaron condenas de por vida a dirigentes de los Hermanos Musulmanes, el Parlamento discutió una norma que permite remover de sus cargos a funcionarios públicos sospechosos de simpatizar con el grupo islamista –una medida calificada de persecución por diversas ONG– y el presidente aprobó un decreto que permite a la Corte Suprema Constitucional decidir la aplicabilidad de acuerdos internacionales en Egipto, lo que podría permitir que el país evadiera sus compromisos en materia de derechos humanos.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán, EEUU

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión de décadas entre Israel, Siria y Líbano –que en los últimos años se ha visto influida por el conflicto armado en Siria y ha contado con una implicación crecientemente destacada de Irán y EEUU– continuó motivando periódicos hechos de violencia. El balance de víctimas es complejo de precisar dadas las informaciones ambiguas sobre el impacto de algunos incidentes en términos de letalidad y por las dificultades para atribuir la autoría de algunos ataques, no siempre reivindicados. Aun así, a partir de recuentos basados en diferentes hechos de violencia identificados, es posible señalar que al menos 40 personas habrían fallecido. Como en años previos, **a lo largo de 2021 se informó de ofensivas israelíes en territorio sirio que tuvieron como objetivo fuerzas vinculadas a Irán y que también habrían provocado bajas en fuerzas gubernamentales, milicianos de Hezbollah y algunos civiles.** Israel también atacó las baterías de misiles sirias en abril, después de que un proyectil “errante” procedente de Siria cayera cerca de la instalación nuclear israelí de Dimona, y lanzó ofensivas contra depósitos de armas. Las incursiones aéreas atribuidas a Israel ocurrieron principalmente en las afueras de Damasco, Homs, Hama, Latakia, Quneitra, el Golán y Deir ez-Zor. En esta última región de Siria también se produjeron ataques estadounidenses contra milicias respaldadas por Irán, en represalia por ataques contra sus intereses en Iraq.⁴⁹ **En paralelo, a lo largo de 2021 se mantuvo la tensión en la zona fronteriza entre Líbano e Israel, en particular a lo largo de la Línea Azul, en el área supervisada por la Fuerza Interna de la ONU en Líbano, UNIIFIL.** En sus informes periódicos sobre la situación en la zona y sobre las actividades de la misión, el secretario general de la ONU constató diversos intercambios de proyectiles durante todo el año y alertó sobre el incremento de la tensión en algunos momentos, como por ejemplo en mayo, coincidiendo con la escalada de violencia en Gaza.⁵⁰ No se informó

47. Véase el resumen sobre Egipto (Sinaí) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

48. La declaración elaborada por Finlandia y publicada el 12 de marzo de 2021 contó con el apoyo de Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Nueva Zelanda, Macedonia, Noruega, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EEUU.

49. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

50. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

de víctimas mortales como resultado de estos hechos. Asimismo, la ONU reiteró las denuncias sobre las continuas violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel –más de 600 episodios hasta octubre de 2021–, el no desarme de grupos como Hezbollah y sobre transferencias a grupos armados no estatales en vulneración de la resolución 1701 (2006). A diferencia del año anterior, en que se celebraron varias reuniones, durante 2021 se informó solo de un encuentro (en mayo) entre representantes de los Gobiernos de Israel y Líbano para abordar las diferencias sobre la demarcación del límite marítimo, en el marco de discusiones mediadas por EEUU y auspiciadas por la Oficina del Coordinador Especial para Líbano de Naciones Unidas.

Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

La situación en Líbano continuó deteriorándose en 2021 a causa del persistente bloqueo político, una retórica progresivamente hostil entre los diferentes actores, un gravísimo declive económico y diversos hechos de violencia. Durante el primer semestre continuaron las tensiones y desacuerdos entre el primer ministro Saad Hariri y el presidente Michel Aoun sobre la formación de gobierno, sin que consiguiera aprobarse un gabinete a pesar de los intentos de facilitación y las presiones internacionales, en especial de Francia. Hariri acabó renunciando en julio, tras nueve meses de infructuosos esfuerzos por formar gobierno, en un contexto de acusaciones cruzadas con Aoun. Hariri señaló que el presidente, líder de la comunidad cristiano-maronita y aliado de Hezbollah, estaba secuestrado por los intereses de su yerno

Jibril Bassil, líder del partido cristiano Free Patriotic Movement. Mientras, Aoun acusó a Hariri, líder de la comunidad suní, de evasión de responsabilidades. El Parlamento designó entonces al multimillonario y Najib Mikati como nuevo primer ministro, quien negoció la composición del nuevo gobierno con Aoun. El nuevo gabinete –de 24 miembros, con solo una mujer como ministra– tomó posesión en septiembre, en lo que parecía el fin del impasse desde la dimisión del ex primer ministro Hassan Diab tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Sin embargo, el panorama político volvió a tensionarse a las pocas semanas, en octubre, debido a las diferencias entre los diferentes actores políticos en torno a la investigación de la deflagración en la capital libanesa. Las reticencias sobre la marcha de la investigación y el desacuerdo con algunas medidas adoptadas por el juez investigador, Tariq Bitar, provocaron que organizaciones como Hezbollah, Amal y el Movimiento Marada exigieran la dimisión del magistrado, en medio de acusaciones de politización. Los ministros shíes del Gobierno amenazaron con dimitir si el magistrado no era cesado de su cargo. Hasta finales de año las reuniones de gabinete permanecían suspendidas. **La disputa por la investigación judicial también motivó en octubre protestas de Amal y Hezbollah ante el Palacio de Justicia, ubicado en un barrio cristiano adyacente a una zona shíí, que derivaron en varias horas de enfrentamientos armados en los que murieron siete personas, en su mayoría seguidores de Hezbollah, y otras 30 resultaron heridas.** El episodio, que trajo a la memoria la guerra civil en el país (1975-1990), no fue el único hecho de violencia política y sectaria. En febrero, el asesinato de un activista shíí crítico con Hezbollah, Lokman Slim, también alentó temores sobre el retorno de los asesinatos políticos. Otros choques sectarios vinculados a la venganza por el asesinato de un adolescente durante choques entre Hezbollah y grupos suníes en 2020 provocaron la muerte de otras seis personas en agosto. Las manifestaciones de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut en demanda de justicia también derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

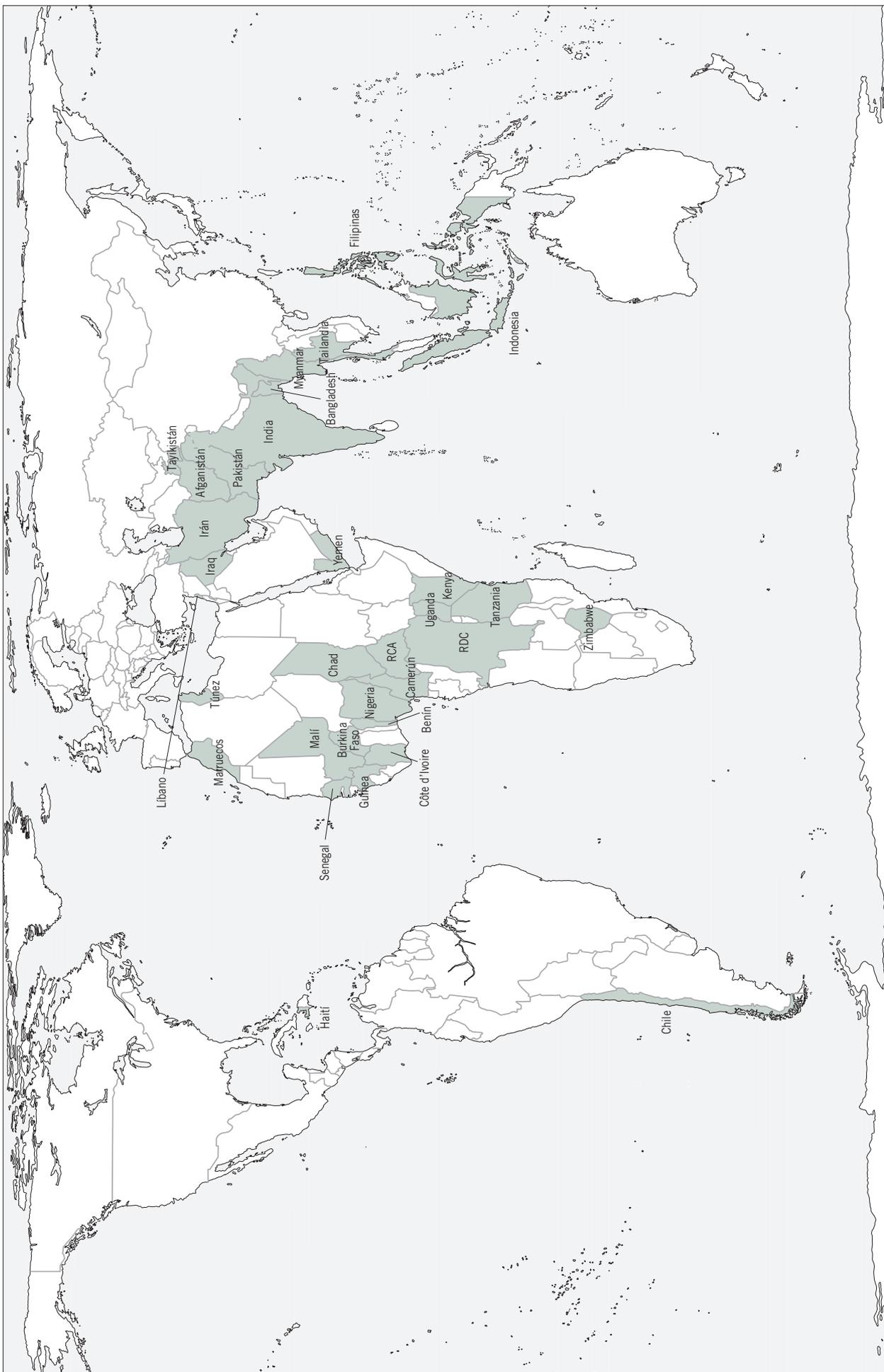
Este contexto de inestabilidad política e incidentes de seguridad se produjo en paralelo a un grave deterioro de la situación económica en el país. El Banco Mundial señaló que la crisis en Líbano era una de las más graves de la historia moderna y acusó a las autoridades de favorecer la depresión económica con su inacción. Al finalizar el año el valor de la libra libanesa había perdido el 90% de su valor respecto a octubre de 2019 y seguía cayendo. Más de la mitad de la población vivía bajo la línea de pobreza. Las medidas de recorte de los subsidios a productos básicos y medicamentos y el aumento del precio del combustible impactaron en la crítica situación de la población, afectada también por la COVID-19. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron que el 80% de la población no tenía acceso a derechos básicos como salud, educación o

vivienda adecuada. UNICEF también advirtió sobre el dramático deterioro de las condiciones de vida y las afectaciones para niños y niñas y el Programa Mundial de los Alimentos alertó sobre los altos niveles de inseguridad alimentaria en el país, que afectaba al 22% de la población libanesa, al 50% de la población refugiada siria y al 33% de la población refugiada de otras nacionalidades en Líbano. A partir del segundo semestre la falta de suministro de combustibles provocó cortes de electricidad de hasta 23 horas diarias. Así, **se produjeron periódicas manifestaciones por la crisis política y social durante todo 2021. Las protestas se concentraron en Beirut, Trípoli y Sidón y en ocasiones derivaron en choques con las fuerzas de seguridad** que dejaron centenares de personas heridas y al menos dos fallecidas en numerosos incidentes. También se produjeron incidentes y altercados –algunos entre residentes de barrios shííes y cristianos– en torno a

estaciones de combustible que dejaron más de un centenar de personas heridas y numerosas fallecidas y que motivaron intervenciones de las fuerzas de seguridad. En agosto, incidentes en la zona de Akkar (norte) en torno a un depósito de combustible derivaron en una explosión que causó la muerte de 36 personas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también alertaron sobre abusos de las fuerzas de seguridad, incluyendo torturas y desapariciones forzadas de manifestantes y abusos contra población refugiada siria. Algunos análisis subrayaron que la situación interna en el país también se veía condicionada por las disputas a nivel regional –principalmente entre Irán e Israel y Arabia Saudita– y expresaron dudas sobre la voluntad o capacidad de las actuales élites libanesas para sortear la crítica coyuntura que afronta el país. A lo largo de 2021 también se produjeron algunos incidentes producto de la tensión con Israel.⁵¹

51. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en este capítulo.

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad



Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos 2021

3. Género, paz y seguridad

- 18 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2021 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.
- Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos denunciaron los graves niveles de violencia sexual en el conflicto en Tigré, Etiopía.
- 72 millones de niños y niñas que viven en contextos de conflicto afrontaban grave riesgo de violencia sexual, según denunció Save the Children.
- La Corte Penal Internacional declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al líder del LRA Dominic Ongwen, en una sentencia pionera por incluir el matrimonio forzado como un crimen contra la humanidad, y por juzgarse por primera vez el embarazo forzado.
- El informe anual del secretario general de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad constató la estrecha relación entre la militarización y la desigualdad de género.
- En 2021, 20 países que protagonizaban unas negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

3.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)² es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 180 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.
2. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide cinco subíndices integrados por 16 indicadores que incluyen: matrimonio infantil, responsabilidades en el hogar, divorcio, herencias, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso seguro a servicios financieros formales, derechos laborales, derechos de ciudadanía, participación política, libertad de movimiento y acceso a la justicia. OCDE, *Social Institutions & Gender Index*, OCDE, 2019.

Tabla 3.1. Países que son escenario de conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos³

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados	Burkina Faso ⁴ India (2) Tailandia RDC (2)	Chad ⁵ Malí Myanmar Nigeria ⁶ RCA	Afganistán Camerún (2) ⁷ Filipinas (2) Iraq Pakistán (2) Yemen	Burundi Egipto Israel ⁸ Libia Níger ⁹ Palestina ¹⁰ Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Benín Burkina Faso Chile Haití India (6) ¹¹ Kenya RDC (4) ¹² Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Costa de Marfil Indonesia (2) Malí Nigeria (3) RCA ¹³ Tanzania Túnez Uganda (4) ¹⁴	Bangladesh Guinea Irán (4) Iraq Líbano (2) ¹⁵ Marruecos Pakistán (2)	Arabia Saudita Argelia Bahrein Brunei Darussalam Burundi China (7) Corea, RPD (2) Cuba Djibouti Egipto (2) Eritrea (2) Eswatini Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Kosovo Níger Malasia Palestina ¹⁶ Sáhara Occidental Siria Somalia Sudán (5) ¹⁷ Sudán del Sur (2) ¹⁸ Taiwán Uzbekistán Venezuela

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **13 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2021 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos**

de discriminación, cinco en países con niveles medios de discriminación y nueve conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina,¹⁹ Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Etiopía, Mozambique, Ucrania y Turquía) o muy bajos

3. Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2019) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau (véase capítulo 1, Conflictos armados, y capítulo 2, Tensiones). El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Entre paréntesis, el número de conflictos armados o tensiones en que está involucrado dicho país.
4. Burkina Faso, Níger y Malí protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Sahel Occidental.
5. Nigeria, Camerún, Chad y Níger protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Lago Chad (Boko Haram).
6. *Ibid.*
7. *Ibid.* Camerún además es escenario de otro conflicto armado denominado Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste).
8. Israel y Palestina protagonizan un único conflicto.
9. Véase nota 5.
10. En el SIGI Palestina recibe la denominación Gaza y Cisjordania.
11. Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán y otra con China.
12. En el caso de RDC una de las tensiones es la tensión internacional denominada África Central (LRA), en la que intervienen las Fuerzas Armadas congoleesas. Véase el capítulo 2 (Tensiones).
13. La tensión de RCA hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
14. Una de las tensiones de Uganda hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
15. Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la que mantiene con Israel y Siria.
16. Véase nota 11.
17. Una de las tensiones de Sudán hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
18. Una de las tensiones de Sudán del Sur hace referencia a la tensión denominada África Central (LRA). Véase el capítulo 2 (Tensiones).
19. Véase nota 10.

(Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, **al menos 43 de las 98 tensiones activas durante el año 2021 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles medios, altos o muy altos según el SIGI)**. 30 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam, Burundi, China, Corea RPD, Cuba, Djibouti, Egipto, Eritrea, Eswatini, Gambia, Palestina, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Kosovo, Níger, Sáhara Occidental, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Taiwán, Uzbekistán y Venezuela).

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

18 de los 32 conflictos armados que tuvieron lugar en 2021 se dieron en países donde existían niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2021 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.²⁰ Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En abril se celebró el **debate abierto anual en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados** y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión. El debate se

celebró online como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. El debate estuvo centrado en cuestiones como los servicios integrales y de apoyo para las supervivientes de la violencia, incluyendo servicios sanitarios y el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos; la financiación y la provisión de recursos para la prevención y la respuesta frente a la violencia sexual; el establecimiento de mecanismos para la rendición de cuentas; y la violencia sexual en conflictos en el contexto de la pandemia por la COVID-19. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) señaló que a pesar del papel que la militarización y el comercio de armas desempeñan en la exacerbación de la violencia de género en los conflictos armados, el Consejo de Seguridad no se ha pronunciado sobre esta cuestión en los debates sobre violencia sexual y destacó los llamamientos hechos por la sociedad civil a los miembros del Consejo de Seguridad para que dejen de proporcionar armas a los actores en conflicto, puesto

que algunos de los principales países exportadores de armas son miembros del Consejo de Seguridad. En su informe sobre violencia sexual en conflictos, el secretario general recomendó al Consejo de Seguridad que los casos de violencia sexual en Iraq, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia fueran referidos a la Corte Penal Internacional. Además, la representante especial del secretario general para la violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, se hizo eco de la violencia sexual que se estaba perpetrando en la región etíope de Tigré.

De los 18 contextos²¹ que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, 12 eran países con conflictos armados de niveles elevados de intensidad durante 2021 –Malí, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. En siete de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2021 con respecto al año anterior –Región Sahel

20. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

21. Los países objeto de análisis del informe de 2021 del secretario general son: Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria, Yemen, BiH, Cote d’Ivoire, Nepal, Sri Lanka y Nigeria. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la Escola de Cultura de Pau. El listado completo de conflictos armados en los países recogidos en el informe del secretario general es: Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, Región Sahel Occidental (incluye Malí), RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen.

Cuadro 3.2. Actores armados y violencia sexual en conflictos²²

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en marzo de 2021 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.²³

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Iraq		ISIS
Mali		Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, parte de la Coordinadora de Movimientos de Azawad; Ansar Eddine; Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental; Al-Qaida en el Magreb Islámico, parte de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin; Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgads y sus Aliados, parte de la Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel.
Myanmar	Tatmadaw (Fuerzas Armadas), incluida la guardia de fronteras integrada	
RCA		LRA; Facciones de ex-Seleka: Unión por la paz en la República Centroafricana, Movimiento Patriótico por la República Centroafricana, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción gula, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción de Abdoulaye Hussein, Agrupación Patriótica para la Renovación de la República Centroafricana, Movimiento Nacional por la Liberación de la República Centroafricana, Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano/Abdoulaye Miskine; Revolución y Justicia; Retorno, Reclamación y Rehabilitación; Milicias asociadas a los Grupos antibalaka
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congoleña	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano-Janvier; Fuerzas Democráticas Aliadas; Milicias Bana Mura; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri; Kamuina Nsapu; LRA; Nduma Defensa del Congo; Mai-Mai Kifuafua; Mai-Mai Simba; Nyatura; Facción de Nduma Defensa del Congo-Renovado liderada por el "General" Guidon Shimiray Mwissa y facción liderada por el Comandante Gilbert Bwira Shuo y el Comandante Adjunto Fidel Malik Mapenzi; Mai-Mai Raia Mutomboki; Mai-Mai Apa Na Pale; Mai-Mai Malaika; Mai-Mai Fimbo na Fimbo; Mai-Mai Yakutumba; Cooperativa para el Desarrollo del Congo; Milicias twas; Fuerzas Patrióticas Populares-Ejército del Pueblo (Mai-Mai)
Siria	Fuerzas gubernamentales, incluidas las Fuerzas de Defensa Nacional y las milicias partidarias del Gobierno; Servicios de inteligencia	ISIS; Hay'at Tahrir Al-Sham, encabezada por Frente Al-Nusra (Organización para la Liberación del Levante); Ejército del Islam, Ahrar Al-Sham
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional Somalí y sus milicias aliadas; Fuerzas de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Sudán-Abdul Wahid
Sudán del Sur	Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur; Policía Nacional de Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición partidario de Riek Machar; Fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición alineadas con el Vicepresidente Taban Deng
Otros casos		Boko Haram

Occidental, RCA, Sudán (Darfur), RDC (este-ADF), Colombia, Afganistán y Myanmar—. La mayoría de los actores armados identificados por el secretario general como responsables de violencia sexual en conflictos armados eran actores no estatales, algunos de los cuales habían sido incluidos en las listas de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

La situación en **Tigré (Etiopía)** fue especialmente grave. En el marco del conflicto en esta región se constataron graves vulneraciones de los derechos humanos que podrían ser consideradas crímenes de guerra y contra la humanidad por todos los actores implicados en el conflicto. Desde que se permitió el acceso a Tigré a finales de febrero, medios internacionales y organizaciones de derechos humanos reportaron y confirmaron las graves atrocidades cometidas, entre ellas el uso de violencia

sexual por parte de las tropas etíopes y eritreas. Los centros médicos de Tigré registraron 1.288 casos de violencia de género entre febrero y abril de 2021. Esta cifra solo es una parte de las violaciones cometidas, ya que muchas víctimas no habían acudido a ningún centro médico, según testimonios de Amnistía Internacional. Esta organización denunció en agosto la comisión de violaciones y otros actos de violencia sexual de forma generalizada por las fuerzas combatientes afines al Gobierno etíope (Ejércitos de Etiopía y de Eritrea, la Policía Especial de la región de Amhara, y Fano, una milicia amhárica). La violación y violencia sexual se han utilizado como arma de guerra para infligir un daño físico y psicológico persistente a las mujeres y niñas en Tigré, con el objetivo de degradarlas y deshumanizarlas, según Amnistía Internacional. En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución

22. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

23. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2021/48312, 30 de marzo de 2021.

solicitando el fin inmediato de todas las violaciones a los derechos humanos en Tigré, el cumplimiento del derecho internacional humanitario, así como la retirada verificable de las tropas eritreas. La Unión Africana también puso en marcha en julio una investigación sobre violaciones de derechos humanos en la zona. Las resoluciones y críticas a la vulneración de los derechos humanos se producen en un contexto donde las organizaciones humanitarias siguen siendo objetivo de ataques. Posteriormente, en diciembre, ante la gravedad de los hechos, el Consejo aprobó otra nueva resolución, que recibió el apoyo de 21 países, con 15 en contra y 11 abstenciones, en la que se decidió establecer una comisión internacional de expertos en derechos humanos sobre Etiopía. El comité tendrá un mandato inicial de un año, sujeto a renovaciones, y sus integrantes serán tres expertos en garantías fundamentales nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos. Su trabajo complementará el realizado previamente por el Equipo Conjunto de Investigación, en el que participan la oficina de derechos humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía. El primer mandato de la comisión será conducir “una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias de violaciones y abusos de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados en Etiopía cometidas desde el 3 de noviembre de 2020 por todas las partes en el conflicto”.

En **Myanmar**, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la utilización de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad contra mujeres detenidas en el marco de las protestas contra el golpe de Estado perpetrado en febrero por las Fuerzas Armadas del país. Varias mujeres denunciaron haber sido víctimas de torturas sexuales durante el periodo que permanecieron detenidas por su oposición al golpe. La organización Assistance Association for Political Prisoners denunció que durante 2021 más de 8.000 personas fueron detenidas por su acción política y social de oposición al régimen militar, de las que más de 2.000 podrían ser mujeres. Varias mujeres denunciaron haber sido torturadas, acosadas sexualmente y haber sido amenazadas con ser violadas durante su detención. Las fuerzas de seguridad de Myanmar han sido denunciadas en múltiples ocasiones por haber cometido violencia sexual contra mujeres civiles en el marco de las operaciones militares en contra de los grupos armados activos en el país, denuncias que se repitieron en 2021, en el marco de las operaciones contra las organizaciones de resistencia armada surgidas tras el golpe, con operaciones de seguridad en las que se atacó a la población civil y se denunció el uso de violencia

sexual. Organizaciones de derechos humanos también denunciaron las condiciones de hacinamiento y de falta de higiene en los centros de detención de mujeres, donde el número de personas en ocasiones doblaba la capacidad.

En **Nigeria**, Boko Haram continuó perpetrando violencia sexual en el marco de ataques contra localidades del estado de Borno, en el norte del país, en los que también se produjeron asesinatos, secuestros y saqueos, según denunció en marzo de 2021 Amnistía Internacional, que llevó a cabo entre febrero y marzo de ese año una veintena de entrevistas a población de pequeñas localidades.²⁴ En concreto, los testimonios evidenciaban violencia sexual en al menos cinco localidades de la administración de Magumeri, en el estado de Borno, así como falta de apoyo y protección por parte de las autoridades. Amnistía Internacional hizo un llamamiento a que la Corte Penal Internacional abra una investigación formal sobre las violaciones de derechos humanos en el conflicto en el noreste de Nigeria, tras la investigación preliminar de la fiscalía en que se encontraron evidencias para iniciar una investigación completa, cuya conclusión se anunció en diciembre de 2020.

Las representantes especiales del secretario general de la ONU para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, y para la violencia sexual en los conflictos armados, Pramila Patten, se dirigieron al Gobierno de **Somalia** para expresar su preocupación por los alarmantes niveles de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Las representantes señalaron que durante 2020 al menos 400 personas, la mayoría de ellas niñas fueron víctimas de diferentes formas de violencia sexual cometidas por todas las partes en el conflicto. Esta cifra supone un aumento del 80% con respecto a los registros del año anterior y durante el primer trimestre de 2021 se reportaron más de 100 casos de violencia sexual contra niñas. Además, las representantes de Naciones Unidas destacaron que al menos el 15% de los casos habían sido cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales, aunque sobre todo se había incrementado la violencia cometida por Al Shabab. El aumento de la violencia sexual estuvo vinculado al incremento de la tensión política previamente a la celebración de elecciones nacionales, a los enfrentamientos intercomunitarios vinculados a disputas territoriales, así como al incremento de la actividad de Al-Shabaab.

Se publicó un estudio²⁵ de Save the Children que reveló que de los 426 millones de niños y niñas que viven en zonas de conflicto armado en el mundo, al menos 72 millones viven a menos de 50 kilómetros de zonas en

24. Amnistía Internacional, “Nigeria: Boko Haram brutality against women and girls needs urgent response – new research”, *AI*, 24 de marzo de 2021.

25. Ewa Sapiezynska, *Weapon of War: Sexual violence against children in conflict*, Save the Children International, 18 de febrero de 2021.

las que tanto grupos armados como Fuerzas Armadas han perpetrado **violencia sexual contra menores**. El estudio señala que el riesgo para un menor de sufrir violencia sexual en un conflicto es 10 veces más elevado en la actualidad que en 1990. Los países con la mayor proporción de niños y niñas viviendo en zonas de conflicto en las que se ha denunciado esta violencia por parte de actores armados son Colombia (donde el 24% de los menores del país sufre este riesgo), Iraq (49%), Somalia (56%), Sudán del Sur (19%), Siria (48%) y Yemen (83%). El informe señala que existen investigaciones que apuntan a que los grupos armados que reclutan menores suelen cometer mayores niveles de violencia sexual, ya sea como una forma de socialización o de crear cohesión interna y vínculos de lealtad entre sus integrantes. Además, los grupos armados que reciben formación por parte de Estados también suelen cometer más violencia sexual. En el estudio se recoge que según los datos de Naciones Unidas sobre violencia contra niños en conflictos armados, en 2019 el 98% de las víctimas eran niñas, aunque la violencia contra niños estaba enormemente invisibilizada e infradenunciada, debido al estigma social y los roles de género, que dificultan la visibilización en el caso de las víctimas masculinas de esta violencia. Además, la orientación sexual tanto real como percibida de los menores, así como la identidad y/o expresión de género eran un factor que agravaba su vulnerabilidad frente a la violencia y en los últimos años se ha producido un aumento de los ataques por este motivo. Los menores con discapacidad tienen tres o cuatro veces más de posibilidades de sufrir violencia física o sexual, una situación de vulnerabilidad que se acrecienta en los contextos de conflicto, donde también puede haber una mayor presencia de personas con discapacidad debido a los impactos de la violencia.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En relación a la **respuesta de Naciones Unidas frente a la explotación y abusos sexuales por parte de personal que desempeña servicio bajo su mandato**, continuó desplegándose la estrategia impulsada por el secretario general de la ONU, António Guterres, desde 2017, centrada en cuatro áreas de acción: dar prioridad a los derechos y dignidad de la víctimas; poner fin a la impunidad mediante el fortalecimiento de la presentación de denuncias; colaborar con los Estados, sociedad civil y actores asociados; y mejorar las

comunicaciones. El informe anual del secretario general sobre medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales, presentado en febrero de 2021, señaló la existencia de un mayor compromiso del personal directivo de las Naciones Unidas con la aplicación de la estrategia.²⁶ No obstante, remarcó que se seguían recibiendo denuncias y que la pandemia de la COVID-19 había agravado las desigualdades y expuesto a las personas en situación de vulnerabilidad a un mayor riesgo de explotación y abusos sexuales. El informe identificó algunos avances, en el ámbito de mejora de la respuesta a las personas víctimas, así como de fortalecimiento del liderazgo de Naciones Unidas en establecer un marco normativo para la prevención, respuesta e información pública sobre las denuncias, y una mejora en el alineamiento en este ámbito entre los pilares humanitario, de desarrollo y de paz de Naciones Unidas. En relación a la institucionalización de la protección frente a la explotación y los abusos sexuales, según el informe se reforzó de manera considerable desde 2020 la estructura interna de protección de la mano del nombramiento de personas coordinadoras regionales para la prevención, del establecimiento de una "comunidad de práctica" de las oficinas de las personas coordinadoras y mediante la comunicación entre la sede central y las oficinas regionales y en el terreno. Guterres también destacó mayores esfuerzos del Comité Permanente entre Organismos para establecer un enfoque armonizado, incluyendo con despliegue de 20 cargos coordinadores interinstitucionales para la protección contra la explotación y abusos sexuales, así como la creación de alianzas entre Naciones Unidas y las ONG en el ámbito de la formación y capacitación y la adopción de una herramienta para evaluar la capacidad de prevención y respuesta por parte de las entidades asociadas a Naciones Unidas. Como parte de esta promoción de armonización, el comité llevó a cabo una misión en RDC en 2020, que apoyó un nuevo marco estratégico para fortalecer el enfoque de prevención y respuesta por parte del equipo de Naciones Unidas en el país, fortaleciendo la alineación en este ámbito entre los pilares de paz, desarrollo y humanitario.

En relación a las denuncias recibidas en todo el sistema de Naciones Unidas sobre explotación y abusos sexuales, en 2021 se presentaron 75 denuncias relacionadas con operaciones de paz y misiones políticas especiales, frente a 66 en 2020 y 80 en 2019 y frente a una media de 69 en los últimos diez años.²⁷ De esas 75, 45 (60%) hacían referencia a explotación sexual, 23 (30,6%) a abusos sexuales y siete a ambos. 52 involucraban a personal militar, 14 a personal civil de las misiones y nueve a personal policial. Además, 25 de las 75 eran relativas a hechos del 2021, 12 del año anterior, 36 de otros años y dos de años desconocidos. En 25 (33,3%) de las 75 denuncias la persona víctima era menor de edad. En 2020, 46 habían sido relativas a explotación,

26. Secretario general de la ONU, *Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales*, Asamblea General de Naciones Unidas, A/75/754, 15 de febrero de 2021.

27. Los datos sobre denuncias de 2021 relativas a operaciones de paz y misiones políticas especiales se pueden consultar a través del sistema de datos "Case Management Tracking System" (CMTS) de la ONU.

19 a abusos y una a ambos, y del total 41 hacían referencia a personal militar como perpetradores, 18 a civiles y siete a policía. 26 de las 46 eran relativas al año 2020, 13 al año anterior, 24 a otros años y tres a años desconocidos. En 13 de las 66 denuncias la persona víctima era menor de edad. Como en años precedentes, la mayor parte de denuncias de 2020 involucraban a personal de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), con 27 y 19 denuncias respectiva y que conjuntamente representaba el 70% del total (mismo porcentaje que en 2019; en 2018 había sido del 74%).

Por otra parte, y según el informe anual del secretario general de 2021, relativo a 2020, en 2020 se presentaron otras 91 denuncias que involucraban a personal de los organismos, fondos y programas (107 denuncias en 2019), de las cuales 17 eran relativas a abusos sexuales y el resto a explotación sexual. Supuso un descenso desde las 38 denuncias de abusos sexuales en 2019 a las 17 de 2020. 19 de las 91 denuncias de 2020 eran relativas a hechos de 2020, 25 a años anteriores y en otras 47 se desconocía el año de los hechos denunciados. En 15 de las denuncias de 2020 las personas víctimas eran menores. Asimismo, el informe anual contabilizó 227 denuncias en 2020 que involucraban a personal de los entes asociados a Naciones Unidas para la ejecución de trabajo pero que no están bajo su autoridad. Supuso un aumento tanto en el total de casos de denunciados (174 en 2019) como en las denuncias por explotación sexual (63 en 2020, 39 en 2019).

La Oficina de la representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos (OSRSG-SVC) y la Unión Interparlamentaria (UIP) firmaron en junio de 2021 un acuerdo marco de cooperación con el objetivo de promover la implicación de parlamentarios y parlamentarias en la prevención y abordaje de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Según informó la OSRSG-SVC, las áreas de cooperación incluyen la concienciación sobre la importancia de la legislación con enfoque integrado y alineado con las normas y estándares internacionales para el acompañamiento y empoderamiento de supervivientes de la violencia sexual; la provisión de apoyo técnico para la elaboración de nueva legislación o revisión de la vigente para promover la rendición de cuentas; la colaboración en el ámbito de la investigación y la incidencia en el marco de la agenda de mujeres, paz y seguridad; la concienciación sobre la prevención a través de la participación en espacios de la UIP y de la ONU. La UIP cuenta con 178 parlamentos estatales

miembros, así como miembros asociados que incluyen a 12 asambleas parlamentarias regionales.

Respecto a la acción de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la violencia sexual en contextos de conflicto, cabe destacar que en febrero este tribunal sentenció como culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al líder del LRA Dominic Ongwen. Sus acciones incluyeron el asesinato de civiles, matrimonios forzados, esclavitud sexual y reclutamiento de menores, en el marco de las acciones que llevó a cabo en el norte de Uganda a principios de la década de los años 2000. Los ataques se llevaron a cabo sobre todo contra la población civil que se había refugiado en los campamentos para personas desplazadas internas establecidos por el Gobierno y a las que Ongwen acusaba de ser colaboradoras gubernamentales. La sentencia, calificada de hito por el secretario general de la ONU, António Guterres, fue de 25 años de prisión. Cabe destacar que se trataba de la primera vez que la CPI juzgaba el matrimonio forzado, incluido en la categoría de “otros actos inhumanos” como un crimen contra

la humanidad,²⁸ en una sentencia pionera en este sentido. También se trataba de la primera vez que se juzgaba el embarazo forzado. Además, se condenó a Ongwen por crímenes de violencia de género y sexual (matrimonio forzado, tortura, violación, esclavitud sexual y esclavitud) no directamente perpetrados por él, constatando que existió un acuerdo o un plan común con el liderazgo del grupo armado en relación a otros crímenes, que estuvieron bajo control de Ongwen.²⁹

Por otra parte, la fiscalía de la CPI inició una investigación sobre posibles crímenes cometidos en Filipinas en el marco de la conocida como “guerra contra las drogas”, que podría haber incluido violencia sexual, según las denuncias previas contempladas por la CPI. Aunque Filipinas se retiró de la CPI en 2019, la corte internacional considera que pueden investigarse aquellos hechos que tuvieron lugar previamente a la retirada.³⁰ Organizaciones de derechos humanos habían denunciado la violencia contra las trabajadoras sexuales en el marco de las redadas policiales contra los consumidores de drogas, por ejemplo. Durante las consultas con las víctimas llevadas a cabo por la CPI, se presentaron denuncias relativas a violencia sexual y violaciones.

Un elemento de retroceso en 2021 en el ámbito de la respuesta frente a la violencia sexual fue la decisión del Gobierno de Turquía de retirarse del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convención de Estambul). La convención es de aplicación en tiempos tanto de ausencia de conflictos armados como

28. Tonny R. Kirabira, “Ongwen at the International Criminal Court”, *ASIL Insights*, Issue 7, Volume 25, 19 de mayo de 2021.

29. *Ibid.*

30. International Criminal Court, *Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, following judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in the Republic of the Philippines*, 7 de octubre de 2021

en contextos de guerra, reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y tiene entre sus objetivos la prevención, persecución y eliminación de la violencia contra las mujeres, y como parte de ésta también la violencia sexual en sus múltiples formas, incluyendo la violación, acoso, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, acoso sexual, abortos forzados, esterilizaciones forzadas y delitos cometidos supuestamente en nombre del “honor”. La decisión del Gobierno de Turquía, mediante decreto presidencial, supuso un grave retroceso para la protección de los derechos de las mujeres en Turquía, así como sienta un grave precedente de cuestionamiento del marco internacional de derechos de las mujeres. Organizaciones de mujeres y activistas de Turquía se movilizaron en diversos momentos del año contra la decisión. Organismos internacionales, como ONU Mujeres y el Comité de la CEDAW, también expresaron grave preocupación por la decisión

La Comisión para la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones de Gambia presentó en noviembre de 2021 su informe final al presidente del país. El órgano, establecido en 2017, tenía el mandato de esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas entre julio de 1994 y enero de 2017 durante el régimen de Yaha Jamé, que llegó al poder por un golpe de Estado en 1994 y se mantuvo en el poder hasta finales de 2016. Además de otras violaciones de derechos humanos (incluyendo el asesinato de 240 personas por agentes del régimen), el informe final establece que el personal de seguridad del régimen perpetró violencia sexual de manera extendida contra mujeres, tanto como objetivo en sí como a su vez como un instrumento de represión, tortura y castigo.³¹ El informe señala que mujeres gambianas se vieron afectadas de manera desproporcionada por violaciones de derechos humanos como la violencia sexual. La comisión recomienda medidas de enjuiciamiento y reparación. Activistas y organizaciones locales e internacionales –incluyendo Amnistía Internacional³² y Human Rights Watch³³– reclamaron al Gobierno que se implemente justicia y reparaciones. El informe final se presentó días antes de las elecciones presidenciales, en la resultó reelecto Adama Barrow, cuya formación, el Partido Nacional del Pueblo (NPP), se ha aliado con el del ex presidente Jamé, Alianza para la Reorientación y la Construcción Patriótica (APRC).

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. La impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos continuó siendo un elemento recurrente.

La situación de las mujeres en **Afganistán** se deterioró notablemente en 2021. Durante el mes de agosto se consolidó la toma del poder por parte de los talibanes y la caída del Gobierno encabezado por Ashraf Ghani, tras la retirada de las tropas internacionales del país. Los talibanes conformaron un nuevo Gobierno integrado por hombres en su totalidad. Los enfrentamientos armados durante los meses previos tuvieron un grave impacto sobre la población civil. Entre enero y noviembre se desplazaron internamente en el país casi 700.000 personas, de las que un 21% eran mujeres adultas, la misma proporción que de hombres adultos. Durante los seis primeros meses del año se produjo el número más elevado de muertes de civiles de los últimos tres años: 1.659 civiles murieron entre enero y junio de 2021 según la UNAMA. La misión de Naciones Unidas en Afganistán destacó un notable incremento de los impactos del conflicto en las niñas y las mujeres, ya que durante este periodo se produjo un incremento del 82% en el número de mujeres víctimas con respecto al mismo periodo del año 2020. Las mujeres y las niñas representaron el 14% de las víctimas civiles, con 219 mujeres fallecidas y 508 heridas, según los registros de UNAMA.

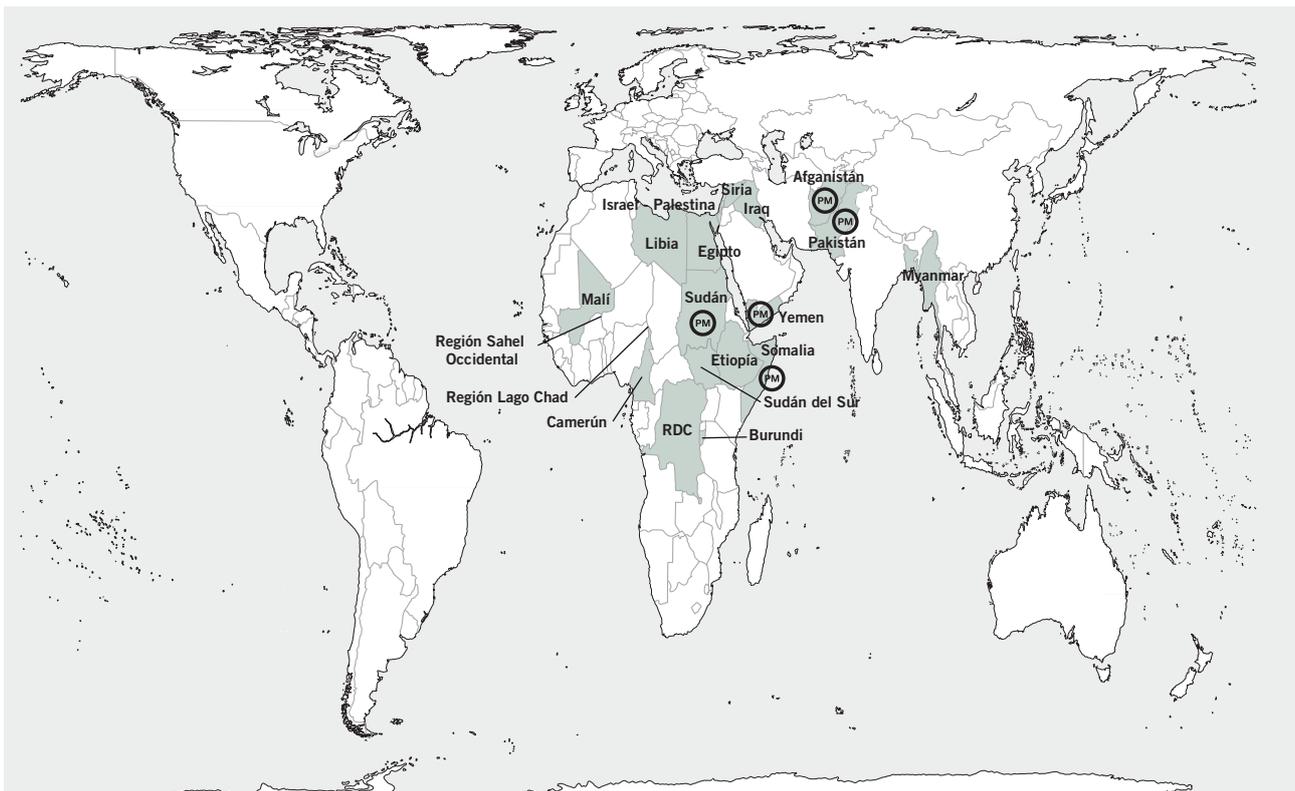
La toma del poder por parte de los talibanes supuso una reducción en los enfrentamientos armados, pero implicó la adopción de normas sumamente restrictivas para las mujeres, en clara violación de sus derechos políticos y sociales. Se impidió el retorno de las mujeres al trabajo, así como los viajes y desplazamientos sin el acompañamiento de un hombre guardián (*mahram*). La prohibición del acceso al trabajo para las mujeres tuvo enormes repercusiones para la población afgana, privando a muchos núcleos familiares de su única fuente de ingresos. Además, se prohibió el acceso a la educación a las niñas mayores de 12 años. En el ámbito universitario se impusieron severas normas de segregación, lo que en la práctica obstaculizó e incluso impidió el acceso a la educación superior a las afganas. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de un aumento de los matrimonios forzados infantiles y la venta de niñas para esta práctica, ante la imposibilidad de muchas familias de obtener medios de sustento. Organizaciones humanitarias advirtieron de la grave crisis humanitaria en la que se hallaba el país y el riesgo de empeoramiento en los meses de invierno, dadas las enormes dificultades de la población para acceder a los servicios más básicos, incluyendo alimentación y sanidad. La prohibición de acceder al trabajo remunerado para las mujeres agravó también su situación humanitaria. Además, en numerosas provincias los talibanes impidieron a las mujeres trabajar en el ámbito humanitario, dificultando aún más el acceso de otras mujeres a la ayuda, especialmente en aquellos hogares encabezados por mujeres solas. Tras la toma del poder por los talibanes y la retirada de las tropas estadounidenses, numerosas mujeres

31. Truth, Reconciliation and Reparations Commission, *Report. Volume 10. Sexual and Gender-Based Violence*, 2021.

32. Amnistía Internacional, “Gambia: Truth and Reconciliation report must lead to justice and reparations for victims”, *AI*, 25 de noviembre de 2021.

33. Human Rights Watch, “The Gambia: Truth Commission Calls for Prosecuting Ex-Officials”, *HRW*, 25 de noviembre de 2021.

Mapa 3.2. Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGBTBI



■ Países en conflicto armado en 2021 y con legislación discriminatoria contra la población LGBTBI (incluye ilegalidad de actos sexuales consensuales, barreras legales a la libertad de expresión sobre cuestiones de orientación sexual y barreras para la formación de ONG)

PM Países en conflicto armado donde está codificada la pena de muerte para la población LGBTBI. (ILGA, *Homofobia de Estado*, 2020)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2022. ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliia Savelev y Daron Tan, *Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2020.

Tabla 3.3. Conflictos armados en 2021 en países con legislación discriminatoria contra la población LGBTBI³⁴

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO
Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West) Etiopía (Tigré) Libia Malí Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental RDC (este) RDC (este-ADF) Somalia Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Iraq Israel - Palestina ³⁵ Siria Yemen

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2022. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2022. ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliia Savelev y Daron Tan, *Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2020.

34. En esta lista se incluyen aquellos países incluidos en el informe de ILGA en las categorías de Criminalización (Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo y Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo) y Restricción (Restricciones a la libertad de expresión en temas relacionados con orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales y Restricciones al registro u operación de organizaciones de la sociedad civil). ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliia Savelev y Daron Tan, *Homofobia de Estado 2020: Actualización del Panorama Global de la Legislación*. Ginebra; ILGA, diciembre de 2020.

35. El informe de ILGA señala la criminalización y restricción en Gaza (Palestina).

trataron de abandonar el país, especialmente aquellas que habían jugado un papel importante en la política (parlamentarias, representantes gubernamentales), activistas por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, periodistas, juezas y también familiares de personas colaboradoras con las tropas y gobiernos internacionales presentes en el país desde la invasión por EEUU en 2001. En paralelo, durante los siguientes meses, se produjeron manifestaciones protagonizadas por mujeres en las que exigieron el respecto a sus derechos, así como acciones frente a la crisis humanitaria que azotaba al país. Las manifestaciones fueron reprimidas por los talibanes, que además impidieron que la prensa cubriera las protestas.

En **Iraq**, tras las elecciones del último trimestre y en medio de negociaciones políticas dominadas exclusivamente por hombres, activistas iraquíes denunciaron la falta de mujeres en puestos de toma de decisión. En medio de la conmoción por nuevos casos de violencia de género, también alertaron sobre la necesidad de poner atención a la violencia contra las mujeres y niñas iraquíes. En un mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre, la Iraqi Women Network –que reúne a más de 100 organizaciones de mujeres– subrayó la importancia de una representación sustantiva que se refleje en un mayor número de puestos ministeriales para mujeres.

En el caso de **Libia**, el informe de la misión internacional independiente de investigación sobre los abusos en el país norteafricano publicado en octubre subrayó los impactos desproporcionados del conflicto armado y de la proliferación de las milicias en las mujeres libias. Asimismo, constató la preocupación por las continuas manifestaciones de violencia, incluyendo sexual, contra colectivos vulnerables, incluyendo personas LGTBI, refugiadas, solicitantes de asilo y prisioneras.

En el caso de **Yemen**, a lo largo de 2021 organizaciones del ámbito de género, paz y seguridad siguieron llamando la atención sobre los impactos de género del conflicto, en especial por las consecuencias del deterioro en la situación económica, las condiciones en los campos para personas desplazadas internas, las dificultades de acceso a servicios básicos –incluyendo productos de higiene– y el impacto de restricciones impuestas por actores armados. Entre ellas, las limitaciones a la libre circulación de los al-houthistas que han afectado especialmente a las mujeres yemeníes y sus posibilidades de trabajar en espacios públicos, incluyendo al personal humanitario femenino local al exigir la compañía de un hombre de su familia en los desplazamientos. Adicionalmente, se continuó alertando sobre los riesgos y amenazas para las personas defensoras de derechos humanos, constructoras de paz y periodistas, afectadas por detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos. Un caso especialmente notorio fue el asesinato en noviembre de la periodista

Rasha Abdullah Harazi, embarazada y que murió tras sufrir un atentado explosivo en Adén. En este contexto, se hicieron llamamientos al Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice la rendición de cuentas por los abusos perpetrados por todos los actores armados del conflicto armado yemení.

En el marco del conflicto en **Ucrania**, en 2021 se incrementó el reclutamiento forzado de hombres por parte de los grupos armados en el este del país. ACNUDH alertó de la emisión de dos decretos por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk entre marzo y abril para el reclutamiento de 200 hombres en cada una de ellas. En su informe de septiembre alertaba también de que en caso de negarse, los hombres se exponían a ser perseguidos por delito penal en base a las regulaciones de las áreas rebeldes; y que aquellos reclutados afrontaban riesgo de persecución y enjuiciamiento por la legislación de Ucrania. En su actualización de noviembre, ACNUDH señaló que las fuerzas rebeldes seguían reclutando forzosamente hombres para sus grupos armados. El incremento del reclutamiento forzado se produjo en un año de grave deterioro del contexto del conflicto, con despliegues masivos de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania y alertas de EEUU y Ucrania sobre una posible invasión militar de Rusia.

La toma del poder por los talibanes en 2021 tuvo un grave impacto en la situación de las mujeres en Afganistán

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

En octubre se celebró una nueva sesión del debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad y el secretario general presentó su informe anual sobre esta cuestión. Si bien en los últimos años la acción del Consejo de Seguridad en materia de mujeres, paz y seguridad había sido irregular y se había quebrado el consenso entre los miembros permanentes y no permanentes al respecto, en 2021 se produjeron algunos pequeños avances. Las presidencias de Irlanda, Kenia y México, que ostentaron la presidencia del Consejo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, respectivamente, anunciaron conjuntamente una serie de compromisos que se mantendrían durante los tres meses: lograr el equilibrio de género entre las personas que comparecieran en el Consejo de Seguridad, así como incrementar la representación de mujeres oradoras de

Tabla 3.4. Países con Planes de Acción Nacional 1325 que participan en negociaciones y procesos de paz

Camerún (2017)	Azerbaiyán (2020)
Malí (2012)	Chipre (2020)
Mozambique (2019)	España (2007)
RCA (2014)	Georgia (2018)
RDC (2010)	Moldova (2018)
Sudán (2020)	Serbia (2017)
Sudán del Sur (2015)	Kosovo (2014)
Afganistán (2015)	Ucrania (2016)
Filipinas (2009)	Palestina (2015)
Armenia (2019)	Yemen (2019)

*Entre paréntesis año de aprobación del Plan de Acción Nacional

la sociedad civil en las reuniones del Consejo; que la agenda mujeres, paz y seguridad fuera el foco de al menos una de las reuniones geográficas obligatorias del Consejo; asegurar que los textos del Consejo integren un lenguaje sobre mujeres, paz y seguridad fuerte; y realizar comparecencias a la prensa sobre mujeres, paz y seguridad.³⁶ En paralelo a estos compromisos por parte de las diferentes presidencias, la representación de EEUU anunció que renovaba su compromiso con la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres en el mundo, cambiando a política promovida por la administración Trump y que derivó en tensiones en el seno del Consejo de Seguridad, al modificar compromisos adquiridos en resoluciones de la agenda. Por su parte, China y Rusia también señalaron que participarían en las reuniones del Grupo de Expertos Informal sobre mujeres, paz y seguridad. No obstante, a pesar de estos avances, persistieron algunas diferencias de enfoque importantes y Rusia se mantuvo en su posición de que las cuestiones relativas a la promoción del papel de las mujeres no debían ser abordadas en el marco de los debates sobre paz y seguridad, sino que la responsabilidad recaía sobre otras instituciones de Naciones Unidas. Esto llevó a que, por ejemplo, en la renovación del mandato de la UNAMA en septiembre, las menciones a la situación de las mujeres fueran vagas.

El tema propuesto por la presidencia de Kenia para el debate del Consejo de Seguridad fue “invertir en las mujeres en el mantenimiento y la construcción de la paz”. Cabe destacar también el llamamiento hecho por la directora de ONU Mujeres, en línea con el informe del secretario general, a aumentar la financiación para la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y, en paralelo, a reducir el gasto militar. El informe anual constataba la estrecha relación entre la militarización

y la desigualdad de género y cómo aquellos países con mayor proporción de gasto militar respecto al conjunto del gasto público, eran los países que menos medidas habían adoptado para hacer frente a las consecuencias de género provocadas por la pandemia por COVID-19.

En 2021, 20 países que protagonizaban negociaciones de paz contaban con un Plan de Acción, que debía promover la participación de las mujeres en estos procesos. Siete de estos países estaban en África (Camerún, Malí, Mozambique, RCA, RDC, Sudán, Sudán del Sur); dos en Asia (Afganistán –aprobado previamente a la toma del poder por parte de los talibanes– y Filipinas); nueve en Europa (Armenia, Azerbaiyán, Chipre, España, Georgia, Moldova, Serbia, Kosovo y Ucrania) y dos en Oriente Medio (Palestina y Yemen). Ninguno de los dos países en el continente americano con unas negociaciones en curso contaba con un Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325. Así, en 21 de las 37 negociaciones activas durante 2021 al menos uno de los actores gubernamentales negociadores contaba con un plan de acción que debía guiar su actuación en materia de inclusión de la perspectiva de género y de participación de las mujeres. Las 21 negociaciones y procesos de paz tuvieron

lugar en Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Malí, Mozambique, RCA, RDC, Sudán, Sudán del sur, Sudán-Sudán del Sur, Afganistán, Filipinas (MILF), Filipinas (NDF), Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Chipre, España (País Vasco), Georgia (Abjasia, Osetia del Sur), Moldova (Transnistria), Serbia-Kosovo, Ucrania (este), Israel-Palestina, Palestina y Yemen. Sin embargo, a pesar de contar con esta herramienta, la mayoría de negociaciones de paz continuaron excluyendo a las mujeres y tampoco se incorporó la perspectiva de género en las dinámicas de los procesos de paz, poniendo en entredicho la eficacia de los planes de acción como herramientas de construcción de paz inclusiva.

La directora de ONU Mujeres, en línea con el informe del secretario general, hizo en 2021 un llamamiento a aumentar la financiación para la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad y, en paralelo, a reducir el gasto militar

36. Security Council Report, *In Hindsight: Women, Peace and Security—Golden Threads and Persisting Challenges*, Security Council Report, diciembre de 2021.

Con respecto a la financiación de la agenda, cabe destacar la presentación de una herramienta en el marco del Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria, establecida para promover de forma urgente la participación de las mujeres en los procesos de paz. El nuevo mecanismo, denominado Ventana de Respuesta Rápida (Rapid Response Window),³⁷ pretende ofrecer una respuesta para hacer frente a los obstáculos técnicos y logísticos que dificultan la participación de las mujeres en las negociaciones de paz y la implementación de los acuerdos. Este mecanismo se aprobó siguiendo una recomendación que el secretario general presentó en su informe sobre mujeres, paz y seguridad en 2019, y ha sido establecido tras haberse llevado a cabo consultas con organismos de la ONU, así como con organizaciones de la sociedad civil y mujeres constructoras de paz. Tras su presentación se anunció el apoyo a varias experiencias piloto, entre ellas una en Afganistán –promoviendo la participación de mujeres en procesos de Track II– y en Malí –dando apoyo a iniciativas de incidencia para promover la participación de las mujeres en la implementación de los acuerdos de paz. Este mecanismo cuenta con aportaciones económicas por parte de Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, Malta, Noruega y Suecia.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2021.³⁸ Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

Con respecto al proceso de paz en **Chipre**, mujeres de la sociedad civil de las dos comunidades chipriotas apoyaron la celebración en abril en Ginebra de una cumbre informal entre las partes en conflicto y reclamaron participación de las mujeres en el diálogo. La cumbre se celebró en formato de 5+1 (las partes en conflicto, los países garantes Grecia, Turquía y Reino Unido, y la ONU), convocada por el secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de evaluar las posibilidades de reanudación de las negociaciones formales para la resolución del conflicto en torno al estatus de la isla. Entre las acciones de mujeres, la Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo (MWMN) emitió un llamamiento en que además de mostrar su apoyo a un reimpulso al diálogo señalaban la necesidad de participación de mujeres de ambas comunidades en las negociaciones. Denunciaron la falta de perspectiva de género en el proceso de paz, incluyendo la ausencia

de abordaje de un enfoque de igualdad de género en todos los capítulos en la agenda negociadora. La MWMN se ofreció a apoyar a la ONU para aumentar la participación de mujeres, mediante la identificación de mujeres de ambas comunidades, así como la provisión de capacidades. El secretario general de la ONU lamentó en su informe de principios de julio sobre la misión de buenos oficios en Chipre la escasa participación de mujeres en la cumbre informal de abril. Además, instó a las comunidades grecochipriota y turcochipriota a alcanzar al menos el umbral del 30% de mujeres en sus delegaciones negociadoras. En dicho informe, Guterres instó a las partes en conflicto a elaborar un plan de acción para promover la participación de mujeres y la integración de la perspectiva de género en el proceso de diálogo.

En el caso de **Libia**, a lo largo de 2021 volvieron a hacerse patentes los retos para una participación sustantiva de las mujeres en los espacios de poder y decisión. Aunque en el marco de las negociaciones sobre el gobierno de unidad se había comprometido una participación mínima de 30% de mujeres, en la práctica el nuevo Ejecutivo designado en marzo solo contó con cinco mujeres (14%) en un gabinete de 35 ministros. Mujeres libias denunciaron esta marginación y continuaron demandando una mayor presencia en otros ámbitos, en el marco del proceso negociador que se desarrolla bajo los auspicios de la ONU. Así, durante el año se aumentó –aunque aún de manera limitada– la presencia de mujeres en las negociaciones sobre el componente económico, pasando de cuatro a siete representantes de un total de 34 miembros. Las negociaciones intra-libias referidas al componente político continuaron contando con un 23% de mujeres. Paralelamente, diversas voces resaltaron la necesidad de contar con una participación relevante de mujeres en las negociaciones sobre seguridad y en los mecanismos de seguimiento del cese el fuego y en la importancia de introducir la perspectiva de género en los procesos de reforma al sector de seguridad.

En cuanto a **Yemen**, durante 2021 se insistió en la necesidad de un proceso de paz inclusivo, con participación sustantiva de mujeres yemeníes diversas (de todas las regiones y filiaciones políticas) en todos los niveles y etapas. También se instó a considerar algunas de las prioridades señaladas por grupos de mujeres en el abordaje al conflicto, como su llamamiento a erradicar los campos militares y depósitos de armas de las ciudades o la urgencia de un alto el fuego en Maarib, una de las áreas más afectadas por los enfrentamientos en 2021. Activistas yemeníes también solicitaron apoyo para la campaña #NoWomenNoGovernment, iniciada en diciembre de 2020, que denuncia la exclusión de las mujeres yemeníes del gobierno de unidad formado en el marco del Acuerdo de Riad, suscrito en 2019. Asimismo, voces yemeníes solicitaron respaldo internacional para la

37. WPHF, *Global: Dismantling Barriers to Women's Participation in Peace Processes, WPHF Launches New Rapid Financing Tool*, 14 de enero de 2021.

38. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria editorial, 2021.

implementación efectiva del Plan de Acción Nacional yemení para la resolución 1325, aprobado a finales de 2019.

Hasta el colapso de las negociaciones de paz en **Afganistán**, como consecuencia de la toma del poder por parte de los talibanes y de la retirada del país de las tropas internacionales, la participación de las mujeres en las negociaciones de paz intraafganas, entre el Gobierno y los talibanes, continuó siendo muy limitada y únicamente cuatro mujeres formaban parte de la delegación negociadora en representación del Gobierno. En marzo se celebró una reunión en Moscú a la que únicamente pudo asistir una de las cuatro mujeres que conformaban la delegación gubernamental, la política y activista defensora de los derechos humanos Habiba Sarabi. El resto de los 11 integrantes de la delegación gubernamental eran hombres y la delegación talibán estuvo íntegramente conformada por hombres. Durante su comparecencia en la reunión, Sarabi mostró su disconformidad con la situación, señalando que no debía ignorarse al 51% de la población en la construcción de la paz en el país. La reunión se celebró pocas semanas antes de que expirase el plazo acordado entre los talibanes y EEUU para la retirada de las tropas estadounidenses del país, en un intento por alcanzar un acuerdo previo a la retirada militar extranjera. Otra de las integrantes de la delegación gubernamental en las negociaciones en Doha, Fawzia Koofi, señaló que los diplomáticos internacionales estaban negociando con los mismos líderes que habían dirigido el país hacía 20 años; y otras líderes destacadas del país, como Shaharzarad Akbar, que encabeza la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, calificó de inaceptable que solo se hubiera invitado a una mujer a la reunión de Moscú. También lo hicieron organizaciones de mujeres afganas, como la Afghan Women Network, que destacó cómo la exclusión de las mujeres de las negociaciones y de otros ámbitos de decisión política en el país diluía las diferencias entre el actual Gobierno y el régimen talibán. En abril el Gobierno de EEUU anunció que la retirada de las tropas tendría como fecha límite el 11 de septiembre y diferentes organizaciones de derechos humanos expresaron en ese momento su preocupación por el hecho de que los derechos de las mujeres fueran excluidos de cualquier negociación entre el Gobierno y los talibanes. La posterior toma del poder por parte de los talibanes significó la supresión del reconocimiento formal a los derechos de las mujeres.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2021 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de las más relevantes.

En **Camerún**, mujeres de la sociedad civil organizaron la primera Convención Nacional de Mujeres por la Paz en julio, que logró reunir a más de un millar de mujeres procedentes de todas las regiones del país -incluyendo las 10 regiones, 58 divisiones y 360 subdivisiones-. La convención tuvo lugar en la capital, Yaoundé, en un encuentro impulsado por un comité de 38 organizaciones y redes de mujeres la sociedad civil, con el objetivo de abordar la violencia que afronta el país y promover una solución pacífica al conflicto. A través del documento Llamamiento por la Paz de las Mujeres, la convención reclamó el fin inmediato y permanente de las hostilidades; la celebración de un diálogo inclusivo y continuado; garantías de participación de mujeres mediadoras y negociadoras en los procesos de paz en todos los niveles, así como garantías a su protección; refuerzo de los centros de apoyo psicosocial y de sanación de traumas y creación de centros adicionales; dotar de funcionalidad a los centros desarme, desmovilización y reintegración. Detrás de la convención se encuentran organizaciones como la Cameroon Women's Peace Movement (CAWOPEM), con presencia en las 10 regiones del país y presidida por Yvonne Muma. Expertas internacionales como Rosa Emilia Salamanca (CIASE) y altos cargos políticos como la ministra de Mujeres y Familia, Marie Abena Odoa, participaron en la convención.

381 organizaciones de la sociedad civil de 88 países reclamaron en carta abierta a los Estados miembro de la ONU en el marco del debate abierto del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, el apoyo a las mujeres constructoras de paz, así como defensoras de derechos humanos y lideresas.³⁹ Expresaron preocupación por los riesgos que afrontan las activistas y constructoras de paz en Afganistán, Myanmar, Colombia, Yemén o Sudán del Sur, entre otros contextos. Denunciaron que continúan las amenazas y ataques contra las mujeres de la sociedad civil y que existe una gran brecha de protección que los Estados miembro y la ONU han de abordar con la sociedad civil. Instaron a los Estados a poner fin a los ataques y represalias contra las mujeres defensoras de derechos humanos y a prevenir esa violencia; a solicitar al secretario general de la ONU garantizar el acceso a recursos rápidos, flexibles y específicos para mujeres activistas en riesgo y a la colaboración con la sociedad civil para la evaluación del riesgo y las respuestas; a garantizar que todas las operaciones de paz tengan recursos y poder para llevar a cabo la supervisión, labores de información y apoyo a todas las personas defensoras de derechos humanos y constructoras de paz en situación de riesgo.

Se celebró en octubre de 2021 la primera **Cumbre de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica**, con más 170 mujeres de los 511 pueblos indígenas de

39. *Carta abierta de 2021 a los representantes permanentes ante las Naciones Unidas antes del debate abierto anual sobre mujeres, paz y seguridad*, 1 de septiembre de 2021.

toda la cuenca. En el encuentro establecieron cinco puntos clave para la agenda propia de las mujeres originarias. En primer lugar, la creación del Fondo de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica, para apoyar las economías propias, la autonomía alimentaria y las acciones de la red de mujeres defensoras. En segundo lugar, la formación de la Red de mujeres indígenas defensoras del territorio amazónico, con el fin de defender el territorio de la cuenca y promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión, incluyendo a través del impulso a escuelas de liderazgo para mujeres. El tercer punto prevé el impulso del movimiento de mujeres indígenas defensoras y protectoras de la amazonía colombiana – OPIAC. El cuarto punto reclama paridad de las mujeres en la toma de decisiones en el nivel organizativo local, nacional y regional, con participación de mujeres en las dirigencias de las organizaciones, con dualidad y equidad. El quinto hace referencia al seguimiento y supervisión de la hoja de ruta. En conjunto, durante la cumbre las participantes abordaron temas relativos a la defensa del territorio amazónico, que señalaron como amenazado por el sistema económico capitalista y megaproyectos asociados a éste; así como la situación de derechos humanos, economías propias y el impacto de la COVID-19.

Más de 30 organizaciones de derechos humanos articuladas en torno a la coalición Feministas por un Tratado Vinculante (F4BT por su sigla en inglés) presentaron en octubre de 2021 sus recomendaciones clave sobre el último borrador del instrumento jurídicamente vinculante para la regulación en la

legislación internacional de derechos humanos de las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.⁴⁰ Emitieron sus recomendaciones previo a la 7ª sesión negociadora del grupo intergubernamental para la creación de un tratado jurídicamente vinculante en ese ámbito en el Consejo de Derechos Humanos, proceso de negociación iniciado en 2014. La coalición reiteró la importancia del análisis feminista para abordar la cuestión de las empresas transnacionales y los derechos humanos, y señaló principios fundamentales como la incorporación del análisis de género para el reconocimiento, comprensión y visibilización de los abusos cometidos por las empresas -incluyendo los impactos diferenciados sobre mujeres, hombres y todo el espectro de género, y los abusos específicos sobre la población LGTBQ+-, y como herramienta para el análisis de poder y la comprensión de las causas de la discriminación y la desigualdad. Entre los principios, también el de la participación en el desarrollo, implementación y supervisión de la regulación de las actividades empresariales por parte de las mujeres y otras personas y grupos de población cuyos derechos son vulnerados por las empresas transnacionales. Entre las recomendaciones, la coalición instó a mantener los avances realizados en el proceso negociador y a construir a partir de ellos, incluyendo a garantizar aún más la efectividad del instrumento para las mujeres y para las comunidades afectadas. Además, reclamaron la clarificación del contexto, la aplicación y el alcance del instrumento, así como el establecimiento de expectativas claras en relación a las actividades empresariales en contextos de riesgo elevado, incluyendo de conflicto.

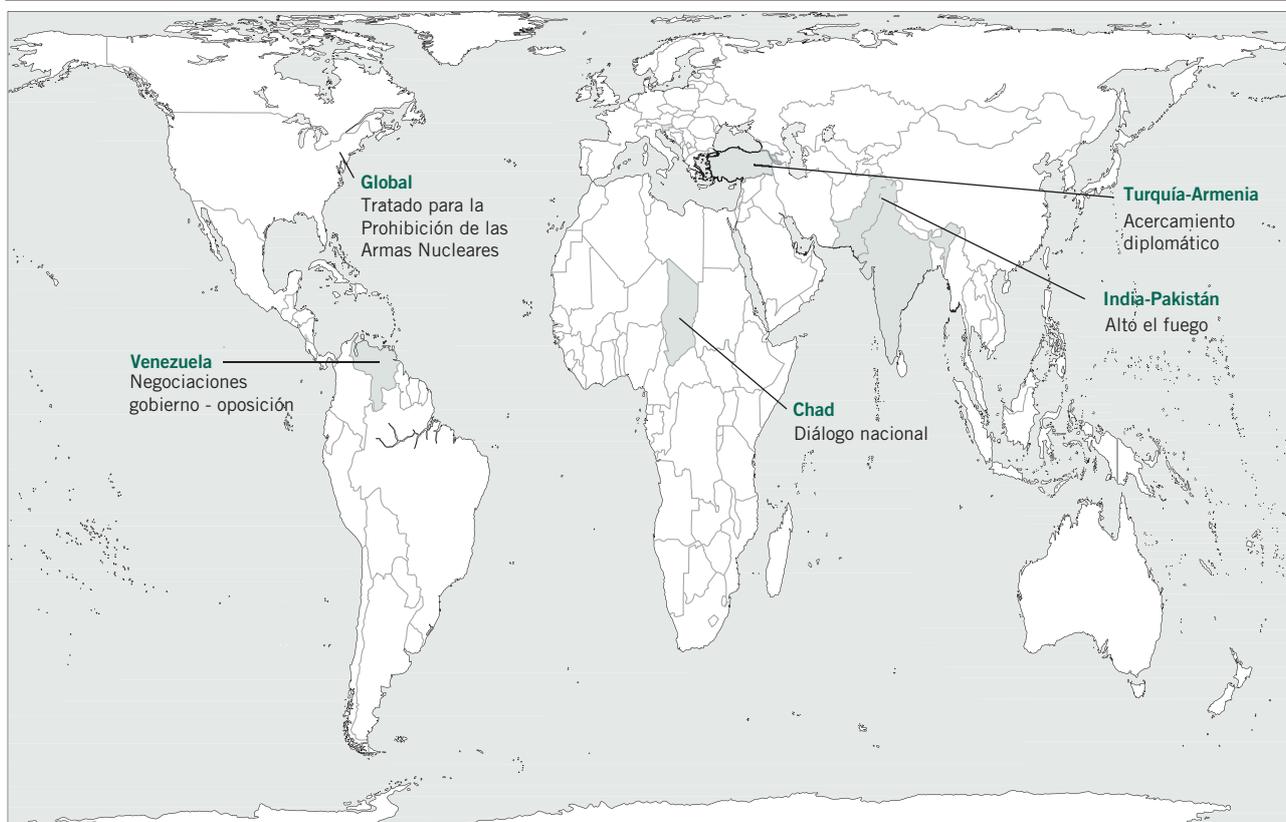
40. Feministas por un Tratado Vinculante, *Recomendaciones clave sobre el tercer borrador revisado publicado el 17 de agosto de 2021 del instrumento jurídicamente vinculante para regular, en la legislación internacional sobre derechos humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales*, 5 de octubre de 2021.

4. Oportunidades de paz para 2022

Tras analizar el año 2021 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades de paz identificadas hacen referencia a la expectativas sobre la puesta en marcha de un diálogo nacional en Chad que permita hacer frente al complejo abanico de retos del país; a la reanudación del diálogo político entre el Gobierno y la oposición en Venezuela para tratar de solventar la crisis institucional y humanitaria del país; a la reactivación del diálogo entre India y Pakistán sobre la Línea de Control para consolidar el alto el fuego en la zona fronteriza; a los indicios que apuntan a una mejora en las relaciones entre Turquía y Armenia; y a la entrada en vigor en enero de 2021 del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), aprobado en 2017 y que ahora pasa a ser legalmente vinculante para todos los Estados que lo ratifiquen.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz para 2022



4.1. El diálogo nacional, una frágil ventana de oportunidad para la paz en Chad

Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un amplio, complejo e interrelacionado abanico de retos y elementos de fragilidad e inestabilidad agravados en las últimas décadas. A este contexto de inestabilidad se sumó la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado militar, lo que parecía situar al país al borde del abismo.¹ Su muerte se produjo en medio de una ofensiva rebelde del grupo Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT) en el centro y norte del país, tras lo cual una junta militar de generales cercanos al presidente dio un golpe de Estado y situó a su hijo, el general Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente del Consejo Militar de Transición (CMT). La junta anunció que gobernaría Chad por un período de dieciocho meses durante el cual organizaría un diálogo nacional inclusivo antes de entregar las riendas del poder a un gobierno civil, sin condenas ni sanciones contra Chad. A finales de abril, formaron un gabinete civil, por lo que aparentemente renunciaron a parte de su poder mientras incluían a políticos clave de la oposición, según destacaron algunos análisis.² A principios de mayo, el Ejército había hecho retroceder a los insurgentes del FACT a Libia. Aunque en un primer momento se produjo una oleada de represión de la oposición política y social como consecuencia de las movilizaciones y actos en contra del golpe de Estado y del CMT, posteriormente las autoridades de transición llevaron a cabo una limitada apertura del espacio político y dieron pasos para sentar las bases del prometido diálogo nacional, que podría significar un antes y un después en la historia del país.

En este sentido, diferentes voces del mundo político y social del país hicieron llamamientos a que las autoridades de transición y el CMT cumplieran su compromiso y promovieran el diálogo nacional. El CMT revocó una prohibición de décadas de marchas de protesta, permitió que el popular movimiento de oposición *Transformateurs* se convirtiera en un partido político y se comprometieron a redactar una amnistía para los rebeldes exiliados o encarcelados. En los siguientes meses las autoridades de transición llevaron a cabo pasos para celebrar el diálogo nacional. En julio se estableció el Comité Organizador para el Diálogo Nacional Inclusivo (CODNI). No obstante, los desacuerdos en torno a los integrantes del CODNI, la inclusividad del diálogo nacional, la injerencia del CMT, la participación de las diferentes insurgencias o la agenda de temas del mismo diálogo, entre otras cuestiones, retrasaron su celebración, ya prevista para 2022. En agosto Mahamat Déby hizo un llamamiento a los diferentes grupos armados (FACT, UFR, CCMSR) a

unirse al proceso de diálogo. En noviembre anunció una amnistía general a la oposición armada y política de cara a facilitar su participación en el diálogo nacional, lo que propició que en diciembre diversas figuras opositoras civiles y armadas anunciaran su voluntad de participar en el diálogo nacional. Varias figuras clave acordaron participar en el proceso, y se produjeron reuniones entre representantes de la insurgencia chadiana y el Gobierno chadiano en Egipto y Francia. El 31 de diciembre Déby promulgó leyes de amnistía que abarcaban a más de 300 opositores y rebeldes. Sin embargo, existen diversos retos en la transición del país y cuestiones estructurales que dificultan esta esperanzadora etapa. Existen algunas decisiones pendientes en lo concerniente al diálogo nacional que podrían hacer fracasar el proceso o al menos retardar su inicio, sobre todo en lo relativo a su inclusividad y la participación de los diferentes grupos armados. También hay elementos estructurales, como son los conflictos intercomunitarios y por las disputas en torno a la propiedad y usos de la tierra, agravadas por el cambio climático, que asolan el país y que se han multiplicado en los últimos años y que podrían ser instrumentalizados políticamente. En este sentido, persiste un clima de desconfianza entre los diferentes sectores de la oposición y de la sociedad civil hacia las autoridades de la transición, el CMT y la familia Déby como consecuencia del nepotismo, abusos sistemáticos de los derechos humanos, persecución de la oposición política y social en los más de 30 años en el poder de la familia Déby. Esta situación se vio agravada por la instrumentalización política de la situación de excepcionalidad derivada de las restricciones para limitar la expansión de la pandemia de la COVID-19, y que se puso de manifiesto durante las elecciones presidenciales de abril, ganadas por Idriss Déby. Aunque se produjo una cierta apertura del espacio político tras la muerte de Déby, diferentes hechos contribuyen a alimentar esta desconfianza.

La política chadiana ha sufrido profundos cambios en los que los diferentes actores todavía se están posicionando, especialmente el ex gobernante Movimiento Patriótico de Salvación (MPS), la familia Déby y la oposición política. Según diversos análisis,³ la junta podría estar tratando de tomar el control del partido en el poder durante tres décadas, y a la vez satisfacer al núcleo duro del partido. En junio se convocó un congreso extraordinario para escoger al nuevo secretario general del partido (el anterior, Mahamat Zene Bada, huyó a Francia cuando la junta lo presionó para que organizara un congreso general extraordinario para nombrar un nuevo liderazgo), asumiendo el cargo el ex presidente de la Asamblea Nacional, Haroun Kabadi, quien había sido

1. VVAA, Chad: *The end of an era*, *The Africa Report*, Dossier In Depth, abril 2021.

2. AFP, Chad's new junta names transition government, *France24*, 2 de mayo de 2021.

3. Véase Jeune Afrique, Tchad : comment Mahamat Idriss Déby a pris la tête du Conseil militaire de transition, 26 de abril de 2021; Jeune Afrique, Tchad : ce que devient Mahamat Zen Bada, l'ancien secrétaire général du MPS, 16 de agosto de 2021; International Crisis Group, *Getting Chad's Transition on Track*, 30 de septiembre de 2021.

criticado en abril por no asumir – argumentando motivos de salud– por mandato constitucional la presidencia de la transición a la muerte de Idriss Déby, cediendo el paso al hijo, Mahamat Déby, lo que simbolizaba la perpetuación de la familia Déby. En octubre, el mismo Kabadi fue nombrado nuevo presidente del Consejo Nacional de Transición de Chad, un parlamento interino nombrado por un comité designado por el CMT, lo que pone de manifiesto el restablecimiento del estatus quo previo a la muerte de Idriss Déby, ahora bajo el control de su hijo. Sin embargo, diferentes fuentes también evidenciaron las tensiones en el seno de la familia Déby en torno al proceso de transición, como se evidenció en diciembre con los tiroteos que involucraron a familiares de Hinda Déby, la viuda de Idriss Déby, y cuyos tentáculos siguen controlando el país.⁴ En paralelo, la oposición está dividida, ya que algunos de sus líderes han optado por unirse al Gobierno, en particular, exlíderes de la oposición como Saleh Kebzabo o Mahamat Alhabo, que formaban parte de Wakit Tama, la principal plataforma opositora que agrupa a múltiples sectores de la sociedad civil, oposición política y organizaciones juveniles. Esta plataforma se habría debilitado como consecuencia de la cooptación de algunos de sus líderes. Otros cuestionan la legitimidad de la junta. A finales de diciembre Wakit Tama habría anunciado su disposición a reunirse con Mahamat Déby a petición suya para discutir en torno a la transición y el proceso de diálogo. Las figuras de la oposición, los grupos armados y los representantes de la sociedad civil han llamado al diálogo durante décadas, con la esperanza de que este pueda sentar las bases para las reformas del Estado. Los participantes pretenden incluir una amplia gama de temas. La plataforma Wakit Tama ve el diálogo como una oportunidad para compensar años de exclusión del Gobierno y exige restablecer el equilibrio de poder en las instituciones estatales, reducir el papel político de las Fuerzas Armadas e introducir controles y equilibrios en el Gobierno.

La UA acordó apoyar la transición con la condición de que las autoridades celebren elecciones presidenciales en un plazo de dieciocho meses y prohíban que los miembros del consejo militar se presenten a esas urnas, exigiendo que la junta modifique la carta de transición para incluir cláusulas a tal efecto. En diciembre, la Conferencia de Obispos de Chad se pronunció en la misma línea, cuestionando la junta militar por retener plenos poderes durante la transición. Sin embargo, la junta no ha enmendado la carta de transición como prometió, y han señalado que la revisión de la carta debería discutirse durante el diálogo nacional. Pero la oposición teme que la transición sufra retrasos o que la junta simplemente haga que Mahamat Déby ocupe el lugar de su padre de forma permanente.⁵

El diálogo nacional en Chad puede contribuir a sentar las bases para una nueva etapa que ponga fin a la espiral de inestabilidad y violencia en el país

Por otra parte, aunque los diferentes movimientos insurgentes han manifestado su voluntad de participar en el proceso y las autoridades de transición han manifestado su voluntad de que estos puedan participar, principalmente la cuestión del desarme, que podría ser una exigencia del CMT para participar en el proceso de diálogo. Durante el año se produjeron contactos entre representantes oficiosos del CMT y sectores insurgentes en Togo, en Egipto y Francia, y posteriormente Qatar se ofreció a facilitar encuentros en Doha con los grupos insurgentes, reuniones con fecha para principios de 2022. Estas reuniones pretendían facilitar su participación en el proceso de diálogo previsto para febrero de 2022 pero que, dados los numerosos retrasos, podría posponerse. El 1 de octubre celebró su primera sesión el Comité Especial sobre el diálogo con los grupos armados, encargado de resolver los desacuerdos entre los grupos político-militares y las autoridades para discutir en torno a las precondiciones para participar en el diálogo nacional.

Los dos principales movimientos político-militares son el FACT, responsable de la muerte de Idriss Déby, y la Unión de Fuerzas de Resistencia (UFR), dirigido por los primos de Mahamat Déby, Timan y Tom Erdimi. Ambos grupos tienen su base en Libia, desde donde han lanzado periódicamente ofensivas contra el país, aunque según análisis podrían estar perdiendo el apoyo del liderazgo libio. El 14 de septiembre, las tropas de Khalifa

Haftar, el comandante cuyas fuerzas habían luchado contra el gobierno en Trípoli desde 2014 hasta octubre de 2020, cuando las partes concluyeron un alto el fuego, atacaron a sus antiguos aliados de FACT en el suroeste de Libia. El pacto de gobierno de unidad nacional de Libia, firmado en marzo de 2021, requiere que todos los combatientes extranjeros que respaldaron a Haftar o Trípoli abandonen el país.⁶ En este sentido, los principales actores armados podrían verse forzados a salir de Libia, lo que podría ser un incentivo para que, en función de las precondiciones, participen en el diálogo nacional, o por el contrario, redoblen sus esfuerzos para derrocar la junta militar.

En definitiva, si bien existe un amplio consenso en torno a la necesidad de promover y participar en el diálogo nacional y de facilitar la participación de los movimientos político-militares y de la oposición política y social, es imprescindible superar el clima de desconfianza gestado durante años por las elites del país, que son las que a la postre lideran este incierto proceso, así como también es necesario un papel activo de la comunidad internacional, en especial de Francia y de la UA, sin olvidar que una sociedad civil organizada y movilizadora que monitoree todo el proceso es condición sine qua non para que esta frágil transición llegue a buen puerto.

4. Jeune Afrique, *Tchad : plusieurs membres de la famille d'Hinda Déby l'itno suspects dans une affaire de meurtre*, *Jeune Afrique*, 20 de diciembre de 2021.

5. International Crisis Group, *Getting Chad's Transition on Track*, 30 de septiembre de 2021.

6. Reuters, *Libya's foreign minister confirms departure of some foreign fighters*, *Reuters*, 3 de octubre de 2021.

4.2. La reactivación del diálogo entre India y Pakistán en la Línea de Control

En febrero de 2021 los directores generales de operaciones militares de India y Pakistán publicaban un comunicado conjunto en el que señalaban el compromiso de ambas partes con todos los acuerdos de alto el fuego en la Línea de Control, así como otros sectores “en aras de lograr una paz mutuamente beneficiosa y sostenible a lo largo de las fronteras”. El anuncio interrumpía una tendencia de violaciones constantes y crecientes del alto el fuego en los últimos años. Así, en 2020 algunos medios de comunicación recogían que en ese año se había producido el mayor número de violaciones al acuerdo de alto el fuego de los últimos 17 años. Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior indio, que únicamente recogía las violaciones al acuerdo por parte de fuerzas pakistaníes, señalan que se había pasado de 2.140 actos contrarios al alto el fuego en 2018, a 3.479 en 2019 y a 5.133 en 2020, a los que habría que sumar los incumplimientos por parte de las fuerzas de seguridad indias. En los últimos años, estas violaciones del acuerdo de alto el fuego habían conllevado muertes tanto de personas militar como de población civil que vive a ambos lados de la frontera, y que diariamente sufre no solo las consecuencias cotidianas de vivir en un territorio enormemente militarizado, sino de la acción armada de ambos Ejércitos y grupos insurgentes que operan en la zona, especialmente en el territorio controlado por la India.

Persiste el reto de lograr un acercamiento entre India y Pakistán que trascienda la cuestión del alto el fuego y aborde las cuestiones centrales de la disputa

En noviembre de 2003, después de una serie de acercamientos y medidas de confianza, India y Pakistán acordaron un alto el fuego en la Línea de Control y el glaciar de Siachen. Este acuerdo permitió un acercamiento entre ambos Gobiernos que derivó en una serie de medidas para mejorar la comunicación a ambos lados de la frontera, con el restablecimiento del transporte aéreo, terrestre y marítimo entre los países. El acercamiento llevó al inicio de un proceso de diálogo entre India y Pakistán conocido como “diálogo compuesto”, iniciado tras el encuentro que tuvo lugar en 2004 entre el presidente pakistaní Pervez Musharraf y el primer ministro indio Atal Behari Vajpayee en Islamabad durante la celebración de una cumbre de la organización regional SAARC. El diálogo compuesto seguía la estela de iniciativas de acercamiento previas entre los Gobiernos de India y Pakistán desde 1985. El diálogo se extendió durante varios años y se concretó en varias rondas negociadoras, sin que se lograran avances en los temas centrales de la disputa entre ambos, especialmente en lo que se refiere a la situación de Cachemira. El deterioro de las relaciones entre ambos países, marcadas por episodios de violencia tanto en la Línea de Control, como en el estado indio de Cachemira llevaron a la suspensión

del diálogo sin que este hubiese fructificado. En los últimos años la violencia ha persistido en Cachemira, en paralelo a un deterioro de la situación política en la región con la pérdida del estatus de estado en 2019, así como episodios constantes y crecientes de violencia e intercambio de fuego entre las Fuerzas Armadas indias y pakistaníes en la frontera.

Así pues, el anuncio de renovación del compromiso por parte de ambos Gobiernos con el acuerdo de alto el fuego de 2003, con todas sus limitaciones y retos por delante, supone una iniciativa importante que abre la puerta a una posible reactivación del diálogo en el futuro. El acuerdo de reactivación del alto el fuego se producía después de que en diciembre de 2020 el Gobierno indio iniciara un acercamiento con su homólogo pakistaní ofreciendo la posibilidad de llevar a cabo negociaciones de forma indirecta (*backchannel talks*). Las conversaciones, según revelaron medios de comunicación, las protagonizaron los jefes de inteligencia de los dos países, puesto que la propuesta de India partía de que los encuentros no estuvieran protagonizados por interlocutores políticos. Las reuniones se llevaron a cabo en Emiratos Árabes Unidos según confirmó un diplomático de este país, que habría llevado a cabo iniciativas para favorecer el acercamiento, aunque India señaló que ambas partes habrían estado de acuerdo en no incorporar a una tercera parte al diálogo. La prioridad para Pakistán sería el retorno del estatus de estado a Jammu y Cachemira. India, por su parte, habría priorizado el acercamiento a Pakistán en un intento de reducir la tensión para poder dedicar más recursos militares a la tensión con China e incrementar su despliegue militar en la frontera con este país. Sin duda, el contexto regional con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán en agosto precedida de una importante escalada del conflicto armado en los meses previos, así como la tensión fronteriza entre India y China de los últimos dos años, impulsaron y condicionaron este acercamiento entre India y Pakistán.

Si bien el diálogo no avanzó y según diferentes medios de comunicación desde el mes de abril se acrecentó el distanciamiento entre India y Pakistán sin que trascendieran nuevos encuentros o acercamientos de carácter directo o indirecto, los niveles de violencia en la frontera se redujeron notablemente, sin que se constataran violaciones del acuerdo de alto el fuego. Esta reducción de la violencia supuso una enorme mejora en las condiciones de vida y de seguridad de la población a ambos lados de la Línea de Control, que en los últimos años se ha visto gravemente afectada

por la violencia. Así pues, aunque la iniciativa ha sido limitada en cuanto al alcance y la duración del diálogo, los efectos positivos del acuerdo han persistido durante todo el año, generando condiciones positivas para una posible reanudación del diálogo entre los dos países enfrentados históricamente. Persiste, por tanto, el reto

de lograr un acercamiento que trascienda la cuestión del alto el fuego y la reducción de la violencia en la zona fronteriza, para abordar las cuestiones centrales de la disputa. La reducción de los enfrentamientos en la Línea de Control dibuja un escenario más favorable para un diálogo sustantivo entre ambos gobiernos.

4.3. La reanudación de las negociaciones políticas entre Gobierno y oposición en Venezuela

A mediados de agosto, el Gobierno de Nicolás Maduro y la mayor parte de la oposición iniciaron en México un nuevo proceso de negociación que contó con la mediación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos y con un importante apoyo de la comunidad internacional. Aunque dicho proceso se interrumpió a mediados de octubre y en las tres rondas de negociación se lograron pocos acuerdos concretos y tangibles, al inicio de 2022 había varios factores que invitaban al optimismo respecto de la reanudación del diálogo. Tanto internamente en Venezuela como a nivel internacional, se registraron varios cambios que generan incentivos a ambas partes negociadoras para resolver la crisis sociopolítica, económica y humanitaria que atraviesa el país desde hace años a través del diálogo y la negociación.

En clave nacional, tras la reelección de Maduro en los comicios presidenciales de 2018, considerados como fraudulentos por la oposición y parte de la comunidad internacional, decenas de países (liderados por el Gobierno de Donald Trump) reconocieron al opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino o encargado del país e incrementaron las sanciones, la retórica y la presión contra el Gobierno de Maduro. En varias ocasiones, la Administración Trump no descartó medidas coercitivas para solventar la crisis en el país, determinados sectores de la oposición hicieron llamamientos a algún tipo de intervención internacional para poner fin a la dramática situación humanitaria y algunos países plantearon la suspensión de la membresía de Venezuela en la OEA. En mayo de 2020 el Gobierno incluso acusó a la oposición y a EEUU de estar detrás de un intento de golpe de Estado. A pesar del creciente aislamiento y de la profundización de la crisis económica en el país, a principios de 2021 parecía relativamente claro que dicha estrategia de máxima presión a Caracas no propiciaría la alternancia en el Gobierno, máxime después de que en diciembre de 2020 el oficialismo se impusiera ampliamente en unas elecciones legislativas con escasa participación, boicoteadas por la oposición y consideradas ilegítimas por parte de la comunidad internacional. En enero de 2021, como consecuencia de la finalización del mandato de la Asamblea Nacional –controlada por la oposición desde el año 2015–, varios de los países y organizaciones internacionales (como la UE) que habían reconocido a Guaidó como presidente legítimo del país.⁷

En esta línea, parte de la oposición se desmarcó de la estrategia más beligerante abanderada por EEUU y Juan Guaidó y optó por intentar negociar con el

Gobierno unas mejores condiciones de convivencia y unas mayores garantías de participación política. Así, las negociaciones que se produjeron durante la primera mitad del año entre el Gobierno y parte de la oposición liderada por el ex candidato presidencial Henrique Capriles, desembocaron en la conformación de un Consejo Electoral Nacional más inclusivo (con dos de sus cinco miembros considerados cercanos a la oposición) y propiciaron la decisión de un sector significativo de la oposición de participar, por primera vez desde 2017, en unos comicios –en esta ocasión en las elecciones regionales y locales celebradas a finales de 2021, en las que, a pesar de la baja participación y las denuncias de irregularidades, el oficialismo obtuvo una abultada mayoría. Anteriormente, estos mismos sectores de la oposición ya habían mostrado su preferencia por la consecución de concesiones del Estado a través de la negociación. En 2020, por ejemplo, el Gobierno de Turquía facilitó unas conversaciones entre el Gobierno y Capriles y el también líder opositor Stalin González, que propiciaron la liberación de 50 personas opositoras encarceladas y el sobreseimiento de procedimientos judiciales contra otras 60 personas opositoras asiladas y exiliadas, buena parte de las cuales diputadas. En su momento Maduro declaró que dicha medida tenía el objetivo de promover la reconciliación nacional y facilitar una mayor participación en las elecciones a la oposición.

Por otra parte, algunas voces consideran que la agudización de la crisis económica y humanitaria que vive el país en los últimos años también ha motivado que el Ejecutivo de Maduro esté más predispuesto a buscar escenarios de diálogo que propicien una flexibilización de las sanciones internacionales y la recuperación de los activos congelados en el exterior. A modo de ejemplo, a finales de 2021 ACNUR⁸ señaló que la violencia, la inseguridad y las condiciones económicas y médicas del país habían forzado a más de 5,9 millones de personas a abandonar Venezuela, convirtiéndose así en el segundo país del mundo (solamente por detrás de Siria) con mayor número de personas desplazadas, la inmensa mayoría en Colombia y otros países latinoamericanos. ACNUR señaló que desde el año 2014 ha habido un aumento del 8 mil por ciento en el número de personas venezolanas que solicitaron la condición de refugiada en todo el mundo. En la misma línea, a principios de 2021 Naciones Unidas pidió la retirada de las sanciones económicas por considerar que estaban teniendo un efecto devastador en la población civil.⁹ Con unos activos por valor de miles de millones de dólares congelados en el extranjero, Naciones Unidas señaló que el país enfrenta una carencia importante en varios

7. International Crisis Group, *Cómo superar la fractura global sobre Venezuela*, Informe sobre América Latina, n°93, ICG, 17 de febrero de 2022.

8. ACNUR, *Los datos revelan la difícil situación de personas refugiadas y migrantes de Venezuela desalojadas en la pandemia*, 25 de octubre de 2021.

9. Público, “La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus ‘efectos devastadores’”, *Público*, 13 de febrero de 2021.

sectores (maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos o medicinas), que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa y que cerca del 90 % de la población recibe menos de diez dólares mensuales, lo que explica las altas tasas de extrema pobreza en el país.

El cambio de Gobierno en EEUU a principios de 2021 también conllevó un escenario más propicio para el diálogo y facilitó una mayor coordinación y coherencia en la gestión de la crisis venezolana por parte de algunos actores de la comunidad internacional. Aún si Biden siguió reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela y durante el año algunas hubo algunas voces que denunciaron que la nueva Administración estadounidense no estaba implementando una aproximación a Venezuela significativamente distinta a la anterior, el propio Gobierno venezolano reconoció el discurso de Washington era menos beligerante. En este sentido, poco después de tomar posesión del cargo, Biden se declaró abierto a explorar una flexibilización de las sanciones y a entablar un diálogo con el Gobierno venezolana, y en varios momentos del año relajó las sanciones en algunos sectores muy específicos, como las transacciones en puertos o aeropuertos o la autorización a exportar gas propano a Venezuela. Al igual que EEUU manifestó su mayor predisposición al diálogo, otros actores de la comunidad internacional también incrementaron su presión para que el Gobierno y la oposición reanudaran la senda del diálogo. Así, en marzo, el Grupo Internacional de Contacto –compuesto por Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Uruguay y la UE– emitió un comunicado en el que consideraba que la única salida a la crisis venezolana pasaba por las negociaciones políticas entre las partes y por la organización de elecciones creíbles y transparentes, en conformidad con la Constitución de Venezuela. En las mismas fechas, una delegación del Gobierno noruego viajó en varias ocasiones a Venezuela para explorar la disposición de ambas partes a reanudar el diálogo.

Aunque en los varios procesos de negociación anteriores en Venezuela la comunidad internacional ha tenido un papel importante, en esta ocasión parece existir una mayor alineación estratégica de los principales actores internacional alrededor de la importancia de la resolución de la crisis a través de la negociación. Además del rol de Noruega como facilitador oficial del proceso de diálogo, como ya sucedió en el anterior proceso de negociación en Oslo y Barbados, Rusia y Países Bajos, considerados cercanos al Gobierno y a la oposición respectivamente, fueron designados como acompañantes del proceso. Algunos análisis han puesto

Tanto internamente en Venezuela como a nivel internacional, se registraron varios cambios que generan incentivos a ambas partes para resolver la crisis sociopolítica, económica y humanitaria del país a través del diálogo y la negociación

en valor el hecho de las negociaciones se lleven a cabo en México, cuyo Gobierno ha intentado mantener una posición de neutralidad o no excesivamente alineada con ninguna de las dos partes, como así lo demuestra el hecho de que, tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en julio de 2018, el Gobierno abandonara la membresía del Grupo de Lima, un grupo que en los últimos años se ha mostrado abiertamente crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, ambas partes habrían acordado también el establecimiento de un Grupo de Amigos. Aunque la composición del mismo generó algunas fricciones durante las conversaciones en México y provocó que se pospusiera su establecimiento, a principios de 2022 trascendió que este podría estar conformado por 10 países y que Naciones Unidas y el Vaticano podrían coordinarlo. Además de la estructura de facilitación del diálogo, las negociaciones que se iniciaron en México en agosto de 2021 contaron con un apoyo unánime y decidido por parte de la comunidad internacional. Incluso actores que anteriormente se habían mostrado abiertamente partidarios del aislamiento de Venezuela, como el propio Secretario General de la OEA, en esta ocasión secundaron la iniciativa. Además, cabe señalar que la reanudación del diálogo en México estuvo precedida de numerosas reuniones exploratorias entre el Gobierno de Noruega y ambas partes negociadoras, no solamente en la primera mitad de 2021, sino también en 2020, poco después de que se interrumpieran las negociaciones en Barbados a finales de 2019. En este sentido, Caracas señaló que entre febrero y junio de 2020 se produjeron 19 reuniones entre el Gobierno y la oposición liderada por Guaidó, incluyendo dos reuniones en las que habrían participado él personalmente y los líderes de los partidos del conocido como G4 (Acción Democrática, Voluntad Popular; Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo).

A pesar de que la aparente mayor predisposición del Gobierno, la oposición, y la comunidad internacional a hallar una salida al conflicto a través de la negociación, también hay algunos elementos que invitan a la cautela. En primer lugar, cabe señalar que en tiempos recientes ha habido varios procesos de negociación (cinco desde el 2013) que no han fructificado y que han incrementado el escepticismo de determinados sectores respecto de la voluntad política del Gobierno. Tras la interrupción de las negociaciones en Oslo y Barbados en 2019, algunos líderes de la oposición criticaron que el Gobierno utiliza la reanudación periódica de las negociaciones para ganar tiempo, fortalecer sus posiciones, desmovilizar a la ciudadanía y deslegitimar y dividir a la oposición. Del mismo modo, en varias ocasiones Maduro ha acusado a la oposición de actuar al dictado de los intereses de terceros países. En segundo lugar, algunas voces

escépticas con el diálogo iniciado en México señalan que dicho proceso duró escasamente dos meses. A mediados de octubre, el día antes del inicio de la cuarta ronda de negociación, el Gobierno se retiró de las negociaciones tras la extradición a EEUU de Alex Saab, un empresario colombiano cercano colaborador del Gobierno acusado de blanqueo de capitales. En este sentido, hay sectores que se muestran reacios hacia las posibilidades de que las conversaciones iniciadas en México culminen con éxito porque el factor que según el Gobierno permitiría reanudar el diálogo –la liberación de Saab– no depende en absoluto de la oposición. Estas mismas voces críticas señalan que durante las tres rondas de negociación que se llevaron a cabo en agosto y septiembre solamente se produjeron dos acuerdos: la reivindicación y defensa de la soberanía venezolana sobre la región de Esequiba –un territorio en disputa con Guyana desde hace 180 años– y la creación de una Mesa de Atención Social conformada paritariamente por Gobierno y oposición para hacer frente a cuestiones de índole social como programas de nutrición infantil, trasplantes o vacunación. Además, la oposición criticó que la interrupción del diálogo impidió la implementación de dichos acuerdos o la continuación

del diálogo respecto de los siete puntos de la agenda sustantiva de la negociación: derechos políticos, cronograma electoral con garantías, respeto al Estado de derecho, levantamiento de sanciones, renuncia a la violencia, medidas de protección social y garantías de implementación de lo acordado.

Más allá de estas dificultades, cabe destacar que todas las partes han expresado su voluntad de reanudar el diálogo en un futuro cercano y han expresado su compromiso hacia una solución negociada a la crisis en Venezuela. Incluso el Gobierno, que fue quien se retiró de las negociaciones, en varias ocasiones ha manifestado su disposición a retomar las conversaciones. Aún si la experiencia previa de negociación en el país demuestra que cuestiones muy particulares y concretas pueden provocar el bloqueo o la parálisis de las negociaciones, los cambios domésticos e internacionales que se han registrado recientemente y el compromiso y unidad de acción que recientemente ha demostrado la comunidad internacional hacia la resolución de la crisis en Venezuela parecen propiciar un escenario de mayor cooperación y acercamiento entre las partes.

4.4. ¿Hacia una mejora de las relaciones entre Turquía y Armenia?

2021 fue escenario de una apertura diplomática por Turquía y Armenia, materializada en diversos anuncios y pasos, y encaminada a la normalización de las relaciones entre ambos países. Estas han estado marcadas por la hostilidad, de la mano de factores como la herida histórica del genocidio armenio a manos del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, no reconocido por Turquía. Otro factor ha sido el conflicto en torno al estatus del enclave armenio de Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia y formalmente parte de Azerbaiyán y cuyo control enfrentó militarmente a Ereván y Bakú en los noventa y de nuevo en 2020. En esta disputa longeva Turquía se ha mantenido aliada de Azerbaiyán, con la frontera turco-armenia cerrada desde 1993 y apoyo militar a Bakú en la guerra de 2020. El conjunto de medidas adoptadas y/o anunciadas por los gobiernos de Turquía y Armenia, de la mano de los cambios en la región, apuntan a una oportunidad de mejora de relaciones, si bien también hay elementos que la dificultan, la matizan o la circunscriben a ámbitos limitados.

En 2021 se dieron varios pasos encaminados al diálogo entre ambos países y la construcción de confianza. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, anunció a mediados de diciembre en el Parlamento el nombramiento por ambos países de enviados especiales con el fin de avanzar hacia la normalización de sus relaciones, así como un pronto restablecimiento de los vuelos entre ambas capitales. El anuncio fue reafirmado por Armenia un día después. Serdar Kilic, diplomático turco, ex embajador ante EEUU y considerado figura de confianza del presidente turco, fue nombrado en esas fechas por Turquía como enviado especial para la normalización de las relaciones con Armenia. Por su parte, Armenia nombró al vicepresidente del Parlamento y ex presidente de su comité de relaciones exteriores, Ruben Rubinyan, cercano al primer ministro armenio, Nikol Pashinian. Ankara anunció que las primeras conversaciones entre ambos enviados tendrían lugar en Moscú. A su vez, el ministerio de Economía armenio anunció a finales de diciembre el levantamiento del embargo a las importaciones de productos de Turquía, con entrada en vigor en enero de 2022.

El escenario de apertura hacia la mejora de las relaciones entre ambos países se da en el marco del nuevo contexto generado por la guerra de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia. La guerra tuvo graves impactos en seguridad humana. Decenas de miles de personas se desplazaron (unos 91.000 armenios y 84.000 azerbaiyanos, según datos de un informe del Consejo

de Europa) y las hostilidades generaron graves daños en la infraestructura civil de Nagorno-Karabaj. Varios cientos de civiles murieron y en torno a 6.800 militares de ambos países murieron o desaparecieron. La población armenia de Nagorno-Karabaj desplazada a Armenia y la retornada al enclave afrontaban aún en 2021 necesidades de alojamiento y medios de vida. A su vez, el minado de los distritos cuyo control recuperó militarmente Azerbaiyán constituía un grave obstáculo al retorno de la población azerbaiyana desplazada forzosamente en los años noventa de esas áreas.

La guerra finalizó en un contexto de superioridad militar de Azerbaiyán con un acuerdo firmado entre Bakú, Ereván y Moscú –mediado por Rusia-, que puso fin a las hostilidades, ratificó el control por Azerbaiyán de los distritos alrededor de Nagorno-Karabaj -cuyo estatus de pertenencia a Azerbaiyán no había estado en disputa pero que fueron ocupados por Armenia en la guerra de

Armenia y Turquía iniciaron en 2021 un proceso de acercamiento y adopción de medidas que puede llevar a la mejora de las relaciones diplomáticas, si bien el proceso no abarca dimensiones de diálogo social

los años noventa y de los que se desplazó masivamente su población azerbaiyana entonces-, y que comprometió a las partes al establecimiento de vínculos económicos y de transporte en la región. Turquía y Armenia anunciaron medidas de acercamiento. En ese contexto, la ratificación en el acuerdo de fin de hostilidades del control de los distritos alrededor de Nagorno-Karabaj por Azerbaiyán constituye un elemento que hace desaparecer las justificaciones de Ankara para el mantenimiento del cierre de su frontera con Armenia.

El escenario de apertura hacia la mejora de las relaciones entre ambos países se da en el marco de los movimientos hacia una mayor integración regional, principalmente económica, en el nuevo escenario en el Sur del Cáucaso tras la guerra de 2020, si bien con interrogantes y dificultades. El acuerdo de noviembre de 2020 que puso fin a las hostilidades entre Bakú y Ereván incluía entre sus nueve puntos uno que comprometía a las partes al desbloqueo de todas las comunicaciones económicas y de transporte en la región, así como la provisión por Armenia de conexión entre Azerbaiyán y el enclave azerbaiyano de Nakhichevan, y control del tránsito por parte del servicio de guardia de frontera del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. A lo largo de 2021, buena parte del proceso negociador entre Azerbaiyán y Armenia -con mediación de Rusia y apoyo también del grupo de Minsk de la OSCE y de la UE- se centró en la cuestión de la apertura de relaciones comerciales y conexiones de transporte, si bien afrontó dificultades y dilación. En su conjunto, la guerra de 2020 tuvo impactos de peso en el escenario geoestratégico en la región. Para Armenia, la pandemia y la guerra supusieron graves impactos

económicos y la guerra y su desenlace profundizaron la situación de supeditación y dependencia hacia Rusia. Moscú amplió su proyección en la región, política y militarmente, como actor mediador y con despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj y en el corredor que comunica el enclave con Armenia. Azerbaiyán se proyectó como actor militar, promoviendo una aproximación de triunfalismo militarista y de posición con vínculos de alianza tanto con Rusia -principal exportador de armamento a Bakú- como con Turquía. Ankara, implicada desde hace décadas en el apoyo, suministro de armas, formación y asesoramiento del Ejército de Azerbaiyán, incrementó también su peso y ascendencia política y militar en la región.

En ese escenario, una posible mejora de las relaciones entre Turquía y Armenia beneficia a ambas partes, especialmente en el plano económico de la mano de una posible reapertura futura de la frontera. Ankara manifestó en 2021 que el acercamiento a Ereván se produciría en coordinación con Bakú, limitando riesgos de oposición de Azerbaiyán, si bien se mantiene el contexto de grave antagonismo político y social entre Armenia y Azerbaiyán y violaciones del alto el fuego. Tampoco Rusia ha mostrado oposición al acercamiento. Por su parte, y tras la incertidumbre sobre la posición de poder del gobierno armenio tras el desenlace de la guerra de 2020 y tras manifestaciones antigubernamentales en 2021, el partido del primer ministro Nikol Pashinian revalidó el mandato, con un 54% de los votos en comicios anticipados (49,3% de participación, 48,6% en 2018), dando margen de acción a las decisiones que pueda tomar el Gobierno en torno al acercamiento con Ankara. En conjunto, el acercamiento de relaciones y reapertura de la frontera supondría dividendos económicos para todos los gobiernos

involucrados, en tanto se impulsaría una zona de tránsito potencial, a través de las conexiones del sur del Cáucaso.

No obstante, diversos factores limitan la oportunidad. Por una parte, el acercamiento de relaciones se produce en un formato excluyente, limitado a las élites y sin incorporar actores, mecanismos y procesos de diálogo más amplio, que pudiera incorporar la dimensión de verdad y reconciliación. Por otra parte, la disposición al acercamiento estrechamente vinculada a la integración económica no necesariamente supondrá mayor seguridad económica para las poblaciones en su conjunto y, específicamente, para aquellas en situación de mayor vulnerabilidad económica. Además, el contexto regional continúa siendo de antagonismo, limitaciones y obstáculos en el proceso negociador entre Armenia y Azerbaiyán, lo que repercute en las perspectivas entre Armenia y Turquía. Además, el incremento de tensión en torno al papel de Rusia en Ucrania genera también incertidumbre y nuevos riesgos en el Cáucaso.

En 2009 Turquía y Armenia ya dieron impulso a la mejora de relaciones, llegando a firmar sus primeros ministros unos protocolos, con facilitación de Suiza, que sin embargo no llegaron a prosperar. Influyó entonces de manera significativa la continuación de la disputa entre Armenia y Azerbaiyán, aliada de Turquía. El contexto ahora es otro, si bien continúan existiendo diversos retos y dificultades. El acercamiento dado en 2021 y las perspectivas de mejora de las relaciones entre Ereván y Ankara constituyen una oportunidad, si bien esta debería ser acompañada, no solo para su fructificación, sino para su ampliación hacia dimensiones de diálogo social y participación de la ciudadanía, incluyendo en ámbitos de memoria y de construcción de paz con justicia social.

4.5. Entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares

El 22 de enero de 2021 entró en vigor el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) tras su aprobación en el año 2017. Este es el primer tratado internacional encaminado a la completa eliminación de las armas nucleares y su entrada en vigor implicaba que pasaba a ser legalmente vinculante para aquellos Estados que lo hubieran ratificado o lo hagan en el futuro. A finales de 2021 eran 58 los Estados parte del tratado y 86 los Estados que lo habían firmado, expresando su compromiso con el texto del tratado. El TPAN supone para los Estados adheridos la prohibición de desarrollo, prueba, producción, fabricación, transferencia, posesión, almacenamiento, uso o amenaza de uso de armas nucleares, así como el estacionamiento de estas armas en su territorio. Al mismo tiempo, un Estado que posea armas nucleares puede formar parte del tratado con el compromiso de destrucción mediante un plan y calendario de carácter vinculantes. El tratado reconoce que cualquier uso de armas nucleares sería contrario al derecho internacional en los conflictos armados, especialmente al derecho internacional humanitario dado, entre otros aspectos, el carácter completamente indiscriminado de las consecuencias de su uso y la prohibición de los ataques de estas características por el derecho internacional.

La firma del tratado fue considerada un enorme avance internacional en materia de desarme, lo que mereció el reconocimiento con la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2017 a ICAN, la campaña internacional de la sociedad civil que impulsó la firma del tratado y que en la actualidad promueve la adhesión por parte de nuevos Estados y supervisa el pleno cumplimiento del tratado. En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, “la eliminación de las armas nucleares es la principal prioridad de desarme para las Naciones Unidas”, poniendo de relieve la centralidad de la cuestión nuclear en el abordaje de los retos de seguridad internacional. Así, a pesar del avance que representa la aprobación y posterior entrada en vigor del tratado, el armamento nuclear ha seguido representando un enorme riesgo de seguridad a nivel internacional. Según datos de la Federation of American Scientists (FAS), a finales de 2021 el arsenal nuclear mundial era de 12.700 cabezas nucleares en manos de nueve países, aunque EEUU y Rusia poseían el 90% del armamento nuclear mundial.¹⁰ Se trata de estimaciones, puesto que los Estados no revelan información respecto a sus armas nucleares. La FAS apuntaba a una ralentización en la tendencia de reducción en el arsenal mundial que se había producido desde el fin de la Guerra Fría.

La creciente tensión entre Rusia y países de la órbita euroatlántica da cuenta de la urgencia de ampliar el alcance de este tratado mediante la adhesión de nuevos países que impulsen el desarme nuclear

Además, la reducción se debería fundamentalmente al desmantelamiento de armas previamente retiradas, ya que China, India, Corea del Norte, Pakistán, Reino Unido y, posiblemente Rusia, estarían aumentando sus arsenales.

A pesar de que ninguno de los Estados que poseen armas nucleares ha firmado el tratado o ha expresado la voluntad de hacerlo en el futuro inmediato, comienzan a abrirse algunas grietas por parte de Estados tradicionalmente aliados de algunas potencias nucleares. Así, tres Estados de la UE se han adherido al tratado, Irlanda, Malta y Suecia y dos Estados miembros de la OTAN, Noruega y Alemania, han expresado su voluntad de participar como observadores en la primera conferencia de Estados parte del tratado en junio de 2022. Así, Noruega fue el primer país de la OTAN en expresar esta intención tras un cambio en el Gobierno e integrantes de la nueva coalición de Gobierno en Alemania como su ministra de Exteriores han expresado su voluntad de trabajar para que Alemania se adhiriera al tratado, a pesar de ser uno de los países de la OTAN con armamento nuclear estadounidense en su territorio. Los partidos que conforman el actual Gobierno de España alcanzaron un acuerdo en 2018 para adherirse al tratado, si bien desde entonces no se han efectuado avances concretos en esta línea.

Por otra parte, ICAN ha señalado que numerosos actores económicos, como inversores internacionales, estarían empezando a considerar el sector del armamento nuclear como un negocio arriesgado y en 2021, 127 instituciones financieras dejaron de invertir en empresas de armamento nuclear.¹¹ Así, el número total de inversores se habría reducido con respecto al año anterior, en lo que podría marcar un cambio de tendencia en el apoyo económico internacional a la industria del armamento nuclear. La creciente tensión entre Rusia y los países de la órbita euroatlántica da cuenta de la urgencia de ampliar el alcance de este tratado mediante la adhesión de nuevos países que impulsen el desarme nuclear, ante el enorme riesgo que para la población mundial representa su uso, y la enorme inseguridad que genera la mera posibilidad de este uso, aunque no se materialice de forma efectiva. En un contexto, además, de crisis medioambiental internacional de proporciones catastróficas, la existencia de armas nucleares incrementa todavía más el riesgo de destrucción de los ecosistemas y sistemas de vida de la población. Las consecuencias de la utilización de armamento nuclear derivarían en el conocido por la comunidad científica

10. Federation of American Scientists, *Status of World Nuclear Forces*, diciembre de 2021.

11. ICAN, *This is how the nuclear weapon ban treaty made history in 2021*, 23 de diciembre de 2021.

como “invierno nuclear”, con una bajada drástica de la temperatura de la tierra, debido a la reducción de la radiación solar como consecuencia de las cenizas y polvo que se producirían tras la deflagración, con el consiguiente impacto en la producción de alimentos, entre muchísimos otros efectos, provocando una hambruna mundial.¹²

Así pues, la existencia y entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares constituye

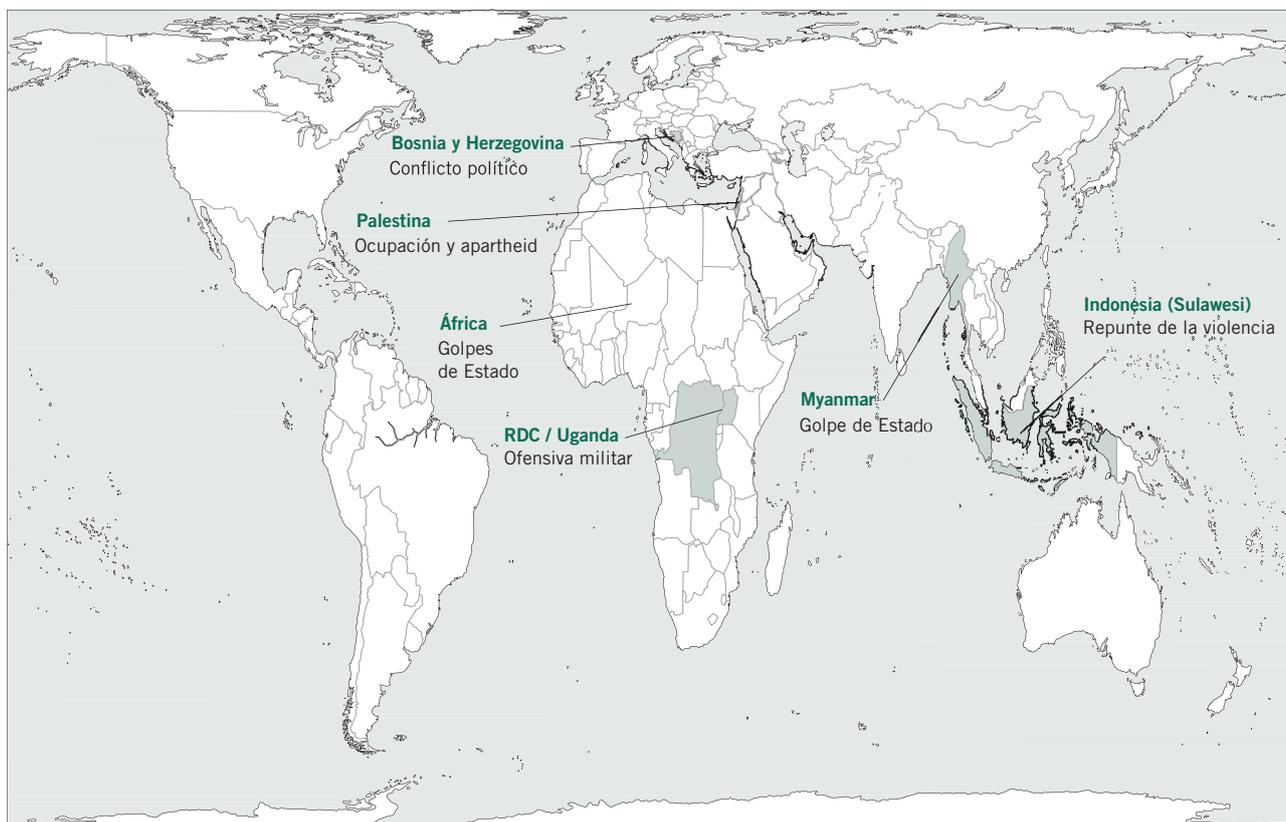
una excelente oportunidad para fortalecer el proceso de eliminación de estas armas a nivel global, puesto que las estrategias de disuasión se han revelado como altamente ineficaces para la desnuclearización. Los Estados aliados de las potencias nucleares pueden desempeñar una tarea fundamental en el impulso de esta desnuclearización, mediante su adhesión y participación en el tratado y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil implicadas en la implementación del tratado.

12. Coupe, J., Bardeen, C. G., Robock, A., & Toon, O. B. “Nuclear winter responses to nuclear war between the United States and Russia in the Whole Atmosphere Community Climate Model Version 4 and the Goddard Institute for Space Studies Model E”, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 124, 2019.

5. Escenarios de riesgo para 2022

A partir del análisis del año 2021 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo seis contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2022 o incluso a más largo plazo. Los escenarios de alerta de cara al año 2022 hacen referencia a los retos y riesgos de la proliferación de golpes de Estado en África, después de que el continente fuera escenario de cuatro alzamientos militares en 2021 en Chad, Malí, Guinea y Sudán; a la intervención de Uganda en territorio congolés en persecución del grupo armado ADF, que puede alimentar una escalada del conflicto con graves efectos desestabilizadores; al agravamiento de la situación en Myanmar, dado el aumento de la violencia y el deterioro de la situación humanitaria y económica en el país tras el golpe de Estado y en el contexto de pandemia; al repunte de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT en la provincia de Sulawesi Central; a la intensificación de la crisis política en Bosnia y Herzegovina y a la grave situación de violencia, apartheid y desposesión en Palestina y los riesgos de continuar ignorando esta realidad.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2022



5.1 Retos y riesgos de la proliferación de golpes de Estado en África

2021 ha sido un año de retrocesos en materia de gobernanza democrática para el continente africano, padeciendo cuatro golpes de Estado efectivos por parte de aparatos militares en Chad (abril), Malí (mayo), Guinea (septiembre) y Sudán (octubre), además de otro intento que fracasó en marzo en Níger –y al cierre de este informe se ha producido otro golpe efectivo en Burkina Faso el 23 de enero de 2022. Desde 1999 no se registraba un año con estas cifras en el continente. Si incorporamos a los golpes padecidos en 2021, los golpes registrados desde 2013 en el continente, que incluye a países como Túnez, Argelia, Burundi, Egipto, RCA, Burkina Faso o Zimbabwe, ello significa que alrededor del 20% de los países africanos han vivido cambios inconstitucionales de gobierno en menos de una década.

La declaración de Lomé del año 2000, con la cual la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA) reaccionó para prohibir los cambios inconstitucionales de gobierno en el continente, acordando el no reconocimiento de los gobiernos golpistas y su expulsión del organismo, ha servido durante un tiempo para contener este tipo de prácticas por los aparatos militares. En la década anterior a Lomé, se registraron 15 golpes de Estado (1991-2000), frente a los ocho producidos en la década posterior (2011-2020). Sin embargo, el resurgimiento del intervencionismo de los militares en la política africana en el último año, principalmente en la región occidental, pone en riesgo los importantes avances logrados en materia de gobernanza por las sociedades africanas. Los datos de los últimos informes del Índice Ibrahim de Gobernanza Africana ya alertaban de una tendencia en la ralentización de los indicadores de gobernanza durante los últimos cinco años, empeorando por primera vez, en casi una década, en el año 2019. Se señalaba que, si bien el continente ha ido avanzando en materia de buena gobernanza, la amenaza del deterioro de la situación de seguridad y la erosión de los espacios de participación cívica y democrático, suponían un riesgo frente a los avances conseguidos.¹ Este fenómeno representa una seria amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del continente, poniendo en riesgo algunas de las aspiraciones de la agenda africana 2063, *The Africa We Want*, entre ellas la aspiración 3, centrada en la construcción de un África basada en el buen gobierno, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la justicia y el imperio de la ley; y la aspiración 4, que tiene como objetivo alcanzar un África pacífica y segura.²

Las razones que ayudan a explicar la eclosión del fenómeno son complejas y multicausales, pero existen

dos elementos que se han observado en los últimos acontecimientos para justificar los mismos por los aparatos militares: el deterioro de la situación de la seguridad y la inestabilidad política. En el caso de Chad, la muerte del presidente Idriss Déby, producida en medio de un clima de grave inestabilidad política y de seguridad, sirvió como pretexto para la toma del control de las instituciones del Estado por parte de una junta militar liderada por su hijo, el general Mahamat Déby, suplantando el orden constitucional. En Guinea, el golpe dirigido por el teniente coronel Mamady Doumbouya que derrocó al Gobierno presidido por Alpha Condé, vino precedido por un cambio inconstitucional para rescindir el límite de mandatos presidenciales, generando un importante descontento popular que fue duramente reprimido por el Gobierno. En Malí, las causas se relacionaron con el deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición y el aumento del descontento popular, todo lo cual dio origen al segundo golpe en el país en 9 meses por parte del coronel Assimi Goïta. Por su parte, en Sudán las causas también se relacionaron con las tensiones entre la parte civil y la parte militar del Gobierno, que derivó en la usurpación de la transición por la parte militar encabezada por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al-Burhan. En estos dos últimos casos, se da la paradoja de que los golpes de Estado fueron provocados por el ala militar del Gobierno híbrido transicional surgido a partir de otros golpes militares previos, poniendo fin a las transiciones acordadas.

Las respuestas a los mismos, lejos de haber sido unitarias, han mostrado diversos raseros. A nivel interno, si bien en Chad y Sudán los golpes fueron recibidos con desaprobación por sus poblaciones, generándose movilizaciones populares y de la oposición política que desencadenaron en episodios de represión por las fuerzas de seguridad del Estado; en Guinea, Malí y Burkina Faso las nuevas juntas militares contaron con un buen recibimiento y apoyo popular, incluso de partidos políticos opositores. Del mismo modo, también a nivel externo las respuestas de las organizaciones africanas y actores internacionales han empleado raseros dispares. Si bien en los casos de Guinea, Malí, Sudán o Burkina Faso estos organismos coincidieron en su condena unánime, no ocurrió lo mismo con el caso de Chad, en donde la mayoría de los actores de la comunidad internacional se quedaron en un tímido llamamiento al retorno al orden constitucional, sin condenar el golpe. De hecho, el Gobierno francés reconoció sin problemas a la junta militar argumentando motivos de seguridad excepcionales. Por su parte, la Unión Africana (UA)

Cerca de 20% de los países africanos han vivido cambios inconstitucionales de gobierno en menos de una década

1. Mo Ibrahim Foundation (2020), *2020 Ibrahim Index of African Governance*.

2. African Union, *Agenda 2063. The african we want*, diciembre de 2021.

acordó suspender del organismo a Malí, Guinea y Sudán, pero no hizo lo propio con Chad. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendió a Malí y Guinea (y recientemente también a Burkina Faso), impuso sanciones a los miembros de la junta militar de Guinea, fue un paso más allá en la dureza de las sanciones económicas decretadas en Malí –a las cuales también se sumó la otra organización regional de la zona, la Unión Monetaria de África Occidental (UEMOA)– pero no impuso sanciones a Burkina Faso. A nivel internacional las sanciones a Malí fueron respaldadas por EEUU, UE o Francia, pero China y Rusia bloquearon una declaración de apoyo a las mismas en el Consejo de Seguridad.

Este doble rasero está siendo utilizado para cuestionar las políticas de sanciones y los intentos de restablecer el orden constitucional por parte de la comunidad internacional como una aproximación neocolonial e interesada no basada en criterios de defensa de la democracia sino por intereses estratégicos, lo que provoca un cuestionamiento general y la deslegitimación hacia los grandes consensos en torno a cómo afrontar las amenazas a la paz y seguridad en las políticas de prevención de conflictos. Asimismo, la imposibilidad de que la comunidad internacional y los actores africanos generen una condena unificada y concreta, así como la existencia

de actores que mantienen relaciones diplomáticas con los gobiernos golpistas y rompen el efecto del aislamiento regional y global, contribuyen a alimentar el efecto contagio de los militares, que se leen impunes.

Por otro lado, las medidas de suspensión de los organismos africanos de algunos de los países golpistas, si bien busca obligar a las juntas militares a compartir el poder con líderes civiles, ha logrado un efecto limitado. De hecho, los golpes de Malí y Sudán, cuyos gobiernos previos al golpe ya provenían de una conformación cívico-militar surgida de golpes anteriores bajo presión internacional, se han vuelto a ver en la misma usurpación de poder por el ala militar del gobierno de transición un tiempo después. En este sentido, quizás la UA y los diferentes organismos africanos deberían revisar su política de legitimación de golpes bajo

el paraguas de creación de gobiernos híbridos, así como impulsar y fortalecer medidas preventivas contra la mala gobernanza para evitar el efecto contagio en el continente, sancionando, no solo los cambios inconstitucionales de gobierno, sino también las vías no democráticas e inconstitucionales de preservación del poder, como los terceros mandatos o los fraudes electorales. De lo contrario, podemos encontrarnos en la antesala de una proliferación de cambios inconstitucionales de consecuencias imprevisibles.

La UA y otros organismos africanos deberían impulsar y fortalecer medidas preventivas contra la mala gobernanza para evitar el efecto contagio en el continente

5.2. La intervención de Uganda en persecución de las ADF en territorio congolés

A mediados de noviembre el grupo armado congolés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) cometieron varios atentados en la capital ugandesa, Kampala, lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones del grupo. Las acciones armadas de las ADF desencadenaron una respuesta armada de Uganda en territorio congolés, lo que puede implicar una escalada en la evolución y gravedad de este conflicto de graves consecuencias.³ Este operativo ugandés, además, reabre uno de los episodios más graves y mortíferos que ha vivido el continente africano en las últimas décadas, la intervención ugandesa y de otros países de la región, principalmente Ruanda y Burundi, en la conocida como Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), todavía en el recuerdo de la ciudadanía congoleña y de la región de los Grandes Lagos por las graves consecuencias que tuvo en RDC en términos de vidas humanas y que todavía hoy persisten en lo concerniente a la inestabilidad y violencia presente en el este del país.

El 16 de noviembre de 2021 se registraron tres explosiones en la capital ugandesa, Kampala. Las explosiones, cometidas por tres atacantes suicidas, se produjeron cerca del Parlamento nacional y de la sede central de la Policía ugandesa, dejando un balance de siete personas muertas y 40 heridas. Las autoridades ugandesas atribuyeron los ataques a las ADF, reaccionando primero mediante arrestos masivos de posibles sospechosos en el interior del país y, posteriormente, anunciando nuevos planes para volver a desplegar al Ejército ugandés en la vecina RDC. Las ADF reivindicaron las acciones cometidas en Uganda. El 30 de noviembre las Fuerzas Armadas ugandesas informaron de los primeros ataques aéreos contra posiciones de las ADF en suelo congolés, y a principios de diciembre las tropas ugandesas entraron en territorio de la RDC tras un acuerdo con el Gobierno congolés para combatir a la insurgencia, lo que supone el retorno de las Fuerzas Armadas ugandesas a territorio congolés 20 años después.

Las ADF es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). Fue creado a mediados de los años noventa en el oeste de Uganda por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF, Ejército Nacional para la Liberación de Uganda -NALU, por sus siglas en inglés-) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevaleció la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginales en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. Liderado

por Jamil Mukulu, desde finales de los años noventa el grupo había mantenido un bajo perfil en la provincia de Kivu Norte, cerca de la frontera con Uganda, donde diferentes ofensivas militares lo habían prácticamente desarticulado, aunque fue capaz de regenerarse debido a que sus redes de financiación y su capacidad de reclutamiento se mantuvieron intactas. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda. El grupo tenía también el respaldo de Kenia y de Sudán, así como poseía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleña, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil, pero no fue hasta 2015, con el encarcelamiento de su líder, Jamil Mukulu, y el ascenso de Musa Baluku en su lugar, que experimentó un proceso de radicalización y ampliación de sus actividades. En 2019 las Fuerzas Armadas congoleñas iniciaron una ofensiva contra el grupo que provocó una escalada de la violencia en el norte de la provincia de Kivu Norte con graves consecuencias para la población civil, debido a los impactos de las operaciones de los cuerpos de seguridad, así como por las represalias de las ADF como respuesta a la ofensiva militar. Desde entonces, este clima de violencia y acciones insurgentes ha ido en aumento, en el marco de las cuales se podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra según Naciones Unidas.

En el último año, diversos hechos alertaban de la gravedad de la situación y de la creciente militarización del conflicto. Las diversas operaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas congoleñas durante los últimos años han infringido importantes pérdidas a las ADF y se desmantelaron varios de sus bastiones. No obstante, el grupo mantuvo su capacidad de causar daños a la población civil, amplió su zona de operaciones y recurrió con mayor frecuencia a los artefactos explosivos improvisados, método de combate que no había sido utilizado por las ADF hasta finales de 2020, fecha a partir de la cual se produjo una escalada del uso de estos artefactos. Además, en agosto de 2021 se produjo otro hecho preocupante por las consecuencias derivadas, ya no solo en términos militares, sino en términos del relato que pueden construir las ADF para legitimar su existencia: el presidente congolés Félix Tshisekedi autorizó que fuerzas especiales estadounidenses dieran apoyo a los cuerpos de seguridad congoleños en sus

Tras los atentados en Kampala cometidos por el grupo armado ADF, las Fuerzas Armadas ugandesas se desplegaron nuevamente en RDC, 23 años después del inicio de la Primera Guerra Mundial Africana

3. Véase el resumen de RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

actividades contra el grupo armado, el único de la región incluido en las listas terroristas de EEUU por su vinculación a Estado Islámico (ISIS) y considerado el más letal de las decenas de grupos armados que operan en el este de la RDC. Según el informe del Grupo de expertos de RDC publicado en junio, pese a los intentos de las ADF de proyectar su alineación con el grupo armado ISIS, no se pudo establecer si este les daba apoyo directo o ejercía funciones de mando y control sobre ellas, aunque sí se ha constatado la participación de combatientes extranjeros, que contribuyeron a perfeccionar las técnicas de construcción de artefactos explosivos. No obstante, cabe destacar que ISIS reivindicó tres ataques en la localidad de Komanda en los que las ADF ejecutaron a diversas personas entre septiembre y octubre. Posteriormente, como si de la antesala del ataque ugandés se tratase, del 11 al 12 de noviembre, presuntos combatientes de las ADF perpetraron uno de los ataques más mortíferos en Kivu Norte durante 2021, matando al menos a 38 civiles. En respuesta a la ofensiva ugandesa de finales de noviembre, las ADF intensificaron sus operaciones militares, entre las cuales sobresalió un ataque suicida producido el 25 de diciembre en un restaurante en Beni, que dejó un balance de al menos nueve personas

muertas en lo que se convirtió en el primer ataque suicida registrado en el país.

El operativo ugandés ha generado un clima de preocupación y desconfianza en el este de RDC por la escalada de las actividades militares que ha supuesto; así como por el recuerdo de la presencia ugandesa en la década de los noventa, responsable de crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra congoleña; y porque el grupo armado ha demostrado tener una importante capacidad de resiliencia a pesar de las importantes ofensivas que ha sufrido. Todo ello lanza numerosos interrogantes en torno a una posible derrota militar del grupo, además de las víctimas civiles que provocará en paralelo. En este sentido esta ofensiva pone nuevamente de manifiesto la apuesta por una estrategia centrada en la securitización de las respuestas internacionales ante las amenazas a la paz y la seguridad internacional, que se está revelando como un fracaso en otros contextos porque no contribuye a reducir los impactos de las actividades de los grupos armados, sino que, a menudo, los incrementa, así como tampoco hace frente a las causas y raíces estructurales que se encuentran en la génesis de este y otros conflictos.

5.3. Escalada de la violencia en Myanmar tras el golpe de Estado

El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Myanmar en febrero de 2021 ha llevado a un enorme deterioro de la situación de seguridad, humanitaria y económica del país, en un contexto de agravamiento de la pandemia, que ha hecho más dramáticas, si cabe, las consecuencias de la acción militar. El riesgo de escalada de la violencia se ha incrementado como consecuencia del golpe de Estado, la represión por parte de las fuerzas de seguridad y del cierre de los espacios de participación política para el conjunto de la sociedad de Myanmar y el surgimiento de una respuesta armada organizada por parte de amplios sectores de la oposición. El 1 de febrero, las Fuerzas Armadas conocidas en el país como Tatmadaw, impidieron la conformación del Parlamento que había resultado de las elecciones celebradas a finales de 2020 y en las que la NLD, partido encabezado por Aung San Suu Kyi, había obtenido una clara mayoría. El golpe de estado supuso la conformación de un nuevo gobierno dirigido por el general Min Aung Hlaing como primer ministro y al mismo tiempo jefe del Consejo de Administración del Estado, es decir, ocupando simultáneamente los puestos de jefe de Estado y de Gobierno. El golpe de estado interrumpía el proceso de transición a la democracia iniciado en 2010 y que había llevado al partido NLD –encabezado por Aung San Suu Kyi, líder de la oposición al régimen militar durante las últimas décadas de la dictadura– a liderar el Gobierno del país desde las elecciones de 2015. La incompleta transición, regida por la Constitución de 2008, llevó a una cohabitación en el poder entre las fuerzas militares y los partidos políticos, que impidió la completa transferencia del poder a un gobierno elegido en las urnas. La fragilidad del proceso y la enorme capacidad de influencia del estamento militar se había reflejado en anteriores crisis, como la sucedida en 2017, con la operación militar que llevó al desplazamiento de más de 700.000 personas rohingya a Bangladesh en medio de acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas, sin que el Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi adoptara medidas para poner fin a la masacre y persecución de la población rohingya.

Tras el golpe de Estado de febrero, la violencia en el país fue escalando progresivamente. La respuesta de la sociedad civil a la toma del poder por parte de los militares fue de carácter no violento, mediante manifestaciones, huelgas, caceroladas y diferentes tipos de acciones de resistencia pacífica simbólicas. Las fuerzas de seguridad reprimieron con extrema dureza las protestas sociales, con un enorme despliegue militar que incluyó el establecimiento de bases operativas en escuelas, universidades y hospitales, según señaló

el International Crisis Group.⁴ Las fuerzas militares dispararon contra manifestantes, se llevaron a cabo operaciones de seguridad nocturnas en diferentes ciudades con detenciones masivas, incluyendo también palizas, saqueos y asesinatos aparentemente aleatorios. Uno de los episodios de mayor gravedad tuvo lugar el 27 de marzo, día de las Fuerzas Armadas, cuando 158 civiles desarmados, incluyendo 14 menores, murieron tiroteados en diferentes zonas del país.

La escalada de la represión llevó a que la oposición y amplios sectores de la ciudadanía se organizaran para ofrecer resistencia armada frente a la acción de las fuerzas de seguridad. Así, si en los primeros meses se produjeron los primeros desplazamientos de grupos de opositores a zonas bajo control de diferentes grupos armados étnicos para recibir entrenamiento militar, progresivamente se produjeron acercamientos por parte del Gobierno de Unidad Nacional – NUG, por sus siglas en inglés, establecido tras el golpe de estado por los parlamentarios electos en las elecciones de 2020– hacia los grupos armados étnicos con el objetivo de establecer alianzas militares para fortalecer la oposición al régimen militar.⁵ Además, el NUG anunció la conformación de un brazo militar tratando de agrupar y coordinar a todos los grupos surgidos para dar una respuesta armada al golpe de Estado, People Defence Force (PDF). Paralelamente, el proceso de paz entre los grupos armados que en los años previos se habían adherido al acuerdo nacional de alto el fuego se fue resquebrajando, por la oposición de algunos de estos grupos al golpe de Estado y el reinicio de enfrentamientos armados en muchas zonas del país. Si bien las alianzas entre los grupos armados étnicos y los nuevos grupos surgidos al calor de la oposición al golpe de Estado con el apoyo del NUG son frágiles y en ningún caso representan una coalición unificada de oposición al Gobierno militar, la violencia armada ha ido en aumento en los últimos meses y se corre el riesgo de una escalada aún mayor y estancamiento de la violencia, con efectos catastróficos para el conjunto de la población civil del país.

Las cifras de muertes en el conflicto armado recopiladas por diferentes organizaciones apuntan a al menos 1.500 muertes de civiles como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad de Myanmar, tanto en la represión de las protestas como en enfrentamientos y operaciones de seguridad y más de 2.000 soldados muertos. Si bien se trata de cifras difíciles de verificar, permiten dimensionar la gravedad de la situación de conflicto en el país. A las muertes, se suman las miles de personas que han resultado heridas por la violencia y detenidas por la acción represiva del régimen militar. Por otra parte, el aumento de los enfrentamientos

4. International Crisis Group, *The Cost of the Coup: Myanmar Edges Toward State Collapse*, International Crisis Group Briefing 167/Asia, 1 de abril de 2021.

5. International Crisis Group, *Myanmar's Coup Shakes Up Its Ethnic conflicts*, Crisis Group Asia Report, N° 319, 12 de enero de 2022.

armados entre insurgencia, PDF y Fuerzas Armadas ha llevado a una creciente invisibilización de las iniciativas de resistencia no violenta por parte de la sociedad civil, que protagonizaron la oposición al régimen militar en las primeras semanas. La sociedad civil ha continuado resistiendo a las consecuencias del golpe militar de forma pacífica, mediante redes de apoyo mutuo y acciones de boicot al régimen, que, sin embargo, han dejado de recibir la atención mediática que tuvieron en el primer momento tras el golpe, dando paso a un protagonismo de la violencia y la acción armada.

El contexto de pandemia y crisis económica contribuyen a agravar el escenario. El golpe de Estado, sumado a la situación sanitaria, han llevado al colapso de la economía del país, dando paso a una crisis humanitaria de enormes proporciones. El aislamiento internacional provocado por el golpe ha derivado en una subida de los precios de los productos esenciales y la pérdida de numerosos

El golpe de Estado militar en Myanmar ha sumido al país en una crisis política, social y económica de enormes proporciones, agravada por el impacto de la pandemia

puestos de trabajo, situando a mucha población en una posición de vulnerabilidad y riesgo de no ver cubiertas sus necesidades más básicas. Además, la pandemia ha golpeado con especial contundencia al país asiático.⁶

Las infecciones se incrementaron con posterioridad al golpe, en un país con infraestructura sanitaria muy precaria.

Así pues, el golpe de estado militar de 2021 ha sumido al país en una crisis política, social y económica de enormes proporciones. Aumenta el riesgo de escalada de la violencia, con el consiguiente impacto en la población civil del país, sin que por el momento se vislumbre la posibilidad de una salida negociada ante la ruptura del proceso de paz y los por el momento infructuosos intentos de ASEAN de presionar al régimen. La comunidad internacional debería redoblar sus esfuerzos de hallar vías diplomáticas de acercamiento a la oposición política y al régimen para impulsar de nuevo un proceso de democratización del país.

6. Transnational Institute, *No One Left Behind? Covid-19 and the Struggle for Peace and Justice in Myanmar*, Myanmar Policy Briefing 25, noviembre de 2021.

5.4. El incremento de la violencia en la región indonesia de Sulawesi

Varios análisis han advertido sobre un reciente incremento de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT (siglas en indonesio de Mujahidin Indonesia Timur, Muehidines de Indonesia Oriental) en la provincia de Sulawesi Central, especialmente en la región de Poso. A pesar de que hasta el momento la membresía del MIT es relativamente escasa, su alcance geográfico muy restringido y la envergadura de sus acciones limitada, el reciente resurgimiento en su actividad armada genera preocupación por sus conexiones con ISIS y con otros grupos de inspiración yihadista tanto en Indonesia como en el Sudeste Asiático en general; por la capacidad de reclutamiento que todavía parece tener el grupo y el apoyo social con el que aparentemente cuenta en determinadas áreas; y, muy especialmente, por la posibilidad de que se reanuden las tensiones comunitarias y confesionales en Poso. Esta región ya había sido escenario entre los años 1998 y 2001 de una espiral de violencia de matriz sectaria y comunitaria –en la que más de 1.000 personas murieron (más de 2.000 según algunas fuentes) y casi 90.000 resultaron heridas–, así como de numerosos atentados terroristas y episodios varios de violencia desde entonces. En fechas parecidas, entre 1999 y 2002, en la cercana región de Molucas también se registraron enfrentamientos sectarios entre comunidades musulmanas y cristianas que provocaron la muerte de aproximadamente 5.000 personas y el desplazamiento de cientos de miles de personas.

El incremento de los ataques por parte del MIT desde el año 2020 causó una cierta sorpresa entre analistas sobre la región por cuanto se creía que este estaba prácticamente desarticulado y porque denota una gran capacidad de resiliencia y resistencia del MIT a la presión militar del Estado en la última década. De hecho, un informe del Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) publicado en 2021 afirmaba que actualmente el MIT es la organización terrorista más activa en toda Indonesia.⁷ Tras varios años de operaciones de contrainsurgencia y el despliegue de unos 2.400 policías y soldados de élite en la región de Poso, varios artículos sostienen que en 2016 el MIT estaba prácticamente derrotado y en vías de desaparición. En dicho año, el líder y fundador del grupo, Santoso, fue abatido y decenas de sus combatientes murieron o fueron arrestados. Además, la infiltración de los servicios de inteligencia en las comunidades de la región era muy elevada y la efectividad de los programas de desradicalización impulsados por el Gobierno había desincentivado y disminuido el reclutamiento de organizaciones yihadistas en el conjunto del país.

Por otra parte, en mayo de 2017 varias organizaciones armadas que habían jurado lealtad a ISIS iniciaron el asedio a la ciudad filipina de Marawi (en la isla de

Mindanao) y confrontaron durante cinco meses a las Fuerzas Armadas filipinas, que tuvieron que contar con la ayuda de varios países para recuperar el control de la ciudad, lo cual captó la atención, los recursos y la militancia de grupos armados en la región. Así, por ejemplo, el principal grupo leal a ISIS en Indonesia, Jamaah Anshorud Daulah (JAD), que en los últimos tiempos había canalizado cuantiosa ayuda económica desde Siria al MIT, dirigió sus recursos económicos a la batalla de Marawi y no al sostenimiento del MIT. Del mismo modo, según un informe del Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC),⁸ los nuevos reclutamientos que se produjeron en aquellos momentos tenían mayor interés en desplazarse a Mindanao –la región en el Sudeste Asiático que según ISIS debería ser el epicentro de una nueva provincia (wilayat) del califato islámico– que no en incrementar la membresía del MIT. Sin embargo, el nuevo líder del grupo tras la muerte de Santoso, Ali Kalora, centró sus esfuerzos en reclutar a nuevos combatientes y en reconstruir sus redes y bases de apoyo. Según algunos analistas, para ello se valió de sus conexiones con redes de ulemas locales y de escuelas coránicas (algunas ilegales o clandestinas) y con familias de combatientes presos en Java y Sulawesi. Además, el terremoto que asoló la región de Sulawesi en septiembre de 2018 y que provocó la muerte de, como mínimo, 4.300 personas, creó las condiciones idóneas para reforzar los vínculos entre el grupo y determinadas comunidades y también para incrementar el reclutamiento de personas jóvenes.⁹

Además del incremento en el número de personas reclutadas, algunos análisis¹⁰ señalan que en los últimos tiempos el MIT ha incrementado su capacidad operativa y bélica, su financiación a través de grupos radicales en el extranjero y sus conexiones con organizaciones yihadistas regionales, como el JAD –recientemente varias personas que participaban en un operativo conjunto fueron detenidas– o incluso de fuera del Sudeste Asiático –en 2016, por ejemplo, seis personas uigures murieron en Sulawesi en una operación policial contra el MIT. Cabe señalar también que el MIT fue el primer grupo en Indonesia, en 2014, que juró lealtad a ISIS y que su presencia en medios digitales, muy superior a la de otras organizaciones yihadistas en la región, se asemeja bastante a los mensajes y estrategia mediática y propagandística de ISIS en Siria e Iraq. Del mismo modo, se estima que hasta 700 personas provenientes principalmente de Indonesia y Malasia se enrolaron en las filas de ISIS, formando incluso una unidad propia en la provincia siria de Hasakah conocida como Katibah Nusantara Daulah Islamiyah. En la misma línea, algunas voces señalan que el MIT sigue gozando de un cierto apoyo y simpatía en determinadas partes de la

7. Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Decline of ISIS in Indonesia and the Emergence of New Cells*, IPAC Report n°69, 21 de enero de 2021.

8. Institute for Policy Analysis of Conflict, *COVID-19 and the Mujahidin o Eastern Indonesia (MIT)*, IPAC short briefing n°3, 28 de abril de 2020.

9. Alif Satria, *Indonesia: Putting the Sigi Attack in Context*, *BenarNews*, 4 de diciembre de 2020.

10. Uday Bakhshi, *Is the East Indonesia Mujahideen a Threat to Indonesia?*, *The Diplomat*, 18 de julio de 2020.

provincia de Sulawesi Central, como así lo demostraría el hecho de que miles de personas asistieran al funeral del líder del MIT, Ali Kalora, en septiembre de 2021, o que centenares de personas hubieran hecho lo propio en el funeral de dos destacados miembros del MIT el año anterior. Un informe de IPAC señalaba que el incremento de la brutalidad en los ataques perpetrados por el MIT desde 2020, especialmente en relación a la decapitación de civiles acusados de ser informantes del Ejército o la quema de casas, buscaría varios objetivos tácticos, como evitar delaciones al Gobierno; incrementar su publicidad y visibilidad a nivel internacional; demostrar que a día de hoy es la única organización yihadista en Indonesia con una base territorial; o alentar enfrentamientos comunitarios como los que ya habían existido en el pasado en Sulawesi o en la vecina Molucas.

Respecto de esta última cuestión, algunas voces¹¹ han advertido que el MIT y otras organizaciones yihadistas como el JAD podrían sacar provecho de los estereotipos, miedos, incertidumbres, polarización religiosa y fragmentación comunitaria provocadas (y perpetuadas) por el conflicto intercomunitario que se vivió en Poso entre 1998 y 2001 y por los episodios de violencia que se han registrado en dicha zona desde entonces. Aunque la espiral de enfrentamientos comunitarios formalmente llegó a su fin con la firma en diciembre de 2001 de la Declaración de Malino –un acuerdo facilitado por el Gobierno que preveía el desarme de milicias cristianas y musulmanas, el retorno de decenas de miles de personas a sus lugares de origen, la reconstrucción de comunidades e infraestructuras, programas de reconciliación y proyectos de desarrollo socioeconómico–, desde entonces se han registrado algunos atentados y hechos de violencia que han amenazado la convivencia entre las distintas comunidades que habitan en Sulawesi Central. Cabe destacar, a modo de ejemplo, los atentados con explosivos a sendos autobuses en Poso en 2002 y 2004 (en los que murieron 13 personas y 30 resultaron heridas), la masacre de 13 civiles cristianos en 2003 en la misma región, la decapitación de tres niñas en 2005 en Sulawesi Central o el atentado con bomba en un mercado de la localidad de Tentena –en el que 22 personas murieron y unas 90 resultaron heridas—el 28 de mayo de 2005, fecha del quinto aniversario de una masacre en una comunidad musulmana en la que 165 personas murieron en Sulawesi Central. Como ya se ha comentado anteriormente, en la cercana región de Molucas, especialmente en la región de Ambon, también se registraron enfrentamientos comunitarios a gran escala que provocaron la muerte de miles de personas. Tanto en el caso de Ambon como en el de Poso

El reciente incremento de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT en la provincia de Sulawesi Central genera preocupación porque en dicha región se han producido importantes brotes de violencia comunitaria en las últimas décadas

el conflicto se produjo en un contexto de inestabilidad política y económica provocadas principalmente por la muerte del dictador Suharto en 1998 y por el impacto de la crisis financiera en todo el Sudeste Asiático.

A pesar de los riesgos que entraña el reciente resurgimiento de la violencia en Sulawesi y la aparente rearticulación del MIT en la región, un informe de IPAC señala que recientemente se ha registrado un importante declive tanto de la actividad de las organizaciones leales a ISIS en Indonesia como del apoyo a ISIS. Algunos de los factores explicativos serían el colapso de ISIS en Siria e Iraq; las dificultades crecientes para viajar a dichos países; el impacto de la pandemia en la movilidad y la financiación de determinados grupos armados; o el incremento de las capacidades antiterroristas del Estado indonesia. Respecto de este último punto, la aprobación en 2018 de una nueva legislación antiterrorista que autoriza acciones preventivas contra personas sospechosas de perpetrar atentados y el incremento del presupuesto para para tareas de vigilancia y contrainsurgencia habría provocado un claro descenso en el número de acciones consideradas terroristas desde el 2018. En este sentido, IPAC señala que la afluencia masiva de personas de origen indonesio a las filas de ISIS en Siria e Iraq no ha comportado un salto cualitativo en la capacidad operativa y bélica de las organizaciones yihadistas en Indonesia y que actualmente el armamento del que disponen dichas organizaciones es muy rudimentario y dependiente de artefactos de fabricación propia, armas ligeras y blancas. En el caso particular de Sulawesi, la capacidad de las dos principales organizaciones que operan en la región –JAD y MIT– también parece ser relativamente volátil y claramente inferior a la de épocas anteriores. A modo de ejemplo, en marzo de 2021 el JAD perpetró un atentado contra una iglesia en la ciudad de Makassar (provincia de Sulawesi sur) en la que dos personas murieron y otras 22 resultaron heridas. Aún si esta acción fue una de las principales del grupo en la región en los últimos tiempos, su impacto fue claramente inferior al de algunas de sus acciones anteriores, como los atentados en Surabaya en 2018 (58 víctimas mortales) o Sarinah en 2016 (33 víctimas mortales). En cuanto al MIT, a raíz de su incremento en el número y letalidad de sus acciones desde el año 2020 el Gobierno incrementó su presión sobre el grupo, aumentando el número de detenciones. Ante el intento de eludir tal presión, algunos medios señalaron en mayo de 2021 que el MIT se dividió en dos facciones, una liderada por Muhammad Busra, alias Qatar, en Poso y la otra en la región de Sigi liderada por Ali Kalora, que murió en combate en septiembre de 2021. Según algunas fuentes, la muerte de Kalora supone un importante revés para el grupo armado.

11. Íbid.

A modo de conclusión, a pesar de que el número de incidentes considerados terroristas se ha reducido notablemente en Indonesia en los últimos años y de que la capacidad operativa de algunas organizaciones yihadistas se ha visto claramente erosionada por el colapso de ISIS en Oriente Medio y por las políticas contrainsurgentes de Yakarta, siguen existiendo decenas de grupos que han jurado lealtad a ISIS y muchos de ellos han demostrado una enorme capacidad resiliencia y de fragmentación y dispersión en pequeñas células o grupúsculos. Además, en el

caso particular de Sulawesi, en el pasado se ha visto que, en contextos de polarización y fragmentación a partir de líneas confesionales, episodios de violencia aislados y sin aparente connotación política o religiosa pueden desatar dinámicas de violencia comunitaria de enormes dimensiones. Como ya sucedió en Ambon y en Poso a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, organizaciones armadas foráneas aprovecharon la situación de inestabilidad para inmiscuirse en las dinámicas locales del conflicto con el objetivo de azuzar la violencia y obtener réditos de la situación.

5.5. El incremento de la crisis política en Bosnia y Herzegovina

En 2021 Bosnia y Herzegovina fue escenario de un grave aumento de las tensiones políticas. El boicót serbobosnio a las instituciones del Estado; la decisión del parlamento de la República Srpska de desvincularse de diversos ámbitos estatales, incluyendo el Ejército; y los desacuerdos en torno a la reforma electoral, entre otros elementos, fueron factores de incremento de la tensión y de incerteza sobre su evolución en 2022, un año en el que se cumplen tres décadas del inicio de la guerra y en el que están previstas elecciones generales en octubre. Numerosos actores locales e internacionales, políticos y sociales, advirtieron sobre el deterioro de la crisis política en el país e instaron a la adopción de medidas encaminadas a alcanzar acuerdos políticos y desescalar la situación.

Los acuerdos de paz de Dayton (1995) pusieron fin a la cruenta guerra de 1992-1995 en Bosnia y Herzegovina y dieron paso a una compleja estructura administrativa que combina el reparto de poder político y la preservación de la integridad territorial, en forma de república federal descentralizada con dos entidades (la Federación de Bosnia y Herzegovina, bajo control croata-bosniaco; y la República Srpska). En las décadas de la construcción estatal post-Dayton se han cronificado las desavenencias entre las élites de los tres grupos de población mayoritarios, y entre el liderazgo serbobosnio y los actores internacionales implicados con poderes ejecutivos en la supervisión de los acuerdos de Dayton. La prolongada etapa postbélica ha sido escenario de una prevalente falta de confianza entre los actores políticos de las entidades y de priorización de intereses de las élites por encima del abordaje de necesidades socioeconómicas de la población y de una construcción de memoria histórica compartida. Asimismo, la falta de procesos participativos y una arquitectura internacional de apoyo y seguimiento de la implementación de los acuerdos con pocos espacios de participación social ha ahondado en la desafección de la población. En su conjunto, se han sucedido tensiones políticas y sociales, agudizadas en 2021 de la mano de varios elementos.

Por una parte, en 2021 se incrementó la tensión entre el liderazgo serbobosnio y las instituciones estatales, materializada de diversas formas. Se dio paso a una situación de boicót por los representantes serbobosnios, que incluyó a la presidencia tripartita del país, el Parlamento y el Consejo de ministros. Asimismo, el líder serbobosnio representante en la presidencia tripartita y dirigente del partido Unión de los Socialdemócratas Independientes (SNSD), Milorad Dodik, anunció en octubre una próxima retirada de la república

serbobosnia del Ejército de Bosnia y Herzegovina y de otros órganos vinculados al ámbito de impuestos y judicial de competencias estatales. Si bien en diversas ocasiones en años anteriores Dodik había amenazado con una salida de las instituciones e incluso con la secesión de la entidad, estas advertencias no se habían materializado, consideradas más una medida de presión y propagandística que una posición real. No obstante, en 2021 las advertencias fueron acompañadas, en diciembre, de la aprobación por el Parlamento serbobosnio de un acuerdo no vinculante para el inicio de la retirada de la entidad serbobosnia del Ejército estatal y de los sistemas tributario y judicial y la elaboración de la legislación necesaria para el establecimiento de instituciones paralelas. Se puso así de manifiesto una posición más determinada por parte del liderazgo

El aumento de las tensiones en torno a Bosnia y Herzegovina en 2021, en el marco de un nuevo pulso de las autoridades de la república serbobosnia y de disputas crónicas sobre la legislación electoral, generó alertas sobre riesgos de deterioro de la situación en el país

serbobosnio de cuestionar y tensionar unilateralmente la actual estructura del país. El alto representante para la implementación del acuerdo de paz había advertido en su informe de noviembre que llevar a la práctica las amenazas supondría una salida del marco establecido por los acuerdos de Dayton. A la crisis se añade el elemento de tensión crónica entre la propia figura del alto representante –que cuenta con poderes ejecutivos– y las autoridades serbobosnias, que la consideran como una injerencia externa.

El incremento de tensión se produjo en un año antesala de las elecciones generales de octubre de 2022. En ese contexto, resultaba incierto anticipar el alcance último de los objetivos del liderazgo serbobosnio, en tanto podrían abarcar desde la instrumentalización de la tensión como vía para fortalecer su propia posición en los procesos políticos y electorales, como en última instancia aspiraciones de separación. No obstante, otros elementos podrían actuar de contrapeso. La propia oposición política serbobosnia se ausentó de la votación de diciembre y se mostró crítica con la decisión, señalando electoralismo y advirtiendo de riesgos de que la retirada anunciada de las instituciones derivase en un conflicto con expresión armada. Actores internacionales también reaccionaron a la crisis de 2021 advirtiendo de posibles sanciones en caso de retirada unilateral. En ese contexto, se intensificó durante el año la actividad diplomática encaminada a la reducción de la tensión. Asimismo, los liderazgos de las tres principales comunidades del país descartaban que pudiera darse un escenario de nuevo conflicto armado.

Otro elemento de tensión continuó siendo la disputa en torno al sistema electoral. En este ámbito, la posición política croata incluye la demanda de potestad de escoger a su propio representante en la presidencia

tripartida del país, ahora compartida con la más numerosa comunidad bosniaca. La posibilidad de un distrito electoral específico en que sean mayoría se ha planteado en diversos momentos como una de las opciones para materializar esa demanda. No obstante, años de disputas en torno a la legislación electoral no han resultado en acuerdos sobre nuevas fórmulas y mecanismos. Se añade el hecho de que el actual sistema discrimina a la población que no forma parte de las tres comunidades principales (bosniaca, croata y serbia). En relación a ello, en el pasado ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos instó a las autoridades a poner fin a la discriminación contra población de comunidades no mayoritarias. En 2021 el Consejo de Europa reiteró ese llamamiento, demandando cambios en la legislación electoral y la Constitución. Los desacuerdos crónicos en torno a la legislación electoral podrían llevar a un escenario de incremento de la disputa política en los meses previos a los comicios de octubre de 2022 o, incluso, a un escenario de boicot electoral que, en combinación con la crisis en torno a la República Srpska agravaría la situación en el conjunto del país.

Por otra parte, otro factor de riesgo fue la mayor internacionalización de elementos de la crisis de Bosnia y Herzegovina. Entre otros, Rusia amenazó en 2021 con vetar la renovación en el Consejo de Seguridad de la ONU la misión de la UE en Bosnia (EUFOR) si se

incluían referencias a la Oficina del Alto Representante. Finalmente la misión fue renovada a finales de año, sin menciones a esta figura. Hubo también en 2021 un intento fallido de resolución de Rusia y China para su eliminación. A su vez, actores internacionales advirtieron de posibles sanciones contra Dokik, mientras Hungría alertó de un posible veto a sanciones de la UE. Además, la grave crisis entre Rusia y Ucrania, y su dimensión de crisis entre Rusia y la OTAN, EEUU y UE pasó a configurar el contexto de las relaciones internacionales en Europa, añadiendo riesgos de que otras tensiones más localizadas del continente –como es el caso de Bosnia y Herzegovina– puedan ser instrumentalizadas por Rusia en el marco de una disputa geoestratégica mayor entre actores internacionales.

En el contexto de crisis en Bosnia y Herzegovina se puso de manifiesto la existencia de riesgos crecientes de disputa política, de consecuencias inciertas, si bien las élites políticas locales descartaron escenarios de conflicto de expresión violenta. En 2022 serán necesarios mayores impulsos a iniciativas de diálogo político encaminadas a la búsqueda de acuerdos amplios en torno a procesos para fortalecer el encaje administrativo de las entidades que conforman el país, con participación de actores políticos y sociales, abordar y transformar desconfianzas y agravios, y promover aproximaciones basadas en los derechos humanos del conjunto de la población.

5.6. Violencia, apartheid, desposesión: el precio de ignorar la ocupación de Palestina

La intensificación de la violencia directa en 2021 en el marco del conflicto palestino-israelí y de la ocupación israelí de Palestina volvió a dirigir temporalmente la atención a una disputa histórica y emblemática, pero crecientemente relegada entre las prioridades de los asuntos internacionales. Ello, a pesar de las declaraciones formales de múltiples actores y de la supuesta implicación internacional de largo aliento en la búsqueda de una solución de dos Estados. La conmemoración en 2021 de los 30 años del conocido como proceso Madrid-Oslo convirtió la efeméride en una oportunidad para reflexionar críticamente sobre las dinámicas puestas en marcha desde entonces y que, en la práctica, han favorecido la ocupación israelí de Palestina y la aplicación de políticas que han consolidado la fragmentación, opresión y desposesión del pueblo palestino. El análisis sobre las consecuencias perjudiciales del proceso de paz por los términos en que fue aplicado, de las graves vulneraciones y discriminaciones que padece la población palestina y de la actual coyuntura del conflicto permiten constatar el coste de continuar ignorando la cuestión palestina y la urgencia de nuevas aproximaciones que favorezcan el fin de la impunidad israelí y un abordaje del conflicto desde una perspectiva comprometida con el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

En los últimos años las voces abiertamente críticas con el proceso de Madrid-Oslo se han hecho más visibles y recurrentes, poniendo en entredicho sus mecanismos y que se continúe insistiendo en la fórmula de dos Estados sin hacerse cargo de la realidad sobre el terreno. En 2021, el informe del enviado especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados abordó extensamente la responsabilidad de los actores internacionales en la perpetuación de un marco que se ha demostrado fallido.¹² En el documento, Michael Lynk subraya que uno de los principales problemas del proceso Madrid-Oslo es que permitió a Israel imponer su exigencia de que las negociaciones con los representantes palestinos se desarrollaran al margen de marco de derecho internacional aplicable, incluyendo el derecho internacional humanitario y las propias resoluciones de Naciones Unidas. Este marco normativo no ha sido el referente del proceso y, de esta manera, se ha erosionado la posibilidad real de una solución de dos

Estados, ya que en la práctica se ha ido consagrando la realidad de un solo Estado con derechos desiguales. Las políticas israelíes de anexión progresiva de facto de los territorios palestinos han “esfumado” las posibilidades de una solución de dos Estados, subrayaba en 2021 el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, destacando además que el conflicto no puede ser considerado como una disputa entre iguales que pueda ser abordada a través de negociaciones bilaterales.¹³

La asimetría de poder entre las partes, de hecho, se ha visto acentuada en este proceso, ya que el esquema negociador ha beneficiado a la potencia ocupante. En el marco de los Acuerdos de Oslo, Israel vio reconocido su derecho a existir por la OLP sin un reconocimiento equivalente al derecho de autodeterminación y la creación de un Estado palestino; se externalizaron sus responsabilidades como potencia ocupante a través de la Autoridad Palestina y se ha visto beneficiado por las contribuciones de los donantes internacionales.¹⁴ Los acuerdos de Oslo fragmentaron aún más los territorios palestinos y la falta de un cronograma claro más allá de los cinco años del período interino inicial favorecieron que Israel convirtiera las negociaciones en un proceso permanente, mientras continúa con sus políticas de expansión de asentamientos.¹⁵ Adicionalmente, el principal mediador del proceso, EEUU, ha mantenido su postura de apoyo incondicional a Israel que ha favorecido la ocupación y la falta de rendición de cuentas. La UE no ha utilizado su potencial político y económico para presionar a Israel, ha evitado la confrontación y no se ha desmarcado de las políticas delineadas por EEUU y mantiene una adhesión irrestricta al proceso de Madrid-Oslo, pese a las críticas.¹⁶ Entre los gobiernos del mundo árabe tampoco existe un compromiso firme con la causa palestina, como ha quedado incluso más en evidencia tras los recientes acuerdos bilaterales con Israel.

Las voces críticas con el proceso Madrid-Oslo han subrayado que la sistemática adhesión de los principales actores internacionales a la fórmula de dos Estados ignorando la realidad que existe en el terreno y sin demostrar una voluntad política efectiva de resolver el conflicto ha derivado en una “pantomima diplomática”¹⁷ y en una “ficción de proceso de paz”.¹⁸ International Crisis Group destacaba a finales de 2021 que el discurso de los representantes diplomáticos sobre una

12. Naciones Unidas, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, A/76/433, 22 de octubre de 2021.

13. Ban Ki-moon, “US should back a new approach to the Israeli-Palestinian conflict”, *The Financial Times*, 29 de junio de 2021.

14. José Abu Tarbush, *Tres décadas de la Conferencia de paz de Madrid: un marco negociador deficitario*, Memorando no.251/2021, OPEX, Fundación Alternativas, 3 de noviembre de 2021.

15. Inés Abdel Razeq, “Thirty Years On: The Ruse of the Middle East Peace Process”, *al-Shabaka*, 31 de octubre de 2021.

16. Véase la nota 12 y Hugh Lovatt, “The end of Oslo: A new European strategy on Israel-Palestine”, *European Council on Foreign Relations*, Policy Brief, 9 de diciembre de 2020.

17. Véase la nota 12.

18. José Abu Tarbush (2021), op.cit.

solución bilateral que es prácticamente inalcanzable en la práctica encubre a Israel para que persista en sus políticas de anexión.¹⁹ Muchas voces palestinas se han mostrado escépticas con el proceso desde un principio y vienen denunciando con contundencia que Israel utiliza el proceso de paz para eludir la rendición de cuentas y profundizar en su dominación sobre la población palestina, como subrayaban recientemente las analistas Inés Abdel Razek y Yara Hawari.²⁰ Los supuestos intentos por “reactivar” el proceso de paz se han vuelto irrelevantes, sobre todo en un escenario en el que los sucesivos gobiernos israelíes solo mantienen una adhesión formal a las negociaciones.²¹ Como destacaba José Abu Tarbush, Israel parece dispuesto a una política de gestión del conflicto de manera indefinida.²² Paralelamente, la mayor parte de la población palestina ha perdido la esperanza de obtener un Estado a través de un proceso de negociaciones. Mientras, la AP –afectada por una creciente falta de legitimidad, descrédito por corrupción, acusaciones de colaboracionismo y el pulso con Hamas– mantiene una estrategia de internacionalización con la que busca compensar la asimetría de poder, con resultados muy limitados. Pese a las recurrentes amenazas de la dirigencia palestina de desvincularse de los acuerdos de Oslo, estos siguen siendo el marco vigente. En este escenario, no contribuye que Fatah y Hamas parecen haberse instalado en la división, que en la práctica favorece el statu quo y el reparto de poder entre ambas formaciones y atenta contra el relevo generacional y la renovación de liderazgos palestinos.²³

En este contexto, crecientes voces vienen exigiendo que se reconozca el fracaso de esta aproximación de la comunidad internacional para abordar la cuestión palestino-israelí en las últimas décadas y subrayando la urgencia de un nuevo enfoque. Esta nueva aproximación resulta más perentoria e ineludible teniendo en cuenta las reiteradas denuncias sobre la realidad de apartheid que vive la población palestina. Numerosas voces palestinas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, además de personas expertas de Naciones Unidas,²⁴ vienen denunciando esta situación desde hace años. Más recientemente esta denuncia ha cobrado más notoriedad y visibilidad mediática, después de que entidades de derechos humanos

israelíes –como B’Tselem– y ONG internacionales de referencia como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional denunciaran abiertamente el apartheid contra la población palestina y señalaran a las autoridades israelíes por sus responsabilidades en este crimen. Así, en un extenso informe publicado en mayo de 2021, HRW enfatizaba que, de manera sistemática, las autoridades israelíes han privilegiado a la población judía y discriminado a la población palestina. La organización apunta que, con el objetivo de mantener el control de la población judía sobre el poder, la política y la demografía, las autoridades israelíes han desposeído, confinado, separado forzosamente y subyugado a palestinos y palestinas en virtud de su identidad. El informe añade que algunas asunciones como que la ocupación es temporal, que el “proceso de paz” pondría fin a los abusos israelíes y que la población palestina tiene control sobre sus vidas en Cisjordania y Gaza o que Israel es una democracia igualitaria han oscurecido la realidad: un régimen de dominio israelí profundamente discriminatorio con palestinos y palestinas.²⁵ Meses más tarde, y tras cuatro años de investigaciones, Amnistía Internacional publicó otro informe con un diagnóstico similar, en el que enfatiza que la población palestina es tratada como un grupo racial inferior y privada de derechos sistemáticamente.²⁶

Más allá del contexto de violencia estructural, la relevancia y urgencia de un nuevo enfoque también ha quedado de manifiesto por la actual coyuntura y los hechos y dinámicas observadas en el último año. En 2021 no solo se vivió una importante escalada de violencia directa –que causó los mayores niveles de letalidad en siete años, la inmensa mayoría víctimas palestinas–, sino que también se alertó sobre el progresivo aumento de la violencia de los colonos israelíes con la complicidad de las autoridades. Adicionalmente, el nuevo Gobierno israelí que asumió en 2021 intensificó la persecución y criminalización de reconocidas organizaciones de la sociedad civil palestina y solo parecía dispuesto a ofrecer una especie de “paz económica” para minimizar el conflicto. El conjunto de factores, por tanto, refuerza la necesidad de una nueva aproximación que se haga cargo de la asimetría de poder entre las partes, con un enfoque basado en derechos y que promueva acciones urgentes para dismantelar la ocupación israelí.

Voces críticas destacan que la sistemática adhesión de los principales actores internacionales a la fórmula de dos Estados ignorando la realidad en terreno y sin demostrar una voluntad política efectiva de resolver el conflicto han derivado en una “ficción de proceso de paz”

19. International Crisis Group, “Ten Conflicts to Watch in 2022”, *Foreign Policy*, 29 de diciembre de 2021.

20. Inés Abdel Razek (2021), op. cit y Yara Hawari, “Thirty years of sham ‘peace process’”, *al-Jazeera*, 1 de noviembre de 2021.

21. International Crisis Group, *Beyond Business as Usual in Israel-Palestine*, Middle East Report no.225, ICG - USMEP, 10 de agosto de 2021.

22. José Abu Tarbush (2021), op.cit.

23. Itxaso Dominguez de Olazábal, “Praxis of Palestinian Democracy: The Elections that Never Were and the Events of May 2021”, *IEMed Mediterranean Yearbook*, IEMED, noviembre de 2021.

24. UN Human Rights Office of the High Commissioner, *Israeli annexation of parts of the Palestinian West Bank would break international law – UN experts call on the international community to ensure accountability*, 16 de junio de 2020.

25. Human Rights Watch, *A Threshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes Of Apartheid and Persecution*, HRW, 27 de abril de 2021.

26. Amnistía Internacional, *El apartheid israelí contra la población palestina: un análisis de décadas de opresión y dominación*, 1 de febrero de 2022.

Glosario

- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACLED:** Armed Conflict Location and Event Data Project
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ADF:** Allied Democratic Forces (Fuerzas Democráticas Aliadas)
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- AP:** Autoridad Palestina
- APCLS:** Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain (Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ARSA:** Arakan Rohingya Salvation Army (Ejército de Salvación Arakan Rohingya)
- AUBP:** Programa de Fronteras de la Unión Africana
- BDB:** Brigadas de Defensa de Bengasi
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (Luchadores por la libertad islámica de Bangsamoro)
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BLT:** Baloch Liberation Tigers (Tigres de Liberación Baluchi)
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congoleña
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue (Centro para el Diálogo Humanitario)
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMPFPR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPI:** Corte Penal Internacional
- CPI-M:** Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
- CNL:** Congrès National pour la Liberté (Congreso Nacional por la Libertad)
- DDR:** Desarme, Desmovilización y Reintegración
- DIH:** Derecho Internacional Humanitario
- DKBA:** Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
- DMLEK:** Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
- DPA:** Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
- EAC:** East African Community (Comunidad de Estados de África del Este)
- EAU:** Emiratos Árabes Unidos
- ECOWAS:** Economic Community of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental -CEDEAO)
- EDA:** Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
- EEUU:** Estados Unidos de América
- EFDM:** Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)
- EIC:** Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)
- EIPJD:** Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)
- ELF:** Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)
- ELK:** Ejército de Liberación de Kosovo
- ELN:** Ejército de Liberación Nacional
- ENSF:** Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)
- EPC:** Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)
- EPL:** Ejército Popular de Liberación
- EPDF:** Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)
- EPRDF:** Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)
- ESL:** Ejército Sirio Libre
- ETA:** Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)
- ETIM:** East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)
- ETLO:** East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)
- EUCAP NESTOR:** Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Malí (Sahel)

EUCAP SAHEL Niger: Misión de Creación de Capacidad de la Unión Europea en Níger (Sahel)

EUFOR: European Union Force (Fuerza de la Unión Europea)

EUNAVFOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUTM Mali: Misión de la Unión Europea para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.

EUTM Somalia: Misión Militar de la Unión Europea para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FPB: Forces Populaires du Burundi (Fuerzas Populares de Burundi)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPR: Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique (Frente Patriótico por el Renacimiento de la República Centroafricana)

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FML: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GFT: Gobierno Federal de Transición

GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate

GNA: Gobierno de Acuerdo Nacional

GSIM: Group to Support Islam and Muslims (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes)

HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad

HM: Hermanos Musulmanes

HRW: Human Rights Watch

HTS: Hay'at Tahrir al-Sham

IBC: Iraq Body Count

ICG: International Crisis Group

IDG: Índice de Desigualdad de Género

IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre

IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)

IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)

IISS: International Institute for Strategic Studies

ISGS: Estado Islámico en el Gran Sáhara

ISIS: Estado Islámico

ISWAP: Estado Islámico en la Provincia de África Occidental

IWF: Iduwini Volunteers Force (Fuerzas Voluntarias de Iduwini)

JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)

JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)

JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)

JNIM: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes

KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)

KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)

KDP: Partido Democrático de Kurdistán

KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo

KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)

KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)

KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)

KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)

KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)

KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)

KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)

KRG: Gobierno Regional del Kurdistán

KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)

LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)

LeT: Lashkar-e-Toiba

LGTBI: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersex

LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)

LNA: Ejército Nacional de Libia

LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)

M23: Movimiento 23 de Marzo

MAA: Movimiento Árabe de Azawad

MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)

MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)

MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)

MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)

MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana

MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí

MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)

MLCJ: Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (Movimiento de Libertadores Centrafricanos para la Justicia)

MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)

MNDAA: Myanmar National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar)

MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)

MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad

MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique (Movimiento Patriótico por la República Centrafricana)

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDAA: National Democratic Alliance Army (Ejército de la Alianza Nacional Democrática)

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate (Mandato de Justicia de Greenland del Delta del Níger)

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Khaplang)

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OMC: Organización Mundial del Comercio

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

OPC: Etiopía Oromiya

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PDKI: Partido Democrático Kurdo

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PS: Provincia de Sinaí

PYD: Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centrafricana

RDC: República Democrática del Congo

RED-Tabara: Résistance pour un État de Droit au Burundi (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi)

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

REWL: Red Egbesu Water Lions

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RSF: Rapid Support Forces (Fuerzas de Apoyo Rápido)

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SCACUF: Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (Frente Unido del Consorcio de Ambazonia del Sur de Camerún)

SCDF: Southern Cameroons Restoration Forces (Fuerzas de Restauración del Sur de Camerún)

SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército de Liberación de Sudán)

SLA-AW: Sudan Liberation Army-Abdul Wahid (Ejército de Liberación de Sudán – Abdul Wahid)

SLA-MM: Sudan Liberation Army- Minni Minnawi (Ejército de Liberación de Sudán – Minni Minnawi)

SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)

SNNRPS: Southern Nations, Nationalities and People's State, SNNPS (Naciones, Nacionalidades y Estado Popular del Sur, SNNPS)

SOCADEF: Southern Cameroons Defence Forces (Fuerzas de Defensa del sur de Camerún)

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)

SPLA-IO: Sudan People's Liberation Army in Opposition (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur en Oposición)

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SRF: Sudan Revolutionary Forces (Fuerzas revolucionarias de Sudán)

SSA-N: Shan State Army – North (Ejército del Estado de Shan - Norte)

SSA: Shan State Army (Ejército del Estado de Shan)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSOA: South Sudan Opposition Alliance (Alianza de Oposición de Sudán del Sur)

SSPP: Shan State Progress Party (Partido del Progreso del Estado Shan)

SSUF: South Sudan United Front (Frente Unido de Sudán del Sur)

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán

TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNLIF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNOWAS: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique (Unión por la Paz en la República Centrafricana)

UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

UTI: Unión de Tribunales Islámicos

UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene

WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)

YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)

YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)

ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- **Investigación.** Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- **Educación y formación.** El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- **Diplomacia paralela.** La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- **Servicios de consultoría.** La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- **Sensibilización.** Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13, Carrer de la Vila Puig, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra (España)

Tel: +34 93 581 14 14

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat / Web: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2021 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios del conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.



La paz no se inventa. Se construye desde la comprensión profunda de las raíces del conflicto, de sus actores principales, de las dinámicas regionales y globales. *Alerta!* es una herramienta fundamental en este proceso gracias a sus análisis detallados, y desde una perspectiva de género, de los sucesos del año que acabamos de dejar atrás. Vivimos una época en la cual medios de comunicación y expertos pasan cada vez más rápidamente de un conflicto a otro, en el cual la opinión pública se apasiona y olvida en unas pocas semanas los miles de refugiados que huyen la violencia. Por esta razón, el trabajo de *Alerta!* es aún más imprescindible: nos ofrece una fotografía rigurosa de las decenas de guerras silenciosas que tienen un precio enorme en términos de vidas humanas, así como los elementos esenciales para empezar un camino duradero hacia la paz.

Enrica Picco,
Directora de Proyectos de África Central, International Crisis Group

Año tras año, el informe *Alerta!* ofrece datos y análisis rigurosos y comparados sobre cuestiones clave para el seguimiento de los conflictos armados, los derechos humanos y la construcción de paz. Para las organizaciones que consideramos ineludible abordar la construcción de la paz desde una perspectiva feminista y de género, este informe es imprescindible. Especialmente relevante resulta el seguimiento que el informe realiza sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y las contribuciones a la paz que son protagonizadas por las mujeres y la sociedad civil.

Laura Alonso Cano,
Presidenta de WILPF España

El informe *Alerta!* es un recurso esencial para comprender la complejidad de los conflictos modernos en todo el mundo, pero no se detiene aquí: al identificar las señales de advertencia y las oportunidades, este informe proporciona los conocimientos necesarios para el trabajo en el que como movimiento por la paz debemos involucrarnos. Sabemos que el mundo se encuentra en una situación muy peligrosa y que no tenemos ninguna posibilidad sin las diversas coaliciones de activistas y constructores de paz. Comprometámonos juntos a convertir estas palabras en acción para la paz, la seguridad común y la justicia mientras buscamos una verdadera transformación sociopolítica.

Reiner Braun,
Director Ejecutivo de International Peace Bureau

Con la colaboración de: